ESCUELA NACIONAL DE PROFESIONALIZACIÓN GUBERNAMENTAL

Maestría en Administración Pública

"La Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos y los principios de la función electoral como Instrumentos para la Consolidación del Estado Democrático en el Distrito Federal"

Tesis que para obtener
el grado de Maestro en Administración Pública
presenta:

Víctor Manuel Tello Aguilar

"El hombre no es nada más que su proyecto, no existe más que en la medida en que se realiza, no es por lo tanto más que el conjunto de sus actos, nada más que su vida"
Jean-Paul Sartre

INDICE

Introducción

1. Sistema Político del Distrito Federal

1.1. Forma de Estado

1.2. Forma de Gobierno

1.3. Sistema Electoral

1.4. Sistema de Partidos

1.5. Sociedad Civil, medios de comunicación y grupos de interés

2. Las Autoridades Electorales Locales y su competencia en la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos en el Distrito Federal

2.1. Instituto Electoral del Distrito Federal

2.2. Unidad Técnica Especializada de Fiscalización

2.3. Tribunal Electoral del Distrito Federal

3. Los Partidos Políticos en el Distrito Federal y su Financiamiento

3.1. Financiamiento público directo

3.1.1. Financiamiento público local

3.1.2. Transferencias de direcciones nacionales

3.2. Financiamiento público indirecto

3.2.1. Prerrogativas para radio y televisión

3.2.2. Franquicias postales

3.2.3. Régimen fiscal especial

3.3. Financiamiento privado directo

3.3.1. De militancia

3.3.2. De simpatizantes

3.4. Financiamiento privado indirecto

3.4.1. Aportaciones de bienes muebles, inmuebles, consumibles y servicios que otorguen los particulares para las actividades del partido político

3.4.2. Autofinanciamiento

3.4.3. Financiamiento por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos

4. Los principios de la función electoral en la Planeación de la Fiscalización a los Partidos Políticos

4.1. Planeación

4.2. Políticas Generales del Instituto Electoral del Distrito Federal

4.3. Programas Generales del Instituto Electoral del Distrito Federal

4.4. Plan General de Desarrollo del Instituto Electoral del Distrito Federal

4.5. Programas Institucionales y Específicos del Instituto Electoral del Distrito Federal

4.6. Programa de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos de la UTEF del Instituto Electoral del Distrito Federal

5. Los Principios de la Función Electoral en la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos en el Distrito Federal

5.1. El principio de certeza

5.2. El principio de legalidad

5.3. El principio de independencia

5.4. El principio de imparcialidad

5.5. El principio de objetividad

5.6. El principio de equidad

5.7. El principio de publicidad procesal

Conclusiones

Abreviaturas

Índice de Cuadros

Índice de Figuras

Bibliografía

Anexos

PRESENTACIÓN

Desafortunadamente es común enterarnos por los medios de comunicación de la diversa problemática que enfrentan los gobiernos en la organización de procesos electorales y del papel que juegan los partidos políticos y las autoridades electorales en su instrumentación y vida cotidiana.

Es un hecho ineludible que la sociedad ha manifestado de diferentes formas su desafección a los partidos políticos y a los sistemas electorales, ya que generalmente la percepción ciudadana de los resultados de los procesos electorales y de su desarrollo son empañados por los mismos actores del proceso electoral, lo que evidentemente deslegitima los resultados y genera más dudas que certeza sobre la efectividad de los sistemas electorales y en consecuencia del uso y destino que los partidos políticos dan al financiamiento público y privado otorgado.

En el Distrito Federal los partidos políticos locales cuentan tanto con financiamiento público como privado, su uso y aplicación se encuentra sujeto a una fiscalización, sin embargo la gran pregunta surge de la necesidad de saber si esta función efectivamente está cumpliendo con su objetivo y puede generar en la sociedad la seguridad de que efectivamente los recursos que reciben los partidos políticos contribuyen a la vida democrática de la Ciudad y por ende a la consolidación de un Estado Democrático.

Por disposición de Ley en la función electoral, entre ellas la de fiscalización a los partidos políticos debe regirse por una serie de principios a saber entre ellos el de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad, equidad y publicidad procesal, así nuestro estudio tendrá por objeto saber si efectivamente mediante la aplicación de estos principios en la función de fiscalización que realiza la autoridad electoral local se están sentando las bases para poder afirmar que con dicha acción nos encontramos en el camino de la consolidación de un Estado

democrático o si como en los hechos parece, las soluciones políticas dejan sin efecto el marco jurídico regulatorio de la función electoral.

También resulta ponderable el hecho de que aún con las recientes reformas electorales, se continúa advirtiendo injerencia de los gobiernos locales o de los representantes de los Congresos o de los partidos políticos en la candidatura y elección tanto de Consejeros Electorales como de Magistrados, lo que de fondo desvirtúa la intencionalidad del marco legal establecido.

En materia de fiscalización se establecen para la autoridad electoral federal obligaciones para vigilar de modo más efectivo el uso de los recursos que hacen los partidos políticos, lo que en esencia presupone fortalecerá la transparencia de su destino, esta acción en primera instancia será coordinada por el Instituto Nacional Electoral y se establece una fiscalización de forma expedita, incluso durante el transcurso de las campañas y no una vez que terminan.

En este orden de ideas, el presente estudio tiene por objeto saber si con la existencia de un marco normativo claro, la fiscalización de los recursos con que operan los partidos políticos en sus actividades ordinarias y extraordinarias y la aplicación de los principios de la función electoral, estamos en el camino correcto para garantizar la consolidación del Estado democrático, o definitivamente no existe otra opción que la participación activa y directa de la sociedad a través de candidaturas ciudadanas independientes a las estructuras de los partidos políticos y de instituciones electorales dada la evidente desconfianza que existe sobre ellos.

En nuestra investigación se ha pretendido acotar todas las vertientes que eventualmente inciden en el proceso de fiscalización del uso y destino que se les da a los recursos públicos y privados de que disponen los partidos políticos, incluidas tanto las labores ordinarias como extraordinarias, considerando en estas las precampañas y campañas electorales.

Así las cosas, comenzamos nuestro estudio con el análisis de sistema político del Distrito Federal, sus autoridades electorales locales, sus partidos políticos y la aplicación de los principios electorales de la función electoral en la fiscalización desde su planeación hasta su ejecución, buscando con esto dar al lector una visión clara y objetiva sobre la incidencia que tiene la aplicación de los principios de la función electoral en la fiscalización de los recursos asignados a los partidos políticos y en consecuencia de la consolidación del Estado democrático en el Distrito Federal.

INTRODUCCIÓN

En México mucho se ha hablado de democracia, especialmente a partir de la alternancia política suscitada en el año 2000 y de las reformas en materia electoral del 2008 y político electoral del 2013 con la creación del Instituto Nacional de Elecciones (INE); dichos acontecimientos han generado expectativas de un crecimiento más justo, equitativo, transparente y de menor corrupción, fundadas en la existencia de procedimientos democráticos que garanticen la transparencia y rendición de cuentas; sin embargo, esta percepción se ha visto desgastada debido al poco impacto que ha significado en la mejora de las condiciones de la ciudadanía, ocasionando con ello, una mayor desafección social al sistema político electoral, caracterizado por dos aspectos:

1) *Falta de transparencia en el origen, uso, destino y aplicación de los recursos ejercidos por los institutos políticos y sus candidatos en las campañas electorales*, en donde, temas como el de “Amigos de Fox”, “Pemexgate”, “Monederos electrónicos”, etc… han incidido de forma directa en la percepción ciudadana, generando dudas sobre la utilización de los recursos y el origen de su financiamiento. Esta tendencia se ha presentado cíclicamente en los últimos procesos electorales, provocando incertidumbre respecto a su legalidad.

   Para ilustrar lo anterior, se describen a continuación, algunas inconsistencias suscitadas en procesos electorales recientes:

a) En las elecciones celebradas en el Distrito Federal durante el 2009, el Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal (Consejo General) declaró la existencia de rebases de topes de campaña en las candidaturas a las Delegaciones Políticas en Cuajimalpa de Morelos y Miguel Hidalgo, mismas que fueron resueltas por la máxima autoridad electoral federal como inexistentes,

basándose en criterios de legalidad más que en principios de certeza y equidad, lo cual restó legitimidad a las instituciones y a la acción de gobierno.[1]

Al respecto, John M. Ackerman en el artículo titulado “Una Reconceptualización del Derecho Electoral a la Luz del Caso Sodi”, ha manifestado lo siguiente para el caso de la Delegación Miguel Hidalgo:

Uno de los errores más comunes que cometen los juzgadores a la hora de revisar la validez de una elección, es la tendencia a importar mecánica e irreflexivamente los principios del derecho penal al derecho administrativo sancionador electoral. Tal falsa equivalencia entre dos ramas del derecho más bien diferenciadas, puede llevar a confundir las garantías procesales de una "entidad de interés público", como un Partido Político, con las garantías de los ciudadanos. El resultado ha sido que las instancias jurisdiccionales en materia electoral muchas veces se han atado de manos de manera artificial en términos procesales.

b) De igual forma, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2011-2012, salvo la elección del Jefe de Gobierno del Distrito Federal en donde la diferencia porcentual respecto del resto de los participantes fue sustantiva, se presentaron ante el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), 12 desechamientos, siete admisiones y 13 sobreseimientos de solicitudes de investigación por rebase de topes de campaña en las demarcaciones territoriales de las Delegaciones Miguel Hidalgo y Cuajimalpa.

Las resoluciones formuladas por el órgano electoral, fueron ratificadas por la autoridad jurisdiccional al amparo de criterios de legalidad, y para el caso de la Delegación Benito Juárez, basados en aspectos de extemporaneidad, lo que deja lugar a dudas sobre la efectiva posibilidad de que los Tribunales velen por garantizar la voluntad del electorado.

[1] La autoridad jurisdiccional fundamentó sustancialmente sus Resoluciones en la naturaleza dispositiva de un procedimiento de investigación. Al respecto se pueden consultar las Resoluciones de la Sala Regional del Distrito Federal del Poder Judicial de la Federación de fecha 28 de Septiembre del 2009 expedientes SDF-JRC-56/2009, SDF-JRC-65/2009, SDF-JRC-66/2009 y SDF-J++DC-299/2009.

La visión limitada de las facultades atribuidas a la fiscalización desplegada por los organismos administrativos electorales rompe de tajo con uno de los legados más importantes en la materia, caracterizado por la primera composición (1996-2006) del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en la que se habrían dictado una serie de sentencias y tesis de jurisprudencia (por ejemplo, con respecto al "principio inquisitivo" y las "pruebas indirectas", entre otras) que indicaban de manera contundente la responsabilidad de los organismos electorales de investigar a fondo todas y cada una de las denuncias recibidas, aún, cuando no estuvieran obligados formalmente por la letra de la Ley. Sin embargo, la resolución definitiva de la Sala Regional en el Distrito Federal del Tribunal Electoral de la misma demarcación para el caso de Demetrio Sodi, camina en el sentido inverso, ya que busca limitar y recortar las facultades con las que cuentan hoy los institutos electorales para revisar los gastos de campaña."[2]

c) En lo que respecta a los procesos electorales locales al interior de la República Mexicana en los años 2011 a 2012, las condiciones poco cambiaron, y en todo caso, empeoraron, suscitándose asesinatos, intervenciones telefónicas, apoyos gubernamentales, uso de programas sociales, mensajes presidenciales y manejo de cifras inconsistentes por parte de las firmas encuestadoras, entre otros; temas que en su mayoría se encuentran relacionados con el origen, uso, destino y aplicación de los recursos utilizados por los partidos políticos en sus campañas.

2) A partir del año 2000 el papel que han desempeñado los actores del sistema electoral, han incidido en *la percepción ciudadana*, misma que *se encuentra en el marco de la desconfianza hacia los partidos políticos y la política, y consecuentemente hacia las instituciones involucradas en los procesos.*

No es un hecho desconocido que los partidos políticos utilizan a la percepción ciudadana como requisito a cubrir para acceder al poder público, olvidando su

[2] ACKERMAN, John M. Una Reconceptualización del Derecho Electoral a la Luz del Caso Sodi, consultado en: http://www.jurídicas.unam.mx/invest/directorio/investigador.htm?p= ackerman

obligación primigenia de rendición de cuentas hacia los ciudadanos, ya que a la fecha no se han logrado consolidar políticas tendientes a generar una verdadera democracia mediante la implementación de mecanismos de transparencia, evaluación y seguimiento de los gobernantes, que permitan reflejar el beneficio social obtenido en contraprestación al voto otorgado.

Asimismo, es dable señalar que en los procesos electorales, los partidos políticos han privilegiado el despliegue de spots publicitarios y la descalificación del adversario como elementos fundamentales para la obtención del voto ciudadano en sustitución del debate de ideas y propuestas, lo que lejos de abonar a la cultura democrática, genera desafección social al sistema político y desconfianza en los procesos democráticos establecidos para la elección de los representantes.

Otro elemento que salta a la vista, es la pasividad de los partidos políticos respecto de la conducta desplegada por sus simpatizantes, militantes, líderes y estructuras, lo que evidencia la falta de compromiso para dar cumplimiento al marco regulatorio vigente que permita avanzar en la consolidación democrática para erradicar estos y otros vicios; un ejemplo de ello es la promoción de acciones y ofensivas realizadas cuando los resultados electorales no los favorecen, argumentando la manipulación de los gobiernos en turno; poca claridad en el origen, destino y aplicación de los recursos utilizados e injerencia de grupos de interés y medios de comunicación.

En una democracia se crean estructuras y los representantes elegidos están autorizados para poner en práctica la voluntad del pueblo y actuar en su nombre. En la construcción de instituciones democráticas, es importante tener en cuenta que el abuso del poder y la falta de transparencia de los recursos, menoscaban la confianza ciudadana, llegando a minar la esencia del sistema democrático.

No obstante, es innegable que el Estado democrático en nuestro sistema político, requiere para su existencia a los partidos políticos, los que se constituyen en uno

de los principales mecanismos de conducción de la voluntad social ante sus gobernantes. A la fecha, esta representación se encuentra compuesta por siete fuerzas políticas: Partido Acción Nacional; Partido Revolucionario Institucional; Partido de la Revolución Democrática; Partido del Trabajo; Partido Verde Ecologista de México; Movimiento Ciudadano y Partido Nueva Alianza.

Para el cumplimiento de sus objetivos ordinarios y extraordinarios, reciben financiamiento público y privado, el cual de conformidad con la normativa vigente debe ser ejercido de forma transparente y sujeto a rendición de cuentas.

El artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución Política) establece que "…todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste…", lo que obliga a reconocer que la mejor garantía de la lealtad de los hombres, radica en hacer que su interés coincida con su deber, de tal forma que cualquier acción gubernamental, institucional o del Estado debe emprenderse en beneficio del pueblo; sin embargo, la percepción ciudadana respecto de sus gobernantes e instituciones, en la mayoría de los casos se traduce en perjuicio del pueblo y en beneficio de unos cuantos.

En este contexto, la percepción ciudadana es coincidente respecto del uso, destino y aplicación que se le da a los recursos ministrados a los partidos políticos y la función electoral, considerando a estos excesivos y que en nada aportan a la consolidación del Estado democrático, basados entre otros, en los siguientes aspectos:

a) *Falta de resultados tangibles respecto del uso y destino del financiamiento público otorgado para el cumplimiento de los objetivos de los partidos políticos*. Como ejemplo cabe mencionar que para el periodo 2000-2010, se otorgaron a un total de 13 partidos políticos, en distintos momentos, un total de 3,271.31 millones de pesos, en los siguientes términos:

Cuadro 1: Financiamiento Público autorizado a los Partidos Políticos en el Distrito Federal periodo 2000-2010		
No.	**Partido Político**	**Monto (millones de pesos)**
1	Acción Nacional	762.02
2	Revolucionario Institucional	551.07
3	De la Revolución Democrática	1,124.52
4	Del Trabajo	138.80
5	Verde Ecologista de México	359.56
6	Movimiento Ciudadano	100.95
7	Del Centro Democrático	7.77
8	De la Sociedad Nacionalista	22.32
9	Auténtico de la Revolución Mexicana	7.77
10	Alianza Social	22.32
11	Democracia Social	7.77
12	Nueva Alianza	102.31
13	Social Demócrata	64.13
	TOTAL	**3,271.31**

FUENTE: Elaboración propia con información de los Acuerdos del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal 2000-2010.

De los trece partidos existentes, sólo continúan vigentes siete a los que se les otorgó financiamiento público en el período mencionado. Al no existir un informe puntual que rinda cuentas de los recursos de los partidos que perdieron el registro, se genera incertidumbre y falta de credibilidad sobre el cumplimiento de los objetivos planteados por los institutos políticos.

b) Ahora bien, para los ejercicios 2011, 2012, 2013 y 2014, el financiamiento autorizado a los partidos políticos con registro son los siguientes:

Cuadro 2: Financiamiento Público autorizado a los Partidos Políticos en el Distrito Federal período 2011		
No.	**Partido Político**	**Monto (millones de pesos)**
1	Acción Nacional	60.84
2	Revolucionario Institucional	51.75
3	De la Revolución Democrática	75.17
4	Del Trabajo	37.96
5	Verde Ecologista de México	34.93
6	Convergencia	18.71
7	Nueva Alianza	22.02
	TOTAL	**301.38**

FUENTE: Acuerdos identificados con la clave ACU-07-11 y ACU-08-11, del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal, por el que se determina el financiamiento público por actividades ordinaras y específicas, para los Partidos Políticos como entidades de interés público en el Distrito Federal, correspondientes al ejercicio 2011.

Cuadro 3: Financiamiento Público autorizado a los Partidos Políticos en el Distrito Federal período 2012		
No.	**Partido Político**	**Monto (millones de pesos)**
1	Acción Nacional	64.53
2	Revolucionario Institucional	54.9
3	De la Revolución Democrática	79.75
4	Del Trabajo	40.28
5	Verde Ecologista de México	37.06
6	Movimiento Ciudadano	19.85
7	Nueva Alianza	23.36
	TOTAL	**319.73**

FUENTE: Acuerdos identificados con la clave ACU-03-12 y ACU-04-12, del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal, por el que se determina el financiamiento público por actividades ordinaras y específicas, para los Partidos Políticos como entidades de interés público en el Distrito Federal, correspondientes al ejercicio 2012.

Cuadro 4: Financiamiento público autorizado a los Partidos Políticos en el Distrito Federal período 2013		
No.	**Partido Político**	**Monto (millones de pesos)**
1	Acción Nacional	65.20
2	Revolucionario Institucional	60.11
3	De la Revolución Democrática	104.24
4	Del Trabajo	26.7
5	Verde Ecologista de México	23.5
6	Movimiento Ciudadano	21.93
7	Nueva Alianza	23.79
	TOTAL	**325.47**

FUENTE: Acuerdos identificados con la clave **ACU-02-13 y ACU-03-13** del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal, por el que se determina el financiamiento público por actividades ordinaras y específicas, para los Partidos Políticos como entidades de interés público en el Distrito Federal, correspondientes al ejercicio **2013.**

Cuadro 5: Financiamiento público autorizado a los Partidos Políticos en el Distrito Federal período 2014		
No.	**Partido Político**	**Monto (millones de pesos)**
1	Acción Nacional	70.96
2	Revolucionario Institucional	65.42
3	De la Revolución Democrática	113.45
4	Del Trabajo	29.05
5	Verde Ecologista de México	25.58
6	Movimiento Ciudadano	23.86
7	Nueva Alianza	25.89
	TOTAL	**354.24**

FUENTE: Acuerdos identificados con la clave **ACU-01-14 y ACU-02-14** del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal, por el que se determina el financiamiento público por actividades ordinaras y específicas, para los Partidos Políticos como entidades de interés público en el Distrito Federal, correspondientes al ejercicio **2014.**

a) En los informes anuales que emite la UTEF, se presentaron las siguientes resoluciones: en lo que respecta al ejercicio 2011, en su vigésima sesión extraordinaria, la Junta Administrativa del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) aprobó reintegrar a la Tesorería del Distrito Federal por conducto de la Secretaría de Finanzas capitalina, el importe correspondiente a multas y

sanciones de las asociaciones políticas por un monto de $4’234,662.26, distribuido de la siguiente forma: al Partido Acción Nacional se impuso una sanción administrativa por $485,532.57; al Partido Revolucionario Institucional por una cantidad equivalente a $688,465.70; al Partido de la Revolución Democrática por $1´399,889.96; al Partido del Trabajo, por $1´010,102.10, y al Partido Verde Ecologista de México por $650,671.93. Los partidos Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza no fueron objeto de observación alguna.

b) Transparencia Mexicana en su informe de mayo de 2010, ubicó al *Distrito Federal* con 17,9 [3] puntos negativos de la evaluación, clasificándolo como *una de las Entidades con mayor percepción negativa de la sociedad sobre el uso y destino de los recursos públicos.*

c) Falta de confianza de la sociedad en los partidos políticos[4.] Consulta Mitofsky, en su monitor mensual del mes de abril 2010 de Economía, Gobierno y Política, ubica a los partidos políticos como las instituciones con menor confianza, incluso después de policías, sindicatos, senadores y diputados.

Cuadro 6: Instituciones con menor confianza de la Sociedad en promedio 2010-2011

Posición	Institución	% “Mucha” Confianza		
Septiembre 2010		Septiembre 2010	Septiembre 2011	Variación
7	Empresario	16.9%	11%	5.9%
8	Presidente de la República	17.9%	17%	-0.9
9	Senadores	8.4%	4%	-4.4
10	Sindicatos	7.4%	7%	-0.4
11	Policía	8.7%	11%	2.3
11	Diputados	7.0%	4%	-3.0
11	Partidos Políticos	6.8%	4%	- 2.8

FUENTE: Consulta Mitofsky 2010.

[3] Transparencia Mexicana www.transparenciamexicana.org.mx

[4] Al mes de septiembre del 2011 todos los partidos nacionales, excepto el Revolucionario Institucional tienen un saldo negativo de opinión; para mayor información consultar Consulta Mitofsky www.consulta.com.mx.-Opinión sobre los partidos políticos en México http://www.consulta.mx/Docs/FusionCharts/EPG.pdf.

Luego del proceso electoral realizado en México en 2012 en el que las instituciones fueron criticadas y todas jugaron un papel de suma importancia para el buen funcionamiento de la vida democrática del país, consulta Mitofsky[5] reportó el nivel de confianza con que los mexicanos evalúan las instituciones, tal como lo muestra el siguiente cuadro:

Cuadro 7: Confianza de la Sociedad en las Instituciones 2012							
Posición	**Institución**	**Mucha**	**Regular**	**Poco/Nada**	**N/C**	**Saldo (Mucha -Poca)**	**Calificación**
7	Empresario	13.7	59.5	18.5	8.3	-4.8	6.8
10	Presidente de la República	17.2	54.6	23.4	4.8	-6.2	6.6
12	Senadores	7.1	56.9	30.0	6.0	-22.9	6.0
11	Sindicatos	9.3	49.9	29.7	11.1	-20.4	6.0
14	Policía	8.5	52.3	35.0	4.2	-26.6	5.9
15	Diputados	6.4	56.4	32.0	5.2	-25.6	5.9
13	Partidos Políticos	7.0	59.1	29.0	4.9	-22.0	6.0

FUENTE: Consulta Mitofsky 2012

d) *Percepción negativa de la política*. Consulta Mitofsky en la encuesta de Ciudadanía, Democracia y Narcoviolencia (CIDENA, 2011), reportó que sólo el 8% de la población a nivel nacional, le interesa la política del país, esto en contraste al 44 % que manifestó tener poco interés; para el caso del Distrito Federal, el resultado fue, que sólo el 10% de la población está muy interesado, mientras que el 38% muestra poco interés. [6]

5 Consulta Mitofsky, Encuesta a 1000 mexicanos sobre la percepción ciudadana de las instituciones. Consultado en: http://consulta.mx/web/images/MexicoOpina/2012/20120830_NA_Confianza_Instituciones.pdf

6 Consulta Mitofsky www.consulta.com.mx

e) *Insatisfacción con la democracia y sus métodos*. Según cifras reportadas por el Latinobarómetro[7], sólo el 23% de la población cree que las elecciones son limpias y se encuentran satisfechos con los resultados.

f) *Falta de información sobre el uso y destino de las prerrogativas*. El 75% de las preguntas que se hacen a los partidos políticos en materia de transparencia, se refieren a asuntos presupuestales y contables, mientras que el resto a los padrones de militantes y solicitud de información sobre donantes de recursos.[8]

g) *Disminución en el nivel de confianza de la sociedad en los partidos políticos*. Para el período 2008-2010, México en relación con otros países de Latinoamérica, presenta uno de los mayores incrementos en la pérdida de confianza en sus partidos políticos, tal como se acredita con la siguiente tabla:

Cuadro 8: Cambio de la Sociedad en el nivel de confianza en los Partidos Políticos, 2008 – 2010. (% y posiciones)

País	2008		2010		Cambio*	
Honduras	36.1	(7)	49.4	(2)	13.3	(+5)
Paraguay	19.5	(18)	29.8	(15)	10.3	(+3)
Uruguay	41.0	(2)	50.4	(1)	9.4	(+1)
Costa Rica	32.3	(11)	41.1	(3)	8.8	(+8)
Nicaragua	24.9	(16)	30.3	(13)	5.4	(+3)
Bolivia	28.7	(14)	33.4	(10)	4.7	(+4)
Panamá	36.5	(6)	41.1	(4)	4.6	(+2)
Ecuador	22.6	(17)	27.1	(18)	4.5	(-1)
Brasil	28.9	(13)	32.9	(12)	4.0	(+1)
El Salvador	35.6	(8)	39.1	(5)	3.5	(+3)
Perú	27.9	(15)	30.0	(14)	2.1	(+1)
Venezuela	37.2	(5)	39.1	(6)	1.9	(-1)
R, Dominicana	35.5	(9)	33.1	(11)	-2.4	(-2)
Chile	41.0	(3)	38.3	(7)	-2.7	(-4)
Argentina	31.4	(12)	27.3	(17)	-4.1	(-5)
Colombia	40.8	(4)	36.5	(8)	-4.3	(-4)
Guatemala	33.8	(10)	29.1	(16)	-4.7	(-6)
México	41.5	(1)	35.4	(9)	-6.1	(-8)
Totales	**33.1**		**35.8**		**2.7**	

FUENTE: Israel Palazuelos Covarrubias. La Desconfianza en los Partidos Políticos y la Percepción Ciudadana de Desempeño Gubernamental: México en el Contexto Latinoamericano. IV Congreso Internacional y XXI Nacional de Estudios Electorales. Ciudad de México, 30,31 Agosto1, 2, 3 Septiembre 2011.

[7] Latinobarómetro. www.latinobarómetro.org./INFORME_LATINOBARÓMETRO_2008.pdf
[8] (INFODF), BOLETIN DCS-B/016/09 27 de Febrero 2009. Consultado en: www.infodf.org.mx

La anterior situación coloca al Estado democrático en la Ciudad, en una situación vulnerable que se constata e incrementa con la falta de participación de la sociedad civil en los mecanismos de elección y representación establecidos, ello como resultado de una insatisfacción legítima hacia la política, los políticos y el sistema democrático, la cual se materializa en el abstencionismo durante las jornadas electorales, y otras expresiones como el voto nulo[9], el surgimiento de organizaciones civiles no gubernamentales (ONG´s) como canales de demandas ciudadanas y propuestas de modificaciones al marco legal establecido que permita la participación en procesos electorales mediante candidaturas ciudadanas; estas últimas, hacen patente una paulatina desafección colectiva del Estado democrático vigente y obligan a la toma de acciones inmediatas de la autoridad electoral para garantizar la vigencia del Estado democrático basado en un sistema de partidos y la consolidación de una democracia de calidad en el Distrito Federal.

Cuadro 9. Abstencionismo en procesos electorales en el Distrito Federal (2000-2012)

Período/Elección	2000	2003	2006	2009	2012
Jefe de Gobierno	30.13%	No aplica	32.76%	No aplica	34 %
Jefe Delegacional	30.58%	56.19%	32.87%	58.49%	34.09 %
Diputados de Mayoría Relativa	30.59%	56.16%	32.87%	58.42%	34.09%

FUENTE: IEDF, Estadísticas de las Elecciones Locales 2000, 2003, 2006, 2009 y 2012.

A pesar de la indefinición teórica con respecto al carácter democrático de un Estado y de la sociedad, podemos retomar algunas categorías que nos sean de utilidad para diferenciar el ámbito que analizaremos y así explicar el estatus de un Estado democrático; para ello retomaremos la clasificación de democracia que propone Sartori, diferenciándola en *económica*, *política*, y *social*, estableciendo que la ausencia de una bastaría para que no existan las dos restantes[10].

[9] Para el caso del Distrito Federal en las elecciones del año 2012 representó el 2.96% y el 4.47% de los votos para la elección de Jefes Delegacionales y Diputados de Mayoría Relativa, respectivamente. (IEDF) Sistema de Consulta de los Resultados de las Elecciones Locales 2012, Véase: www.iedf.org.mx

[10] SARTORI, G. (1997). *¿Qué es la democracia?* México: Nueva Imagen. pp. 5-8.

De ahí que, aun cuando no existan parámetros suficientes para poder identificar a un Estado como democrático, las elecciones representan un elemento de relevancia para la existencia de la democracia; por ello, el análisis de cómo se realizan las elecciones en un país, nos llevará necesariamente a discutir sobre su carácter democrático en el ámbito político Sartori y la Unión Interparlamentaria, han coincidido en la importancia de las elecciones como un instrumento vital para la existencia de la democracia, lo que se demuestra en el documento emitido en 1994 denominado “Elecciones Libres y Justas”, donde enumera rubros y criterios que deben cumplir las elecciones para poder considerarse democráticas:[11] 1) Ley y sistemas electorales. 2) Delimitación de circunscripciones. 3) Gestión de las elecciones. 4) El derecho al voto. 5) Inscripción de los electores. 6) Educación cívica e información a los electores. 7) Candidatos, partidos políticos, organización política incluida la financiación o el financiamiento. 8) Campañas electorales, inclusive la protección al respeto de los derechos fundamentales, las reuniones políticas, el acceso a los medios informativos, y la cobertura de los mismos. 9) Escrutinio control y resultados, por último 10) Quejas, resolución de conflictos.

En este sentido, cobra especial relevancia el nivel de confianza que la sociedad tiene respecto de las elecciones y los partidos políticos para la existencia de un Estado democrático.

En el siguiente cuadro, se presenta el nivel de confianza en las instituciones públicas en diversos países de América Latina, destacando en nuestro país, que de las 12 variables evaluadas, los partidos políticos y las relacionadas con las elecciones se encuentran en los niveles mínimos de confianza, sólo superados por los conceptos de policía y justicia.

[11] GOODWIN-GILL, G. S. (2006). Elecciones Libres y Justas. Ginebra: Unión Interparlamentaria.

Cuadro 10: Nivel de confianza en las instituciones públicas de México ante América Latina, 2010 (%)											
Países	¿Hasta qué punto tiene confianza usted en...?										
	Partidos	Aut/ Elect	Elecciones	Gobierno	Presidente	Municipio	Corte	Justicia	FFAA	Policía	Congreso
Argentina	27.33	38.00	42.00	36.00	33.00	40.00	36.17	36.50	38.33	30.50	38.17
Bolivia	33.33	58.33	56.67	56.00	57.50	49.50	45.50	42.83	54.83	43.50	51.17
Brasil	33.00	47.33	52.83	57.50	66.17	46.67	54.83	50.67	70.50	53.33	42.33
Chile	38.33	62.50	68.33	62.33	61.33	59.33	51.83	48.17	71.83	71.33	53.50
Colombia	36.50	47.33	47.00	61.33	66.33	51.67	55.67	52.83	64.50	56.00	49.33
Costa Rica	41.17	60.50	60.00	53.17	55.17	53.00	53.17	51.67	*	46.33	50.83
Ecuador	27.17	45.67	48.83	56.50	56.67	52.67	37.67	39.50	65.17	49.33	42.67
El Salvador	39.00	54.83	59.33	67.67	68.33	59.17	54.17	51.33	67.67	49.33	52.00
Guatemala	29.17	50.83	47.33	43.00	41.17	51.33	41.33	41.33	55.83	31.00	36.67
Honduras	49.50	56.50	55.33	60.17	62.67	56.83	56.50	55.67	60.83	54.17	56.83
México	35.33	57.33	50.67	59.00	54.17	54.67	54.83	48.00	72.17	36.33	54.00
Nicaragua	30.33	40.33	41.67	44.00	41.83	50.67	40.33	43.67	66.17	54.67	39.50
Panamá	41.17	62.67	61.83	59.33	65.33	48.83	49.17	53.00	*	57.83	46.50
Paraguay	29.83	38.83	42.50	49.17	55.00	52.67	37.17	36.50	56.50	36.67	34.83
Perú	30.00	46.33	49.67	36.83	35.50	42.00	36.17	37.50	53.50	41.33	32.00
R. Dominicana	33.17	60.83	52.17	59.17	61.83	50.00	50.17	44.50	60.50	39.83	50.50
Uruguay	50.33	72.33	81.67	74.00	73.50	58.00	64.50	57.50	60.33	55.67	66.33
Venezuela	39.00	46.33	52.00	45.50	47.50	53.17	41.83	37.83	53.33	35.50	45.00
Totales	35.76	52.60	53.88	54.48	55.72	51.68	47.83	46.06	60.75	46.81	46.79

FUENTE: Israel Palazuelos Covarrubias La Desconfianza en los Partidos Políticos y la Percepción Ciudadana de Desempeño Gubernamental: México en el Contexto Latinoamericano. IV Congreso Internacional y XXI Nacional de Estudios Electorales. Ciudad de México, 30,31 Agosto; 1, 2 y 3 Septiembre 2011.

De este amplio universo y dada la importancia del tema para la solidez de un Estado democrático, nuestro estudio se enfocará principalmente en la aplicación de los principios de la función electoral y en la fiscalización que realiza la autoridad electoral en el Distrito Federal sobre el financiamiento que reciben los partidos políticos para sus actividades ordinarias y extraordinarias (precampañas y campañas) así como su incidencia en la consolidación del Estado democrático, ya que de los resultados dados en esta materia, dependerá la confianza que la ciudadanía deposite a sus gobernantes.

Sin embargo, debe considerarse que la consolidación del Estado democrático está en proceso y por lo tanto es vulnerable, en este contexto, la sociedad, los partidos políticos, las autoridades electorales y los gobernantes, se encuentran obligados a trabajar en pro de esta consolidación, evaluación y actualización permanente.

Tip O´Neill, destacado demócrata en Massachusetts, afirma que “la política no cobra sentido si no se lleva al terreno local, que es allí donde cobra su dimensión y

su peso";[12] bajo esta premisa, el Distrito Federal no se encuentra excluido del contexto político nacional y en consecuencia se encuentra obligado en el ámbito de su competencia a participar activamente.

Así, podemos afirmar que una de las condicionantes fundamentales para la consolidación del Estado democrático, es la existencia de una autoridad electoral garante de los resultados de los comicios y promotor de los procesos partidistas y electorales mediante los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, objetividad, equidad, transparencia y publicidad procesal; además, de llevar la función fiscalizadora para el uso, aplicación y destino de los recursos que utilizan los institutos políticos en pro de la transparencia y rendición de cuentas, lo cual se verá reflejado en una mayor afección social y confianza ciudadana.

Desde el punto de vista del derecho electoral, se reconoce que esta rama se constituye no sólo por normas, sino también por principios, los cuales tienen una doble finalidad: 1) sirven para interpretar el ordenamiento y 2) tienen una proyección normativa derivada de la indeterminación que los principios tienen con respecto a las reglas, que hacen que en ellos estén prefigurados ciertos contenidos normativos que conforman todo el ordenamiento y que han sido desarrollados por la teoría y los órganos jurisdiccionales bajo ciertos parámetros procediendo a su utilización como marco operacional que permita a la sociedad a partir de la instrumentación de procedimientos y normas más eficientes y eficaces, generar efectos favorables en la percepción de las acciones desplegadas que den lugar a la consolidación de un Estado democrático.

Bajo este contexto, la presente investigación tiene como objetivo fundamental saber si la aplicación de los principios de la función electoral en la fiscalización a los partidos políticos, efectivamente garantiza la consolidación del Estado Democrático en el Distrito Federal, porque no se puede continuar con procesos

[12] ABUNDIS, Francisco "Toda la Política es Local", periódico El Universal, 16 de febrero de 2010. Véase: http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/47401.html

de adecuación normativa y/o institucional que no garanticen la consolidación de un Estado democrático.

Así las cosas, no es suficiente innovar nuevos modelos institucionales y/o organizacionales, sino garantizar la debida interpretación y aplicación de los principios de la función electoral para que no solo la legalidad sea el parámetro de medición, sobre todo debemos apostar a una participación más activa de la sociedad que garantice la legitimidad en el uso y aplicación de los recursos públicos que son ejercidos por los partidos políticos.

Para lograr nuestro objetivo, como ya se ha mencionado la presente investigación se desarrolló a través del estudio de los principios de la función electoral vinculados al sistema político, electoral y de partidos políticos en el Distrito Federal, así como de las estructuras electorales locales y sus competencias en la fiscalización de recursos.

Por lo anterior, la hipótesis de investigación se funda bajo la siguiente premisa:

La aplicación de los principios de la función electoral en la fiscalización de los recursos otorgados a los partidos políticos en el Distrito Federal no ha logrado, aún con las recientes y permanentes reformas realizadas al marco electoral, constituirse como uno de los elementos fundamentales de la consolidación del Estado democrático.

Para las finalidades de esta investigación, se optó por utilizar el método investigación inductivo-deductivo[13] a fin de desarrollar el estudio con una perspectiva interpretativa de los hechos, basado en el análisis descriptivo y explicativo; por lo cual, la investigación tiene la característica de ser cualitativa en

[13]DÁVILA NEWMAN, Gladys. El razonamiento inductivo y deductivo dentro del proceso investigativo en ciencias experimentales y sociales. *Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal (Redalyc.org).* 2006, Número extraordinario. Véase en: http://www.redalyc.org/pdf/761/76109911.pdf. p. 184-188.

el establecimiento de las premisas básicas, así como en la presentación de los resultados.

La técnica de investigación en la que nos apoyaremos es la referente a la documental[14] a partir de la recolección de información bibliográfica; esta última, destinada a obtener información de fuentes secundarias, a partir de documentos gráficos (impresos y electrónicos).

El trabajo se estructura mediante cinco apartados que se desarrollan de la siguiente forma:

- Capítulo 1. Con el objetivo de delimitar el alcance de nuestro estudio, así como el nivel de competencia, comenzaremos con el estudio del sistema político del Distrito Federal, partiendo de su forma de gobierno, sistema electoral, sistema de partidos, así como de la participación de la sociedad civil, los medios de comunicación y grupos de interés.

- Capítulo 2. Se estudian a las autoridades electorales del Distrito Federal y los principios rectores que regulan sus funciones.

- Capítulo 3. Se analiza y estudia a los partidos políticos como entes de interés público, así como el financiamiento que reciben para el cumplimiento de sus objetivos.

- Capítulo 4. Se examinará el rol de los principios de la función electoral en el proceso de planeación de la fiscalización a los partidos políticos y el Capítulo 5.

[14] De acuerdo con la definición de Guillermina Baena “la investigación documental es una técnica que consiste en la selección y recopilación de información por medio de la lectura y crítica de documentos y materiales bibliográficos, de bibliotecas, hemerotecas, centros de documentación e información”. El desarrollo de un proceso de investigación documental completo da como producto diferentes tipos de trabajos documentales entre los que se encuentran compilaciones, ensayos, críticas valorativas, estudios comparativos, memorias, monografías entre otros. Véase en: http://www.eumed.net/libros-gratis/2006c/203/2c.htm

Comprende un análisis de los distintos mecanismos de fiscalización a los que se ven sujetos los partidos políticos en los diversos procedimientos establecidos en la normativa electoral y su desarrollo en concordancia con los principios de la función electoral.

Finalmente, en el apartado de conclusiones se verificará la confirmación de la hipótesis planteada, qué modificaciones se dieron en la fiscalización de recursos políticos a partir de las recientes reformas al sistema electoral, así como diversas alternativas que podrían fortalecer la plena aplicación de los principios de la función electoral en la fiscalización de los recursos ministrados a los institutos políticos, de tal forma que con su aplicación se vea favorecida la consolidación del sistema de partidos políticos y en consecuencia del Estado democrático en el Distrito Federal.

CAPÍTULO 1

SISTEMA POLÍTICO DEL DISTRITO FEDERAL

En Ciencia Política al hablar del sistema político usualmente se hace la referencia al conjunto de instituciones, grupos y procesos interrelacionados en el ámbito, también de las contradicciones que llegaran a surgir entre ellos, la forma en que procesan las demandas de los diversos grupos sociales y la capacidad de respuesta que las instancias involucradas son susceptibles de manifestar.

Para el caso mexicano, la Constitución Política dispone que la organización de la nación será a través de una república representativa, democrática y federal, integrada por 31 Estados libres y soberanos, unidos en una federación y un Distrito Federal, este último a su vez, representará la sede de los Poderes y Capital de los Estados Unidos Mexicanos.

El Distrito Federal, resultado de su construcción histórica, se ha convertido en un importante centro de poder político, económico y social; sin embargo, en contraste, su conformación y autonomía política se ha visto sujeta a un proceso lento e incompleto a la fecha.

Los congresos constituyentes de 1857 y de 1917 abordaron el tema del Distrito Federal con una diferencia: mientras que en el 57 se tocaron los puntos relativos a los derechos políticos de sus ciudadanos, la permanencia de los municipios en su estructura y como sede de los poderes federales, en el 17 este último punto se omitió.

Así, para el año 1996 la Ciudad de México, después de grandes luchas sociales, alcanzó el derecho a un gobierno democráticamente electo cuando el Congreso de la Unión aprobó las reformas constitucionales que permitieron la elección de un Jefe de Gobierno y Delegados, en reconocimiento al derecho de los habitantes de la Ciudad a elegir su gobierno; sin embargo, sigue sin reconocerse su derecho a tener una forma de Estado, de gobierno y un sistema electoral con las facultades necesarias para atender el conjunto de sus necesidades.

Con el surgimiento de la democracia liberal, nacen los grandes ejes que le dan viabilidad al sistema político democrático: cargos públicos electos; elecciones libres, imparciales y periódicas; libertad de expresión y asociación sin temor a ser reprimido; y poder participar en los asuntos públicos.[15]

Para efecto del presente estudio, se realizó un análisis del sistema político del Distrito Federal, considerando su integración a partir de los ejes a que se refiere el Licenciado Héctor Solorio Almazán[16]: 1) la forma de Estado, de gobierno, sistema electoral, sistema de partidos; y 2) la sociedad civil, grupos de interés y medios de comunicación, estos últimos referidos a aquellos que institucionalmente ha establecido el Estado como lazos conductores entre este y la sociedad.

1.1. Forma de Estado

Desde el punto de vista de la integración de sus elementos constitutivos, podemos afirmar que el Distrito Federal tiene los elementos indispensables de la configuración de un Estado: territorio, población y gobierno.

Territorio. El artículo 44 constitucional dispone que la Ciudad de México es el Distrito Federal, sede de los poderes de la Unión y Capital de los Estados Unidos Mexicanos, y se compondrá del territorio que actualmente tiene y en el caso de que los poderes Federales se trasladen a otro lugar, se erigirá en el Estado del Valle de México con los límites y extensión que le asigne el Congreso General.

Población. El Estatuto de Gobierno del Distrito Federal (Estatuto de Gobierno) dispone en su artículo 6 que: “Son ciudadanos del Distrito Federal los varones y mujeres que teniendo la calidad de mexicanos reúnan los requisitos del artículo 34 Constitucional y posean, además, la calidad de vecinos u originarios de la misma”.

[15] DAHL, ROBERT*,* La Democracia, una guía para los ciudadanos, editorial Taurus, México, 2005, pp. 99-101.
[16] Democracia, participación ciudadana y justicia electoral. Reflexiones y retos derivados del proceso electoral 2008-2009, (IEDF). Octubre, 2010, p. 171.

De igual forma, en la legislación local encontramos que el artículo 9 de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal (Ley de Participación Ciudadana) dispone en ese mismo sentido que: “Son ciudadanos del Distrito Federal las mujeres y varones que teniendo la calidad de mexicanos reúnan los requisitos constitucionales y posean; además, la calidad de vecinos u originarios del mismo”, puntualizando en sus artículos 7 y 8 respectivamente, que la calidad de habitante del Distrito Federal la adquieren las personas que residan en su territorio y la de vecinos los habitantes que residan por más de seis meses en la colonia, pueblo, barrio, fraccionamiento o unidad habitacional que conformen esa división territorial. *Gobierno.* De conformidad con el artículo 122 constitucional y el artículo 7 del Estatuto de Gobierno, el Gobierno del Distrito Federal (GDF) está a cargo de los Poderes Federales, y de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial de carácter local, los cuales lo ejercerán en términos de la distribución de competencias establecida para el efecto. El mismo precepto constitucional y el artículo 8 del citado Estatuto de Gobierno, reconocen como autoridades del Distrito Federal a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), al Jefe de Gobierno y al Tribunal Superior de Justicia (TSJDF), dependencias que se estudiaron de forma puntual en el siguiente inciso.

Ahora bien, reconociendo la calidad de Estado al Distrito Federal, cabe señalar su pertenencia a la federación de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 43 de la Constitución Política.

Cabe destacar, que la legislación local retoma lo establecido en el artículo 44 constitucional, resaltando en los artículos 2 y 3 del Estatuto de Gobierno, lo concerniente a su territorio y su carácter de sede de los Poderes de la Unión; además, de su calidad como entidad federativa, la cual goza de personalidad jurídica, patrimonio propio y capacidad para adquirir y poseer toda clase de bienes que le sean necesarios para la prestación de servicios públicos a su cargo y, en general, para el desarrollo de sus actividades y funciones.

En concordancia con lo mencionado por el Maestro Ignacio Burgoa,[17] podemos concluir que, “independientemente de “como” sea su gobierno y extensión de sus funciones”, o su denominación, el Distrito Federal es un Estado integrante de la federación, Capital de los Estados Unidos Mexicanos, con personalidad jurídica, patrimonio y territorio propio, en donde residen los Poderes de la Unión, condición que da lugar a la existencia de un orden jurídico específico y limitado, tal y como lo reconoce el propio artículo 11 del Estatuto de Gobierno, el cual señala que, el (GDF) para su organización política y administrativa, deberá de considerar lo siguiente: a) su condición de ser sede de los Poderes de la Unión y Capital de los Estados Unidos Mexicanos; b) su unidad geográfica y estructural, y c) su desarrollo integral en compatibilidad con las demarcaciones territoriales que la integran.

El Distrito Federal aun cuando es reconocido como entidad integrante de la federación, es la excepción de los estados de la República Mexicana, ya que cuenta con capacidad limitada para autorregular su desarrollo, derivado de su doble naturaleza (entidad federativa-sede de los poderes de la Unión) y de la injerencia legítima del gobierno federal. Por lo tanto el Distrito Federal, no goza de los mismos derechos que los demás estados, y pone en desventaja a sus habitantes y gobernadores para decidir con autonomía sobre su desarrollo político, económico y social, mismo que propicia la existencia de un Estado democrático débil.

1.2. Forma de Gobierno

La conformación del GDF inicialmente guarda congruencia con en el resto de las entidades federativas al constituirse en concordancia con lo dispuesto en el artículo 49 constitucional, es decir, sobre la base de la división de poderes que se materializan dada su particularidad mediante órganos de gobierno con atribuciones limitadas; se identifica a la ALDF como garante del Poder Legislativo,

[17] BURGOA Orihuela, Ignacio, Derecho Constitucional Mexicano, Editorial Porrúa S.A. de C.V., 19ª edición, México 2007, p. 406.

al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en su calidad de titular del Ejecutivo y al TSJDF como responsable del Poder Judicial.

Función Legislativa. La ALDF se compone por 66 diputados (40 de mayoría relativa y 26 de representación proporcional) y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 7 de su Ley orgánica, le corresponde la función legislativa del Distrito Federal en las materias que la Constitución y el Estatuto de Gobierno le confieran.

De acuerdo con los artículos 122 inciso C, BASE PRIMERA, fracción V de la Constitución Política, 42 al 45 y 54 del Estatuto de Gobierno y 10 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, entre otras la ALDF tiene entre otras las siguientes competencias: A) Expedir su Ley orgánica, la que será enviada al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para el sólo efecto de que ordene su publicación. B) Examinar, discutir y aprobar anualmente el presupuesto de egresos y la Ley de ingresos del Distrito Federal, aprobando primero las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto. Al señalar las remuneraciones de servidores públicos deberán sujetarse a las bases previstas en el artículo 127 de la Constitución. Los órganos del Distrito Federal, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los organismos con autonomía reconocida en su Estatuto de Gobierno, deberán incluir dentro de sus proyectos de presupuestos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone perciban sus servidores públicos. Estas propuestas deberán observar el procedimiento que para la aprobación del presupuesto de egresos del Distrito Federal, establezcan las disposiciones del Estatuto de Gobierno y legales aplicables. Dentro de la Ley de ingresos, no podrán incorporarse montos de endeudamiento superiores a los que haya autorizado previamente el Congreso de la Unión para el financiamiento del presupuesto de egresos del Distrito Federal. La facultad de iniciativa respecto de la Ley de ingresos y el presupuesto de egresos corresponde exclusivamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal. El plazo para su presentación concluye el 30 de noviembre, con excepción de los años en que ocurra la elección ordinaria del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en cuyo caso la fecha límite será el 20 de diciembre. La Asamblea Legislativa formulará anualmente su proyecto de

presupuesto y lo enviará oportunamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para que éste lo incluya en su iniciativa. Serán aplicables a la hacienda pública del Distrito Federal, en lo que no sea incompatible con su naturaleza y su régimen orgánico de gobierno, las disposiciones contenidas en el segundo párrafo del inciso c) de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución. C) Revisar la cuenta pública del año anterior, por conducto de la entidad de fiscalización del Distrito Federal de la Asamblea Legislativa, conforme a los criterios establecidos en la fracción VI del artículo 74, en lo que sean aplicables. La cuenta pública del año anterior deberá ser enviada a la Asamblea Legislativa dentro de los diez primeros días del mes de junio. Este plazo, así como los establecidos para la presentación de las iniciativas de la Ley de ingresos y del proyecto del presupuesto de egresos, solamente podrán ser ampliados cuando se formule una solicitud del Ejecutivo del Distrito Federal suficientemente justificada a juicio de la Asamblea. El titular de la entidad de fiscalización del Distrito Federal será electo por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa por periodos no menores a siete años y deberá contar con experiencia de cinco años en materia de control, auditoría financiera y de responsabilidades. D) Nombrar a quien deba sustituir en caso de falta absoluta, al Jefe de Gobierno del Distrito Federal. E) Expedir las disposiciones legales para organizar la hacienda pública, el presupuesto, la contabilidad y el gasto público del Distrito Federal, y la entidad de fiscalización dotándola de autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones. La función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, imparcialidad y confiabilidad. F) Expedir las disposiciones que garanticen en el Distrito Federal elecciones libres y auténticas, mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; sujetándose a las bases que establezca el Estatuto de Gobierno, las cuales cumplirán los principios y reglas establecidos en los incisos b) al o) de la fracción IV del artículo 116 de la Constitución, para lo cual las referencias que los incisos j) al m) hacen a gobernador, diputados locales y ayuntamientos se asumirán, respectivamente, para Jefe de Gobierno, diputados a la Asamblea Legislativa y Jefes Delegacionales. G) Legislar en materia de

Administración Pública local, su régimen interno y de procedimientos administrativos. H) Legislar en las materias civil y penal; normar el organismo protector de los derechos humanos, participación ciudadana, defensoría de oficio, notariado y registro público de la propiedad y de comercio. I) Normar la protección civil; justicia cívica sobre faltas de policía y buen gobierno; los servicios de seguridad prestados por empresas privadas; la prevención y la readaptación social; la salud y asistencia social; y la previsión social. J) Legislar en materia de planeación del desarrollo; en desarrollo urbano, particularmente en uso del suelo; preservación del medio ambiente y protección ecológica; vivienda; construcciones y edificaciones; vías públicas, tránsito y estacionamientos; adquisiciones y obra pública; y sobre explotación, uso y aprovechamiento de los bienes del patrimonio del Distrito Federal. K) Regular la prestación y la concesión de los servicios públicos; legislar sobre los servicios de transporte urbano, de limpia, turismo y servicios de alojamiento, mercados, rastros y abasto, y cementerios. L) Expedir normas sobre fomento económico y protección al empleo; desarrollo agropecuario; establecimientos mercantiles; protección de animales; espectáculos públicos; fomento cultural cívico y deportivo; y función social educativa en los términos de la fracción VIII, del artículo 3°. de esta Constitución. M) Expedir la Ley Orgánica de los tribunales encargados de la función judicial del fuero común en el Distrito Federal, que incluirá lo relativo a las responsabilidades de los servidores públicos de dichos órganos. N) Expedir la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo para el Distrito Federal. O) Legislar en materia del derecho de acceso a la información y protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados del Distrito Federal, así como en materia de organización y administración de archivos, de conformidad con las leyes generales que expida el Congreso de la Unión, para establecer las bases, principios generales y procedimientos del ejercicio de este derecho. El Distrito Federal contará con un organismo autónomo, imparcial y colegiado responsable de garantizar el derecho de acceso a la información y de protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados, contará con personalidad jurídica y patrimonio propio, así como plena autonomía técnica, de gestión, y capacidad para decidir sobre el

ejercicio de su presupuesto y su organización interna. P) Presentar iniciativas de leyes o decretos en materias relativas al Distrito Federal, ante el Congreso de la Unión. Q) Para establecer en ley los términos y requisitos para que los ciudadanos del Distrito Federal ejerzan el derecho de iniciativa ante la propia Asamblea y R) Las demás que se le confieran expresamente la Constitución.

Por su parte, los artículos 122 incisos A y B de la Constitución Política y del 24 al 35 del Estatuto de Gobierno, enlistan los temas que a la fecha, se encuentran reservados para el ámbito de competencia federal, entre los que podemos encontrar: a) legislar en lo relativo al Distrito Federal, con excepción de las materias expresamente conferidas a la Asamblea Legislativa; b) expedir el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; c) legislar en materia de deuda pública del Distrito Federal; d) iniciar leyes ante el Congreso de la Unión en lo relativo al Distrito Federal; e) proponer al Senado a quien deba sustituir, en caso de remoción, al Jefe de Gobierno del Distrito Federal; f) enviar anualmente al Congreso de la Unión, la propuesta de los montos de endeudamiento necesarios para el financiamiento del presupuesto de egresos del Distrito Federal. Para tal efecto, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal someterá a la consideración del Presidente de la República la propuesta correspondiente, en los términos que disponga la Ley; g) proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de las leyes que expida el Congreso de la Unión respecto del Distrito Federal; h) en caso de remoción del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, corresponde a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, nombrar a propuesta del Presidente de la República, al sustituto que concluya el mandato, en los términos de la Constitución Política y del presente Estatuto; i) la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Presidente de la República o la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, harán del conocimiento del Senado o, en su caso, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la presunta existencia de causas graves que afecten sus relaciones con el Jefe de Gobierno o el orden público en el mismo; j) conocer por conducto de la (SCJN) de las controversias entre la Federación y el Distrito Federal, entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de la

Unión, aquel y cualquiera de las Cámaras de este o en su caso, la Comisión Permanente, sean como órganos federales o del Distrito Federal, un Estado y el Distrito Federal, el Distrito Federal y un Municipio y órganos del Gobierno del Distrito Federal, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales; k) iniciar leyes o decretos ante el Congreso de la Unión por conducto del Presidente de la República en las materias competencia de estas relativas al (GDF); l) el Presidente de la República deberá enviar e informar anualmente al Congreso de la Unión, la propuesta de montos de endeudamiento propuestos, así como de sus ejercicios; m) el Presidente de la República como jefe del ejecutivo federal tiene bajo su responsabilidad como comandante supremo de las fuerzas armadas, la fuerza pública en el Distrito Federal y la designación del Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, el cual es propuesto por el Jefe de Gobierno, el cual puede ser removido libremente por el Presidente de la República o a solicitud del Jefe de Gobierno y n) la designación del Procurador General de Justicia del Distrito Federal, es a propuesta del Jefe de Gobierno, y también es competencia del Presidente de la República aprobarlo o retirarlo.

Función Ejecutiva. Se fundamenta en lo dispuesto en los artículos 122 BASE SEGUNDA, fracciones I y II de la Constitución Política, 52, 67 y 108 del Estatuto de Gobierno, 5 y 12 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal.

El Jefe de Gobierno del Distrito Federal es la persona electa por votación universal, libre, directa y secreta cada seis años o nombrado por el Senado. El Jefe de Gobierno, ejerce las actividades del órgano ejecutivo de carácter local y tiene a su cargo la administración pública de la entidad para lo cual cuenta entre otras, con las siguientes facultades y obligaciones: a) cumplir y ejecutar las leyes relativas al Distrito Federal que expida el Congreso de la Unión en la esfera de competencia del órgano ejecutivo a su cargo o de sus dependencias; b) promulgar, publicar y ejecutar las leyes que expida la Asamblea Legislativa, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia, mediante la expedición de reglamentos, decretos y acuerdos pudiendo hacer observaciones a

las mismas; c) presentar iniciativas de leyes o decretos ante la Asamblea Legislativa; d) formular el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal; e) presentar el informe anual sobre el estado que guarda la Administración Pública Local y los trimestrales respecto a la ejecución y cumplimiento de los presupuestos y programas aprobados para la revisión de la Cuenta Pública del Distrito Federal; f) convocar al plebiscito en los términos del Estatuto; g) formular proyectos de reglamentos sobre leyes del Congreso de la Unión relativas al Distrito Federal y vinculadas con las materias de su competencia sometiéndolos al Presidente de la República; h) nombrar o remover libremente a los servidores públicos dependientes del órgano ejecutivo local, titulares de las unidades, órganos y dependencias de la Administración Pública del Distrito Federal, cuya designación o destitución no estén previstas de manera distinta en la Constitución, las leyes correspondientes o en el propio Estatuto; i) proponer a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y designar a los del Tribunal Contencioso Administrativo del Distrito Federal, sometiendo las mismas a su ratificación por conducto de la ALDF, asimismo proponer al Presidente de la República el nombramiento y en su caso remoción del Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje; j) proponer a la ALDF la remoción de los Jefes Delegacionales por causas graves; k) otorgar patentes de notario público; l) ejercer las funciones de dirección de los servicios de seguridad pública de conformidad al Estatuto de Gobierno y m) las demás que le confiera la Constitución, el Estatuto de Gobierno y las leyes.

El artículo 122 BASE TERCERA, fracciones I y II de la Constitución Política, dispone que el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, determinará los lineamientos generales para la distribución de las atribuciones entre los órganos centrales, desconcentrados y descentralizados, estableciendo los órganos político-administrativos en cada una de las demarcaciones territoriales en que se divida la entidad, fijando criterios, competencias, forma de integración, funcionamiento y formas de relación entre estos.

En lo que respecta al Estatuto de Gobierno, el Título Quinto establece las bases para la organización de la Administración Pública del Distrito Federal y la distribución de atribuciones entre sus órganos, mediante la conformación de órganos centralizados, desconcentrados y paraestatales, cuyas facultades y distribución de competencias en asuntos administrativos, se encuentran conferidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal.

La Administración Pública centralizada del Distrito Federal, dispondrá de la Jefatura de Gobierno, las Secretarías, la Procuraduría General de Justicia, la Oficialía Mayor, la Contraloría General y la Consejería Jurídica y de Asuntos Legales, así como con órganos con autonomía de gestión en cada una de las dieciséis demarcaciones territoriales, cuyos órganos político-administrativos se denominarán genéricamente Delegación del Distrito Federal.

Corresponde a los órganos centrales de la Administración Pública del Distrito Federal: a) planeación del desarrollo de conformidad con los lineamientos contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo y demás disposiciones aplicables; b) formulación y conducción de las políticas generales que le sean asignados en sus respectivos ramos; c) regulación interna en los tópicos referentes a la organización, funciones y procedimientos, tanto de la Administración Pública centralizada como de los órganos desconcentrados; d) la administración de la hacienda pública local; e) adquisición, administración, enajenación de bienes del patrimonio de la Ciudad y la fijación de los lineamientos para su adquisición, uso y destino; f) prestación o concesión de los servicios públicos; g) imposición de sanciones administrativas; h) dirección y coordinación de las unidades administrativas que formen parte del ramo, así como de las entidades paraestatales que le sean sectorizadas y de los órganos desconcentrados; i) determinación de los sistemas de participación y coordinación con las Delegaciones en lo referente a servicios públicos, suministro de agua potable, drenaje, tratamiento de aguas, recolección de desechos en vías primarias, transporte público de pasajeros, protección civil, seguridad pública, educación, salud y abasto; j) administración, planeación y ejecución de obras, servicios

públicos y actos de gobierno que incidan en su conjunto con la Ciudad o tengan impacto en dos o más delegaciones y k) las demás que en relación a su jerarquía, magnitud o especialización le sean propias y, así se determinen por la norma.

Por su parte, en lo referente en los organismos administrativamente desconcentrados, podrán ser constituidos por el Jefe del Gobierno del Distrito Federal para atender de manera eficiente el despacho de los asuntos de su competencia, los cuales se encontrarán jerárquicamente subordinados a él, o bien, a la dependencia que este determine.

La administración pública paraestatal se integra tanto de organismos descentralizados, como por las empresas de participación social mayoritaria y fideicomisos públicos que hayan sido creados por Decreto del Jefe de Gobierno, o por la Ley de la Asamblea Legislativa.

Los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal deberán tener como objeto principal: a) la realización de actividades determinadas como prioritarias por las leyes aplicables; b) la generación de bienes y prestación de servicios públicos o sociales prioritarios para el funcionamiento de la Ciudad y la satisfacción de las necesidades colectivas y c) el auxilio operativo en el ejercicio de funciones tecnológicas o técnicas del Jefe de Gobierno.

Función Judicial. Los órganos representativos del poder judicial en el Distrito Federal, a los que hacen referencia los artículos 122, BASE CUARTA, fracciones I, II, III, IV, V y VI de la Constitución Política y 76 al 85 del Estatuto de Gobierno regulan los procedimientos de selección de Magistrados y procedimiento para cubrir las vacantes del TSJDF, el cual junto con el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal (CJDF), constituyen los órganos que ejercen la función judicial del fuero común en el Distrito Federal.

La Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, dispone en su artículo 1° que la Administración e Impartición de Justicia en el Distrito Federal, le corresponde al TSJDF y demás órganos judiciales que la Ley señale.

El TSJDF funciona en Pleno y en Salas, el Pleno es el órgano máximo del Tribunal, y éste se integra por todos los Magistrados, de los cuales, uno será su Presidente y no formará parte de ninguna Sala.

De conformidad a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, son facultades del Tribunal actuando en Pleno, entre otras: a) elegir, de entre los Magistrados con una antigüedad no menor de tres años al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal; b) conocer de la calificación de la recusación de dos o tres Magistrados integrantes de una Sala; c) resolver sobre las contradicciones de criterios generales sustentados por Magistrados y entre las Salas del Tribunal, sin perjuicio de observarse la jurisprudencia de los Tribunales Federales; d) solicitar al Consejo de la Judicatura, el cambio de adscripción de Jueces y, en su caso, su remoción del cargo por causa justificada; e) expedir los acuerdos generales y demás disposiciones reglamentarias para el adecuado ejercicio de sus propias funciones y de las relativas a la función jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, del Servicio Médico Forense y de los órganos judiciales; f) establecer los mecanismos que permitan evaluar el desempeño jurisdiccional de las Salas y Juzgados, y en caso de existir irregularidades determinar la sanción aplicable; g) ordenar y supervisar que el Instituto de Estudios Judiciales implemente cursos de capacitación y actualización de carácter jurisdiccional de forma permanente; h) recibir y en su caso aceptar o rechazar la renuncia del Presidente del Tribunal; i) determinar la materia de las Salas del Tribunal Superior de Justicia; j) calificar en cada caso las excusas o impedimentos que sus miembros presenten para conocer de determinados asuntos, así como de las recusaciones que se promuevan en contra de los Magistrados, en negocios de la competencia del Pleno; k) proponer al Consejo de la Judicatura, a través de su Presidente las adecuaciones administrativas tendientes a simplificar y eficientar los procedimientos de registro, control y seguimiento de los asuntos que sean tramitados ante los Tribunales del Fuero Común y del Tribunal Superior de Justicia procurando en todo caso, y en la medida de lo posible, la incorporación de los métodos más modernos de

sistematización y computarización para la más expedita, eficaz y transparente administración de justicia; l) conocer de las quejas que se presenten en contra de su Presidente; m) conocer de los asuntos cuya resolución no esté expresamente atribuida a otro órgano judicial; n) resolver las revisiones administrativas a que se refiere el párrafo octavo del artículo 100 de la Constitución Política, en los términos que esta Ley dispone; o) solicitar al Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, la expedición de aquellos acuerdos generales que considere necesarios para asegurar un adecuado ejercicio de la función de los órganos judiciales; p) revisar, modificar y, en su caso, revocar los acuerdos que el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal apruebe, siempre y cuando se refieran a la designación, adscripción, remoción de magistrados o jueces u opinión para designación o ratificación de magistrados o jueces, requiriéndose para ello el voto de cuando menos dos terceras partes de sus integrantes; q) acordar la realización de visitas periódicas a las instituciones del sistema penitenciario del Distrito Federal, para entrevistarse con los individuos sujetos a proceso y conocer las condiciones bajo las cuales se están llevando los procesos penales; r) designar a los Magistrados que integren comisiones substanciadoras de aquellos procesos judiciales que corresponda resolver al Pleno, mismas que podrán dictar los acuerdos de trámite necesarios; s) revisar el cumplimiento de los requisitos que exige el artículo 16 de la Constitución Política, en la resolución que dicte el Juez de la causa, mediante la que determine la procedencia de la orden de aprehensión o comparecencia, cuando se hubiere ejercitado acción penal en contra de un Magistrado, Consejero o Juez en el desempeño de su cargo o con motivo de éste. De resultar procedente se asentará mediante acuerdo y éste se comunicará al Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, por conducto de su Presidente, para que proceda en términos de la fracción VII, del artículo 201 de la Ley; t) conocer de los recursos de apelación que se interponga en las causas que se instauren en contra de un Magistrado, Consejero o Juez y u) las demás que expresamente le confieran la Ley y otras disposiciones aplicables.

1.3. Sistema Electoral

El sistema electoral se puede concebir en dos acepciones: la primera de ellas en un sentido amplio que lo considera como "el conjunto de principios, reglas y procedimientos que racionaliza y traduce la voluntad y decisión del cuerpo electoral en órganos de representación popular, así como los instrumentos de consulta popular relativos a la democracia semidirecta: plebiscito, referéndum e iniciativa popular entre otras;"[18] la segunda, en un sentido restringido lo define como "el conjunto de medios a través de los cuales la voluntad de los ciudadanos se transforman en órganos de gobierno o de representación política."[19]

La diferencia fundamental de las conceptualizaciones mencionadas, radica en que para la primera considera los instrumentos de consulta popular, es decir, la "democracia semidirecta" como parte del sistema; y la segunda sólo reconoce como parte de este a aquellos procedimientos mediante los cuales la voluntad ciudadana se transforma en órganos de gobierno o de representación política.

De acuerdo con Dieter Nohlen: "los sistemas electorales contienen desde el punto de vista técnico, el modo según el cual el elector manifiesta a través del voto el partido o el candidato de su preferencia, y según el cual esos votos se convierten en escaños. Los sistemas electorales regulan ese proceso mediante el establecimiento de la distribución de las circunscripciones y la forma de la candidatura, de los procesos de votación y de los métodos de conversión de votos en escaños."[20]

En suma, el sistema electoral es el mecanismo de selección surgido del pacto social mediante el cual en un ámbito territorial, la voluntad ciudadana expresada mediante el voto, se transforma en órganos de gobierno, de representación política o ciudadana.

---

[18] Democracia, participación ciudadana y justicia electoral, op. cit. p. 172.
[19] VALDÉS Leonardo, Sistemas Electorales y de Partidos, Cuadernos de Divulgación de la Cultura Democrática, (IFE), 5ª edición, 2007, p. 9.
[20] NOHLEN, Dieter. Sistemas Electorales y partidos políticos. Primera reimpresión, Fondo de Cultura Económica, México, 1995. p. 34.

Lo anterior se circunscribe al ubicar el mecanismo de selección en el sistema electoral independientemente de la función a que dé lugar y de las atribuciones, sea esta representativa o participativa, a partir del reconocimiento del procedimiento de elección del representante; este deberá ser reconocido como parte del sistema electoral de la Ciudad.

Condición distinta prevalece respecto de los instrumentos de participación ciudadana a los que se refiere el artículo 4 y Título Cuarto de la Ley de Participación Ciudadana como el plebiscito, referéndum, iniciativa popular, consulta ciudadana, colaboración ciudadana, rendición de cuentas, difusión pública, red de contralorías ciudadanas, audiencia pública, recorridos del Jefe Delegacional, organizaciones ciudadanas y asamblea ciudadana, que se reconocen como medios de participación, evaluación, aprobación, rechazo, presentación de proyectos, consultas, colaboración, revisión y evaluación respecto de las acciones instrumentadas o programadas por el gobierno de la Ciudad.

Para analizar a la democracia, es preciso entender al sistema que crea para canalizar la representación y participación por medio de elecciones. El sistema electoral es el punto medular para que el gobierno sea del pueblo, lo cual es, por antonomasia, la razón de ser de la democracia.

Así, el objetivo del sistema electoral, es el de dar respuesta a la necesidad existente en la democracia electoral, de traducir en representación política y social el principio de la soberanía popular y la voluntad ciudadana expresada en el voto.

No existe una sola forma de transformar votos en puestos legislativos, ejecutivos o de representación ciudadana; existe una multiplicidad de formas que incorporan diferentes variables determinadas por las condiciones históricas de cada Estado y los objetivos que se pretendan en su creación o consolidación.

Un sistema electoral "considera los procedimientos, la proporcionalidad y la pluralidad: los *procedimientos,* en tanto contribuyen a explicar el tipo y condiciones de una contienda electoral; la *proporcionalidad* entre el número de escaños asignados y la cantidad de votos recibidos por determinada fuerza porque muestra los equilibrios que se quieren lograr en el sistema, y la *pluralidad* porque refleja la representación de los principales sectores de la sociedad a través de la asignación de escaños a las minorías, así como el nivel de participación ciudadana. Es por ello que un sistema electoral aporta los elementos necesarios para un adecuado funcionamiento del sistema político."[21]

A nivel nacional el sistema electoral mexicano tiene sus bases en la Constitución Política, en específico, en los artículos 39, 40 y 41, relativos a la soberanía nacional y las formas de gobierno.

En el artículo 39, establece que "La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno".

Por su parte, el artículo 40 dispone que "es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica, federal, compuesta de Estados libres y soberanos, unidos por una federación cuya sede es, precisamente, el Distrito Federal".

Con base en los dos componentes que se encuentran establecidos en los citados artículos (la soberanía emanada del pueblo y la existencia de una federación de 32 estados) es posible comprender lo que menciona el artículo 41:

"El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus

[21] www.iedf.org.mx

regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la Constitución Federal y las particulares de los Estados...”

De manera particular el Estatuto de Gobierno reconoce la calidad de ciudadano del Distrito Federal, a los varones y mujeres que teniendo la calidad de mexicanos reúnan los requisitos del artículo 34 constitucional y posean; además, la calidad de vecinos u originarios de la misma. Al respecto el artículo 20 del ordenamiento citado, reconoce como derechos de los ciudadanos el de votar y ser votados para cargos de representación popular en los términos del propio Estatuto de Gobierno y de las leyes de la materia.

El artículo 22 del Estatuto local, estipula que la participación ciudadana se desarrollará tanto en forma individual como colectiva, para la solución de problemas de interés público y para el intercambio de opiniones sobre los asuntos públicos de la Ciudad en general, para lo que se deberá considerar entre otras, el desarrollo de una cultura democrática de participación ciudadana.

De igual forma el propio artículo 23 del Estatuto de Gobierno, indica como obligaciones de los ciudadanos del Distrito Federal, votar en las elecciones y desempeñar los cargos de representación popular, para el cual hayan sido electos, los que en ningún caso serán gratuitos.

Coincidiendo con Nohelen Dieter, “para el caso del Distrito Federal, es de puntualizarse que los sistemas electorales se clasifican de acuerdo con los principios de representación, los cuales junto con las fórmulas de decisión se relacionan unos con otros como fines y medios.”[22] Cabe mencionar, que tal aseveración sobre el principio de representación, incluye también lo relativo a aquello reconocido en el artículo 5 de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal.

[22] NOHELEN, DIETER, Sistemas Electorales y Partidos Políticos, Fondo de Cultura Económica-UNAM, México 1994, p. 39.

Históricamente el estudio de los sistemas electorales como procedimientos de selección de órganos de gobierno o de representación política, ha considerado en principio dos tipos principales: 1) mayoritarios y 2) de representación proporcional; sin embargo, debido a la forma en que éstos se han modificado, se le ha incorporado la variante mixta, que resulta de combinar la mayoría y la proporcionalidad en un mismo sistema. De esta manera, podemos identificar tres grandes clases de sistemas electorales: 1) mayoritarios, 2) proporcionales y 3) mixtos, los cuales tienen por objetivo la satisfacción fundamental del sistema electoral, consistente en lograr la estabilidad del gobierno, y en general del sistema político, así como la representación de todos los grupos de intereses en que la sociedad está vinculada".[23]

Ahora bien, en esta tesitura se identifican dos versiones de los sistemas de mayoría: simple y absoluta. Las primeras, más viejas y sencillas, son utilizadas primordialmente en países de habla inglesa; en éstos, cada elector tiene un voto y el candidato que consigue el mayor número de votos gana, a pesar de no obtener mayoría absoluta. Los segundos determinan un ganador cuando uno de los candidatos consigue el 50% más 1 de la votación, por lo cual son asociados frecuentemente con más de una vuelta electoral.

La representación proporcional se presenta en sistemas que pretenden convertir con un mayor o menor grado de proporcionalidad, votos en puestos legislativos, de tal suerte que el porcentaje de votos que obtenga un partido se parezca lo más posible al porcentaje de puestos legislativos que se posea en una asamblea.

El nivel de complejidad de los sistemas de representación proporcional es mayor que el de los de la mayoría, puesto que incorporan tres elementos institucionales

[23] Para consulta respecto a la aplicación de los principios de proporcionalidad del Sistema Electoral en el Distrito Federal, se recomienda la lectura de la ponencia del Lic. Héctor Solorio Almazán "Representación proporcional para el caso del Distrito Federal" dictada en el Congreso "Democracia, participación ciudadana y justicia electoral" convocado por el (IEDF) los días 17, 18 y 19 de noviembre de 2009.

que repercuten directamente en el resultado final: las listas de candidatos, las circunscripciones plurinominales y los umbrales de representación.

Los sistemas electorales mixtos combinan en la conformación de una asamblea legislativa, elementos mayoritarios y proporcionales. El resultado de esta mezcla depende de la composición de escaños mayoritarios y proporcionales, y de si el componente proporcional se distribuye con independencia de lo que ocurre en la elección mayoritaria, o intenta corregir las distorsiones que dicha elección produjo en favor de los partidos grandes en contra de los pequeños.

El artículo 122 de la Constitución Política, dispone que la ALDF se integrará con el número de Diputados electos según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una circunscripción plurinominal.

En este mismo sentido, el Título Cuarto del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal (CIPEDF) “De los Cargos de Elección Popular” establece en su artículo 11, que los Diputados a la ALDF, serán electos cada tres años mediante el voto universal, libre, directo y secreto, conforme a los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, en el número y con las condiciones establecidas en el Estatuto de Gobierno y en el propio CIPEDF; en consecuencia, podemos afirmar que la elección de Diputados locales en el Distrito Federal, se realiza al amparo de los sistemas electorales mixtos que combinan elementos mayoritarios y proporcionales.

La elección del Jefe de Gobierno del Distrito Federal se realiza mediante elección universal, libre, directa y secreta, en cumplimiento a lo establecido con el artículo 122 constitucional y el 12 del CIPEDF. Para esta elección, se utiliza el principio de mayoría simple, en el que cada elector tiene un voto, y el candidato que consigue el mayor número gana.

Similar situación la constituyen las elecciones para Jefes Delegacionales, que en términos del artículo 13 del CIPEDF, se eligen a través del voto universal, libre, secreto y directo cada tres años en la misma fecha en que sean electos los Diputados a la Asamblea Legislativa.

Por lo que hace a los procedimientos de selección de representantes e instrumentos de participación ciudadana, no pasa desapercibido el artículo 16 de la Ley de Participación Ciudadana, el cual establece, que el IEDF tendrá a su cargo la coordinación del proceso de elección de los Comités Ciudadanos y de los Consejos de los Pueblos.

De conformidad con los artículos 106 y 107 de la Ley de Participación Ciudadana, la elección de los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos, se realizará cada tres años a través del voto universal, libre, secreto y directo de los ciudadanos que cuenten con credencial para votar con fotografía, cuyo domicilio corresponda a la colonia de que se trate y estén registrados en la lista nominal de electores respectiva; sin embargo, esto últimos, no serán representantes populares, no formarán parte de la administración pública del Distrito Federal, ni tendrán el carácter de servidores públicos, lo que en consecuencia delimita su calidad como “representantes vecinales”.

La naturaleza de los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos, hace que el procedimiento de selección no forme parte del sistema electoral del Distrito Federal, aun así, se da en un marco democrático que la misma norma electoral reconoce, y el IEDF juega un papel fundamental en la organización y selección.

En este sentido, se puntualiza que la definición del concepto de representar es: “sustituir, actuar en lugar de, en nombre de alguien; cuidar los intereses de alguien o algo, evocar simbólicamente a alguien o algo; personificar. En la práctica pueden ser divididos en: a) significados que se refieren a una dimensión de acción: representar es actuar según determinados cánones de comportamiento en

referencia a cuestiones que conciernen a otra persona; b) significados que remiten, en cambio, a una dimensión de reproducción de propiedades y peculiaridades existenciales: representar es poseer ciertas características que reflejan o evocan la de los sujetos u objetos representados."[24] Así "las dos características que definen la noción de representación son por lo tanto: 1) una sustitución en la que alguien habla y actúa en lugar del otro; y 2) sometida a la condición de que el representante actúa en beneficio de los que son representados."[25]

En suma, la democracia es la forma de gobierno y de vida, y lleva implícita la participación responsable y voluntaria de los ciudadanos en la toma de decisiones políticas; es condición indispensable en los regímenes democráticos estructurados.

Para Sartori, "la democracia son los esfuerzos en pos de un objetivo y no experimentos ciegos. La participación ciudadana es un componente de la democracia porque la construcción y consolidación de ésta es una labor que incluye no sólo a las instituciones gubernamentales y a los partidos políticos, sino también a la sociedad civil. Para que una entidad se pueda calificar como democrática, es necesario que cuente con la participación responsable y voluntaria de sus ciudadanos en la toma de decisiones políticas, sin que ésta se circunscriba y agote en las elecciones."[26]

1.4. Sistema de Partidos

El referente fundamental que poseen los instrumentos electorales, son los sistemas de partidos debido a que la participación electoral se da, salvo contadas excepciones, siempre a través de estos. En este sentido, el estudio de los partidos

[24] BOBBIO, Norberto; et.al, Diccionario de Política, México Siglo XXI, 2 Tomos, 6ª Edición, 1998, p. 1180.
[25] SARTORI, G. "Hay una Crisis de Representación", en revista Este país, México, Núm. 65, agosto 1996, p. 2.
[26] MELLADO HERNÁNDEZ, Roberto; Participación Ciudadana Institucionalizada y Gobernabilidad en la Ciudad de México, Plaza y Valdés Editores, 1ª. Edición, México 2001, p. 17.

políticos es relativamente nuevo, pues surgen de manera incipiente hacia la segunda mitad del siglo XIX, consolidándose hasta ya entrado el siglo XX, cuando se privilegiaron como instrumentos de organización política, de comunicación entre gobernados y gobernantes, y como conformación de la representación política de la ciudadanía.

"En las sociedades modernas y democráticas los partidos políticos juegan una serie de relevantes funciones para la sociedad y el Estado. Basta referirse a su importante contribución a los procesos electorales y a la integración de las instituciones de representación y de gobierno, en que los partidos son actores fundamentales; a la socialización política, a la formación de opinión pública, o a la dinámica del sistema de partidos que ofrece a la ciudadanía diversas opciones de proyectos y programas políticos, al tiempo que permite un juego institucional de pesos y contrapesos necesario en la vida democrática."[27]

La teoría indica que un partido político para ser considerado tal, debe perseguir el beneficio de la sociedad de la que forma parte, y no sólo de su élite o de sus miembros, se distingue entonces de lo que es una facción política y queda obligado a elaborar y promover un proyecto político que incluya las aspiraciones de sus miembros.

Es fundamental hacer notar su función como vínculo de comunicación entre los gobernados y los gobernantes, pues pueden articular las opiniones sociales que se encuentran sin ninguna cohesión y orden. En la actualidad, época en la que las democracias son representativas y electorales, los partidos políticos parecieran estar obligados a reconocerse dentro de la contienda político-electoral como actores que luchan por el poder; es decir, como actores en sociedades donde la lucha por el poder está institucionalizada electoralmente.

[27] CÁRDENAS GRACIA, Jaime, Partidos Políticos y Democracia, (IFE), Cuadernos de Divulgación de la Cultura Democrática 8; Consultado en: http://bibliotecadigital.conevyt.org.mx/colecciones/ciudadania/partidos_politicos_y_dem

Para Leonardo Valdés los sistemas de partido “son el espacio de competencia leal entre los partidos, orientado hacia la obtención y el ejercicio del poder político”[28] y se convierten en una cámara de compensación de intereses y proyectos políticos que permite y norma la competencia, haciendo posible el ejercicio legítimo del gobierno.

Una primera clasificación de los sistemas de partidos, es la referente al criterio cuantitativo, el cual a su vez se subclasifica en tres: 1) aquellos en los que existe solamente un partido, conocidos como unipartidistas; 2) en los que dos partidos, con cierta frecuencia se alternan en el ejercicio gubernativo, también conocidos como bipartidistas, y 3) se ubican aquellos en los que coexiste una cantidad mayor a dos partidos políticos, llamados pluripartidistas.

La segunda clasificación, se basa en la importancia que tienen los partidos políticos por el número de elecciones ganadas y constituidos en protagonistas del sistema de partidos; para el efecto son cuatro las subclasificaciones de los sistemas: 1) de partido predominante; 2) bipartidista; 3) de pluralismo moderado, y 4) de pluralismo polarizado. El primero es aquel en el que un sólo partido es importante, en un marco de elecciones libres y creíbles, y está rodeado por otros partidos que no poseen capacidad de coalición ni despliegan tácticas intimidatorias. El sistema bipartidista es aquel en el que, del conjunto de organizaciones participantes, únicamente sobresalen dos, y entre éstas se produce con frecuencia la alternancia en el poder y en donde la existencia de partidos menores no ha puesto en entredicho el alto nivel de competitividad ni la alternancia en el poder de los dos partidos importantes. El pluralismo moderado es aquel que da lugar a eventuales coaliciones o alianzas en los procesos y finalmente, el pluralismo polarizado, es aquel que cancela la posibilidad de dichas alianzas o coaliciones por diferendos conceptuales irreconciliables.

[28] VALDÉS, Leonardo, Sistemas Electorales y de Partidos, (IFE), Cuadernos de Divulgación de la Cultura Democrática 7; Consultado en: http://bibliotecadigital.conevyt.org.mx/colecciones/ciudadania/partidos_politicos_y_dem

Con base a lo anterior, se puntualiza que la Constitución Política establece en su artículo 41, que el pueblo ejerce su soberanía a través de Poderes de la Unión y que la renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas; asimismo, otorga a los partidos políticos nacionales el carácter de entidades de interés público y el derecho a participar en esas elecciones.

En el caso del Distrito Federal, el Estatuto de Gobierno señala en su artículo 120 que la renovación de las autoridades legislativa y ejecutiva de carácter local, así como de los titulares de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales, se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas y que la jornada electoral se llevará a cabo el primer domingo de julio del año que corresponda. Asimismo, el artículo 121 del ordenamiento citado, establece que podrán participar tanto los partidos políticos con registro nacional, como aquellos con registro local del Distrito Federal.

Cabe mencionar que la reforma al Código Electoral del Distrito Federal publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 10 de enero de 2008, contemplaba que en el Distrito Federal se reconoce la existencia tanto de partidos políticos nacionales como de partidos políticos locales y ambos tienen el derecho de participar en las elecciones locales.

Dicho principio se ratifica en el CIPEDF en su artículo 190, el cual dispone que los partidos políticos con registro nacional y con registro local en el Distrito Federal, tienen el derecho exclusivo para solicitar el registro de candidatos a cargos locales de elección popular, en los términos y condiciones establecidas en dicho ordenamiento.

En este sentido y de conformidad a lo publicado por el IEDF en su página electrónica[29] al mes de febrero de 2014, existen en el Distrito Federal siete institutos políticos con registro nacional con ese derecho exclusivo, a saber: Acción Nacional; Revolucionario Institucional; De la Revolución Democrática; Del Trabajo; Verde Ecologista de México; Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza.

Es importante mencionar que los partidos políticos mencionados, cuentan con diversas prerrogativas y obligaciones que en el ámbito local se encuentran reguladas en el Capítulo III del CIPEDF, las cuales tienen incidencia en la función de fiscalización que desarrolla la autoridad electoral y que a saber son las siguientes:

En cuanto a sus prerrogativas: a) participar, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política, en el Estatuto de Gobierno y en el Código, en el proceso electoral; b) gozar de las garantías que el Código les otorga para realizar sus actividades; c) recibir el financiamiento público y privado para el desarrollo de sus actividades; d) ser propietarios, poseedores o administradores sólo de los bienes muebles o inmuebles y capitales que sean necesarios para el cumplimiento directo e inmediato de sus fines y e) usar en forma gratuita bienes inmuebles de uso común y de propiedad pública para la realización de actividades relacionadas con sus fines.

En cuanto a obligaciones: a) conducir sus actividades dentro de los cauces legales, así como de sus normas internas y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático; b) editar por lo menos una publicación mensual de divulgación; c) presentar los informes a que se encuentre obligado en materia de fiscalización, y permitir la práctica de auditorías y verificaciones que ordene la autoridad electoral, así como entregar la documentación que la UTEF les solicite respecto a sus ingresos y egresos; d) utilizar las prerrogativas y aplicar el financiamiento público de acuerdo a las disposiciones del Código; e) destinar al menos el 3% del financiamiento público

[29] www.iedf.org.mx, Partidos Políticos.

para actividades ordinarias permanentes que se les asigne, para la generación y fortalecimiento de liderazgos femeninos, así como, al menos el 2% para liderazgos juveniles; f) aplicar los principios de transparencia en la asignación de salarios de los miembros de la dirigencia; g) llevar un inventario detallado de sus bienes muebles e inmuebles y h) garantizar a las personas el acceso a la información que posean, administren o generen, en los términos establecidos en la Ley de Transparencia, así como, sin que medie petición, poner a disposición del público en sus oficinas, medios de difusión y en su sitio de internet, en forma tal que se facilite su uso y comprensión por las personas y que permita asegurar su calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad, la información actualizada de los temas, documentos y actos.

En suma, para el caso del Distrito Federal bajo el criterio cuantitativo del sistema de partidos, podemos mencionar que es pluripartidista al encontrarse constituido a la fecha por siete partidos políticos.

Asimismo, por lo que hace a la clasificación por importancia en el sistema de partidos políticos, en primer lugar habría que recordar que en el Distrito Federal fue hasta 1988 que los capitalinos elegimos por primera vez una Asamblea de Representantes que posteriormente fue legislativa e integrada por Diputados y que fue igualmente a partir de 1997 y en el año 2000, respectivamente, que se celebraron procesos electorales para Jefe de Gobierno y los titulares de las demarcaciones.

No obstante lo anterior, la experiencia de los procesos democráticos desarrollados en ese periodo en el Distrito Federal, por su propia y especial naturaleza y dada su reciente instrumentación, resultan poco confiables para poder realizar una clasificación de sistemas de partidos lo debidamente seria y diferenciada, ya que incluso esta puede variar en razón del tipo de elección a la que nos refiramos, sea esta de Jefe de Gobierno, Diputado de la Asamblea Legislativa o Jefe Delegacional.

Dada la experiencia acumulada en los procesos electorales organizados en la temporalidad mencionada y en los diversos procesos de elección realizados, solamente puede mencionarse que en el Distrito Federal han convergido en mayor o menor proporción todas las variantes mencionadas, ya que en esencia, salvo la elección del Jefe de Gobierno, en cada uno de los Distritos Electorales y demarcaciones territoriales, la contienda electoral ha obedecido a condiciones y resultados variables.

Durante los procesos electorales, los partidos políticos en el ámbito de sus derechos y obligaciones, han formalizado frentes, coaliciones y candidaturas comunes para alcanzar objetivos políticos y sociales compartidos de índole electoral, que en el ámbito local se encuentran fundamentados en el Capítulo V del CIPEDF, el cual para celebrar un convenio común dispone lo siguiente:

Para constituir un frente deberá celebrarse un convenio en el que se hará constar: a) los partidos políticos que lo integran y en su caso, las agrupaciones políticas locales; b) su duración; c) las causas que lo motiven y d) los propósitos que persiguen.

Para que el registro de una coalición sea formalizado, los partidos políticos que pretendan coaligarse deberán: acreditar que la coalición sea aprobada por el órgano competente de cada uno de los partidos políticos participantes y presentar una plataforma electoral de la coalición, aprobada en conjunto por cada uno de los órganos directivos de los partidos coaligados.

Aunado a lo anterior, la coalición para garantizar el cumplimiento de dicha Plataforma por parte de los candidatos postulados por la coalición, deberán presentar: a) un programa de gobierno, en caso del candidato postulado para la elección de Jefe de Gobierno del Distrito Federal; b) un programa de gobierno, en caso del o los candidatos postulados para la elección de Jefes Delegacionales; c) una agenda legislativa, en el caso del o los candidatos postulados para la elección de los Diputados a la (ALDF); y d) comprobar, en el momento oportuno para el

registro de candidatos, que los órganos directivos respectivos de cada uno de los partidos coaligados aprobaron la postulación y el registro de los candidatos de la coalición.

1.5. Sociedad civil, medios de comunicación y grupos de interés

El pilar de todo sistema político y más aún de uno democrático, se funda en la capacidad de participación de la sociedad civil en las decisiones de gobierno. Esta capacidad para participar en las decisiones tiene como base los principios de libertad, pluralidad y respeto, en donde a pesar de la existencia de visiones distintas sea posible establecer un diálogo y aún en el desacuerdo poder construir un espíritu de comunidad.

La “democracia” y la “sociedad civil” son términos de reciente creación en la política mexicana; por extraño que parezca, durante décadas, esos conceptos fueron prácticamente inoperantes o, en el mejor de los casos, relegados a segundo plano en la política nacional. En lugar de la democracia durante el régimen de la revolución, se privilegió la ideología que sustentaba al Estado autoritario, misma que descansaba en tres pilares: la institución presidencial, el partido oficial y la élite en el poder. Para el caso de la sociedad civil, lo que permeaba, era una férrea estructura corporativa que vinculó a los sectores sociales organizados en grandes confederaciones (obrera, campesina y popular) controlados desde el vértice de la pirámide.

“Esas estructuras le dieron estabilidad política y paz social al país durante muchos años; sin embargo, esos puntales del viejo sistema poco a poco experimentaron un proceso de desgaste, en virtud de que la política y la sociedad civil en México se abrieron al pluralismo y a la democratización. Hoy nadie está en posibilidades de ejercer un dominio hegemónico sobre el conjunto social del país.”[30]

[30] Revista de Administración Pública 122; Volumen XL No. 2 mayo-agosto 2010; Consultado en: www.inap.org.mx/portal/images/REVISTA_A_P/rap122.pdf

Derivado de lo anterior, se puede establecer que “una sociedad en la que sus ciudadanos, además de elegir a sus autoridades, tienen la posibilidad de participar en las decisiones públicas, está más cerca del sentido de la democracia como gobierno del pueblo.”[31]

El derecho de la sociedad civil a participar e incidir en su entorno no ha sido en la historia una prebenda, sino un derecho conquistado, peleado y construido, como el que se ha forjado con la participación y el ejercicio libre de la ciudadanía, así desde la creación del Consejo Consultivo del Distrito Federal en 1828, se ha vivido una constante lucha social y política por avanzar en el desarrollo de la autonomía y el reconocimiento de sus derechos políticos.[32]

En la época moderna fue hasta 1978 con la publicación de Ley Orgánica del Distrito Federal que se creó por primera vez un espacio para la representación y colaboración vecinal; en 1995 se publicó la primera Ley de Participación Ciudadana aprobada por la Asamblea de Representantes, en ella se convocó a la elección de Consejeros Ciudadanos; para 1998 la ALDF I Legislatura aprobó la Ley de Participación Ciudadana creando una nueva figura de representación ciudadana que recaería en los Comités Vecinales por Unidades Territoriales para procurar un mayor acercamiento con la sociedad; en 1999, se eligieron los Comités Vecinales, que aunque contaban con una mayor legitimidad que los consejeros ciudadanos al hacer más plural y territorial su conformación, muy poca gente conoció de su existencia, además, ambas elecciones representaron un gasto económico excesivo y requirió de una estructura electoral que sólo los partidos políticos pudieron cubrir.

No obstante, estos esfuerzos resultaron infructuosos debido al fracaso del modelo de los Consejeros Ciudadanos y los Comités Vecinales provocado por el desinterés de la sociedad ante la poca confianza brindada a estos representantes

[31] Manual de Capacitación para Integrantes de los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos. Consultado en: www.iedf.org.mx
[32] Para un estudio puntual del proceso histórico de la participación ciudadana, consultar MELLADO HERNÁNDEZ, Roberto, op. cit. pp.31-87.

vecinales que crearon una gran expectativa que no correspondió a sus resultados, así como el abstencionismo en su elección que también originó una falta de legitimidad progresiva.

Los Consejeros Ciudadanos y los Comités Vecinales debieron elegirse nuevamente en el 2002, pero su renovación debió esperar hasta el 2004 con la emisión de la Ley de Participación Ciudadana publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 17 de mayo de ese año; sin embargo, una limitante se presentaría, el pleno de la ALDF decidió posponer los comicios y transferirlos hasta el 2005 y así sucesivamente.

En el 2008 la (SCJN) declaró inconstitucional la manera en cómo se conformaban los Comités Vecinales, y esto obligó a buscar entre todas las fuerzas políticas, una nueva manera de integrar una la figura de los Comités Ciudadanos, siendo hasta el año 2010, cuando con fundamento en Ley de Participación Ciudadana publicada ese mismo año, el IEDF emitió la convocatoria para la elección de los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos de la Ciudad de México.

A partir de estas modificaciones, el artículo 2 de la Ley de Participación Ciudadana, concibe como el derecho de los ciudadanos y habitantes a intervenir y participar, individual o colectivamente, en las decisiones públicas, en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas, programas y actos de gobierno, lo cual busca contribuir a la solución de problemas de interés general y al mejoramiento de las normas que regulan las relaciones en la comunidad para el desarrollo de una cultura democrática de la participación ciudadana, así como su capacitación en el proceso de una mejor gobernanza de la Ciudad Capital.

En este sentido, los órganos de representación ciudadana son una instancia a través de la cual se expresan de manera organizada los intereses de los habitantes de la Ciudad, ya sea en el ámbito de la manzana, de la colonia, Unidad Habitacional, Barrio, del pueblo originario o de la delegación, los cuales junto con los instrumentos de participación ciudadana, son herramientas que favorecen a la

organización de la sociedad civil para relacionarse entre sí y con los distintos órganos de gobierno del Distrito Federal, como una vía clara y definida para tener voz y voto en las decisiones públicas con el fin primordial de fortalecer el desarrollo de una cultura ciudadana.

Los órganos de representación ciudadana reconocidos en la normativa electoral en el Distrito Federal son cuatro, a saber:

1. Comité Ciudadano. De conformidad a lo dispuesto en el artículo 91 de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, es el órgano de representación ciudadana de la colonia. A la fecha existen 1,694 Comités Ciudadanos y 40 consejos de los pueblos en el Distrito Federal.

2. Consejo del Pueblo. El artículo 141 de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal estipula que este es el órgano de representación ciudadana en los pueblos originarios en los que se mantiene la figura de autoridad tradicional. A la fecha existen 40 Consejos de los Pueblos en el Distrito Federal.

3. Consejo Ciudadano Delegacional. Es la instancia de carácter consultivo y de coordinación de los comités ciudadanos y las organizaciones ciudadanas con las autoridades de cada una de las 16 demarcaciones territoriales en que se divide el Distrito Federal.

4. Representante de manzana. Es el ciudadano que tiene a su cargo la representación de los habitantes de una de las áreas territoriales mínimas en que se divide su colonia.

En este orden de ideas, sería de esperarse que la expresión organizada de la sociedad civil en la Ciudad potenciara la participación, construyendo un circuito con temas, sectores y vínculos, que permitieran enriquecer la decisión y la perspectiva de las comunidades; sin embargo, este no es un proceso que sólo por la existencia de la norma emitida y estructura dada por el Legislador local se

pueda dar como materializada. Si bien es cierto que por un amplio periodo de tiempo la construcción de un mecanismo de participación ciudadana quedó en el letargo, también lo es que tanto en los procedimientos inicialmente instaurados como los desplegados hasta la fecha, la participación ciudadana ha sido limitada y hasta escasa.[33]

Es importante señalar que si el objetivo de la participación ciudadana es contribuir en la solución de problemas de interés general y al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad, es una condición ineludible que la ciudadanía deba estar dispuesta a participar, y a hacerlo de acuerdo con ciertos principios que son la base de una convivencia en la que las personas puedan desarrollar libremente sus aptitudes en el marco de respeto de los derechos y cumplimiento de las obligaciones, donde las autoridades y los habitantes tengan una comunicación fluida que promueva la participación en la búsqueda de soluciones a los problemas que afectan al conjunto social.

Aun cuando en el proceso de 2010 se eligieron 1,640 Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos, es de reconocerse que actualmente ha existido poca participación ciudadana en el proceso, falta de capacitación respecto de las funciones y atribuciones de los ciudadanos electos, descoordinación gubernamental, así como lagunas legales que ponen en riesgo la efectividad de este lazo conductor entre la ciudadanía y sus autoridades en el Distrito Federal.

Aunado a lo mencionado, la falta de capacitación e información se patentizó con la mínima participación vecinal obtenida en los dos últimos procesos de consulta convocados por el IEDF para determinar los proyectos a los que las autoridades

---

[33] Tal aseveración encuentra su fundamento en el análisis de la participación social en los procesos de elección de Comités Vecinales de 1999, en donde la votación total fue de 573 mil 251 ciudadanos, cantidad esta que a casi diez años después sólo fue incrementada por un poco más de 80 mil votos ciudadanos en las elecciones de 2010 para Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos de la Ciudad de México. Reporta IEDF incremento en número de votantes en esta elección vecinal. Consultado en: www.iedf.org.mx

delegacionales aplicarían 706 millones 547 mil 254 pesos del Presupuesto Participativo en marzo y noviembre de 2011, y en donde el índice de participación en el primero fue del "2.5% del padrón nominal del Distrito Federal"[34] y en el segundo de 144,277 personas, de un universo de 6.5 millones de ciudadanos que conformaron el padrón electoral a la fecha en que se desarrolló el proceso ciudadano.[35]

En el 2013 se llevó a cabo un doble ejercicio de participación ciudadana; por un lado la renovación de los Comités Vecinales y los Consejos de los Pueblos y por otro, la Consulta Ciudadana sobre el Presupuesto Participativo 2014, la cual tuvo verificativo el primero de septiembre de dicho año; adicionalmente, es de destacarse que el Consejo General del IEDF, aprobó mediante el acuerdo identificado con la clave ACU-38-13 del año 2013, que se realizaría mediante un sistema de votación y opinión electrónico de internet.

El sistema implementado en los procesos de participación ciudadana, permitió el incremento de la participación de los ciudadanos en este ejercicio democrático. La Comisión de Participación Ciudadana (CPC) del (IEDF) en su décima sexta Sesión Ordinaria presidida por los consejeros electorales Mauricio Rodríguez Alonso, Noemí Luján Ponce, Gustavo Ernesto Figueroa Cuevas, dio a conocer los resultados del cómputo total de la Elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2013-2016, así como la validación de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2014, que concluyó el primero de septiembre con el cierre del 100% de las Mesas Receptoras de Votación, instaladas en las 1,793 colonias y pueblos originarios.

El cómputo total de la votación se llevó a cabo del 2 al 4 de septiembre y se recibieron 880,759 votos para la elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2013-2016, lo que representa el 12% de participación de los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal, con corte al 15 de junio de 2013, que

[34] Periódico La Jornada, 28 de marzo del 2011; pp .34 y 44.
[35] Periódico Reforma, 18 de noviembre del 2011 Sección Ciudad p. 2; Nota Óscar del Valle.

sirvió de base para la celebración de la elección y cuya cifra asciende a 7´337,239 electores.

A través del Sistema Electrónico por Internet se recibieron un total de 137,187 votos y opiniones, es decir, 1.86% del total de la Lista Nominal. Se advierte que de la votación total emitida, el 84.43% de los ciudadanos que decidieron ejercer su derecho a votar y opinar, lo hicieron de manera tradicional, a través de las Mesas Receptoras instaladas el primero de septiembre.

Se expidieron 1,778 constancias, correspondientes a igual número de colonias en las que se celebró la elección, ya que en 15 colonias, al no presentarse ninguna solicitud de registro de fórmula, no hubo lugar a la elección de mérito.

Respecto de la Consulta Ciudadana para el Presupuesto Participativo 2014, la validación se llevó a cabo entre el 2 y el 6 de septiembre. De acuerdo con los resultados, se recibieron un total de 877,382 opiniones, que representan el 11.96% de los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal. En este caso, el 84.37% de los ciudadanos que participaron en la Consulta, lo hicieron emitiendo su opinión de manera tradicional.

El rubro general que obtuvo el mayor número de proyectos ganadores fue el de Obras y Servicios, en tanto el que se refiere a la Promoción de actividades recreativas, deportivas y culturales, fue el que tuvo el menor número de opiniones.

En total se expidieron 1,787 constancias de validación que corresponden a igual número de colonias en las que se celebró la Consulta Ciudadana, ya que en este caso, existieron seis colonias en las que no se presentaron propuestas de proyectos susceptibles de someterse a la opinión de los ciudadanos.

Lo anterior, obliga a complementar y perfeccionar la transición democrática participativa iniciada, de tal forma que en el marco de una nueva cultura política, en un momento fundamental de nuestra historia política donde ante todo existe la desconfianza, el descrédito y la distancia que ponen los ciudadanos a las

instituciones políticas, se abran alternativas reales de participación, de toma de decisiones y de circuitos de expresión ciudadana que refresquen y corrijan nuestro propio sistema político, de tal forma que se logre ese sano equilibrio entre sociedad civil y gobierno, materializándose así el principio del gobierno del pueblo y para el pueblo, base primordial de la constitución del Estado democrático en el Distrito Federal.

Ahora bien, por lo que hace a la existencia de instrumentos de comunicación entre la sociedad y la autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es de señalar que hay una creciente convicción de que la transparencia y la rendición de cuentas son actividades esenciales para que las organizaciones ganen confianza y legitimidad ante otros actores sociales, con los cuales se relaciona dentro de su propio campo de trabajo. Esta creencia tiene varios orígenes, uno de ellos conceptual, pues ambos aspectos pertenecen a un entramado de valores que juegan en la noción de democracia. Otra motivación para ocuparse del asunto, es una cuestión estratégica referente a cómo fortalecer la relación de las organizaciones frente a sus públicos.

Es el artículo 6 constitucional que incluye tanto la vertiente democrática como la del derecho a la comunicación entre gobernados y gobernantes; para el Distrito Federal esta actividad se encuentra regulada por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (Ley de Transparencia), Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, (Ley de Protección de Datos), Ley de Archivos del Distrito Federal (Ley de Archivos) y Lineamientos para la Protección de Datos Personales.

En este contexto normativo la verificación de su cumplimiento, se realiza por conducto del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (INFODF), órgano autónomo encargado de dirigir y vigilar su cumplimiento transparentando el ejercicio de la función pública, garantizando el efectivo acceso de toda persona a la información pública en posesión de los órganos locales y

autónomos, así como de cualquier entidad, organismo u organización que reciba recursos públicos del Distrito Federal.

Esta garantía de acceso a la información resulta primordial en todo Estado democrático, ya que ningún gobierno por democrático que sea, puede tener el monopolio de la representación de la sociedad y, por tanto, de la información. Así en el Distrito Federal se promueve una cultura de transparencia y rendición de cuentas basada en los principios de certeza, legalidad, independencia, máxima publicidad, imparcialidad y objetividad, y tiene por objetivos los siguientes: 1. transformar la concepción y práctica del servicio público; 2. someter la gestión gubernamental al escrutinio cotidiano de la sociedad y 3. divulgar el derecho de acceso a la información y promover su ejercicio.[36]

En el Distrito Federal se reconoce el derecho de acceso a la información pública y se concibe como la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a la información generada, administrada o en poder de los entes públicos locales, los cuales tienen la obligación de facilitar su participación en la vida política, económica, social y cultural del Distrito Federal.

Así en cuanto a la historia moderna de la transparencia en el Distrito Federal, cabe señalar que a partir de la publicación de Ley de Transparencia, en diciembre de 2003, se dio inicio a un largo camino de controversias y sucesivas reformas legislativas, en consecuencia su aplicación e impacto en el ámbito organizacional, cultural y político de la ciudad ha generado altibajos en su instrumentación, tal y como se demuestra en la siguiente gráfica:

[36] Ventanilla Única de Transparencia del Gobierno del Distrito Federal. www.transparencia 2008.df.gob.mx

Grafica 1:



FUENTE: INFODF; http//www.infodf.org.mx/web

De conformidad a lo dispuesto en Ley de Transparencia para garantizar el ejercicio del derecho ciudadano a la información los entes gubernamentales del Distrito Federal, deberán además de difundir el marco normativo, desplegar las siguientes acciones: a) proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información pública gubernamental, mediante procedimientos sencillos, expeditos y gratuitos; b) optimizar el nivel de participación comunitaria en la toma pública de decisiones, y en la evaluación de las políticas públicas; c) garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del (GDF), transparentando el ejercicio de la función pública, a través de un flujo de información oportuno, verificable, inteligible, relevante e integral; d) favorecer la rendición de cuentas, de manera que se pueda valorar el desempeño de los sujetos obligados; e) mejorar la organización, clasificación y manejo de documentos en posesión de los entes públicos; f) contribuir a la democratización y plena vigencia del Estado de Derecho y g) contribuir con la transparencia y la rendición de cuentas de los Entes Públicos a través de la generación y publicación de información sobre sus indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos públicos de manera completa, veraz, oportuna y comprensible.

El artículo 14 de la Ley de Transparencia establece, que todos los entes públicos al inicio de cada año deberán mantener actualizada de forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de internet, de acuerdo con sus funciones, según corresponda, la información respecto de los temas, documentos y políticas que a continuación se detallan: a) el marco normativo aplicable al ente público, en la que deberá incluirse la Gaceta Oficial, leyes, códigos, reglamentos, decretos de creación, reglas de procedimiento, manuales administrativos, políticas emitidas aplicables al ámbito de su competencia; b) su estructura orgánica en un formato que permita vincular por cada eslabón de la estructura, las atribuciones y responsabilidades que le corresponden de conformidad con las disposiciones aplicables; c) la relativa a sus funciones, objetivos y actividades relevantes que deberá incluir los indicadores de gestión; d) el directorio de servidores públicos, desde el nivel de jefe de departamento o equivalente hasta el titular del ente público, con nombre, fotografía, domicilio oficial, número telefónico oficial y en su caso dirección electrónica oficial; e) el perfil de los puestos de los servidores públicos y el currículum de quienes ocupan esos puestos; f) remuneración mensual bruta y neta de todos los servidores públicos por sueldos o por honorarios, incluyendo todas las percepciones, prestaciones y sistemas de compensación, en un formato que permita vincular a cada servidor público con su remuneración; g) una lista con el importe por concepto de viáticos, gastos de representación y alimentación, donde se vinculen estos gastos mensuales al servidor público que los ejecutó con motivo de su encargo o comisión; h) la relación de sus bienes y el monto a que ascienden los mismos, siempre que su valor sea superior a trescientos cincuenta veces el salario mínimo vigente del Distrito Federal; i) para los últimos tres ejercicios fiscales, la relativa al presupuesto asignado en lo general y por programas, así como los informes trimestrales sobre su ejecución. Esta información incluirá: 1) los ingresos recibidos por cualquier concepto, incluidos los donativos, señalando el nombre de los responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos; 2) los montos destinados a gastos relativos a Comunicación Social y 3) el presupuesto de egresos y método para su estimación, incluida toda la información relativa a los

tratamientos fiscales diferenciados o preferenciales; j) las bases de cálculo de los ingresos; k) los informes de cuenta pública; l) aplicación de fondos auxiliares especiales y el origen de los ingresos; m) estados financieros y balances generales, cuando así proceda; n) la calendarización de las reuniones públicas de los diversos consejos, órganos colegiados, gabinetes, sesiones plenarias, comisiones y sesiones de trabajo a que se convoquen. Se deberán difundir las correspondientes minutas o actas de dichas reuniones y sesiones en los términos del artículo 37 de la Ley de transparencia local; o) nombre, domicilio oficial y dirección electrónica, de los servidores públicos encargados del Comité de Transparencia y de la Oficina de Información Pública; p) los instrumentos archivísticos y documentales, de conformidad con lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables; q) la relativa a sus actividades específicas más relevantes. En su difusión se deberá incluir un índice que detalle los contenidos de la información sobre la gestión de las actividades que caracterizan sus principales objetivos institucionales.

Por otra parte con respecto a las auditorías y revisiones, un informe que contenga lo siguiente: 1) los resultados de todo tipo de auditorías concluidas, hechas al ejercicio presupuestal de cada uno de los entes públicos; 2) el número y tipo de auditorías a realizar en el ejercicio presupuestario respectivo, así como el órgano que lo realizó; 3) número total de observaciones determinadas en los resultados de auditoría por cada rubro sujeto a revisión y las sanciones o medidas correctivas impuestas; 4) respecto del seguimiento de los resultados de auditorías, el total de las aclaraciones efectuadas por el ente público; 5) los dictámenes de cuenta pública así como los estados financieros y demás información que los órganos de fiscalización superior utilizan para emitir dichos dictámenes; 6) respecto de los convenios y contratos celebrados por el ente público, un listado que relacione el número de contrato, su fecha de celebración, el nombre o razón social del proveedor, objeto, el monto del valor total de la contratación, el plazo de ejecución, los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, estudios de impacto urbano e impacto urbano-ambiental; 7) respecto de las concesiones,

licencias, permisos y autorizaciones, se deberá publicar su objeto, el nombre o razón social del titular, vigencia, el tipo, así como si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos; 8) los informes que debe rendir el ente público, la unidad responsable de los mismos, el fundamento legal que obliga a su generación, así como su calendario de publicación; 9) los servicios y programas que ofrecen, incluyendo información sobre la población, objetivo y destino, así como los trámites, tiempos de respuesta, requisitos y formatos para acceder a los mismos; 10) sobre los programas de apoyo o subsidio deberá difundirse el diseño, ejecución, montos asignados y criterios de acceso, así como los padrones de las personas beneficiarias; 11) los montos, criterios, convocatorias y listado de personas a quienes, por cualquier motivo, se les entreguen o permita usar recursos públicos. Asimismo, cuando la normatividad interna lo establezca, los informes que dichas personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos; 12) la relacionada con los programas y centros destinados a la práctica de actividad física, el ejercicio y el deporte, incluyendo sus direcciones, horarios y modalidades; 13) los programas operativos anuales y/o de trabajo de cada uno de los entes públicos; 14) informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado financiero; 15) Cuenta Pública y 16) los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluido el expediente respectivo. En el caso que contengan información reservada o confidencial, sobre ellos se difundirá una versión pública que deberá contener: a) de licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida: la convocatoria o invitación emitida, los participantes o invitados, el nombre del ganador y las razones que lo justifican, la unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución, la fecha del contrato, su monto y plazo de entrega o de ejecución de los servicios u obras licitadas y en su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación, precisando en qué consisten y su fecha de firma; b) de las adjudicaciones directas: los motivos y fundamentos legales aplicados, en su caso, las cotizaciones consideradas, el nombre de la persona adjudicada, la unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución, la fecha del contrato, su monto y

plazo de entrega o de ejecución de los servicios u obra y en su caso, los convenios modificatorios que recaigan a la contratación; c) esta difusión deberá incluir el padrón de proveedores y contratistas así como los informes de avance sobre las obras o servicios contratados; d) los entes públicos deberán señalar en sus páginas de internet los rubros de la presente disposición que no le son aplicables; e) las Oficinas de Información Pública de los entes públicos deberán tener a disposición de las personas interesadas equipo de cómputo, a fin de que éstas puedan obtener la información, de manera directa o mediante impresiones, las cuáles se expedirán previo pago establecido en el Código Financiero. Del mismo modo, deberán apoyar a los usuarios que lo requieran y proveer todo tipo de asistencia respecto de los trámites y servicios que presten; f) cualquier persona podrá denunciar ante el Instituto, violaciones a las disposiciones contenidas en este precepto. En este caso, se procederá a revisar la denuncia para que, de considerarla procedente, en un plazo no mayor a quince días hábiles, emita una resolución en la que ordene al ente público a tomar las medidas que resulten necesarias para garantizar la publicidad de la información y g) la información a que se refiere esta disposición estará disponible de tal forma que facilite su uso y comprensión por las personas, y que permita asegurar su calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad.

Es importante mencionar que de conformidad al Padrón de Sujetos Obligados al cumplimiento de la Ley de Transparencia y la Ley de Protección de Datos Personales publicado por el INFODF en la gaceta oficial del Distrito Federal de septiembre de 2013, este se encuentra integrado por 122 entes obligados distribuidos de la siguiente manera: 22 correspondientes a la Administración Pública Centralizada; 16 a Delegaciones; 65 a Órganos Desconcentrados, Paraestatales, 3 a Órganos Legislativos; 2 a Órganos Judiciales; 7 Órganos Autónomos y 7 a Partidos Políticos.[37]

[37] Para su consulta ver:
http://www.infodf.org.mx/iaipdf/doctos/pdf/acuerdos/2013/acuerdo0280so210313.pdf

Ahora bien, los siete partidos políticos nacionales que cuentan con representación en el Distrito Federal, obtuvieron un promedio de 86.6 puntos en el Índice Global del Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia (IGcot) en sus portales de internet, lo que representa un incremento de 7.8 por ciento con respecto a la primera evaluación de 2013 cuando obtuvieron 78.8 puntos.[38]

Adicionalmente a estas obligaciones, para las autoridades electorales del Distrito Federal se consideran las dispuestas de manera específica en el artículo 19 de la Ley en la materia, tales como la publicidad de: 1) los informes que presenten los partidos, asociaciones y las agrupaciones políticas; 2) los expedientes sobre los recursos y quejas resueltas por violaciones al Código Electoral; 3) actas y acuerdos del pleno; 4) los programas institucionales en materia de capacitación, educación cívica y fortalecimientos de los Partidos Políticos y demás asociaciones políticas; 5) la división del territorio que comprende el Distrito Federal en Distritos Electorales Uninominales y en demarcaciones territoriales; 6) listados de Partidos Políticos y demás asociaciones políticas registrados ante la autoridad electoral; 7) el registro de candidatos a cargos de elección popular; 8) monto de financiamiento público y privado, y su distribución de acuerdo a sus programas, otorgado a los partidos y demás asociaciones políticas, así como el monto autorizado de financiamiento privado para campañas electorales; 9) informes entregados a la autoridad electoral sobre el origen, monto y destino de los recursos; 10) los cómputos totales de las elecciones y procesos de participación ciudadana llevados a cabo en el Distrito Federal; 11) en el caso del Tribunal Electoral, las sentencias que hayan causado ejecutoria, cuidando en todo momento no difundir información de acceso restringido; 12) las auditorías, dictámenes y resoluciones a los Partidos Políticos; 13) las demás que establezca la normatividad vigente y 14) los informes que presenten los Partidos Políticos y las agrupaciones políticas locales al (IEDF), así como las auditorías y verificaciones que ordene el órgano correspondiente del organismo electoral, deberán hacerse públicos al concluir el procedimiento de fiscalización respectivo.

[38] Para su consulta ver:
http://www.infodf.org.mx/web/index.php?option=com_content&task=view&id=1662&Itemid=217

De igual forma el artículo 7 fracciones V y VI del CIPEDF, dispone como derechos de los ciudadanos del Distrito Federal, entre otros, el de solicitar la información pública a las autoridades electorales y a las asociaciones políticas de conformidad con la Ley de Transparencia y a los candidatos de los partidos políticos con relación a sus compromisos de campaña, así como solicitar el acceso, resguardo y reserva de sus datos personales proporcionados a las autoridades electorales y asociaciones políticas, conforme a las disposiciones de la Ley de Protección de Datos.

En este rubro el INFODF, por lo que hace al cumplimiento de las obligaciones prescritas a las autoridades electorales del Distrito Federal, es decir el IEDF y TEDF, reporta en evaluación anual del 2013 un rango de cumplimiento del 100% de sus obligaciones dispuestas en los artículos 14 y 19 de la Ley de Transparencia.[39]

Es importante mencionar que dentro del cumplimiento de las obligaciones de transparencia a cargo del IEDF, se encuentran incluidas la publicidad de los informes que presentan los partidos, asociaciones y las agrupaciones políticas, así como aquellos entregados a la autoridad electoral sobre el origen, monto y destino de los recursos, los que junto con el resto de la información a que se encuentran obligados, se localizan en la página institucional del ente.[40]

Mención especial merece el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de transparencia que al mes de marzo del 2014, en la página institucional del INFODF, no aparece reporte alguno sobre el grado de atención a las obligaciones de candidatos de los partidos políticos con relación a sus compromisos de campaña.

[39] Para su consulta ver : http://www.infodf.org.mx/web/index.php?option=com_content&task=view&id=1590&Itemid=217
[40] Para su consulta ver www.iedf.org.mx

Ahora bien, por lo que hace a las obligaciones en materia de transparencia de las asociaciones políticas en el Distrito Federal, el artículo 9 fracción V del CIPEDF dispone que la democracia electoral en el Distrito Federal, tiene como fin, entre otros, el de fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas tanto de las autoridades electorales como de las asociaciones políticas hacia los ciudadanos.

En este sentido, el artículo 187 del CIPEDF dispone que la denominación asociación política se refiere al conjunto de ciudadanos que en los términos del artículo 9 de la Constitución Política, se reúnen para tomar parte en los asuntos políticos del país, reconociendo para tal efecto a: 1) Agrupaciones Políticas Locales (APL); 2) Partidos Políticos Locales (PPL) y 3) Partidos Políticos Nacionales (PPN).

Así, el artículo 193 del CIPEDF dispone que las agrupaciones políticas locales están obligadas a transparentar el ejercicio de su función y garantizar el efectivo acceso a la información pública que obre en su poder en los términos de dicho Código y la Ley de Transparencia.

De igual manera el artículo 196, numeral I, inciso i) del CIPEDF, dispone que en los Estatutos de la agrupación política se deberán establecer los procedimientos para facilitar la información a todo ciudadano que lo solicite, de conformidad con los requisitos establecidos en la Ley de Transparencia.

Respecto al cumplimiento de dicha obligación se establece como causal de pérdida de registro de las agrupaciones políticas, el incumplimiento de manera reiterada de las obligaciones que señala el CIPEDF, entendiéndose por reiteración el incumplimiento por tres o más ocasiones de alguna de las obligaciones impuestas en un periodo de cinco años, esto de conformidad a lo dispuesto en el artículo 203, fracción II del CIPEDF.

Los resultados del cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia de las asociaciones políticas, es poco halagador, en términos de la siguiente información:

Cuadro 11. Resultados del cumplimiento de obligaciones de las Asociaciones Políticas en materia de Transparencia:

Índices de la primera evaluación 2010 a los portales de Internet de las Agrupaciones Políticas Locales en el Distrito Federal

- **De las 36 Agrupaciones Políticas Locales, solamente tres de ellas tienen página de Internet con una sección de transparencia: Asociación Profesional Interdisciplinaria de México, Ciudadanos Activos del Distrito Federal y Fuerza Popular Línea de Masas.**
- **Fuerza del Tepeyac y México Joven a pesar de contar con dirección electrónica no funcionaba el portal al momento de realizar la evaluación.**
- **Patria Nueva y Por la Tercera Vía cuentan con portales de Internet pero no tiene sección de transparencia.**

Agrupación Política Local	Artículo 82 del CEDF	Artículo 85 del CEDF	Índice Global de Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia
Asociación Profesional Interdisciplinaria de México	15.3	0.0	13.8
Ciudadanos Activos del Distrito Federal	0.5	0.0	0.4
Fuerza Popular Línea de Masas	2.3	0.0	2.1
Resto de las Asociaciones Políticas Locales	NO	NO	NO

Listado de Agrupaciones Políticas Locales en el Distrito Federal
1a. Evaluación 2010

1. Agrupación Cívica Democrática
2. Alianza de Organizaciones Sociales
3. Asociación Mexicana de la Familia "Pro Desarrollo Nacional"
4. Asociación Profesional Interdisciplinaria de México
5. Avance Ciudadano
6. Ciudadanos Activos del Distrito Federal
7. Ciudadanos Unidos por México
8. Comisión de Organizaciones del Transporte y Agrupaciones Ciudadanas
9. Comité de Defensa Popular del Valle de México
10. Conciencia Ciudadana
11. Coordinadora Ciudadana del Distrito Federal
12. Corriente Solidaridad
13. Esperanza Ciudadana
14. Frente del Pueblo
15. Fuerza del Tepeyac
16. Fuerza Democrática
17. Fuerza Nacionalista Mexicana
18. Fuerza Popular Línea de Masas
19. México Avanza
20. México Joven
21. Movimiento Civil 21
22. Movimiento Libertad
23. Movimiento Social Democrático
24. Mujeres Insurgentes
25. Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal
26. Organización Juvenil Participación Social Activa
27. Patria Nueva
28. Por la Tercera Vía
29. Proyecto Ciudadano
30. Proyecto Integral Democrático de Enlace (PIDE)
31. Red Autogestionaria
32. Tiempo Democrático
33. Unidos por la Ciudad de México
34. Unión Ciudadana en Acción
35. Unión Nacional Interdisciplinaria de Ciudadanos en el Distrito Federal
36. Vida Digna

Fuente: http//www.infodf.org.mx/web

La condición del seguimiento de las obligaciones en materia de transparencia, resulta más confusa y contradictoria, si tomamos en consideración que de la consulta realizada a la página institucional del IEDF, se identifican en sus registros un total de 38 agrupaciones (Ver Anexo I).[41]

No pasa inadvertido que aún con las diferencias cuantitativas institucionales y con la acreditación de los incumplimientos mencionados en materia de transparencia, a la fecha, no existe informe alguno que dé cuenta del seguimiento de los mismos o en extremo de las acciones instrumentadas para proceder, en su caso, a la pérdida del registro correspondiente, en términos de lo dispuesto en el artículo 203, fracción II del CIPEDF.

Ahora bien, por lo que se refiere al cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia de los partidos políticos de conformidad a lo establecido en el artículo 222, fracción XXII del CIPEDF, estos deben garantizar a las personas el

[41] ANEXO 1**.** Agrupaciones políticas aprobadas por el Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal, en su sesión pública del 25 de octubre de 1999. Consultado en: http://www.iedf.org.mx/index.php?cadena=de/deap/apl/index.php

acceso a la información que posean, administren o generen, en los términos de la Ley de Transparencia así como, sin que medie petición, poner a disposición del público en sus oficinas, medios de difusión y en su sitio de internet, en forma tal que se facilite su uso y comprensión por las personas y que permita asegurar su calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad, la información actualizada de los temas, documentos y actos que a continuación se detallan: 1) estatutos, Declaración de Principios, Programa de Acción y demás normatividad interna; 2) estructura orgánica y funciones; 3) integración y mecanismos de designación de los órganos de dirección en los ámbitos del Distrito Federal, delegacional y distrital, según la estructura estatutaria establecida; 4) directorio de los órganos de dirección establecidos en la estructura orgánica incluyendo sus correos electrónicos, así como su domicilio oficial; 5) descripción y monto de los cargos, emolumentos, remuneraciones, percepciones, ordinarias y extraordinarias o similares, del total de sus dirigentes y su plantilla laboral; 6) contratos y convenios suscritos para la adquisición, arrendamiento, concesiones y prestación de bienes y servicios; 7) relación de bienes muebles e inmuebles adquiridos o enajenados; 8) monto de financiamiento público y privado, recibido durante el último semestre, y su distribución; 9) informes entregados a la autoridad electoral sobre el origen, monto y destino de los recursos; 10) resultados de revisiones, informes, verificaciones y auditorias de que sean objeto con motivo de la fiscalización de sus recursos, una vez concluidas; 11) sentencias de los órganos jurisdiccionales en los que el partido sea parte del proceso; 12) resoluciones dictadas por sus órganos de control interno; 13) los montos y recursos provenientes de su financiamiento que entreguen a sus fundaciones, así como los informes que presenten sobre el uso y destino de los mismos, sus actividades programadas e informes de labores; 14) las resoluciones relativas a garantizar los derechos de sus militantes, una vez que hayan causado estado; 15) convenios de coalición y candidatura común en los que participen, así como los convenios de frente que suscriban; 16) actividades institucionales de carácter público; 17) el domicilio oficial y correo electrónico del área encargada de la atención de las solicitudes de acceso a la información, así como el nombre de su responsable; 18) las metas, objetivos y programas de sus

diversos órganos; 19) los informes que tengan que rendir sus órganos con motivo de sus obligaciones legales y estatutarias, una vez que hayan sido aprobados por las instancias partidarias; 20) los acuerdos y resoluciones que emitan sus órganos de dirección en sus diversos ámbitos; 21) los convenios de participación que realicen con las organizaciones de la sociedad civil; 22) las actas de las Asambleas ordinarias y extraordinarias; 23) los informes de actividades del Presidente y Secretario de su Comité Ejecutivo, así como de sus homólogos en sus diversos ámbitos; 24) el nombre del responsable de la obtención de los recursos generales y de campaña y 25) los montos de las cuotas ordinarias y extraordinarias que establezcan para sus militantes, así como los límites a las cuotas voluntarias y personales que los candidatos podrán aportar exclusivamente a sus campañas.

Asimismo, dicha disposición normativa establece que el procedimiento de acceso a la información relativo a la tutela de datos personales y la clasificación de la información de acceso restringido se realizarán de acuerdo con lo previsto en la Ley de Transparencia y en la Ley de Protección de Datos, teniendo igualmente la obligación de satisfacer los requerimientos que les formule el Instituto de Acceso a la Información Pública, y dar cumplimiento a las resoluciones recaídas a los recursos de revisión.

Finalmente, el incumplimiento a las disposiciones en materia de transparencia serán sancionadas por el IEDF, de oficio o como resultado de la vista que le remita el INFODF, una vez que venza el plazo concedido para tal efecto.

Cabe destacar que de acuerdo a la información proporcionada por el IEDF en su página institucional, al mes de febrero de 2014, en el Distrito Federal no existe registrado ningún partido político local.

Por otra parte por lo que se refiera a los partidos políticos nacionales con presencia en el Distrito Federal a los que se refiere el artículo 206, fracción I del

CIPEDF, se detalló que de acuerdo con la información reportada por el INFODF, el cumplimiento de sus obligaciones en materia de transparencia se ha realizado en las siguientes condiciones:

Cuadro: 12 Índice de Global de Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia						
Ente Obligado	**Evaluación-Diagnóstico 2008**	**Evaluación 2009**	**1ª evaluación 2010**	**2ª evaluación 2010**	**Evaluación-Diagnóstico 2011**	**Evaluación 2012**
PAN	37.4	93.5	95.3	100.0	97.7	87.6
Movimiento Ciudadano	21.2	54.8	83.0	100.0	93.0	0.0
PRD	42.3	94.9	80.5	93.0	91.0	79.2
PT	38.5	68.1	82.5	93.9	91.5	83.8
Nueva Alianza	53.7	92.0	91.5	100.0	81.6	98.2
PRI	46.0	89.9	92.9	100.0	99.0	89.8
Socialdemócrata	50.9	94.9				
PVEM	57.2	78.6	80.1	100.0	96.0	86.1

Fuente: http//www.infodf.org.mx/web

Derivado del análisis realizado al cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia de los institutos políticos nacionales con presencia local, se desprende que en la mayoría de los casos, estos cumplen con las obligaciones dispuestas en el artículo 222, fracción XXII del CIPEDF, tal y como se muestra a continuación:

Cuadro: 13 Comportamiento de los partidos políticos al cumplimiento de obligaciones (Art.222)							
Fundamento	**PAI**	**PRI**	**PRD**	**PT**	**PVEM**	**MC**	**PNAL**
XXII. Garantizar a las personas el acceso a la información que posean, administren o generen, en los términos establecidos en la "Ley de Transparencia, así como, sin que medie petición, poner a disposición del público en sus oficinas, medios de difusión y en su sitio de internet, en forma tal que se facilite su uso y comprensión por las personas y que permita asegurar su calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad, la información actualizada de los temas, documentos y actos que se detallan:	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
a) Estatutos, Declaración de Principios, Programa de Acción y demás normatividad interna;	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
b) Estructura orgánica y funciones;	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
c) Integración y mecanismos de designación de los órganos de dirección en los ámbitos del Distrito Federal, delegacional y distrital, según la estructura estatutaria establecida;	✓	✓	✓	✓	✓	X deshabilitado	✓
Fundamento	**PAI**	**PRI**	**PRD**	**PT**	**PVEM**	**MC**	**PNAL**
d) Directorio de los órganos de dirección establecidos en la estructura orgánica incluyendo sus correos electrónicos, así como su domicilio oficial;	✓	✓	✓	✓	✓	X deshabilitado	✓
e) Descripción y monto de los cargos, emolumentos, remuneraciones, percepciones, ordinarias y extraordinarias o similares, de total de sus dirigentes y su plantilla laboral;	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
f) Contratos y convenios suscritos para la adquisición, arrendamiento, concesiones y prestación de bienes y servicios;	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
g) Relación de bienes muebles e inmuebles adquiridos o enajenados;	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
h) Monto de financiamiento público y privado, recibido durante el último semestre, y su distribución;	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
i) Informes entregados a la autoridad electoral sobre el origen, monto y destino de los recursos;	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
j) Resultados de revisiones, informes, verificaciones y auditorías de que sean objeto con motivo de la fiscalización de sus recursos, una vez concluidas;	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
k) Sentencias de los órganos jurisdiccionales en los que el partido sea parte del proceso;	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
l) Resoluciones dictadas por sus órganos de control interno;	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
m) Los montos y recursos provenientes de su financiamiento que entreguen a sus fundaciones, así como los informes que presenten sobre el uso y destino de los mismos, sus actividades programadas e informes de labores;	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
n) Las resoluciones relativas a garantizar los derechos de sus militantes, una vez que hayan causado estado;	✓	✓	✓	✓	✓	X deshabilitado	✓
o) Convenios de coalición y candidatura común en los que participen, así como los convenios de frente que suscriban;	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
p) Actividades institucionales de carácter público;	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
q) El domicilio oficial y correo electrónico del área encargada de la atención de las solicitudes de acceso a la información, así como el nombre de su responsable;	✓	✓	✓	X Noaparece	✓	✓	✓
r) Las metas, objetivos y programas de sus diversos órganos;	✓	✓	✓	✓	✓	X deshabilitado	✓
s) Los informes que tengan que rendir sus órganos con motivo de sus obligaciones legales y estatutarias, una vez que hayan sido aprobados por las instancias partidarias;	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
t) Los acuerdos y resoluciones que emitan sus órganos de dirección en sus diversos ámbitos;	✓	✓	✓	✓	✓	X deshabilitado	✓
u) Los convenios de participación que realicen con las organizaciones de la sociedad civil;	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
v) Las actas de las asambleas ordinarias y extraordinarias;	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
w) Los Informes de actividades del Presidente y Secretario de su Comité Ejecutivo, así como de sus homólogos en sus diversos ámbitos;	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
x) El nombre del responsable de la obtención de los recursos generales y de campaña, y	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
y) Los montos de las cuotas ordinarias y extraordinarias que establezcan para sus militantes, así como los límites a las cuotas voluntarias y personales que los candidatos podrán aportar exclusivamente a sus campañas.	✓	X deshabilitad	✓	✓	✓	✓	✓

FUENTE: Elaboración propia con base en la revisión de los portales de los partidos políticos en el Distrito Federal al 17 de septiembre de 2013.

De acuerdo con los resultados obtenidos por el INFODF en materia de agrupaciones políticas y partidos políticos en los periodos evaluados, no se percibe la consolidación en la cultura de transparencia y rendición de cuentas de las asociaciones políticas en el Distrito Federal, más aun, se identifican, incluso casos en donde los resultados son decrecientes respecto de los avances reportados en anteriores ejercicios al 2010, sin que se identifiquen por parte de todos los involucrados, programas o acciones tendientes a mejorar los resultados obtenidos.

En este sentido, es importante recordar que la transparencia y la rendición de cuentas en materia electoral, se basa en el principio de “el pueblo manda y las autoridades electorales y agrupaciones políticas obedecen, rinden cuentas y se sujetan a la fiscalización”, este último se asocia con elecciones equitativas, sobre todo en aspectos relacionados al origen, destino y aplicación de los recursos involucrados en los procesos electorales.

De lo anterior depende en gran medida el respeto de la voluntad del sufragio, y constituye el elemento básico para la aceptación del ejercicio de la autoridad en condiciones de la legitimidad. De no hacerlo, es muy probable la generación de desafección y falta de credibilidad de los ciudadanos del Distrito Federal en el sistema democrático local.

En una Ciudad que se considere democrática, los ciudadanos tienen derecho a constituir organizaciones incluyendo partidos políticos y grupos de interés independientes, estos últimos son las asociaciones formadas por personas, organizaciones, entidades privadas, etc., que se reúnen para perseguir determinados objetivos comunes, sean estos seccionales o promocionales, pero que intentan influir de alguna manera en las políticas públicas y convencer a los funcionarios de sus puntos de vista.

Los objetivos son seccionales cuando persiguen los intereses de sus miembros (una parte de la sociedad, jóvenes, mujeres, campesinos, indígenas, jornaleros, sindicatos, trasportistas, tianguistas, vivienda, ambulantes, etc.) y promocionales, cuando defienden ideas, valores, principios generales, y buscan su aplicación en la sociedad (ecologistas, grupos que promueven la cooperación, trasparencia, derechos humanos, desarrollo, etc..) y su participación en un Estado democrático se realiza en torno a diversos mecanismos, tales como actividades de persuasión (campañas de difusión informativa, de movilización...), actividades económicas (financiación de publicaciones, mecenazgos, patrocinios de actividades artísticas, fundaciones, becas...) o actividades jurídicas (resistirse al cumplimiento de determinadas obligaciones, como el uso de la fuerza, como la ocupación de lugares públicos, etc..).

No obstante lo anterior, “en los últimos decenios, el carácter y el número de los grupos de interés ha crecido y proliferado mucho hasta abarcar casi todos los ámbitos de la actividad social, cultural, política y hasta religiosa. Las organizaciones profesionales han cobrado importancia, así como grupos de interés público que defienden diversas causas (desde mejorar los servicios de salud para los pobres, hasta la protección del medio ambiente) que a menudo no benefician directamente a sus miembros. Los gobiernos mismos pueden funcionar como grupos de interés: en Estados Unidos, asociaciones de gobernadores de Estados, alcaldes de grandes ciudades y legisladores estatales cabildean con regularidad ante el Congreso nacional por los asuntos de su interés.” Ver anexo 2.[42]

En el ámbito del Distrito Federal, independientemente de las formas de participación ya mencionadas (partidos políticos, agrupaciones políticas, comités ciudadanos y consejos de los pueblos), podemos identificar diversos grupos de interés que para efecto de nuestro estudio agruparemos en tres grandes rubros: 1)

[42] Partidos Políticos, grupos de interés, ONG.Consultado en: www.america.gov./st/democracy-spanish/2008/september

Los que se encuentran integrados por miembros de la sociedad y que a partir de la figura socialmente reconocida como ONG´s participan activamente de forma independiente en diversos temas de interés de la Ciudad. En el Distrito Federal localizamos un total de 63 organizaciones registradas con diversos ámbitos de la actividad social.[43] 2) Los organismos que aun cuando forman parte de la estructura gubernamental local de manera autónoma, por su competencia, atribuciones y naturaleza jurídica se constituyen en grupos de interés en temas tan fundamentales como la transparencia, rendición de cuentas y respeto de los derechos humanos. De estos últimos elementos depende en gran medida la existencia de un gobierno con legalidad y legitimidad en cualquier sistema político.

Para el caso del Distrito Federal destacan las siguientes instituciones:

Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.

Es el encargado de dirigir y vigilar el cumplimiento de la Ley de Transparencia y de la Ley de Protección a Datos Personales, asimismo de las normas que se deriven de las mismas velando por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad imperen en todas sus decisiones. Cuenta con personalidad jurídica propia, patrimonio propio y autonomía presupuestaria de operación y de decisión en materia de transparencia y acceso a la información pública.

Su misión es garantizar el derecho de acceso a la información pública e impulsar la transparencia y la rendición de cuentas, en beneficio de la sociedad.

Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal

Es la institución encargada de conocer sobre quejas y denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas por cualquier autoridad o persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en la administración pública del Distrito Federal o en los órganos de procuración y de impartición de justicia que ejerzan jurisdicción local en el Distrito Federal, su actuación es autónoma, es

[43]ANEXO 2. Organizaciones No Gubernamentales registradas en el Distrito Federal: Consultado en: http://.tupatrocinio.com/ongs.html?pag=258

decir, no está supeditado a autoridad o servidor público alguno. Entre las atribuciones de la Comisión se encuentran las siguientes: Recibir quejas de presuntas violaciones a derechos humanos. Conocer e investigar, a petición de parte o de oficio, presuntas violaciones de derechos humanos, en los siguientes casos: a) Por actos u omisiones de índole administrativo de los servidores públicos o de las autoridades de carácter local del Distrito Federal, y b) cuando los particulares o algún agente social cometa ilícitos con la tolerancia o anuencia de algún servidor público o autoridad local del Distrito Federal, o bien cuando estos últimos se nieguen infundadamente a ejercer las atribuciones que legalmente les correspondan en relación a dichos ilícitos, particularmente tratándose de conductas que afecten la integridad física de las personas. Los que por su representación cuantitativa y cualitativa en función de género, edad y educación, representan mayorías sociales fundamentales en la acción e impacto de los programas de gobierno en la Ciudad. c) Los que por su representación cuantitativa y cualitativa en función de género, edad y educación, representan mayorías sociales fundamentales en la acción e impacto de los programas de gobierno en la Ciudad.[44]

En este marco, el IEDF como órgano responsable del desarrollo de los trabajos en materia de educación cívica, coordina y ejecuta las acciones de formación, promoción y divulgación de la cultura democrática, considerando las necesidades específicas que existen en los diversos grupos poblacionales de la Capital del país, contenidas en el proyecto denominado "Formación Ciudadana para Grupos Específicos".[45]

Dicho proyecto tiene por objeto promover el ejercicio de los valores de la democracia, fomentar el conocimiento de los derechos civiles y políticos, e impulsar la participación política, cívica y electoral en tres sectores poblacionales: mujeres, jóvenes de entre 15 y 19 años de edad y estudiantes de nivel superior. Éstos últimos son incorporados al IEDF como prestadores de servicio social a

[44] Es importante considerar que las cifras reportadas en el Distrito Federal arrojan que, 7, 226, 339 habitantes mayores de 18 años el 52 % son mujeres y el 48 % son hombres.
[45] Para mayor información sobre el resto de los Proyectos consultar: www.iedf.org.mx/site/SistemaElectoralDF/

quienes se les capacita como Promotores Comunitarios de Cultura Cívica Democrática y, posteriormente, actúan como replicadores de los talleres dirigidos a jóvenes y mujeres.

Este proyecto ha fortalecido la propuesta de trabajo interinstitucional del IEDF al contar con la participación de instituciones de educación media superior y superior, así como de organizaciones públicas y de la sociedad civil.

El artículo 222 fracciones XVII y XVIII del CIPEDF, considera como obligación a cargo de los partidos políticos, garantizar la participación de mujeres en la toma de decisiones e incorporar perspectivas de género en sus acciones de formación y capacitación política, así como destinar al menos 3% del financiamiento público para actividades ordinarias permanentes que se les asigne para la generación y el fortalecimiento de liderazgos femeniles, así como al menos, el 2% para liderazgos juveniles.

Por lo que hace a la generación de liderazgos femeniles, estos se encuentran ubicados en el universo de 3´757,696 mujeres mayores de 18 años habitantes del Distrito Federal; sin embargo, para la formación de liderazgos juveniles la cifra varía si tomamos en consideración lo dispuesto en el artículo 2 fracción I de la Ley de las y los Jóvenes del Distrito Federal, en donde se reconoce como joven mayor de edad aquel que se encuentra en el rango entre los 18 y los 29 años de edad cumplidos, identificados como actores sociales estratégicos para la transformación y mejoramiento de la ciudad.

En consecuencia del universo identificado en el rango estipulado en la normativa local es el siguiente:

Cuadro 14: Población joven en el Distrito Federal, al 2010
De 18 A 29 años

Población Total	%	Hombres	%	Mujeres	%
1’777,262	100	870,858	49%	906,404	51%

FUENTE: Elaboración propia con datos de INEGI, Censo General de Población y Vivienda 2010; Tabulados del Cuestionario Básico www.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/

Cabe señalar que para la formación de liderazgos femeniles y juveniles es posible ubicar el destino y aplicación de los recursos otorgados a los partidos políticos en el 2011 dentro del financiamiento público en los siguientes términos:

Cuadro 15: Distribución del Financiamiento Público de los Partidos Políticos en 2011

Partido Político	Monto para actividades ordinarias permanentes	Monto del 3% para generación y fortalecimiento de liderazgos femeninos	Monto del 2% para la generación y fortalecimiento de liderazgos juveniles
Partido de la Revolución Democrática	$ 72,994,263.09	$ 2,189,827.89	$ 1,459,885.26
Partido Acción Nacional	$ 59,073,130.02	$ 1,772,193.90	$ 1,181,462.60
Partido Revolucionario Institucional	$ 50,257,996.81	$ 1,507,739.90	$ 1,005,159.93
Partido del Trabajo	$ 36,868,730.18	$ 1,106,061.90	$ 737,374.60
Partido Verde Ecologista de México	$ 33,927,893.89	$ 1,017,836.86	$ 678,557.87
Movimiento Ciudadano	$ 18,177,599.17	$ 545,327.97	$ 363,551.98
Nueva Alianza	$ 21,384,983.32	$ 641,549.49	$ 427,699.66
Total	**$292,684,596.48**	**$ 8,780,537.91**	**$5,853,691.90**

FUENTE: ALDF, Boletín de Prensa 30-enero-2011.

Las cantidades destinadas para el fortalecimiento de liderazgos femeninos y juveniles, resultan mínimas si tomamos en consideración el universo de mujeres y jóvenes habitantes de la Ciudad de México, en comparación con las que se encuentran dirigidos a dichos programas, ya que para las mujeres se promedia un importe anual de $2.33 (dos pesos 33/100 MN) y para los jóvenes $3.29 (tres pesos 29/100 MN), lo que aunado a la falta de una fiscalización cualitativa para la eficiencia y eficacia obtenida en el destino y aplicación de los recursos ministrados a los partidos políticos, evidencian el riesgo formal respecto del cumplimiento de los objetivos para el que son destinados, condición que constituye una limitante para la consolidación del Estado democrático al que aspiramos en la Ciudad.

Pero no sólo un referente económico genera las condiciones para la existencia de un Estado democrático para la Ciudad, su vigencia exige una ciudadanía activa, combativa y perseverante, de tal forma que con la influencia positiva que generan los grupos de interés por todos los medios existentes, se logre contribuir al establecimiento de políticas públicas que permitan la materialización de los cambios necesarios para garantizar una convivencia democrática, no sólo de naturaleza electoral.

Es necesario plantear un conjunto de conocimientos ordenados de forma deductiva, con la finalidad de establecer el marco sociopolítico de donde emergen los sistemas: Electoral, de Partidos y el conglomerado de la Sociedad Civil, medios de comunicación y grupos de interés para tener un panorama integral que nos permita la comprensión de los principios de la función electoral como instrumento para la consolidación del Estado Democrático en el D.F.

Reconocer las peculiaridades del D.F., con su doble naturaleza, es decir, es sede de los poderes de la Unión y paralelamente es una entidad federativa y conforme a las leyes respectivas, el gobierno federal ejerce un poder legítimo en la vida política del D.F., es importante considerar, ya que el contexto para lograr el Estado Democrático, tendrá que pasar por un tamiz complejo y con interacciones que incluso repercutan en aspectos económicos en la vida de los partidos políticos, en las que las autoridades electorales, dentro de una de sus competencias, entre otras, la de fiscalización de los recursos a dichos institutos políticos, tendrán una actuación contundente, como se verá en el siguiente capítulo.

CAPÍTULO 2

LAS AUTORIDADES ELECTORALES LOCALES Y SUS ATRIBUCIONES EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN EL DISTRITO FEDERAL

La Constitución Política señala que la Ciudad de México es el Distrito Federal y está a cargo de los Poderes Federales y los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial locales; asimismo, reconoce como autoridades al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a la Asamblea Legislativa y al Tribunal Superior de Justicia.

Además, se ha creado un conjunto de órganos autónomos en el Distrito Federal, entre los que se encuentran las autoridades electorales a las que se refiere el Título Sexto, Capítulo III y IV del Estatuto de Gobierno y Libro Segundo del CIPEDF denominadas (IEDF) y Tribunal Electoral del Distrito Federal (TEDF).

Estas autoridades electorales se encuentran diferenciadas por su función en dos grupos:

- ✓ Aquellas que posibilitan y fomentan la participación inmediata y directa de los ciudadanos, organizaciones, agrupaciones y partidos políticos en la vida democrática del país, y por ende en los procedimientos electorales.[46]
- ✓ Y las encargadas de la aplicación de las normas constitucionales y legales para la organización y calificación de las elecciones tendientes a la renovación periódica de los poderes Legislativo y Ejecutivo, ayuntamientos y la ALDF.

En las primeras ubicamos al IEDF y en las segundas al TEDF; ambas instancias electorales gozan de plena autonomía. La SCJN ha señalado que al evolucionar la teoría tradicional de la división de poderes, se dejó de concebir la organización del Estado en los tres poderes tradicionales, considerándose actualmente como una distribución de funciones o competencias justificadas por la necesidad de

[46] GALVÁN RIVERA, Flavio, Derecho Procesal Electoral Mexicano, editorial Porrúa, México, D.F., p. 3.

establecer órganos encaminados a la defensa de los derechos fundamentales y el control de los actos de los depositarios del poder público.

Se concibe a las autoridades electorales del Distrito Federal como órganos autónomos, ya que:[47]

a) Tienen su origen en las disposiciones constitucionales que consideran la existencia de este tipo de autoridades tanto en los estados como en el Distrito Federal, remitiendo en cuanto a sus particularidades al Estatuto de Gobierno, en virtud del bloque de constitucionalidad que en materia electoral ambos ordenamientos forman;
b) Mantienen con los otros órganos del Estado relaciones de coordinación;
c) Tienen a su cargo la función organizacional y jurisdiccional electoral en el Distrito Federal que requiere ser atendida en beneficio de la sociedad;
d) Cuentan con la potestad de emitir sus resoluciones y determinaciones sin sujetarse a ninguna indicación o directriz de órgano o poder alguno;
e) Cuentan con autonomía presupuestaria, ya que anualmente elaboran su proyecto de presupuesto de egresos, remitiéndolo al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para que éste, en los términos en que le fueron presentados, los incorpore en artículos específicos dentro del proyecto de presupuesto de egresos, y [48]
f) Manejan, administran y ejercen de manera autónoma su presupuesto, sujetándose siempre a la normatividad de la materia.

[47] Para mayor información consultar "(TEDF). al ser un órgano de gobierno del distrito federal tiene legitimación para promover controversia constitucional". Jurisprudencia, Materia(s): Constitucional, Registro No. 172288, Localización: Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXV, mayo de 2007, P: 1651, Tesis: p. /J. 19/2007. Principio de división funcional de competencias; sus características Jurisprudencia, Materia(s): Constitucional, Registro No. 172431, Localización: Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXV, mayo de 2007, P: 1649, Tesis: P. /J. 22/2007. Órganos Constitucionales Autónomos. Notas Distintivas y Características Jurisprudencia, Materia(s): Constitucional, Registro No. 172431, Localización: Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXV, mayo de 2007, p.1649, Tesis: P. /J. 22/2007.

[48] En cuanto a la realidad de esta autonomía técnica y presupuestaria se realiza su análisis en el capítulo sexto del presente estudio.

No obstante lo anterior, a partir de las recientes reformas Constitucionales la eventual autonomía otorgada a las autoridades electorales en el Distrito Federal y la existencia de principios de su función, tienen una dependencia jerárquica operacional de conformidad a lo dispuesto en el ordenamiento constitucional consignado en el artículo 41 fracción V, que dispone la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales los cuales deberán ejercer sus atribuciones en estricto apego a los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.

Dicha naturaleza y principios se replican a nivel local en los artículos 123, 124 y 128 del Estatuto de Gobierno, en cuanto a la autonomía de las autoridades electorales locales, así como de los principios rectores de su función, tales como imparcialidad, legalidad, objetividad, certeza e independencia a los que se refiere el artículo 120.

Por su parte, el CIPEDF dispone en su artículo 5, fracción II, inciso b), que son autoridades electorales tanto el IEDF como el TEDF; de igual manera los artículos 15 y 16 del CIPEDF señalan que son depositarias de la función estatal de organizar las elecciones locales y los procedimientos de participación ciudadana, así como de la función jurisdiccional en materia electoral con competencia en el Distrito Federal y carácter permanente y profesional en su desempeño, las cuales gozan de autonomía y administración, así como de independencia en la toma de sus decisiones.

Por lo que se refiere a los principios rectores de la función electoral, los artículos 3 y 18 fracción I del CIPEDF, indican que las autoridades electorales para el debido cumplimiento de sus funciones se regirán y deberán cumplir los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y equidad, además de los de transparencia y publicidad procesal.

Finalmente, la vigencia y aplicación de los principios mencionados permitirá, entre otros aspectos, que las autoridades electorales del Distrito Federal:

1) Sean una fuente de legitimación del poder político, teniendo como resultado la gobernabilidad y la estabilidad social, 2) resuelvan conflictos políticos y sociales por la vía institucional, 3) generen la legitimidad de los procesos electorales a partir de la legalidad y seguridad jurídica.

2.1 Instituto Electoral del Distrito Federal

Conforme a lo estipulado en los artículos 123, párrafo primero, y 124 párrafos primero y segundo del Estatuto de Gobierno y 16 del CIPEDF, el IEDF es un organismo de carácter permanente, autoridad en materia electoral, profesional en su desempeño, que goza de autonomía en su funcionamiento y administración, así como independencia en la toma de decisiones; tiene personalidad jurídica y patrimonio propio. Sus determinaciones se toman de manera colegiada, procurando la generación de consensos para el fortalecimiento de su vida institucional.

De acuerdo a los artículos 15, 16 y 17 del CIPEDF, el IEDF tiene su domicilio en el Distrito Federal y se rige para su organización, funcionamiento y control, por las disposiciones contenidas en la Constitución, el Estatuto de Gobierno y el propio Código; asimismo, sin vulnerar su autonomía, le son aplicables las disposiciones relativas a la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal (Ley de Presupuesto).

El artículo 20 del CIPEDF, prescribía que el IEDF era responsable de la función estatal de organizar las elecciones locales y los procedimientos de participación ciudadana, de acuerdo a la normativa de la materia, ahora esta función es de apoyo al órgano federal.

Sus fines y acciones se orientan, entre otros aspectos, a: 1) Contribuir al desarrollo de la vida democrática; 2) Fortalecer el régimen de asociaciones políticas; 3) Asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones; 4) Garantizar la celebración periódica, auténtica y pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes de la Asamblea Legislativa, al Jefe de Gobierno y jefes delegacionales; 5) Realizar los procesos electivos de los órganos de representación e instrumentos de participación ciudadana, conforme a la ley de participación; 6) Preservar la autenticidad y efectividad del sufragio; 7) Promover el voto y la participación ciudadana; 8) Difundir la cultura cívica democrática y de la participación ciudadana; y 9) Contribuir al desarrollo y adecuado funcionamiento de la institucionalidad democrática en su ámbito de atribuciones.

Dicho órgano tiene como misión la de comprometerse invariablemente en su acción con los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y equidad, promoviendo el desarrollo de una cultura cívica democrática entre los habitantes de la Ciudad de México, contribuyendo a fortalecer el régimen de partidos políticos y agrupaciones políticas locales. [49]

También se concibe como un órgano de confianza y de respeto para los ciudadanos, ejerciendo su autoridad con apego a los principios rectores de la función estatal electoral, por su capacidad de interlocución con los actores políticos y sociales, y por su conocimiento experto en materia electoral, reconociendo a la transparencia y la rendición de cuentas como los principios plenamente incorporados en la actuación institucional.

Por lo que hace a la estructura orgánica y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21 del CIPEDF, cuenta para el cumplimiento de sus fines y acciones con los siguientes órganos: 1) Un Consejo General; 2) Una Junta Administrativa; 3) Órganos ejecutivos: Secretaría Ejecutiva, Secretaría Administrativa y Direcciones Ejecutivas; 4) Órganos con autonomía técnica y de gestión: Contraloría General y

[49] IEDF: www.iedf.org.mx

la UTEF; 5) Órganos técnicos: Unidades Técnicas; 6) Órganos desconcentrados: Direcciones Distritales y Consejos Distritales y 7) Mesas Directivas de Casilla.

De acuerdo al artículo 25 del CIPEDF, el Consejo General es el órgano superior de dirección y sus decisiones se asumen de manera colegiada en sesión pública y por mayoría de votos. Se integra por siete consejeros electorales con derecho a voz y voto, uno de los cuales funge como su presidente.

Son integrantes sólo con derecho a voz, el Secretario Ejecutivo del Consejo, un representante de cada partido político y uno por cada grupo parlamentario de la ALDF, según lo previsto en los artículos 124, párrafo segundo del Estatuto de Gobierno y 25, párrafos segundo y tercero del CIPEDF.

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 35 del CIPEDF, el máximo órgano de dirección tiene las siguientes funciones que se relacionan con la fiscalización, origen, destino y aplicación de los recursos de las asociaciones políticas: 1) Aprobar con base en la propuesta que le presenten los órganos competentes del Instituto Electoral, los reglamentos para la liquidación de las asociaciones políticas, fiscalización de los recursos; trámite y sustanciación de quejas y procedimientos de investigación, así como la normatividad que mandata la legislación local en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos; 2) Nombrar conforme a los términos establecidos en el párrafo segundo del artículo 88 del CIPEDF al titular de la UTEF, 3) Remover por mayoría calificada de los consejeros electorales a los titulares de la Secretaría Ejecutiva, Direcciones Ejecutivas, y las Unidades Técnicas; 4) Conocer y opinar respecto a los informes que deben rendir las Comisiones Permanentes y Provisionales; 5) Aprobar o rechazar los dictámenes, proyectos de acuerdo o de resolución que respectivamente, propongan las comisiones y la UTEF y, en su caso ordenar el engrose que corresponda; 6) Determinar el financiamiento público para los partidos políticos; 7) Garantizar a los partidos políticos el ejercicio de sus derechos y asignación de las prerrogativas que les corresponden; 8) Vigilar que las asociaciones políticas

cumplan las obligaciones a que están sujetas; 9) Determinar los topes máximos de gastos de campaña y precampaña; 10) Ordenar, a solicitud de los partidos políticos o coaliciones, la investigación de hechos que afecten de modo relevante los derechos de estos en los procesos electorales y 11) Sancionar las infracciones en materia administrativa electoral.

Por otra parte, para el desempeño de sus atribuciones, obligaciones y supervisión del adecuado desarrollo de las actividades de los órganos ejecutivos y técnicos del IEDF, el Consejo General cuenta con el auxilio de comisiones de carácter permanente y provisional, siendo las comisiones permanentes las siguientes:[50] 1) Asociaciones Políticas; 2) Participación Ciudadana; 3) Organización y Geografía Electoral; 4) Capacitación Electoral y Educación Cívica; 5) Fiscalización y 6) Normatividad y transparencia.

Por lo que respecta a su competencia en materia de fiscalización de los recursos a los partidos políticos, se identifica a la Comisión de Fiscalización con las siguientes atribuciones: 1) Opinar de los proyectos de normatividad que elabore la UTEF respecto del registro de ingresos y egresos de las asociaciones políticas, la documentación comprobatoria sobre el manejo de sus recursos, los informes que éstas deben presentar ante el Instituto Electoral, las reglas para su revisión y dictamen, así como el procedimiento relativo a la liquidación de su patrimonio y en general aquellas que sean necesarias para cumplir sus objetivos; 2) Supervisar los resultados finales del Programa de Fiscalización instrumentado por la UTEF; 3) Verificar que los recursos del financiamiento que ejerzan las asociaciones políticas se apliquen estricta e invariablemente para las actividades señaladas en el código; 4) Revisar los resultados finales de los informes que las asociaciones políticas presenten sobre el origen y destino de sus recursos anuales, así como de los recursos utilizados en las campañas y procesos de selección interna de candidatos de los partidos políticos; 5) Emitir los resultados finales de auditorías especiales de las asociaciones políticas, en los términos de

[50] Véase artículos 43 y 48 CIPEDF.

los acuerdos del Consejo General; 6) Opinar respecto de los proyectos de dictamen y resolución que formule la UTEF sobre los informes presentados por las asociaciones políticas acerca del origen y destino de los recursos utilizados anualmente y los empleados en las campañas y procesos de selección interna de candidatos, según corresponda; 7) Supervisar los resultados del proceso de liquidación de los bienes de las asociaciones políticas y emitir opinión respecto del dictamen que presente la UTEF; 8) Informar al Consejo General de las presuntas irregularidades en que hubiesen incurrido las asociaciones políticas en el manejo y aplicación de recursos, a efecto de iniciar el procedimiento correspondiente y 9) Las demás que le confiere el código.

Por su parte, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 88 del CIPEDF, la UTEF es el órgano técnico del Instituto Electoral local que tiene a su cargo supervisar que los recursos del financiamiento público y privado que ejerzan las asociaciones políticas se apliquen de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución Política, el Estatuto de Gobierno, el CIPEDF y demás normatividad aplicable.

Esta unidad cuenta con autonomía técnica y de gestión, que en términos de lo especificado en el artículo 83 CIPEDF, la faculta para realizar sus actividades sin injerencia de algún servidor público del IEDF, representante de partidos políticos o grupos parlamentarios, sin presión para resolver en un determinado sentido, no teniendo más límite que lo establecido en el CIPEDF, en la leyes y reglamentos aplicables.

Al respecto, la UTEF, en términos de lo dispuesto en el art. 90 del CIPEDF tiene las siguientes atribuciones: 1) Elaborar y remitir a la Junta Administrativa, previa opinión de la Comisión de Fiscalización, el proyecto de Programa de Fiscalización en agosto del año anterior al que deba aplicarse, para los efectos de planeación general; 2) Instrumentar el Programa de Fiscalización e informar trimestralmente al Consejo General, sobre el avance en su cumplimiento; 3) Dictaminar los informes que presenten las asociaciones políticas sobre el origen y destino de sus

recursos anuales; así como los que rindan los partidos políticos respecto de los recursos empleados en las campañas electorales de sus candidatos; 4) Formular los proyectos de resolución respecto de las irregularidades consignadas en el dictamen que recaiga a la revisión de los informes que las asociaciones políticas presenten sobre el origen y destino de sus recursos anuales; así como los que rindan los partidos políticos respecto de los recursos empleados en las campañas de sus candidatos; 5) Solicitar en todo tiempo a las asociaciones políticas, en forma motivada y fundada, documentos e informes detallados sobre sus ingresos y egresos; 6) Practicar visitas de verificación a las asociaciones políticas con el fin de corroborar el cumplimiento de sus obligaciones y la veracidad de sus informes; 7) Requerir a los proveedores registrados en el catálogo respectivo, la información sobre los bienes adquiridos o servicios contratados por los partidos políticos, coaliciones y/o candidatos, así como el monto al que ascendieron; 8) Llevar a cabo las diligencias necesarias para el desahogo de las solicitudes de investigación que se promuevan ante el Instituto Electoral, respecto al presunto rebase a los topes de gastos de campaña; 9) Desplegar las actividades que resulten necesarias para dar cumplimiento a las resoluciones jurisdiccionales, que ordenen reponer alguna fase del procedimiento de revisión de los informes de las asociaciones políticas; 10) Instrumentar las auditorías a las finanzas de las asociaciones políticas que acuerde el Consejo General; 11) Realizar las visitas de verificación a las asociaciones políticas con el fin de corroborar el cumplimiento de sus obligaciones y la veracidad de sus informes; 12) Elaborar los anteproyectos de normatividad relacionada con el registro de ingresos y egresos de las asociaciones políticas, la documentación sobre el manejo de sus recursos, los informes que éstas deben presentar ante el Instituto Electoral, las reglas para su revisión y dictamen, así como el procedimiento relativo a la liquidación de su patrimonio; 13) Asesorar y orientar a las asociaciones políticas sobre el cumplimiento de sus obligaciones en términos del CIPEDF; 14) Intercambiar, de acuerdo con los convenios que al efecto se celebren, información con el Instituto Nacional Electoral (INE) respecto a los informes y revisiones que se realicen en los respectivos ámbitos de competencia, a efecto de verificar el cumplimiento de

las normas establecidas en el CIPEDF; 15) Solicitar a las autoridades de los tres ámbitos de gobierno, instituciones financieras y todas las personas físicas y morales, la información que se encuentre en su poder y necesaria para comprobar el cumplimiento y la veracidad de los informes que presenten las asociaciones políticas y realizar el levantamiento del secreto bancario, fiduciario y fiscal; 16) Dictaminar los informes que presenten las agrupaciones políticas sobre del origen y destino de los recursos utilizados para el desarrollo de sus actividades tendentes a la obtención del registro legal como partido político local, así como formular los proyectos y resoluciones de las irregularidades consignadas en el dictamen, y 17) Las demás que le confiera el CIPEDF y la normatividad interna del Instituto Electoral.

En materia de fiscalización, la UTEF es competente en coadyuvanza del órgano federal para dictaminar y/o emitir los proyectos de resolución de los siguientes informes, solicitud de investigación y sustanciación de quejas: 1) Informes anuales que en términos de los artículos 266 fracción I del CIPEDF y 99 del Reglamento del Instituto Electoral del Distrito Federal para la Fiscalización de los Recursos de los partidos políticos (Reglamento de Fiscalización para los partidos políticos), son presentados dentro de los sesenta días siguientes al último de diciembre del año del ejercicio en que se reporta, mediante los cuales son reportados los ingresos totales y gastos ordinarios que los partidos políticos hayan realizado durante el ejercicio objeto del informe. Las sanciones aplicables a los partidos políticos en su caso, por parte del Consejo General, respecto a las conclusiones vertidas por la UTEF, luego de la revisión a los informes anuales, corresponderán a aquellas violaciones y sanciones que de forma general señalan los artículos 377 y 379 del CIPEDF. Por lo que hace a las infracciones sujetas a ser sancionadas en materia de fiscalización con cargo a los partidos políticos, independientemente de las responsabilidades en que incurran sus dirigentes, candidatos, miembros o simpatizantes, podemos identificar las siguientes: a) Incumplir las disposiciones del CIPEDF; b) Incumplir con las resoluciones o acuerdos del Consejo General; c) Aceptar donativos o aportaciones económicas de las personas o entidades que no

estén expresamente facultadas para ello o soliciten crédito a la banca de desarrollo para el financiamiento de sus actividades, en contravención a lo dispuesto por el CIPEDF; d) Aceptar donativos o aportaciones económicas superiores a los límites señalados por el CIPEDF y el Consejo General; e) No presentar los informes anuales en los términos y plazos previstos en el CIPEDF; f) No aportar o dificultar el acceso o los elementos requeridos por la autoridad electoral para la fiscalización de los recursos; g) No anexar los estados financieros o cualquier otro elemento requerido por la autoridad para revisión de los informes anuales y h) Por inobservar las disposiciones del CIPEDF y realizar conductas contrarias a la democracia o al propósito de las normas a que están sujetos. Las sanciones susceptibles de ser aplicadas con motivo de la irregularidad determinada, previa valoración de los elementos objetivos del caso, pueden consistir en: a) Multa de 50 hasta 5 mil días de salario mínimo vigente para el Distrito Federal; b) Multa de 10 mil hasta 50 mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal; c) Reducción del 1% al 50% de las ministraciones mensuales del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; d) Suspensión total de la entrega de las ministraciones mensuales del financiamiento que les corresponda, por el periodo que señale la resolución y e) Cancelación de su registro como partido político local.

2) Informes de selección Interna de candidatos, que de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 266 fracción II del CIPEDF y 103 del Reglamento de Fiscalización para los partidos políticos, serán presentados en dos etapas a saber: a) Dentro de los cinco días siguientes a la conclusión del proceso de selección interna de candidatos, en donde se deberá presentar de forma consolidada el informe correspondiente a precandidatos ganadores, subdividido por candidaturas, el cual deberá contener la información relativa al origen, destino y monto de los recursos utilizados y b) junto con el informe anual al que se refiere el párrafo anterior, se deberá presentar otro de precandidatos perdedores subdividido igualmente por candidaturas, el cual deberá considerar la información relativa al origen, monto, destino de los recursos. De conformidad a lo dispuesto en el artículo 231 del

CIPEDF, los partidos políticos durante los periodos de precampaña se encuentran impedidos para: a) Recibir cualquiera de las aportaciones prohibidas por el CIPEDF; b) rebasar el tope máximo de gastos de precampaña establecido y c) emplear o utilizar recursos, en dinero o en especie, por sí o a través de interpósita persona, cualquiera que sea su origen, antes de que inicie la precampaña.

Independientemente de las sanciones para los candidatos, particulares o partidos políticos, si con motivo de la revisión que realice la UTEF a los informes de los precandidatos ganadores, se acredita en el dictamen correspondiente el rebase al tope máximo de gastos de precampaña en contraposición a lo señalado en los artículos 232 fracción I y 377 fracción VI del CIPEDF, éste puede dar lugar a que los partidos políticos se encuentren impedidos para registrar como candidato al precandidato que haya resultado ganador en la precampaña, al no poder cumplir con uno de los requisitos para el registro de la candidatura dispuesto en el artículo 299 fracción II inciso f) del CIPEDF.

3) Informes de campaña, que de conformidad a lo dispuesto en los artículos 266 fracción III del CIPEDF y 106 del Reglamento de Fiscalización para los partidos políticos tienen que presentarse a más tardar dentro de los sesenta días hábiles posteriores al día siguiente en que concluyan las campañas electorales, debiendo para el efecto incluir por cada una de las campañas en que haya participado el partido político o coalición, la información relativa al origen de los recursos que se utilizaron como la totalidad de los gastos en que se hubiera incurrido o que hubiesen estado relacionados con estas dentro del período comprendido entre la fecha de inicio y hasta la conclusión de las campañas electorales.

En su caso, las irregularidades vertidas en el dictamen que emite la UTEF, resultado de la revisión de los informes, sólo son sancionables en términos de lo dispuesto en el catálogo de sanciones establecido en el artículo 379 del CIPEDF ya que la resolución que emite el Consejo General es acordado con posterioridad a la fecha en que los candidatos ganadores han rendido protesta y/o asumido el

cargo para el cual fueron electos aun cuando en la especie se haya identificado un rebase en el tope de campaña.

La anterior situación, pone en evidencia la desarticulación existente entre la fecha de dictaminación y resolución de los informes de campaña y las fechas en que el candidato ganador toma posesión o rinde protesta en el cargo para el que fue electo, sin que los resultados de la revisión de los informes de campaña puedan incidir objetivamente en los resultados de la contienda electoral, ya que los mismos son emitidos extemporáneamente, lo que genera en consecuencia que no tengan incidencia alguna en validez procedimental en el proceso electoral, lo que sólo da lugar a la aplicación de una sanción pecuniaria por las irregularidades que en su caso sean determinadas por parte de la autoridad electoral local.

4) Informes sobre el origen, destino y monto de los recursos utilizados por las agrupaciones políticas locales en el Distrito Federal para la obtención del registro legal como partido político, los cuales de conformidad a lo establecido en el último párrafo del artículo 214 del CIPEDF y artículos 44 y 45 del Reglamento del Instituto Electoral del Distrito Federal (Reglamento de Fiscalización para las agrupaciones políticas locales interesadas en obtener el registro legal como Partido Político), son presentados de forma mensual dentro de los primeros diez días naturales de los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio y primeros cinco días del mes de julio contados a partir de la notificación que la agrupación política local realice al IEDF del propósito de constituirse como partido político local.

En términos de lo dispuesto en el artículo 62 inciso d), del Reglamento del Instituto Electoral del Distrito Federal para la Fiscalización de los Recursos de las Agrupaciones Políticas Locales Interesadas en Obtener el Registro Legal como Partido Político Local, la UTEF en los resultados de los informes presentados por las agrupaciones políticas locales, deberá señalar puntualmente si existió rebase o no al límite de los recursos utilizados establecido por el Consejo General.

Lo anterior reviste especial importancia, toda vez que de acuerdo a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 216 del CIPEDF, la violación a los criterios de

fiscalización y montos máximos establecidos para utilizarse en el desarrollo de sus actividades tendientes a la obtención del registro legal como partido político, son causales suficientes para la negativa inmediata del registro.

Tratándose de las sanciones susceptibles a aplicar por la determinación de irregularidades por parte de la UTEF, en términos del artículo 379 fracción II del CIPEDF, éstas pueden consistir desde la suspensión de su registro como agrupación política por el periodo que señale la resolución, en cuyo caso no será menor a cuatro meses ni mayor a un año hasta la determinación de la pérdida de su registro como tal.

5) Solicitudes de investigación respecto de hechos presuntamente constitutivos de un rebase a los topes de gastos de precampaña o campaña, las cuales de conformidad a lo establecido en el artículo 90 fracción VIII y 271 del CIPEDF son competencia de la UTEF, y de acuerdo al artículo 32 del Reglamento del Instituto Electoral del Distrito Federal para el Trámite, Sustanciación y Dictamen de los Procedimientos Administrativos de Investigación relativos al Rebase de Topes de Gastos de Precampaña y Campaña son presentadas por escrito dentro de los tres días siguientes a la conclusión de las precampañas y campañas.

   Tomando en consideración la falta de oportunidad en la revisión de los informes de campaña presentados por los partidos políticos, los dictámenes emitidos por la UTEF una vez aprobados por el Consejo General, al amparo de lo dispuesto en el artículo 59 fracción IV inciso b), se erigen como los resultados de los medios de revisión preventiva a los que se refiere el artículo 88 fracción VI de la Ley Procesal Electoral para el Distrito Federal (Ley Procesal) y se constituyen por su propia y especial naturaleza, en caso de rebase de los topes de gasto de campaña, en una de las causales de nulidad de la elección.

   No obstante lo anterior, dicha declaración de nulidad deberá ser resuelta por el órgano jurisdiccional competente, tomando para el efecto que las causas invocadas hayan sido plenamente acreditadas y hayan sido determinantes para el resultado de la elección.

Aun cuando en el rebase de topes de gastos de campaña se encuentra establecido como causal de nulidad de la elección, esta determinación quedará sujeta a la resolución que emita el órgano jurisdiccional local, quien en términos del artículo 89 de la Ley Procesal, deberá valorar previo a su resolución, si durante el proceso electoral existió una violación sustancial a los principios rectores de la función electoral, condición que genera falta de certeza respecto de la determinación del rebase de los topes de campaña en la declaración de nulidad de una elección.

6) Según lo establece el artículo 333, párrafo primero del CIPEDF, es derecho exclusivo de los ciudadanos mexicanos participar como observadores de los actos y desarrollo de los procesos electorales y de participación ciudadana, desde la etapa de su preparación hasta la calificación de las elecciones, en la forma y términos en que determine el Consejo General para cada proceso electoral.

Para el ejercicio de este derecho, el párrafo primero del artículo 334 del CIPEDF establece que los ciudadanos del Distrito Federal interesados deberán presentar en forma personal ante el consejero presidente del Consejo Distrital correspondiente a su domicilio, la solicitud de registro para participar como observador electoral.

Tratándose de organizaciones de ciudadanos, se presentarán solicitudes individuales ante el consejero presidente del Consejo General, a partir del inicio del proceso electoral y hasta el 31 de mayo del año de la elección. Del 1 al 15 de junio del año electoral se podrá solicitar registro para participar como observador tan sólo por lo que hace a la etapa de la jornada electoral.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 335 fracción VI del CIPEDF, las organizaciones a las que pertenezcan los observadores electorales al presentar la solicitud de registro de sus miembros, deberán declarar el origen, monto y aplicación del financiamiento que obtengan para el desarrollo de sus actividades de observación electoral, conforme a los lineamientos y bases técnicas

establecidas en la convocatoria que al efecto publique el Consejo General del IEDF. El informe será presentado a más tardar treinta días después de la jornada electoral a la UTEF, de forma impresa y en medio magnético; además, deberá estar suscrito por el representante legal de la organización de observadores.

La UTEF contará con veinte días hábiles para revisar los informes presentados por las organizaciones de observadores y elaborar un dictamen consolidado respecto de la verificación del informe de cada organización de observadores.

En el supuesto de que la UTEF determine irregularidades en el dictamen, derivadas del incumplimiento a la obligación establecida en el artículo 335 fracción VI del CIPEDF, presentará al Consejo General, previa opinión de la Comisión Permanente de Fiscalización, un proyecto de resolución de la sanción a aplicarse en términos del artículo 380 del CIPEDF.

7) Con fundamento en el artículo 90 fracción XVII del CIPEDF la UTEF, tiene como atribución además de las relacionadas puntualmente en el artículo de cuenta, aquellas que le confiere adicionalmente el propio Código Electoral local y la normatividad interna del IEDF; en este contexto y de conformidad a lo establecido en el artículo 24 del Reglamento del Instituto Electoral del Distrito Federal, para el Trámite, Sustanciación y Resolución de los Procedimientos Administrativos Sancionadores, (Reglamento para el Trámite, Sustanciación y Resolución de los Procedimientos Administrativos Sancionadores) la Comisión de Fiscalización podrá iniciar de oficio o a instancia de parte procedimientos administrativos sancionadores.

Los procedimientos sancionadores electorales pueden ser ordinarios o especiales. Los ordinarios son aquellos que tienen por objeto el conocimiento de las faltas y la aplicación de sanciones administrativas relacionadas con la comisión de conductas infractoras de los sujetos obligados establecidas en el CIPEDF. En tanto, que el procedimiento especial sancionador se sustancia respecto de las conductas contrarias a la norma electoral que cometen los partidos políticos, sus miembros y personas relacionadas con sus actividades.

En materia de fiscalización, de acuerdo al artículo 48 fracción V, el procedimiento sancionador se instrumenta al incumplimiento de las obligaciones en materia de financiamiento y fiscalización, respecto el origen, monto, destino manejo y comprobación de la utilización de los recursos de las asociaciones políticas, los cuales son sustanciados por la UTEF de conformidad a lo dispuesto en el artículo 374 del CIPEDF el cual establece que las comisiones contarán con el apoyo de la unidad técnica competente para el cumplimiento del procedimiento, sus plazos y formalidades.

De acuerdo con el último párrafo del artículo 52 del Reglamento de Procedimientos Administrativos Sancionadores, es la UTEF la responsable de someter el proyecto de resolución correspondiente a la opinión de la Comisión de Fiscalización, para su posterior envío a la Secretaría Ejecutiva del IEDF para su aprobación. Las sanciones a aplicarse se refieren a aquellas que se encuentran dispuestas en los artículos 379 y 380 del CIPEDF.

8) De acuerdo con el artículo 1 del Reglamento del Instituto Electoral del Distrito Federal para la Liquidación del Patrimonio de las Asociaciones Políticas, (Reglamento para la Liquidación) dicho instrumento normativo tiene por objeto regular el procedimiento de control, vigilancia y liquidación del patrimonio de las asociaciones políticas en el Distrito Federal, derivado de la pérdida o cancelación de su registro y de la terminación de sus derechos y prerrogativas establecidas en la Constitución Política, el Estatuto de Gobierno y el CIPEDF.

En el reglamento dispone que la UTEF debe iniciar el procedimiento de liquidación de la representación local del instituto político mediante la prevención, a partir de que el (INE) haya iniciado dicha etapa o la liquidación federal, para lo cual la autoridad fiscalizadora local deberá, dentro de las 24 horas siguientes: a) informar a los consejeros electorales integrantes de la Comisión de Fiscalización y al Secretario Ejecutivo, del inicio de la prevención y b) designar previa opinión favorable de la Comisión de Fiscalización de entre una terna propuesta por la UTEF y en caso de no ser aprobada, desplegar el procedimiento de insaculación

del listado de Especialistas de Concursos Mercantiles con registro vigente en el Instituto Federal de especialistas de Concursos Mercantiles del Poder Judicial de la Federación, debiendo notificar por escrito la designación realizada al especialista.

Una vez designado al interventor, éste cuenta con amplias facultades para actos de administración y dominio, para lo cual deberá iniciar el procedimiento de liquidación del patrimonio del partido político, instrumentando tanto la reserva como la liquidación de los mismos, para que una vez concluida, se proceda en términos del artículo 48 del Reglamento para la Liquidación.

Existe una situación excepcional a la obligatoriedad de emitir dictamen o proyecto de resolución en la fiscalización de los informes que presentan los partidos políticos, y se refiere a la revisión de los informes trimestrales de avance del ejercicio presentados por los partidos políticos, los cuales de acuerdo con el último párrafo del artículo 266 del CIPEDF y artículo 104 del Reglamento de Fiscalización para los Partidos Políticos, deberán ser presentados a más tardar dentro de los treinta días siguientes a la conclusión del trimestre que corresponda, en el ejercicio en el que se realice la jornada electoral, y en los mismos serán reportados el resultado de los ingresos y gastos ordinarios que los partidos políticos hayan obtenido y realizado durante el periodo que corresponde.

Las funciones del titular y de las direcciones de área se encuentran establecidas en el Manual de Organización y Funcionamiento del Instituto Electoral del Distrito Federal JA-021-11[51] y las mismas consisten en:

Titular de la UTEF: 1) Organizar el funcionamiento de las áreas y del personal que integra la estructura de la unidad a su cargo; 2) elaborar y remitir a la Junta Administrativa, previa opinión de la Comisión de Fiscalización el proyecto de Programa Anual de Fiscalización; 3) establecer mecanismos para instrumentar el Programa de Fiscalización e informar trimestralmente al Consejo General, sobre el

[51] (IEDF). www.iedf.org.mx

avance en su cumplimiento; 4) diseñar los dictámenes de los informes presentados por las asociaciones políticas, sobre el origen y destino de sus recursos anuales, campaña, precampaña e investigaciones, así como los relativos a los informes de las agrupaciones políticas locales, interesadas en constituirse como partido político local: 5) formular los proyectos de resolución respecto de las irregularidades consignadas en el dictamen que recaiga a la revisión de los informes que las asociaciones políticas presenten sobre el manejo de sus recursos: 6) autorizar los programas y guías de auditoría relativas a los rubros que conforman los informes anuales, campaña, precampaña e investigaciones, así como los relativos a los informes de las agrupaciones políticas locales, interesadas en constituirse como partido político local; 7) auxiliar en los procedimientos de investigación que substancia la Comisión de Fiscalización; 8) someter a la consideración de la Comisión de Fiscalización los anteproyectos de reglamento de carácter técnico jurídico para que las asociaciones políticas presenten sus informes sobre el origen, destino y monto que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación; 9) coordinar y dirigir la revisión de los informes anuales, campaña, precampaña e investigaciones, así como los relativos a los informes de las agrupaciones políticas locales, interesadas en constituirse como partido político local; 10) vigilar que los recursos sobre el financiamiento que ejerzan las asociaciones políticas, se apliquen correctamente; 11) practicar visitas de verificación al domicilio de las asociaciones políticas con el fin de corroborar el cumplimiento de las obligaciones y la veracidad de los informes presentados; 12) instruir la elaboración de los dictámenes favorables de no rebase de topes de campaña; 13) establecer canales de comunicación para el intercambio de información con el (INE); 14) dar a las asociaciones políticas la orientación y asesoría necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones en materia de fiscalización; 15) solicitar a las autoridades de los tres ámbitos de gobierno, las instituciones financieras y todas las personas físicas y morales, la información que se encuentre en su poder y que sean necesarias para comprobar el cumplimiento y la veracidad de los informes que presenten las asociaciones políticas; 16) dirigir y supervisar la elaboración del Programa Operativo Anual y el

anteproyecto de Presupuesto de la Unidad, y 17) desarrollar aquellas funciones inherentes al ámbito de su competencia.

Dirección de Fiscalización: 1) Supervisar la planeación y la elaboración del Programa Anual de Fiscalización así como en la elaboración del cronograma y presupuesto; Coordinar la elaboración del informe mensual sobre el seguimiento y evaluación del Programa Anual de Fiscalización; 2) supervisar la elaboración de los programas y guías de auditoría relativas a los rubros que conforman los informes anuales y los de precampaña y de gastos de campaña de las asociaciones políticas; 3) supervisar la elaboración de los reglamentos de carácter técnico jurídico, para que las asociaciones políticas presenten sus informes sobre el origen, destino y monto que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación. Asimismo, para que lleven el registro contable de sus ingresos y egresos de la documentación comprobatoria sobre el manejo de sus recursos; 4) coordinar y supervisar la revisión de los informes anuales, campaña, precampaña e investigaciones, así como los relativos a los informes de las agrupaciones políticas locales, interesadas en constituirse como partido político local; 5) vigilar que los recursos sobre el financiamiento que ejerzan las asociaciones políticas, se apliquen invariablemente a las actividades señaladas en la ley de la materia; 6) coordinar y supervisar la realización de las visitas de verificación en los domicilios de las asociaciones políticas con el fin de corroborar el cumplimiento de sus obligaciones y la veracidad de sus informes; 7) aprobar las solicitudes de información que se realicen al (INE) derivadas de los procedimientos de revisión de los informes presentados por las asociaciones políticas en el ámbito de su competencia de conformidad con los convenios de colaboración que se signen para tal efecto; 8) coordinar la elaboración de los proyectos de los dictámenes consolidados derivados de las revisiones practicadas a los informes anuales, campaña, precampaña e investigaciones, así como los relativos a los informes de las agrupaciones políticas locales, interesadas en constituirse como partido político local; 9) supervisar el otorgamiento de la orientación y asesoría a las asociaciones políticas en materia de fiscalización para

el cumplimiento de sus obligaciones; 10) planear, coordinar y supervisar en los términos de los acuerdos del Consejo General, la práctica de auditorías y/o investigaciones especiales, así como por el presunto rebase a los topes de gastos de campaña y precampaña; 11) integrar el Programa Operativo Anual y el anteproyecto de Presupuesto de la Unidad, y presentarlo al titular de la unidad técnica; 12) coordinar la elaboración de los anteproyectos de los dictámenes favorables de no rebase de topes de gastos de campaña de los partidos políticos, y 13) desarrollar aquellas funciones inherentes al ámbito de su competencia.

Dirección de Proyectos y Resoluciones: 1) Supervisar la planeación y la elaboración del Programa Anual de Fiscalización así como en la elaboración del cronograma y presupuesto. Asimismo, participar en la elaboración del informe mensual sobre el seguimiento y evaluación del Programa Anual de Fiscalización; 2) coordinar la formulación de los proyectos de acuerdo que presente la Unidad Técnica al Consejo General; 3) coordinar la orientación que deba darse a las asociaciones políticas sobre la aplicación de la normatividad en materia de fiscalización; 4) coordinar y formular las respuestas a los comunicados o consultas realizadas por las asociaciones políticas en materia de fiscalización; 5) participar en los procesos de fiscalización de las asociaciones políticas brindando apoyo jurídico para la acreditación de las irregularidades determinadas en el dictamen consolidado; 6) coordinar la sustanciación de los procedimientos de investigación de campaña y precampaña electorales; 7) coordinar la participación del personal a su cargo en los procesos de fiscalización a las asociaciones políticas; 8) examinar los aspectos técnico-jurídicos relacionados con los informes anuales de las asociaciones políticas, los informes de gastos de campaña y de precampaña que presenten los partidos políticos; 9) coordinar el apoyo jurídico a la Dirección de Fiscalización en la elaboración de los anteproyectos de reglamentos de carácter técnico-jurídico, para que las asociaciones políticas presenten sus informes sobre el origen, destino y monto que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación. Asimismo, para que lleven el registro contable de sus ingresos y egresos de la documentación

comprobatoria sobre el manejo de sus recursos; 10) asesorar a la Dirección de Fiscalización, para que se aplique la normatividad en la materia, en la elaboración de los oficios relativos a la notificación de observaciones; 11) coordinar la elaboración de los proyectos de resolución del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal, derivados de los dictámenes consolidados y de los dictámenes favorables de no rebase de topes de campaña, así como los relativos a los informes de las agrupaciones políticas locales interesadas en constituirse como partido político local; 12) coordinar y formular la realización de las actividades técnico-jurídicas que sean encomendadas a la Unidad Técnica; 13) desahogar los requerimientos formulados por el (TEDF), con motivo de las impugnaciones interpuestas por las asociaciones políticas en contra de los acuerdos y resoluciones aprobados por el Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal en materia de fiscalización y 14) desarrollar aquellas funciones inherentes al ámbito de su competencia.

La fiscalización de los recursos de los partidos políticos ubica desde su planeación, como se podrá identificar en el Capítulo V, en el programa relativo al "Fortalecimiento del Régimen de las Asociaciones Políticas" y es desplegada por la UTEF en coordinación con la Comisión de Fiscalización, la primera adscrita y la segunda como órgano auxiliar del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal.

Ambas instancias al encontrarse adscritas y auxiliando al Consejo General, se encuentran obligadas en su actuar a la aplicación irrestricta de los principios rectores de la función electoral a los que se refieren los artículos 3 y 18 fracción I del CIPEDF, debiendo cumplir en consecuencia los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y equidad, además de los de transparencia y publicidad procesal a los que se encuentran obligados las autoridades electorales en el Distrito Federal.

2.2 Tribunal Electoral del Distrito Federal

El TEDF es el órgano autónomo y máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral, dotado de plena jurisdicción, que tiene a su cargo garantizar que todos los actos y resoluciones electorales y de los procedimientos de participación ciudadana en el Distrito Federal se sujeten al principio de legalidad y su creación al igual que el IEDF surgió de la aprobación del dictamen por el que se creó el Código Electoral del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 5 de enero de 1999 y la ALDF le atribuyó competencia para conocer de los juicios para la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos, a partir del 19 de octubre de 2005.

Dicha naturaleza jurídica deviene de lo dispuesto en el artículo 122, apartado C, base primera, fracción V, inciso f), y de los incisos c) y d) de la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política ya que el TEDF, al igual que los creados en otras entidades federativas, se instituye como la máxima autoridad local jurisdiccional en la materia y como un órgano autónomo en su funcionamiento e independiente en sus decisiones, sujeto a los principios de la función electoral.

Este órgano colegiado se distingue por su carácter permanente, esto es, el tribunal funciona también en asuntos que le compete sustanciar y que no se circunscriben a los periodos de elecciones y de participación ciudadana.

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 54, 129, 130 y 131 del Estatuto de Gobierno, el 5 y 6 de su Reglamento Interior, así como 157 del CIPEDF y 5 Ley Procesal, el TEDF, tiene atribuciones para sustanciar y resolver en forma definitiva e inatacable, las controversias sometidas a su competencia, a través de los medios siguientes: 1) Los juicios relativos a las elecciones de Jefe de Gobierno, diputados a la Asamblea Legislativa y jefes delegacionales; 2) los juicios por actos y resoluciones de las autoridades electorales en los procedimientos de participación ciudadana que expresamente establezcan en el código y la ley de la

materia local; 3) los juicios para salvaguardar los derechos político-electorales de los ciudadanos, en contra de las determinaciones de las autoridades electorales locales, así como de las asociaciones políticas; 4) los conflictos laborales entre el Tribunal Electoral y sus servidores, por conducto de la Comisión de Conciliación y Arbitraje y 5) los demás juicios por actos y resoluciones de las autoridades electorales del Distrito Federal, incluyendo aquéllos por los que se determinen la imposición de sanciones.

El sistema de medios reconocidos por la normatividad electoral local, tiene por objeto garantizar que los actos de las autoridades electorales del Distrito Federal se sujeten al principio de legalidad.

El sistema de medios de impugnación tiene por objeto garantizar: I. Que los actos y resoluciones electorales se sujeten al principio de legalidad; II. La legalidad de los actos, acuerdos o resoluciones del Jefe de Gobierno, de la Asamblea Legislativa, del Instituto o de cualquier otra autoridad, para salvaguardar los resultados vinculatorios del plebiscito, del referéndum o el trámite de la iniciativa popular; III. La definitividad de los distintos actos y etapas de los procesos electorales, de los procesos de participación ciudadana y IV. La salvaguarda, validez y eficacia de los derechos político-electorales de los ciudadanos.

La propia legislación procesal electoral local reconoce en su artículo 11 que el sistema de medios de impugnación se integra por el juicio electoral y el juicio para la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos.

Es necesario señalar que el juicio electoral tiene por objeto garantizar la legalidad de todos los actos, acuerdos y resoluciones que dicten las autoridades electorales, en los términos señalados en el código y en la ley procesal, y es aplicable fuera y durante los procesos electorales o de participación ciudadana ordinaria y extraordinaria, y se interpone en contra de actos, resoluciones u omisiones de los órganos, unidades o del Consejo General del Instituto y puede ser promovido por: 1) Los partidos políticos o coaliciones con interés legítimo, siempre y cuando no

exista afectación al interés jurídico de un titular de derechos, en cuyo caso sólo este se encontrará legitimado para impugnar; 2) por las asociaciones políticas o coaliciones por violaciones a las normas electorales, cuando hagan valer presuntas violaciones a sus derechos; 3) por los ciudadanos y las organizaciones de ciudadanos, a través de sus representantes acreditados, en contra de actos, resoluciones u omisiones de los órganos, unidades, consejos distritales o del Consejo General del Instituto por violaciones a las normas de participación ciudadana, exclusivamente dentro de dichos procesos; 4) por los partidos políticos, cuando reclamen violaciones al principio de legalidad; 5) por los partidos políticos y coaliciones en contra de los cómputos totales y entrega de constancias de mayoría o asignación en las elecciones reguladas por el código y 6) en los demás casos, que así se desprendan del código y la ley local.

El juicio para la protección de los derechos político–electorales de los ciudadanos en el Distrito Federal, tiene por objeto la protección de los derechos político-electorales, cuando el ciudadano por sí mismo y en forma individual, haga valer presuntas violaciones, entre otros, a los derechos siguientes: 1) Votar y ser votado; 2) asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos de la ciudad; 3) afiliarse libre e individualmente a las asociaciones políticas, siempre y cuando se hubieren reunido los requisitos constitucionales y los que se señalan en las leyes; 4) en contra de actos o resoluciones de las autoridades partidistas durante los procesos internos de elección de dirigentes y de candidatos a puestos de elección popular y 5) en controversias que se susciten entre diversos órganos partidistas en el Distrito Federal.

El juicio podrá ser promovido por los ciudadanos con interés jurídico en los casos siguientes: 1) Cuando consideren que el partido político o coalición, a través de sus dirigentes u órganos de dirección, violaron sus derechos político–electorales de participar en el proceso interno de selección de candidatos o de ser postulados como candidatos a un cargo de elección popular, por trasgresión a las normas de

los estatutos del mismo partido o coalición; 2) que se violó su derecho político-electoral de ser votado cuando, habiendo sido propuesto por un partido político, le sea negado indebidamente su registro como candidato a un cargo de elección popular; 3) en los procesos electorales, si también el partido político interpuso el juicio electoral por la negativa del mismo registro, el instituto remitirá el expediente para que sea resuelto por el Tribunal, junto con el juicio promovido por el ciudadano; 4) cuando habiéndose asociado con otros ciudadanos para tomar parte en forma pacífica en asuntos políticos, conforme a las leyes aplicables, consideren que se les negó indebidamente su registro como agrupación política; 5) cuando estando afiliado a un partido político o agrupación política, considere que un acto o resolución de los órganos partidarios o de la agrupación responsables, es violatorio de cualquiera de sus derechos político-electorales y 6) considere que los actos o resoluciones de la autoridad electoral son violatorios de cualquiera de sus derechos político-electorales.

Tomando en consideración que los dictámenes y resoluciones que emite la UTEF del IEDF en materia de fiscalización de los recursos a los partidos políticos, en términos de los artículos 35 fracción XIII y 268 fracción VII del CIPEDF requieren de la aprobación del Consejo General, dichos actos son susceptibles de ser impugnados, ante la autoridad jurisdiccional electoral local, condición que refiere la participación de la autoridad jurisdiccional respecto de los dictámenes o resoluciones que son emitidos en materia de fiscalización o quejas en el ámbito de las atribuciones por parte de la UTEF, y del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal como máxima autoridad administrativa en la materia.

La autoridad electoral jurisdiccional local para el cumplimiento de sus atribuciones en cuanto a su organización, conforme al artículo 144 del CIPEDF se integra por: 1) Pleno; 2) órganos ejecutivos: la Secretaría General y la Secretaría Administrativa; 3) ponencias; 4) órganos auxiliares: Coordinaciones y el Centro de Capacitación; 5) la Contraloría General y 6) Dirección General Jurídica.

El pleno es el órgano superior de dirección y se integra por cinco magistrados electorales, uno de los cuales funge como presidente y funciona como órgano colegiado en sesiones públicas o reuniones privadas, según lo disponga el CIPEDF, en donde todas sus decisiones son tomadas por mayoría de votos.

Finalmente, el TEDF y el IEDF en tanto que son concebidas como autoridades electorales, se encuentran obligadas a regir su actuar en apego a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y equidad, además de los de transparencia y publicidad procesal a los que se refieren los artículos 3 y 18, fracción I del CIPEDF.

Haber presentado la estructura organizacional de la UTEF, así como contar con el conocimiento de sus facultades, nos permite saber también de sus alcances, de la oportunidad con la que por norma, lleva a cabo sus funciones; la materia sobre la cual aplica las mismas se analizará en el próximo capítulo.

CAPÍTULO 3

LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN EL DISTRITO FEDERAL Y SU FINANCIAMIENTO.

Es fundamental reconocer que el estudio de las competencias de las autoridades electorales locales y de los principios que rigen su actuar en materia de fiscalización resultaría incompleto si no atendemos dos aspectos que inciden directamente en dicha actividad: los partidos políticos y el financiamiento que reciben para el cumplimiento de sus objetivos.

La afirmación anterior, deriva de la importancia que tienen los partidos políticos, quienes se constituyen como el principal mecanismo para decidir quienes, en un mundo consensuado, jugarán el rol de gobernados y de gobernantes; en lo que respecta a la fiscalización, sus resultados incidirán directamente en los niveles de

legalidad y legitimidad que se otorga a los roles asumidos, así como en la confianza, afección y reconocimiento social que se da al Estado democrático, sus instituciones y sus gobernantes.

Inicialmente precisaremos que etimológicamente los vocablos partido y político derivan de *pars* parte y *polis* ciudad, es decir parte de la colectividad política que interviene en la vida del gobierno del Estado.[52]

Para Max Weber los partidos políticos constituyen formas de socialización que descansado en un reclutamiento formalmente libre, y tienen como fin proporcionar poder a sus dirigentes dentro de una asociación y otorgar por este medio a sus miembros activos, determinadas probabilidades ideales o materiales, la realización de fines, objetivos o el logro de ventajas personales o ambas cosas.[53]

Giovanni Sartori señala que los partidos son conductos de expresión, es decir, pertenecen en primer lugar y por encima de todo, a los medios de representación. Son un instrumento o una agencia para representar al pueblo al expresar sus exigencias. Expresan, organizan y representan al pueblo, a la sociedad, a los ciudadanos, de tal suerte que se convierten en un eslabón indispensable del proceso democrático representativo. Son así, canalizadores de intereses sociales y puente con las esferas del poder público.[54]

Por su parte, los representantes de la teoría funcionalista La Palombara y Weiner, establecen que los partidos políticos poseen cuatro condiciones básicas: a) una organización duradera, cuya esperanza de vida sea superior a la de sus dirigentes; b) una organización local aparentemente duradera que mantenga relaciones regulares y variadas con el nivel nacional; c) la voluntad deliberada de sus dirigentes nacionales y locales de dar y ejercer el poder, solos, o con otros, y

[52] BERLÍN VALENZUELA, Francisco Diccionario Universal de Términos Parlamentarios Instituto de Investigaciones Legislativas Ed. Porrúa México 1997, p. 718.
[53] WEBER, Max *Economía y Sociedad*, FCE México 1992, p. 134.
[54] SARTORI, Giovanni, Partido y Sistemas de Partidos, Ed. Alianza, Madrid, 1980, p. 17.

no sólo de influir sobre el poder; y, d) el deseo de buscar un apoyo popular a través de las elecciones o de cualquier otro medio.[55]

Según Jellinek, los partidos políticos son grupos formados bajo la influencia de convicciones comunes, concernientes a ciertos fines políticos que se esfuerzan en realizar.[56]

Por su parte Recasens Sichés opina que el partido político se constituye por un grupo de hombres y mujeres, que son ciudadanos en el pleno ejercicio de sus derechos cívicos y que legalmente se organizan en forma permanente para representar una parte de la comunidad social, con el propósito de elaborar y ejecutar una plataforma política y un programa nacional con un equipo gubernamental.[57]

Por otro lado Andrés Serra Rojas afirma que un partido político se constituye por hombres y mujeres que son ciudadanos en pleno ejercicio de sus derechos cívicos y que legalmente se organizan en forma permanente para presentar una parte de la comunidad social, con el propósito de elaborar y ejecutar una plataforma política y un programa nacional con un equipo gubernamental.[58]

Adalberto Agozino, estima que un partido político implica la continuidad, la extensión a nivel local y la permanencia de un sistema de organización de una parte, y la voluntad manifiesta y efectiva de ejercer directamente el poder, apoyándose sobre una base elitista o popular, militante o electoral tan grande como sea posible, por otra parte, por lo que será entonces una estructura relativamente reciente ligada a cierto umbral de desarrollo económico, social y político.[59]

---

[55] AGOZINO, Adalberto, op. cit. p. 259.
[56] MONTERO ZENDEJAS, Daniel, Derecho Político Mexicano, Ed. Trillas, México, 1991, p. 574.
[57] Ibídem p. 575.
[58] SERRA ROJAS, Andrés, Ciencia Política. La proyección Actual de la Teoría General del Estado Ed. Porrúa 15ª Ed México 1997, p. 169.
[59] AGOZINO, Adalberto, op cit., p. 261.

Carl J. Friederich citado por Bernardino Esparza, señala que los partidos políticos son un grupo de seres humanos que tienen una organización estable, con el objetivo de conseguir mantener para sus líderes el control del gobierno y con el objetivo ulterior de dar a los miembros del partido, por intermedio de tal control, beneficios y ventajas ideales o materiales.[60]

Finalmente, señalaremos que para Bernardino Esparza Martínez, el partido político puede considerarse como un conjunto de personas asociadas para favorecer en común el bien de la nación mediante la conquista del poder o la influencia sobre el mismo, vía la aplicación de determinados principios sobre los cuales todos están de acuerdo.[61]

En conclusión, los partidos políticos constituyen una organización permanente de ciudadanos, quienes expresando su voluntad libre de afiliación, participan de la ideología y acciones de dicho grupo, con la finalidad de sustentar la participación en la vida política del Estado, alcanzar un apoyo popular y garantizar el ejercicio de la democracia, inicialmente a través del acceso al control del poder público.

Por su propia naturaleza, los partidos políticos convienen nacer, crecer y desarrollarse con la sociedad civil, asimismo el proceso de voluntad política debe formarse de abajo hacia arriba; por lo anterior, es por lo que hay quienes consideran que se debe estimular el financiamiento privado, a fin de favorecer una mayor autonomía frente al Estado.

En este mismo sentido, Manuel Barquín considera que el financiamiento privado acerca más a los partidos políticos a sus bases, ya que para obtener más financiamiento deberá mantener un mayor contacto con sus simpatizantes y manifestarse de manera más receptiva a sus valores y opiniones, representando de esta manera más fidelidad a sus votantes.

---

[60] ESPARZA. MARTÍNEZ, Bernardino, Crisis Democrática de los Partido Políticos Ed Cárdenas 2da Ed. México 2000, p. 73.
[61] Ibídem.

En contrapartida se afirma que si se confía la vida de los partidos políticos a este tipo de financiamiento, ello puede dar como resultado que los grupos económicos poderosos decidan la orientación del partido, razón por la cual se insiste en la necesidad de señalar límite a los donativos, prohibirlos en ciertos casos, precisar la obligación de los partidos políticos de publicar informes sobre los ingresos y gastos y establecer mecanismos de control.[62]

Ahora bien, el artículo 41 constitucional, fracción I dispone que los partidos políticos son entidades de interés público; la Ley determinará las normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su intervención en el proceso electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden.

Asimismo, dicha disposición en su fracción II, establece que la ley garantizará que los partidos políticos, cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades, señalando las reglas a que se sujetará su financiamiento.

Por su parte en el artículo 116 fracción IV de la Constitución Política, en los incisos b), g), h), k) y n) refiere los principios y reglas que deben imperar en la materia electoral a nivel local en lo referente al rubro de financiamiento y su fiscalización, disponiendo que la autoridad electoral local deberá garantizar entre otros: 1) En el ejercicio de la función electoral, a cargo de las autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad; 2) los partidos políticos reciban, en forma equitativa, financiamiento público para sus actividades ordinarias permanentes y las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales. Del mismo modo se establezca el procedimiento para la liquidación de los partidos que pierdan su registro y el destino de sus bienes y remanentes; 3) se fijen los criterios para establecer los límites a las erogaciones de los partidos

[62] PATIÑO CAMARENA, Javier, Derecho Electoral Mexicano, Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM, Tercera edición 1996, pp. 283-284.

políticos en sus precampañas y campañas electorales, así como los montos máximos que tengan las aportaciones de sus militantes y simpatizantes; 4) se regule el régimen aplicable a la postulación, registro, derechos y obligaciones de los candidatos independientes, garantizando su derecho al financiamiento público y al acceso a la radio y la televisión en los términos establecidos en esta Constitución y en las leyes correspondientes y 5) se verifique, al menos, una elección local en la misma fecha en que tenga lugar alguna de las elecciones federales.

El artículo 3 de la Ley General de Partidos Políticos establece que estos son entidades de interés público con personalidad jurídica y patrimonio propios, con registro legal ante el Instituto Nacional Electoral o ante los Organismos Públicos Locales, y tiene como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder público.

Conforme al artículo 122, apartado C*,* Base primera, fracción V inciso f) de la Constitución Política, la ALDF está facultada para expedir las disposiciones que garanticen elecciones libres y auténticas en el Distrito Federal, mediante sufragio universal, libre, secreto y directo, sujetándose a las bases que establezca el Estatuto de Gobierno, las cuales cumplirán los principios y reglas establecidos en los incisos b), g), h), k) y n) de la fracción IV del artículo 116 constitucional.

El Estatuto de Gobierno, en el Título Sexto, Capítulo II, reconoce la naturaleza nacional y local de dichas organizaciones políticas, así como su derecho a recibir en forma equitativa financiamiento público para sus actividades ordinarias permanentes y las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales, así como las reglas a que se sujetará dicho mecanismo y los procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten. Asimismo, acorde con el artículo 127 del ordenamiento citado, el

IEDF tiene a su cargo, entre otras actividades las relativas a los derechos y prerrogativas de los partidos políticos.

El artículo 50 de la Ley General de Partidos Políticos dispone que estos tienen derecho a recibir, para desarrollar sus actividades, financiamiento público que se distribuirá de manera equitativa, conforme a lo establecido en el artículo 41, Base II de la Constitución, así como lo dispuesto en las constituciones locales.

En concordancia con lo anterior el artículo 35 del CIPEDF dispone, entre otras, como atribuciones del Consejo General del IEDF: a) Determinar el financiamiento público para los partidos políticos en sus diversas modalidades; b) Garantizar a estos el ejercicio de sus derechos y asignación de las prerrogativas que les corresponden; c) Determinar los topes máximos de gastos de campaña y precampaña y d) Sancionar las infracciones en materia administrativa electoral.

En este sentido, en lo que se refiere a la normatividad electoral local, el CIPEDF en su artículo 205, concibe a los partidos políticos como entidades de interés público que tienen por fin promover la organización y participación de los ciudadanos en la vida democrática; contribuir a la integración de los órganos públicos de elección popular; hacer posible como organizaciones de ciudadanos el acceso de éstos al ejercicio del poder público de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulen, mediante el voto universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible; y, formar ideologías y políticamente a los ciudadanos integrados a ellos, además de prepararlos para el ejercicio de los cargos de elección popular, así como para las labores de gobierno.

La autorización del financiamiento para el desarrollo de las actividades de los partidos políticos, se da a partir del reconocimiento constitucional y de la ALDF. Este derecho, se puntualiza como atribución del Consejo General del IEDF en el artículo 35 fracción XVIII y como prerrogativa de los partidos políticos en el 221 fracción III del CIPEDF.

El financiamiento de los partidos políticos tiene las modalidades de público y privado, especificando la prevalencia del primero sobre cualquier otro tipo de financiamiento.[63] Es importante mencionar que en términos de lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento de Fiscalización para los partidos políticos, todo el financiamiento recibido deberá registrarse contablemente y estar sustentado con la documentación comprobatoria correspondiente.

En contraposición al reconocimiento para recibir la prerrogativa del financiamiento sea este público o privado, el CIPEDF y el Reglamento de Fiscalización para los partidos políticos, disponen en sus artículos 247, 10 y 11 respectivamente, la prohibición en el Distrito Federal para realizar aportaciones, donativos, otorgar dinero o bienes en especie por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia a los siguientes: 1) Las personas jurídicas de carácter público, sean estas de la Federación, de los Estados, los Ayuntamientos o del (GDF) u Órganos Políticos-Administrativos, salvo los establecidos en la ley; 2) los servidores públicos, respecto de los bienes muebles e inmuebles y los recursos financieros y humanos que administren y se encuentren destinados para los programas o actividades institucionales; 3) los Partidos Políticos, personas físicas o jurídicas extranjeras; 4) los organismos internacionales de cualquier naturaleza; 5) los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión; 6) las personas morales mexicanas de cualquier naturaleza y 7) las personas no identificadas, con excepción de las obtenidas mediante colectas realizadas en mítines o en la vía pública.

Adicional a lo anterior, destaca que los partidos políticos no podrán solicitar créditos provenientes de la banca de desarrollo para sus actividades o en general recurso alguno proveniente de esa instancia.

Acorde con el artículo 188 del CIPEDF, los partidos políticos constituyen entidades de interés público, con personalidad jurídica y patrimonio propio que gozan de

[63] Véase artículos 245 y 246 del CIPEDF.

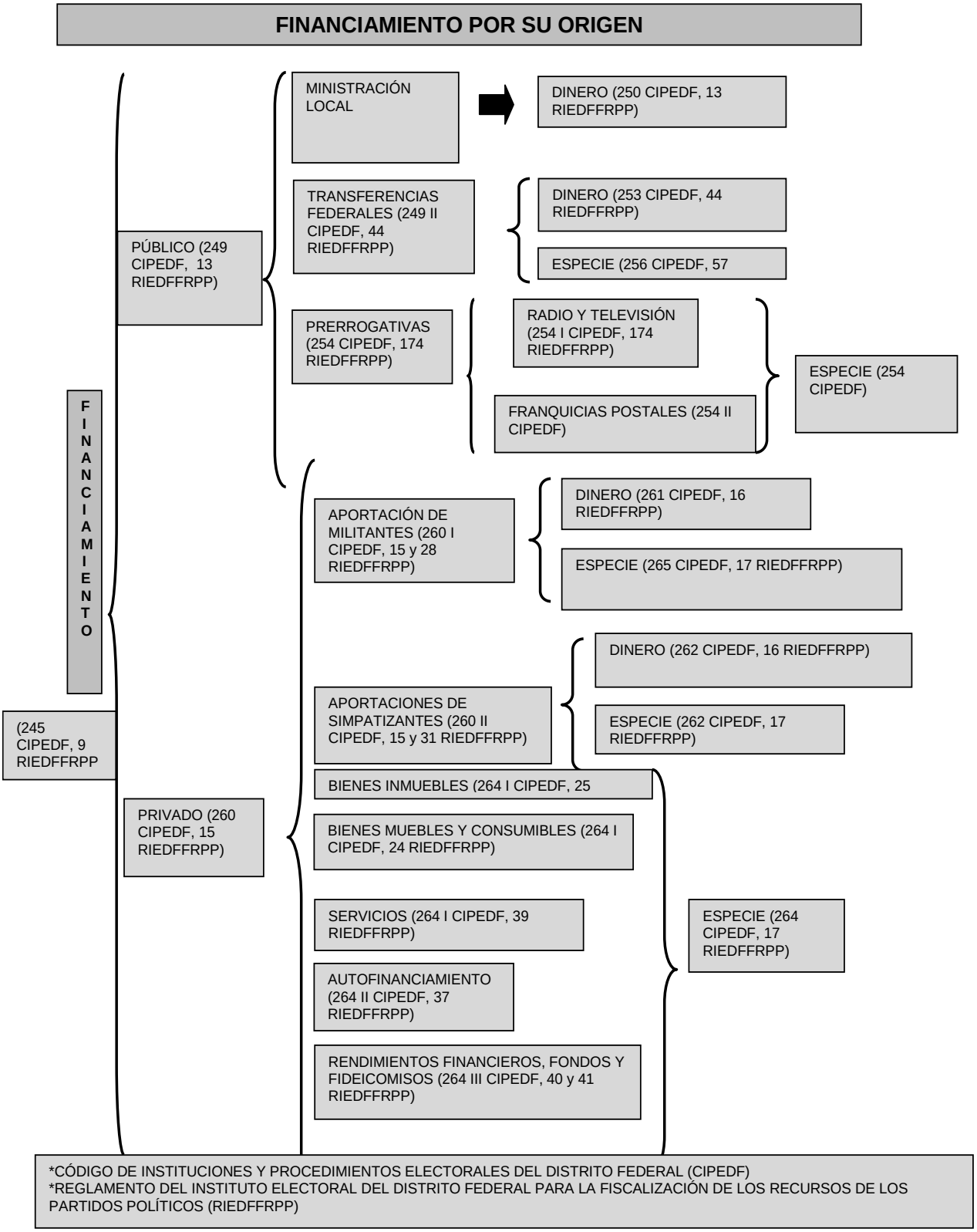
derechos y prerrogativas que la Ley les otorga, quedando para el efecto sujetos a las obligaciones que prevén dichos ordenamientos, entre ellas las de presentar los informes y la información que le sea requerida por la UTEF para su fiscalización.

Es importante mencionar que tanto el financiamiento público como el privado, en sus modalidades de dinero o especie, así como su uso, destino y aplicación (todos los ingresos y egresos de los partidos políticos) deben registrarse contablemente y estar sustentados con la documentación comprobatoria correspondiente, en términos de lo establecido en la normativa electoral.

En este contexto, para el estudio del financiamiento de los partidos políticos y de su marco regulatorio, es indispensable hacerlo a partir de dos consideraciones relevantes: a través de su clasificación desde el punto de vista del origen de los recursos, es decir público o privado y del uso, destino y aplicación autorizada, entre las cuales encontraremos las relativas a actividades ordinarias permanentes, gastos de campaña y actividades específicas.

En lo que respecta al origen de los recursos que integran el financiamiento de los partidos políticos, podemos identificarlos a través del siguiente esquema:

Figura 1.



Fuente: Elaboración propia con base en el CIPEDF y RIEDFFRPP.

3.1. Financiamiento

El financiamiento, es el recurso en dinero o en especie que reciben los Partidos Políticos para el desarrollo de sus actividades ordinarias, de campaña y específicas, respectivamente.[64]

3.1.1. Financiamiento público local

El artículo 249, fracción I del CIPEDF, reconoce el financiamiento público local de los partidos políticos como una de las modalidades del financiamiento público directo. Asimismo el artículo 250 del CIPEDF, señala que los partidos políticos que por sí mismos hubiesen obtenido al menos dos por ciento de la votación emitida en la elección de Diputados a la (ALDF) por el principio de representación proporcional, tienen derecho al financiamiento público de sus actividades, independientemente de las demás prerrogativas otorgadas en el CIPEDF.

De conformidad a lo dispuesto en los artículos 35 fracción XVI y 251, fracciones I y V del CIPEDF, para los ejercicios 2011, 2012, 2013 y 2014 el Consejo General determinó los montos del financiamiento público local para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos en el Distrito Federal, por las cantidades de $292'684,596.48, de $310´483,912.27, $325'475,067.24 y $343,926,657.72 respectivamente y distribuidos entre los partidos políticos tal y como lo muestran los siguientes cuadros:

Cuadro 16: Financiamiento otorgado 2011 a los partidos políticos

Partido Político	Financiamiento para Actividades Ordinarias Permanentes 2011
Partido Acción Nacional	$59´073,130.02
Partido Revolucionario Institucional	$50´257,996.81
Partido de la Revolución Democrática	$72´994,263.09
Partido del Trabajo	$36´868,730.18
Partido Verde Ecologista de México	$33´927,893.89
Convergencia (Ahora Movimiento Ciudadano)	$18´177,599.17
Nueva Alianza	$21´384,983.32
TOTAL	**$292´684,596.48**

FUENTE: Acuerdo ACU-07-11 del Instituto Electoral del Distrito Federal.www.iedf.org.mx

[64] Véase artículo 13 del Reglamento de Fiscalización para los Partidos Políticos.

Cuadro: 17 Financiamiento otorgado 2012 a los partidos políticos	
Partido Político	**Financiamiento para Actividades Ordinarias Permanentes 2012**
Partido Acción Nacional	$62,665,602.29
Partido Revolucionario Institucional	53,314,385.72
Partido de la Revolución Democrática	77,433,334.90
Partido del Trabajo	39,110,864.48
Partido Verde Ecologista de México	35,991,184.22
Movimiento Ciudadano	19,283,051.36
Nueva Alianza	22,685,489.31
TOTAL	**$310,483,912.27**

FUENTE: Acuerdo ACU-03-12 del Instituto Electoral del Distrito Federal.www.iedf.org.mx/index.php/boletines-y-cor

Cuadro 18: Financiamiento otorgado 2013 a los partidos políticos	
Partido Político	**Financiamiento para Actividades Ordinarias Permanentes 2013**
Partido Acción Nacional	$65´203,736.07
Partido Revolucionario Institucional	$60´108,033.32
Partido de la Revolución Democrática	$26´699,352.12
Partido del Trabajo	$23´503,772.81
Partido Verde Ecologista de México	$21´924,437.60
Movimiento Ciudadano	$23´791,753.15
Nueva Alianza	$21´384,983.32
TOTAL	**$325´475,067.24**

FUENTE: Acuerdo ACU-02-13 del Instituto Electoral del Distrito Federal.www.iedf.org.mx

Cuadro: 19 Financiamiento otorgado 2014 a los partidos políticos	
Partido Político	**Financiamiento para Actividades Ordinarias Permanentes 2014**
Acción Nacional	$68,900,217.79
Revolucionario Institucional	$63,515,633.25
De la Revolución Democrática	$110,153,704.49
Del Trabajo	$28,212,971.93
Verde Ecologista de México	$24,836,231.22
Movimiento Ciudadano	$23,167,361.51
Nueva Alianza	$25,140,537.53
TOTAL	**$343,926,657.72**

El financiamiento relativo a las actividades específicas como entes de interés público, es ministrado mensualmente por el IEDF, a través de transferencias electrónicas en cuentas aperturadas por los institutos políticos para el efecto.[65]

Para el caso de las ministraciones destinadas a campañas políticas, las cantidades que se determinen para cada partido político, son entregadas a los

[65]Véase artículo 13 del Reglamento de Fiscalización para los Partidos Políticos.

órganos de dirección local debidamente acreditados ante el IEDF en tres ministraciones, correspondientes al 60%, 20% y 20%, en la primera quincena de los meses de febrero, abril y junio, respectivamente.[66]

3.1.1.1 Transferencias de direcciones nacionales

El artículo 249, fracción II del CIPEDF, reconoce como una de las modalidades del financiamiento público de las representaciones locales, a las transferencias realizadas por los Órganos Directivos Nacionales de los partidos políticos, dichos recursos se obtienen del financiamiento público federal otorgados a estas.

De conformidad con el artículo segundo inciso C) numeral XCIX del Reglamento de Fiscalización para los partidos políticos, las transferencias son el traslado de recursos del financiamiento público federal que realiza el Órgano Directivo Nacional de un partido político a sus órganos locales o distritales en el Distrito Federal, ya sea en dinero o en especie, condicionado a la consecución de determinados objetivos a los que se encuentran sujetos, sin recibir contraprestación directa alguna.

El Reglamento de Fiscalización para los partidos políticos define a estas transferencias en el Título Tercero, Capítulo II “De las Transferencias de Recursos y Bienes”, estableciendo que el dinero transferido por los órganos directivos nacionales, deberá ser depositado en cuentas bancarias mancomunadas, abiertas específicamente para el efecto, dentro de los tres días hábiles siguientes a su recepción, las que deberán manejarse por el representante del partido político o coalición y por quien éste determine, en términos de sus estatutos.

Las transferencias realizadas deberán ser registradas y diferenciadas en la contabilidad del partido político o coalición, de tal forma que tanto el origen, destino y aplicación de los mismos, quede perfectamente acreditada junto con la

[66] Véase artículo 251, fracción IV del CIPEDF.

documentación comprobatoria y los medios de convicción idóneos que permitan la verificación fehaciente.

También se consideran transferencias de recursos de órganos directivos nacionales, todos los pagos realizados por este a cuenta y orden del partido político con representación local o coalición. Ahora bien, si las transferencias de los Órganos Directivos Nacionales son para el apoyo de campañas locales o el financiamiento proviene de asociaciones adherentes a los institutos políticos, dichas aportaciones deberán quedar registradas como tal, en la contabilidad correspondiente.

El artículo 253 del CIPEDF dispone que las partidas de financiamiento público federal, podrán ser utilizadas para sufragar los gastos generados por las actividades ordinarias permanentes que realicen los partidos políticos, dichos recursos podrán ser aplicados en las campañas electorales siempre y cuando estas asignaciones no rebasen el tope de gastos que en términos del CIPEDF determine el Consejo General; y su origen, monto y destino se reporte tanto a la autoridad local como a la federal en los informes respectivos.

Las transferencias de recursos en especie por parte de los Órganos Directivos Nacionales para campañas electorales, deberán sujetarse a las siguientes reglas:[67] 1) Estar sustentados con las copias fotostáticas de las facturas y recibos en las que se detallen los bienes y servicios de los que se trata, sus precios unitarios, campaña a la cual fueron destinados, además de aquellos elementos de convicción que generen certeza de la recepción del bien o servicio; 2) registrarse en una cuenta contable específica y 3) ser verificable por la UTEF, ante el Órgano Directivo Nacional correspondiente.

En este sentido, se identifica una inconsistencia en la construcción normativa respecto a las modalidades del financiamiento público en especie, ya que mientras

[67] Véase artículo 57 del Reglamento de Fiscalización para los Partidos Políticos.

el artículo 254 fracciones I, II y III del CIPEDF sólo reconoce las modalidades relativas a prerrogativas de radio y televisión, franquicias postales y en el régimen fiscal, en el Reglamento de Fiscalización para los Partidos Políticos, en su artículo 57 se reconoce adicionalmente a los partidos políticos o coaliciones, la posibilidad de recibir transferencias de recursos federales en especie para campañas electorales, condición que, además de atentar contra el principio de supremacía de la Ley, puede generar inequidad en los procesos electorales.

Finalmente, es preciso puntualizar que los partidos políticos y las coaliciones, tienen la obligación de informar a la UTEF, sobre todas y cada una de las transferencias que les hayan sido realizadas por el Órgano Directivo Nacional, así como presentar a dicha Unidad, la totalidad de la documentación que le sea requerida al respecto.

3.1.2 Financiamiento público en especie

Se encuentra integrado por las aportaciones inherentes a radio y televisión;[68] por franquicias, y aquellas relativas al régimen fiscal especial que les es aplicable.

3.1.2.1 Prerrogativas para radio y televisión

Siendo los partidos políticos entidades de interés público fundamentales en la acción ideológica y política, el ejercicio de su derecho a difundir sus ideas en los medios de comunicación, debe contribuir a crear el medio ambiente propicio para una mayor observancia de la libertad de expresión y su correlativo derecho a la información.

Se puede decir que la diversidad de opiniones expresadas de manera regular por los partidos políticos en la radio y la televisión, sumadas a otras fuentes

[68] Véase artículo 41 Base III, Apartado B de la Constitución Política.

generadoras de información, deben contribuir a que la opinión pública cuente con los medios adecuados para estar mejor informada".[69]

Con el objetivo de garantizar la existencia y disposición de los medios de comunicación apropiados, el artículo 41 Base III, Apartado B de la Constitución Política, dispone que los partidos políticos nacionales, tienen derecho al uso de manera permanente de los medios de comunicación social. Se señala que el INE, es la única autoridad facultada para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión, incluido en éste el destinado a los fines propios del Instituto y a los de otras autoridades electorales, así como al ejercicio de las prerrogativas que la Constitución Política y el CIPEDF otorgan a los partidos políticos en esta materia.

En este sentido, el INE garantizará a los partidos políticos, el uso de sus prerrogativas constitucionales en radio y televisión; estableciendo para el efecto, las pautas para la asignación de los mensajes y programas que tengan derecho a difundir, tanto en los periodos que comprendan los procesos electorales, como fuera de ellos y atendiendo las quejas y denuncias por la violación a las normas aplicables, determinando en su caso, las sanciones a que haya lugar por su incumplimiento.

Por su parte en el ámbito local, el Reglamento de Fiscalización para los Partidos Políticos en su artículo segundo inciso C) numeral XCI, define a las prerrogativas de radio y televisión como el privilegio del que goza cada partido político, consistentes en periodos de tiempo en medios de comunicación masiva, utilizados para difundir los principios ideológicos, programas de acción, actividades permanentes, plataformas electorales y candidaturas a puestos de elección popular, en los plazos y términos establecidos por la autoridad electoral federal.

[69] Patiño Camarena Javier, Derecho Electoral Mexicano, Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM, Tercera edición 1996, pp. 292-294.

El CIPEDF en su artículo 44 dispone que entre las atribuciones de la Comisión de Asociaciones Políticas del IEDF, se encuentran las de coadyuvar con la autoridad federal electoral, a solicitud de ésta, en el monitoreo de todos los medios masivos de comunicación con cobertura en el Distrito Federal durante los procesos electorales, registrando todas las manifestaciones de los partidos políticos y de sus candidatos y precandidatos, solicitando para ello, la información necesaria a los concesionarios de esos medios.

El artículo 255 del CIPEDF señala que los partidos políticos al ejercer sus prerrogativas de radio y televisión, deberán difundir sus principios ideológicos, programas de acción, actividades permanentes, plataformas electorales y candidaturas a puestos de elección popular en los plazos y términos establecidos. También determinarán el contenido de los mensajes orientados a la difusión de sus actividades ordinarias y de la obtención del voto, sin contravenir las disposiciones que para tal efecto contempla el propio ordenamiento.

La prohibición a los partidos políticos, personas físicas o morales para la contratación de tiempos y espacios en radio, televisión o cualquier otro medio de comunicación a favor o en contra de algún partido político o candidato, se encuentra suscrito en el artículo 257 del CIPEDF.

3.1.2.2 Franquicias postales

Otra de las modalidades del financiamiento público en especie, lo constituyen las franquicias postales.[70] Estas prerrogativas no hacen ninguna diferencia entre los partidos, ya que se les otorga a todos ellos con independencia del número de votos que hayan obtenido en la contienda electoral precedente, o del número de curules o escaños con que cuenten en el Congreso de la Unión."[71]

[70] Véase artículo 254 fracción II del CIPEDF.
[71] PATIÑO CAMARENA, Javier, op. cit., pp. 294 y 295.

3.1.2.3 Régimen fiscal especial

La siguiente modalidad de financiamiento público es la relativa al régimen fiscal que establece el Código local y la legislación aplicable.[72]

Los artículos 259, fracciones I a VI del CIPEDF y 168 fracciones I a la VII del Reglamento de Fiscalización para los Partidos Políticos, disponen entre otras las obligaciones fiscales a las que se encuentran sujetos los partidos políticos en materia electoral, entre las que destacan las siguientes: 1) Retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta por concepto de remuneraciones por la prestación de un servicio personal subordinado y honorarios asimilados a salarios; 2) retener y enterar el pago provisional del Impuesto Sobre la Renta por el pago de honorarios por la prestación de un servicio personal independiente, inclusive por aquellos pagos esporádicos derivados de la prestación de servicios profesionales en los términos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; 3) retener y enterar el pago provisional del Impuesto al Valor Agregado por el pago de honorarios por la prestación de un servicio personal independiente. Inclusive por aquellos pagos esporádicos derivados de la prestación de servicios profesionales y por arrendamiento de bienes a personas físicas en los términos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; 4) inscribir en el Registro Federal de Contribuyentes, a quienes reciban pagos por concepto de remuneraciones por la prestación de un servicio personal subordinado y honorarios asimilados a salarios; 5) proporcionar constancia de retención a quienes se hagan pagos por sueldos asimilados a salarios o de honorarios por la prestación de un servicio personal independiente, así como las derivadas del arrendamiento de bienes a personas físicas; 6) solicitar la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes a las personas a las que hagan pagos por servicios subordinados o en el supuesto de que hubieran sido inscritos con anterioridad solicitarles su clave y 7) hacer las contribuciones necesarias a los organismos de seguridad social, como lo son el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Instituto Mexicano del Seguro Social o cualquier otra de índole laboral, en su caso.

[72] Véase Fracción III del artículo 254 del CIPEDF.

Es importante mencionar que en términos de los artículos 93, 94 y 102 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en el rubro correspondiente al régimen de las personas morales (sic), se dispone que tanto los partidos políticos como las asociaciones políticas legalmente reconocidas, no son contribuyentes de dicho impuesto, otorgándoles exclusivamente las obligaciones de retener y enterar el impuesto y exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales, cuando hagan pago a terceros y están obligados a ello en términos de esa Ley.

3.1.3 Financiamiento privado

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley General de Partidos Políticos estos pueden recibir financiamiento que no provenga del erario público bajo las modalidades de financiamiento por la militancia, financiamiento de simpatizantes, autofinanciamiento y financiamiento por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos.

El régimen local el financiamiento privado de los partidos políticos tiene las modalidades de militancia y simpatizantes.[73] El financiamiento privado del partido político o coalición, se conforma por las aportaciones en dinero o en especie proveniente de los militantes y simpatizantes que reciben los institutos políticos para el desarrollo de sus actividades ordinarias, de campaña y específicas que no provienen del erario.[74]

Por lo que hace a las reglas para su recepción, estos no podrán recibir anualmente aportaciones de financiamiento privado en dinero o en especie por una cantidad superior al 15% anual del financiamiento público para actividades ordinarias que corresponda al partido político con mayor financiamiento.[75]

[73] Véase artículo 260 del CIPEDF.
[74] Véase artículos 2 inciso c) fracción LXXII y 15 del Reglamento de Fiscalización para los Partidos Políticos.
[75] Véase artículos 263, fracción I del CIPEDF; 16 y 17 del Reglamento de Fiscalización para los Partidos Políticos.

El límite anual de aportación en dinero que podrá realizar cada persona, no podrá ser mayor al equivalente del 0.10% del monto total de financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes otorgado a los partidos políticos, en el año que corresponda.[76]

Las aportaciones obtenidas mediante colectas realizadas en mítines, en la vía pública y vía telefónica mediante la modalidad 01-800, serán considerados como financiamiento privado en dinero de simpatizantes, y la totalidad de estos ingresos forman parte del límite del 15% a que se encuentra sujeto el partido político como límite del financiamiento privado que estos pueden recibir.[77]

Ahora bien, en cuanto a las aportaciones en especie y en términos de los artículos 265 del CIPEDF y 17 segundo y tercer párrafo del Reglamento de Fiscalización para los partidos políticos, se establecen límites en los siguientes términos: 1) Si la aportación es en especie y se refiere a muebles y consumibles el límite de aportación anual que realice cada persona tendrá un límite equivalente al 3% del financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes asignado a los Partidos Políticos, en el ejercicio correspondiente y 2) si la aportación se realiza mediante donaciones de bienes muebles el límite para cada persona será el equivalente del 7% del financiamiento público recibido por el instituto político para actividades ordinarias de la anualidad atinente.

Las organizaciones adherentes a los partidos políticos pueden realizar aportaciones, para lo cual en el mes de enero del año que corresponda a estos, deberán informarlo por escrito a la UTEF, siendo en consecuencia las únicas organizaciones que quedarán autorizadas para realizar aportaciones, quedando obligado el partido político a notificar a la autoridad fiscalizadora cualquier cambio

[76] Véase los artículos 263 fracción III del CIPEDF y párrafo segundo del 16 del Reglamento de Fiscalización para los Partidos Políticos.
[77] Véase artículo 36 del Reglamento de Fiscalización para los Partidos Políticos.

o adición que pretenda realizar a la información proporcionada, en un plazo no mayor a quince días contados a partir de la fecha en que esta suceda.[78]

Anualmente, una vez que el Consejo General del IEDF determina el total de financiamiento público en dinero a otorgarse a los partidos políticos, la UTEF procede en apego a los límites mencionados a realizar los cálculos correspondientes, informando de ello a los partidos políticos a más tardar en el mes de febrero, además de solicitar su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

1.3.1 Financiamiento de militancia

Militante es el ciudadano mexicano que formalmente pertenece a un Partido Político y participa en sus actividades, tanto en su organización como en su funcionamiento y que estatutariamente cuenta con derechos.[79]

El financiamiento de la militancia para los partidos políticos y para sus campañas, estará conformado por las cuotas obligatorias ordinarias y extraordinarias de sus afiliados, por las aportaciones de sus organizaciones adherentes y por las cuotas voluntarias y personales que los precandidatos y candidatos aporten exclusivamente para sus precampañas y campañas, según sea el caso conforme a las siguientes reglas estipuladas en los artículos 261 del CIPEDF y 28, 29 y 30 del Reglamento de Fiscalización para los Partidos Políticos: 1) El órgano interno responsable del financiamiento de cada Partido deberá expedir recibo de las cuotas o aportaciones recibidas, de los cuales deberá conservar una copia para acreditar el monto ingresado; 2) cada Partido Político determinará libremente, en el mes de enero de cada año, los montos mínimos y máximos y la periodicidad de las cuotas ordinarias y extraordinarias de sus afiliados, así como las aportaciones

[78] Véase artículo 32 del Reglamento de Fiscalización para los Partidos Políticos.
[79] Véase artículo 2 inciso c) fracción LXXXIII del Reglamento de Fiscalización para los Partidos Políticos.

de sus organizaciones; 3) las cuotas voluntarias y personales que los candidatos aporten exclusivamente para su participación en campañas electorales tendrán el límite que fije el órgano interno responsable del manejo del financiamiento de cada Partido, siempre y cuando no exceda de los límites previstos en este Código, serán informadas a la autoridad electoral junto con la solicitud de registro de las candidaturas; 4) las cuotas voluntarias y personales de los militantes para apoyar algún precandidato en los procesos de selección interna de candidatos tendrán el límite que fije el órgano interno responsable del manejo del financiamiento de cada Partido, siempre y cuando no exceda de los límites previstos en este Código y 5) todas las cuotas aportadas deberán registrarse ante el responsable de la obtención y administración del financiamiento del Partido Político correspondiente.

3.1.3.2. Financiamiento de simpatizantes

Simpatizante es la persona que se adhiere espontáneamente a un partido político por afinidad a las ideas que este postula, sin llegar a vincularse a él por el acto formal de la afiliación.[80]

El financiamiento de simpatizantes estará conformado por las aportaciones o donativos en dinero o en especie hechas a los partidos políticos o coaliciones en forma libre y voluntaria y se encuentra sujeto a las siguientes reglas enmarcadas en los artículos 262 del CIPEDF y 31 del Reglamento de Fiscalización para los Partidos Políticos: 1) Si la aportación en dinero rebasa la cantidad equivalente a 200 veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, este deberá realizarse mediante cheque nominativo, o bien a través de transferencia electrónica interbancaria en la que se utilice la clave bancaria estandarizada CLABE; 2) los comprobantes impresos emitidos por cada institución bancaria deberán incluir la información necesaria para identificar en su caso la transferencia realizada que podrá consistir en número de cuenta de origen, banco de origen, fecha, nombre completo del titular y tipo de cuenta de origen, así como banco de

[80] Véase artículo 2 inciso c) fracción LXXXVII del Reglamento de Fiscalización para los Partidos Políticos.

destino, nombre completo del beneficiario y número de cuenta la cual deberá ser de alguna de las cuentas bancarias del órgano directivo; 3) en el rubro denominado “leyenda”, “motivo de pago”, “referencia” u otro similar se deberá hacer referencia al tipo de aportante; 4) la copia del cheque nominativo o el comprobante impreso de la transferencia electrónica deberá anexarse al recibo y a la póliza contable correspondiente y 5) cuando una misma persona realice más de una aportación en el mismo mes calendario y dichas aportaciones en su conjunto superen la cantidad equivalente a 200 veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal a partir del momento en que exceda el límite deberá realizarse mediante cheque nominativo y en caso de no contar con cuenta de cheques se deberá realizar mediante un cheque de caja o giro bancario, en el cual se identificará invariablemente al comprador.

3.1.4 Financiamiento privado en especie

El financiamiento privado en especie estará constituido por las aportaciones en bienes muebles, inmuebles, consumibles y servicios que otorguen los particulares para las actividades del partido político, el autofinanciamiento, y el financiamiento por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos.[81]

3.1.4.1 Financiamiento por aportaciones en bienes muebles, inmuebles, consumibles y servicios que otorguen los particulares para las actividades del partido político.

En atención a lo dispuesto en los artículos 265 fracciones I, II, III, IV y V del CIPEDF y del 22 al 27 del Reglamento de Fiscalización para los Partidos Políticos, el financiamiento privado indirecto o en especie otorgado a los partidos políticos mediante aportaciones en bienes muebles, inmuebles, consumibles y servicios se encuentra sujeto a las siguientes reglas: 1) Las aportaciones deberán destinarse únicamente para el cumplimiento del objeto del Partido Político que haya sido

[81] Véase artículo 264 del CIPEDF.

beneficiado con la aportación; 2) deberá expresarse en el cuerpo del recibo, la descripción relativa al bien aportado incluyendo el valor de mercado y criterio de valuación; 3) cuando la aportación rebase las 200 veces del salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, esta se formalizará mediante contrato por escrito; 4) la persona que rebase en el transcurso de un mes, 200 veces del salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal por concepto de aportaciones en especie deberá formular contratos por escrito a partir del monto superado; 5) las aportaciones deberán registrarse contablemente conforme al valor de mercado, mismo que será determinado de la siguiente manera: a) para el caso de bienes muebles y consumibles este será determinado a partir del valor consignado en la factura del bien aportado, si su tiempo de uso es menor a un año, o si no se cuenta con la factura correspondiente y el tiempo de uso o facturación es mayor a un año, el valor del bien se determinará mediante el costo promedio obtenido de dos cotizaciones de bienes de características similares o en su caso por avalúo realizado por perito valuador, b) en tratándose de bienes inmuebles que se den en uso o en comodato, se tomará como base el costo del alquiler promedio mensual de dos cotizaciones de bienes con características similares, en caso de donaciones de este tipo de bienes, estos además de registrarse contablemente serán valuados de conformidad al costo más alto identificado entre el valor registral o el catastral y c) en caso de que la UTEF tenga duda fundada respecto del valor otorgado a las aportaciones de bienes muebles e inmuebles registradas y reportadas por los Partidos Políticos o Coalición. Podrá solicitar la aclaración correspondiente y la documentación comprobatoria del caso, así como realizar las diligencias de verificación que considere necesarias; 6) no se considerarán aportaciones en especie los servicios personales no especializados otorgados gratuitamente a los Partidos Políticos, Coaliciones, precandidatos o candidatos, para tal efecto se considerará servicio especializado aquel que realice el aportante de manera ordinaria en su ámbito laboral, o aquel otro que implique conocimiento técnico o profesional y 7) se deberán ajustar a los límites de aportaciones en especie establecidos en el CIPEDF y el Reglamento del Instituto

Electoral del Distrito Federal para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos.

3.1.4.2 Autofinanciamiento.

Este financiamiento se constituye por los ingresos que los partidos políticos obtienen de sus actividades promocionales, tales como conferencias, espectáculos, juegos y sorteos, eventos culturales, ventas editoriales, de bienes y de propaganda utilitaria, aportaciones telefónicas bajo la modalidad de 01-900, así como cualquier otra similar que realicen para allegarse fondos, las que estarán sujetas a las leyes correspondientes a su naturaleza y se encuentra sujeto a los siguientes principios regulatorios:[82] 1) Para el caso de las conferencias, espectáculos y eventos culturales, el Partido Político o Coalición notificará a la UTEF sobre su celebración con al menos tres días hábiles de anticipación, para lo cual dicha Unidad, previa notificación por escrito, podrá designar personal técnico para presenciar la realización de los mismos; lo anterior, no releva al Partido Político o Coalición de su obligación de entregar todos los elementos de convicción que den cuenta sobre la legalidad de sus actividades promocionales; 2) la totalidad de los ingresos por este concepto serán depositados en cuentas de cheques ordinarias o de campaña, según el motivo de la recaudación, a más tardar dentro de los tres días siguientes al de su recepción; 3) el detalle de los ingresos por autofinanciamiento será informado y reportado en los formatos establecidos para el efecto por el responsable del Partido Político o Coalición y remitido a la UTEF, conjuntamente con el informe correspondiente; 4) los ingresos por autofinanciamiento estarán respaldados documentalmente y registrados en la contabilidad del Partido Político o Coalición, y cada evento será reportado en el formato establecido para el efecto el cual contendrá: número consecutivo, tipo de evento, forma de administrarlo, fuente de ingresos, control de folios, números y fechas de las autorizaciones legales para su celebración, el total de los ingresos obtenidos, importe desglosado de los gastos en que se haya incurrido, así como el

[82] Véase artículos 265 fracción VI del CIPEDF y 37 al 39 del Reglamento de Fiscalización para los Partidos Políticos.

nombre y firma del responsable del Partido Político o Coalición; 5) en los eventos derivados de sorteos, el Partido Político o Coalición deberá contar con el permiso de la Secretaría de Gobernación y, en caso de que éstos sean administrados u operados por terceros, se deberá contar con la documentación comprobatoria de la relación contractual respectiva, y 6) para el caso de recibir ingresos mediante el servicio de recaudación telefónica con clave 01-900, este sólo podrá consistir en servicio telefónico de valor agregado, en concreto de autotexto, considerándose en consecuencia como una actividad promocional, que se sujetará a las siguientes reglas: a) Únicamente se permite la recepción de llamadas generadas a través de números telefónicos residenciales ubicados en el Distrito Federal, por lo que el Partido Político o Coalición se encuentran obligados a informar al público en general, el costo y duración máxima de las llamadas, el servicio específico que ofrece y forma en que el costo del cargo se identificará en el recibo telefónico del cliente, b) quedan prohibidas las llamadas de teléfonos cuyos titulares sean personas jurídicas de carácter público; servidores públicos; Partidos Políticos; personas físicas o jurídicas extranjeras; organismos internacionales de cualquier naturaleza; ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión; y, personas morales mexicanas de cualquier naturaleza, c) en caso de que los contenidos de los audio-textos incluyan las palabras “voto”, “votar”, “sufragio”, “sufragar”, ”elección”, “elegir”, o sus sinónimos; la utilización de la voz del candidato o su nombre, apellido, apelativo, sobrenombre; la invitación a participar en actos organizados por el Partido Político; la mención de la fecha de la jornada electoral en el Distrito Federal; la difusión de la plataforma electoral del Partido Político o Coalición o de su posición respecto a los temas de interés en el Distrito Federal; cualquier referencia a gobierno alguno sea emanado de las filas del mismo Partido Político o Coalición o de otro; cualquier referencia a cualquier Partido Político o candidato postulado por un Partido Político o Coalición distinto; la defensa o crítica a cualquier política pública que a juicio del Partido Político o Coalición haya producido, produzca o pueda producir efectos benéficos o negativos, según sea el caso, para la ciudadanía; y, la mención de sus slogans, frases de campaña o cualquier lema con el que se identifique al Partido Político o

Coalición o cualquiera de sus candidatos, estos serán considerados gastos de campaña y se contabilizarán para el tope establecido para el efecto por el Consejo General del IEDF, d) el Partido Político deberá aperturar una cuenta bancaria a su nombre exclusivamente para depósito de las aportaciones recibidas por este medio, debiendo registrar como ingreso el costo total por llamada sin descontar los costos y comisiones que deriven del servicio contratado, e) los contratos que se celebren para la contratación del servicio, además de ser remitidos a la UTEF quince días previos al inicio de la prestación del servicio, deberán incluir una cláusula en donde la empresa contratante se obligue a proporcionar toda la información que le sea requerida por la UTEF, así como permitir la verificación del origen y monto de las aportaciones recibidas, además de incluir entre otros costos, condiciones, características de servicio, temporalidad, derechos, obligaciones, penalizaciones, impuestos, límites de consumo por llamada y línea telefónica, f) la empresa contratada deberá llevar una relación por cada llamada, en la que se especifique la hora, fecha y duración, el número telefónico y el nombre del titular de la línea, g) la facturación del servicio deberá precisar de manera pormenorizada cada uno de los conceptos que comprende, debiendo anexar a esta una relación de cada llamada recibida, en la que se especifique la fecha, la hora, la duración de la llamada, el número telefónico, así como una transcripción de la versión escuchada y h) las aportaciones realizadas por este medio no podrán ser superiores a los límites establecidos por la normatividad aplicable.

3.1.4.3 Financiamiento por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos.

Los partidos políticos para obtener este tipo de financiamiento, podrán crear fondos o fideicomisos con su patrimonio o con las aportaciones que reciban, adicionalmente a las provenientes de las modalidades del financiamiento privado en especie.[83]

[83] Véase artículos 265 fracciones VII y VIII del CIPEDF y artículos 40 al 43 del Reglamento de Fiscalización para los Partidos Políticos.

Las aportaciones que se realicen a través de esta modalidad, se encuentran sujetas a las siguientes reglas: 1) Les serán aplicables las disposiciones relativas al financiamiento privado en especie y a las leyes correspondientes; 2) los fondos y fideicomisos que se constituyan serán manejados a través de las operaciones bancarias y financieras que el responsable del financiamiento de cada Partido Político considere conveniente, con excepción de la adquisición de valores bursátiles, entendidos estos últimos como todos aquellos que se encuentren inscritos, con el carácter de acciones en el Registro Nacional de Valores, de cualquier sección, subsección o emisión, incluyendo las acciones adquiridas a través de sociedades de interés; 3) los rendimientos financieros obtenidos a través de esta modalidad deberán destinarse para el cumplimiento de los objetivos de los Partidos Políticos y 4) los ingresos que reciba el Partido Político o Coalición por rendimientos financieros, fondos, y en su caso fideicomisos, estarán sustentados con los estados de cuenta que les remitan las instituciones bancarias o financieras, así con los documentos en que consten los actos constitutivos o modificatorios de las operaciones financieras de los fondos o fideicomisos, los cuales deben ser remitidos a la UTEF con las firmas autorizadas de los responsables facultados para suscribirlos en los informes correspondientes.

En cuanto a la constitución de un fondo o fideicomiso, el partido político deberá sujetarse a lo siguiente: 1) Podrán constituirse con recursos provenientes del financiamiento público, privado o de ambos; 2) el fondo o fideicomiso será manejado por la o las instituciones bancarias o financieras que el responsable del Partido Político considere conveniente; 3) en el contrato correspondiente deberá incluirse una cláusula por la que se autorice a la UTEF a solicitar a la institución fiduciaria correspondiente la información que estime necesaria a fin de verificar el origen y el destino de los recursos respectivos; 4) la constitución de fondos o fideicomisos y sus modificaciones deberán ser informadas por escrito a la UTEF, remitiéndole un ejemplar del contrato o convenio correspondiente, dentro de los treinta días siguientes a su constitución o modificación y 5) la UTEF llevará el

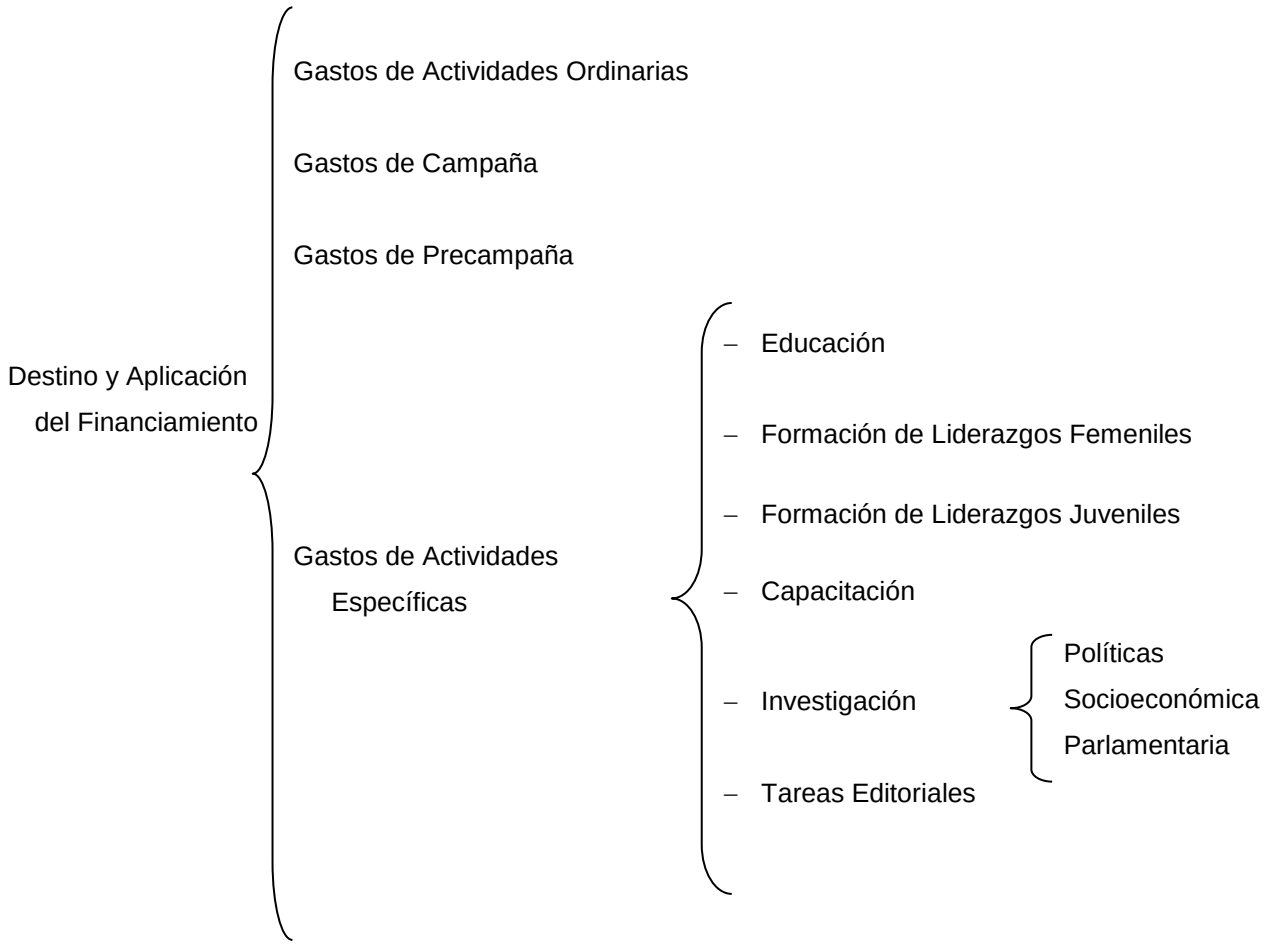
control de los instrumentos contractuales verificando que las operaciones se realicen en apego a la normatividad electoral establecida.

Se considerará financiamiento privado en especie, los ingresos por rendimientos financieros que obtengan los partidos políticos o coaliciones por los intereses derivados de las cuentas bancarias, así como los provenientes de inversiones en valores o cualquier otra operación financiera, ya que en un sano juicio es de todos conocido que cuando menos tratándose de instituciones bancarias, todos los rendimientos son manejados en dinero y no en especie, condición que resta claridad sobre el origen de los recursos, sobre todo si se toma en consideración los topes establecidos de forma diferenciada entre las aportaciones en dinero y en especie establecida en la normativa electoral.[84]

Ahora bien, por lo que hace al uso, destino y aplicación del financiamiento público y privado otorgado a los partidos políticos, para nuestro estudio lo clasificaremos en los siguientes términos:

[84] Véase artículos 41 del Reglamento de Fiscalización para los Partidos Políticos y fracción III del artículo 264 del CIPEDF.

Figura 2. Destino y Aplicación del Financiamiento



Tanto el gasto del financiamiento público como el privado para su destino y aplicación, se encuentra sujeto a diversas disposiciones de naturaleza electoral, las cuales de manera genérica las encontramos en los elementos conceptuales y operacionales dados en los artículos 251 del CIPEDF y 2 del Reglamento de Fiscalización para los Partidos Políticos, a saber: 1) Gastos destinados a las actividades ordinarias permanentes, es aquel que se encuentra destinado o es aplicado en las funciones de naturaleza no electiva que de manera cotidiana realizan los Partidos Políticos para el cumplimiento de sus fines, durante un ejercicio fiscal, 2) El monto de los recursos destinados para este tipo de gasto es determinado anualmente por el Consejo General del IEDF, con base en el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral del Distrito Federal, multiplicado por

el factor del 65% del salario mínimo general vigente del Distrito Federal y su distribución se realiza entre los Partidos Políticos el 30% de forma igualitaria y el 70% restante de conformidad al porcentaje de votación efectiva que hubiesen obtenido en la elección de Diputados a la (ALDF) por el principio de representación proporcional de la elección anterior, 3) Gastos de Campaña; son aquellos que utilizados en una campaña electoral. Así, en el año en que deban celebrarse elecciones para Diputados a la Asamblea Legislativa, Jefes Delegacionales y Jefe de Gobierno, a cada Partido Político se le otorgan para tal efecto, un monto adicional equivalente al 60 % del financiamiento público que, para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, le correspondan en ese año. De igual forma en el año en que deban celebrarse elecciones para Diputados a la Asamblea Legislativa y Jefes Delegacionales, a cada Partido Político se le otorga para este rubro, un monto adicional equivalente al 40% del financiamiento público que, para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes le corresponda en ese año; 4) Gastos de Precampaña; son aquellos recursos utilizados en las actividades de carácter propagandístico realizados en los procesos de selección interna de candidatos, y 5) Gastos de Actividades Específicas que son los relativos a educación, formación de liderazgos femeniles y juveniles, capacitación, investigación socioeconómica política y parlamentaria, así como las tareas editoriales que desarrollan los Partidos Políticos.

El financiamiento público para los partidos políticos por actividades específicas relativas a la educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales, equivale al 3% del monto total del financiamiento público que corresponda en cada año por actividades ordinarias; 30% de la cantidad que resulte de acuerdo a la fórmula mencionada, se distribuye entre los partidos políticos en forma igualitaria y el 70% restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior.[85]

[85] Véase artículo 41, base II segundo párrafo, inciso c) de la Constitución Política y 251, fracción III, inciso a) del CIPEDF.

En el 2011, el Consejo General destinó para actividades específicas una cantidad equivalente al 3% de $292´684,596.48 (doscientos noventa y dos millones seiscientos ochenta y cuatro mil quinientos noventa y seis pesos 48/100 MN.) que corresponde al importe total del financiamiento público otorgado para actividades ordinarias, lo que arroja como resultado un importe asignado de financiamiento para actividades específicas del orden de $8´780,537.89 (ocho millones setecientos ochenta mil quinientos treinta y siete pesos 89/100 MN.). Para el 2013, el monto asignado ascendió a $9'764,252.02 (nueve millones setecientos sesenta y cuatro mil doscientos cincuenta y dos pesos 02/100 MN) tal y como se demuestra a continuación:

Cuadro 20. Desglose del 30% y 70% de la bolsa para Partidos Políticos de 2011

Partido Político 2011	Monto que les corresponde respecto del 30% de la bolsa	Monto que les corresponde respecto del 70% de la bolsa	Total
Partido Acción Nacional	$376,308.77	$1,395,885.13	$ 1,772,193.90
Partido Revolucionario Institucional	$376,308.77	$1,131,431.14	$1,507,739.90
Partido de la Revolución Democrática	$376,308.77	$1,813,519.12	$2,189,827.89
Partido del Trabajo	$376,308.77	$729,753.14	$1,106,061.90
Partido Verde Ecologista de México	$376,308.77	$641,528.05	$1,017,836.82
Convergencia	$376,308.77	$169,019.21	$545,327.98
Nueva Alianza	$376,308.77	$265,240.73	$641,549.50
Total	**$2,634,161.39**	**$6,146,376.52**	**$8,780,537.89**

FUENTE: Acuerdo ACU-007-11 del Consejo General del IEDF www.iedf.org.mx

Cuadro 21. Desglose del 30% y 70% de la bolsa para Partidos Políticos de 2013

Partido Político 2013	Monto que les corresponde respecto del 30% de la bolsa	Monto que les corresponde respecto del 70% de la bolsa	Total
Partido Acción Nacional	$418,467.94	$1,537,644.14	$ 1,956,112.08
Partido Revolucionario Institucional	$418,467.94	$1,384,773.06	$1,803,241.00
Partido de la Revolución Democrática	$418,467.94	$2,708,851.52	$3,127,319.47
Partido del Trabajo	$418,467.94	$382,512.62	$800,980.56
Partido Verde Ecologista de México	$418,467.94	$286,645.24	$705,113.18
Movimiento ciudadano	$418,467.94	$239,265.18	$657,733.13
Nueva Alianza	$418,467.94	$295,284.65	$713,752.60
Total	**$2,929,275.61**	**$6,834,976.41**	**$9,764,252.06**

FUENTE: Acuerdo ACU-01-14 del Consejo General del IEDF www.iedf.org.mx

En la generalidad de los casos, todos los gastos se registrarán contablemente y se deben respaldar con los documentos internos, tales como la copia del cheque o el comprobante de la transferencia electrónica, contratos, pólizas de cheque, solicitud de cheque, con los elementos de convicción de los servicios contratados o productos adquiridos, así como la documentación original que expida a nombre del partido político, la persona a quien se le efectuó el pago, esta última deberá cumplir con todos los requisitos que exigen las disposiciones fiscales, con excepción de aquellos que así lo permita la normatividad electoral.[86]

El gasto que ejercen los institutos políticos en los diferentes rubros se encuentra sujeto a las siguientes reglas de conformidad con los artículos 59 al 97 del Reglamento de Fiscalización para Partidos Políticos: 1) En todas las operaciones que rebasen la cantidad equivalente a cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, del año en que se trate, deberá verificar en el portal de internet del Servicio de Administración Tributaria la autenticidad de la documentación que le sea expedida por los proveedores; 2) todas las operaciones que rebasen la cantidad equivalente a cuatrocientos días de salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, el Partido Político o coalición deberá suscribir contratos, los cuales contendrán por lo menos: los costos, condiciones, características del bien o servicio, temporalidad, derechos, obligaciones, penalizaciones e impuestos. Además, convendrán con sus proveedores la incorporación de una cláusula, por la cual éstos se obliguen a conservar por un periodo de cinco años la copia de la factura correspondiente y una muestra o testigo de los bienes o servicios contratados, los cuales estarán a disposición de la autoridad electoral cuando ésta los solicite; 3) hasta el 3% de los gastos que efectúe cada Partido Político o coalición en cada campaña electoral, podrá ser comprobado vía bitácoras de gastos menores en las que se señalen con toda precisión los siguientes conceptos: a) fecha y lugar en la que se efectuó la erogación; b) monto y concepto específico del gasto, y c) nombre y firma de la persona que realizó el pago y de quien autorizó, 4) el gasto que ejerza cada

[86] Véase artículo 58 del Reglamento de Fiscalización para Partidos Políticos.

Partido Político o coalición en una campaña electoral en los rubros de viáticos, alimentación y pasajes, podrá ser comprobado vía bitácoras de gastos menores que reúnan los requisitos señalados en el punto anterior. El monto de estas erogaciones no podrá ser mayor al 10% del gasto total de cada una de las campañas en estos conceptos; 5) en todos los casos deberán anexarse a las bitácoras referidas los comprobantes respectivos que se recaben de tales gastos, aun cuando no reúnan los requisitos fiscales, en su caso, los recibos de gastos menores que incluyan los datos requeridos para su validez; 6) los egresos deberán estar debidamente registrados en la contabilidad del Partido Político en subcuentas específicas, 7) se entienden como gastos menores aquellos que no rebasan la cantidad equivalente a cinco días de salario mínimo general diario vigente para el Distrito Federal; 8) hasta el 10% de los gastos que efectúe cada Partido Político, por concepto de viáticos, alimentos y pasajes como gastos de operación ordinaria en un ejercicio, podrán ser comprobados a través de bitácoras de gastos menores, debiendo anexarse los comprobantes respectivos, o en su caso, los recibos de gastos menores; 9) se entiende por viáticos aquellos gastos que realice un Partido Político fuera de una franja de 50 kilómetros medidos en forma radial que circunde a sus oficinas; 10) todo pago que efectúe el Partido Político o coalición que rebase la cantidad equivalente a cien veces el salario mínimo general diario vigente para el Distrito Federal, deberá realizarse mediante cheque nominativo a favor del proveedor del bien o prestador del servicio, y que contenga la leyenda “para abono en cuenta del beneficiario” con excepción de los pagos correspondientes a sueldos y salarios contenidos en nóminas. La documentación comprobatoria de los pagos a que se mencionan, así como una copia fotostática del cheque deberá conservarse anexa a la póliza contable; 11) en caso de que el partido político efectúe más de un pago a un mismo proveedor o prestador de servicios derivados de una sola operación, dichos pagos deberán ser cubiertos en los términos que se establecen en el punto que antecede; 12) los gastos realizados por concepto de viajes fuera del Distrito Federal deberán estar autorizados por el Responsable del Partido Político o coalición y corresponder a actividades relacionadas directamente con la operación del Órgano Directivo

Central del Partido Político o coalición y sustentarse con los comprobantes originales respectivos justificando debidamente el objeto del viaje conforme a los fines partidistas; 13) la o las personas que realicen el viaje deberán presentar por escrito un informe de las actividades que llevaron a cabo durante el viaje, el cual estará autorizado por el Responsable y a disposición de la UTEF cuando ésta lo solicite, de lo contrario se considerará como gasto no comprobado; 14) para todos los egresos que se efectúen en la campaña política del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Diputados a la Asamblea Legislativa y Jefes Delegacionales, cada partido político o coalición deberá abrir una cuenta bancaria de cheques única para cada candidato, las cuales serán manejadas mancomunadamente por las personas que designe el partido político o coalición; 15) las personas designadas por el Partido Político o coalición para el manejo de las cuentas bancarias, informarán quincenalmente al Responsable del Partido Político o coalición de la apertura de la cuenta de cheques, así como de los movimientos que efectúen; 16) el Partido Político o coalición sólo podrá realizar erogaciones para cada precampaña o campaña electoral si los recursos provienen de la cuenta aperturada para tal efecto; 17) las cuotas voluntarias y personales que los candidatos aporten exclusivamente para sus campañas y las aportaciones de dinero que reciban directamente los candidatos, serán depositadas en la cuenta de la campaña que corresponda; 18) los gastos de campaña genéricos y las erogaciones que involucren dos o más campañas de candidaturas locales serán distribuidos o prorrateados entre las distintas campañas de la siguiente forma: a) por lo menos el 40% del importe de dichas erogaciones serán distribuidos o prorrateados de manera igualitaria entre las campañas beneficiadas por tales erogaciones; b) el 60% restante del importe de dichas erogaciones, será distribuido o prorrateado de acuerdo con los criterios y bases que cada Partido Político o coalición adopte, y c) dichos criterios se considerarán definitivos, por lo tanto no podrán ser modificados con posterioridad y se presentarán dentro de los diez días siguientes a la conclusión de las campañas electorales; 19) para la distribución de los gastos genéricos que beneficien en lo general a las candidaturas o candidatos locales y federales, se considerarán los porcentajes

notificados por el INE al Partido Político o coalición; el importe que de estos gastos le corresponda a los candidatos locales será prorrateado de acuerdo a los criterios establecidos en el punto que antecede, independientemente de que se paguen con recursos federales o locales; 20) para el caso de que el pago se realice con recursos locales, el monto asignado a los candidatos federales deberá registrarse en la contabilidad del Partido Político o coalición como transferencias en especie para apoyo de campañas federales; 21) si el pago se realiza con recursos federales, el importe correspondiente a cada uno de los candidatos locales, deberá registrarse en la contabilidad del Partido Político o coalición y reportarse en los Informes de Campaña de los candidatos beneficiados como transferencias federales en especie para apoyo en campañas locales; 22) los gastos de campaña que beneficien sólo algunas campañas de candidatos locales con candidaturas federales, serán distribuidos o prorrateados entre las distintas campañas de la siguiente forma: a) el importe total de los gastos será distribuido por el Partido Político o coalición proporcionalmente entre los candidatos federales y locales, para lo cual considerarán las particularidades de la erogación: el número de candidaturas promocionadas, las características de difusión como espacio y posición. Asimismo, deberán anexarse a la póliza contable las razones y motivos de carácter lógico y objetivo que les llevaron a tal distribución; b) la parte que del gasto se asigne a los candidatos federales beneficiados, independientemente de las obligaciones que les imponga la normatividad federal, será informada al INE por este Instituto, en términos del Convenio específico de apoyo y colaboración en materia de fiscalización y c) la parte correspondiente a los candidatos locales será distribuida de acuerdo con el criterio de prorrateo establecido por el Partido Político o Coalición, independientemente de que dichas erogaciones sean contratadas o pagadas con recursos federales o locales; 23) en caso de que el pago se realice con recursos locales, el monto asignado a los candidatos federales deberá registrarse en la contabilidad y reportarse en el Informe de Campaña del candidato local que las hubiese pagado como transferencias en especie para apoyo en campaña de candidatos federales; 24) si el pago se realiza con recursos federales, el importe correspondiente a cada uno de los candidatos locales,

deberá registrarse en la contabilidad del partido político o coalición y reportarse en los Informes de Campaña de los candidatos beneficiados como transferencias federales en especie para apoyo en campañas locales; 25) el Partido Político o coalición deberá conservar la página completa original donde consten las inserciones en medios de comunicación impresa que realicen en las campañas electorales, así como la factura con datos de la publicación, las fechas, el tamaño, el valor unitario y en su caso, el nombre del candidato beneficiado. Cada una de las inserciones deberá contener la leyenda “inserción pagada” seguida del nombre de la persona responsable del pago, las cuales deberán anexarse a la póliza contable con la documentación comprobatoria y presentarse cuando la UTEF lo solicite; 26) los Partidos Políticos o coalición deberán conservar una muestra de la propaganda impresa y utilitaria la cual estará a disposición de la UTEF; 27) será considerado como acto, y en consecuencia gasto anticipado de campaña, cualquier actividad como: escritos, imágenes, reuniones públicas, asambleas, mítines, marchas y en general los eventos que el Partido Político, coalición, militantes y simpatizantes realicen tendentes a promocionar, por cualquier medio, la candidatura de una persona a un cargo de elección popular; a obtener el voto ciudadano o a difundir ante el electorado una plataforma electoral o de gobierno, que se realice antes del inicio formal de las campañas, de acuerdo con el plazo legalmente previsto; 28) no se podrá realizar ningún gasto que tenga por objeto difundir por medio, ya sea impreso o electrónico, ni realizar actividades con el fin de promocionar el voto a favor de los Partidos Políticos, coaliciones y/o precandidatos ganadores o designados en su proceso de selección interna, para contender por un cargo de elección popular en el Distrito Federal, durante el periodo comprendido entre el día de su designación o selección y hasta el día previo al inicio legal del periodo de campaña para el tipo de candidatura de que se trate; 29) en el caso de que el Consejo General determine que un Partido Político, coalición o candidato incurrió en actos anticipados de campaña, ordenará a la UTEF efectuar las acciones que estime procedentes a efecto de cuantificar las erogaciones realizadas en dichos actos, y sumarlas a las que en su momento se reporten en el Informe de Campaña respectivo; 30) si en el ejercicio de sus

facultades de fiscalización, la UTEF advierte que un partido político, coalición o candidato incurrió en actos anticipados de campaña, procederá a cuantificar las erogaciones realizadas en dichos actos, y sumarlas a las que reporten en el Informe de Campaña respectivo, para lo cual la UTEF informará al Secretario Ejecutivo para los efectos legales correspondientes; 31) todos los gastos que se realicen fuera del plazo legalmente establecido para el desarrollo de las campañas electorales, se computarán para efectos del tope de gastos correspondiente a la campaña de que se trate; 32) los gastos que realicen el Partido Político o coalición y sus candidatos en la propaganda electoral y las actividades de campaña, no podrán exceder los topes que para cada elección acuerde el Consejo General; 33) los gastos erogados por el Partido Político o precandidatos, durante los procesos de selección interna de candidatos, no podrán exceder por cada uno de los precandidatos o, en su caso, fórmula, de un 15% del tope de gastos de campaña que se estableció para la elección inmediata anterior al mismo cargo; 34) no se computarán como gastos de precampaña, los realizados por el Partido Político o coalición para la organización y promoción de su proceso de selección interna entre el universo de votantes que podrán participar; 35) el Partido Político o coalición deberá presentar a la UTEF en forma impresa y en medio magnético, anexo a sus informes: Anual, Consolidado de precandidatos triunfadores o perdedores y de Campaña, la relación de los proveedores y prestadores de servicios con los cuales realizaron operaciones que superen la cantidad de 400 veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, según corresponda. La relación de los proveedores y prestadores de servicios deberá contener los datos relativos a: nombre fiscal y comercial de cada proveedor asentado en las facturas que expida; Registro Federal de Contribuyentes; domicilio fiscal; número, fecha e importe de la factura expedida por las operaciones realizadas; concepto de los bienes o servicios, así como número y fecha de los cheques de pago. Adicionalmente, para las operaciones realizadas en los procesos de precampaña o campaña, se deberá especificar a qué precandidatura o candidaturas beneficiaron; 36) las operaciones que superen la cantidad de 2000 veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito

Federal, el Partido Político o coalición deberá conformar y conservar un expediente de cada uno de los proveedores y prestadores de servicios; dicho expediente contendrá copia de: Acta constitutiva y de la última modificación notarial de la sociedad, así como de los apoderados legales sólo en caso de personas morales; comprobante de domicilio fiscal; alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como Cédula de Identificación Fiscal y Curriculum Vitae, expedientes que deberán ser presentados a la UTEF cuando le sean requeridos; 37) las erogaciones que se efectúen con cargo a las cuentas "Materiales y Suministros" y "Servicios Generales" deberán ser contabilizadas en subcuentas por el tipo de gasto y, a su vez, se contabilizarán por subcuenta según el área que les dio origen. Los comprobantes deberán estar requisitados con el nombre, cargo, firma de quien recibió el bien o servicio y de quien lo autorizó, así como la fecha de recepción; 38) los gastos con cargo a la cuenta "Servicios de Información Pública", deberán ser contabilizados en subcuentas por el tipo de gasto. Los comprobantes deberán estar requisitados con el nombre, cargo, firma de quien recibió el bien o servicio y de quien lo autorizó, así como la fecha de recepción y el número de solicitud de información pública con la que se vincula el gasto; 39) para efectos de la propaganda electoral, la propaganda utilitaria, las tareas editoriales se utilizará la cuenta "Gastos por Amortizar" como cuenta de almacén, abriendo las subcuentas que se requieran, tanto en esta cuenta, como en las correspondientes a las cuentas de los rubros de gastos. Los bienes adquiridos deberán inventariarse, y su control se llevará mediante notas de entradas y salidas de almacén debidamente foliadas y autorizadas, señalando su origen y destino, así como nombre y firma de quien entrega y recibe y la fecha de recepción. Se deberá llevar un control adecuado a través de kárdex de almacén y practicar al cierre del ejercicio un inventario físico valuado, el cual estará a disposición de la UTEF cuando ésta lo solicite; 40) se entenderá como destino la distribución final que el Partido Político o coalición realice de dichos bienes, es decir cuando salen definitivamente de cualquier instancia del Partido Político o coalición; 41) para el caso de la propaganda electoral y utilitaria, las notas de salidas de almacén de estos materiales deberán ser identificadas específicamente

en las campañas políticas en que se emplearon, con objeto de aplicar el gasto por este concepto en cada una de ellas. Si un evento específico, donde se distribuyan este tipo de bienes, tiene relación con las campañas de diversos candidatos, deberá utilizarse el criterio de prorrateo establecido, según sea el caso; 42) las erogaciones por concepto de gastos en servicios personales deberán clasificarse a nivel de subcuenta por el área que los originó, verificando que la documentación comprobatoria esté autorizada por el funcionario del área de que se trate. Dichas erogaciones deberán estar respaldadas con la documentación siguiente: a) en el caso de servicios personales independientes por honorarios con el recibo que expida el prestador del servicio en términos de las disposiciones fiscales aplicables y b) en el caso de los servicios personales independientes por honorarios asimilados a salarios, así como por servicios personales subordinados, el partido político o coalición deberá expedir recibos foliados que contengan los datos de identificación del prestador del servicio, tales como: Nombre, Registro Federal de Contribuyentes, Cédula Única de Registro de Población, en su caso, número de afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social, periodo de pago, monto bruto del pago, retenciones por concepto de Impuesto Sobre la Renta y, en su caso, Seguridad Social e importe neto, firma del prestador de servicios, fecha, el tipo de servicio prestado, anexando copia de la credencial para votar con fotografía del prestador del servicio. Durante las campañas electorales dichos recibos deberán especificar la campaña de que se trate, las erogaciones por este concepto contarán para efectos de topes de gastos de campaña correspondientes; 43) los Partidos Políticos y coaliciones deberán celebrar contratos por escrito con el personal que les preste sus servicios bajo el régimen de honorarios profesionales, honorarios asimilados a salarios, así como con el personal del régimen de sueldos y salarios, en dichos contratos se deberán establecer claramente las obligaciones y derechos de ambas partes, el objeto del contrato, vigencia, tipo y condiciones del mismo importe contratado, formas de pago, penalizaciones y todas las demás condiciones contractuales que se consideren necesarias; 44) el Partido Político o coalición podrá otorgar reconocimientos en dinero a sus militantes o simpatizantes por su participación temporal en

precampañas y campañas electorales o en actividades ordinarias, siempre y cuando no medie relación laboral con el Partido Político o coalición. La suma total de las erogaciones por concepto de dichos reconocimientos, tendrá un límite máximo equivalente al 15% del tope de gastos de precampañas o campaña establecido para la elección respectiva o el 15% del financiamiento público anual para actividades ordinarias permanentes que reciba cada Partido Político, según sea el caso; 45) la UTEF realizará los cálculos correspondientes e informará por oficio a los Partidos Políticos o coaliciones, previo al inicio de las precampañas o campañas, según sea el caso, el monto máximo que se podrá erogar por este concepto para cada elección. Para el caso de actividades ordinarias, se informará dentro de los quince días posteriores a que se apruebe el financiamiento público anual que para actividades ordinarias le corresponda a cada Partido Político; 46) los reconocimientos en dinero que otorguen el Partido Político o coalición a sus militantes o simpatizantes por su participación en las campañas, precampañas y actividades ordinarias, deberán estar registrados contablemente y respaldados con los recibos correspondientes que especifiquen el nombre, registro federal de contribuyentes, firma de la persona a quien se efectuó el pago, domicilio, teléfono, monto, fecha del pago, el tipo de servicio prestado, el periodo durante el cual se realizó la actividad política, especificando, en su caso, la campaña o precampaña correspondiente; además se deberá anexar copia de la credencial para votar por ambos lados y estar firmados por el funcionario del área que autorizó el pago. En el supuesto de que la persona que recibe el reconocimiento fuera menor de edad, se deberá consignar algún otro dato que permita identificar plenamente a quien se le otorga el correspondiente reconocimiento, como puede ser la Clave Única del Registro de Población (CURP), el número de pasaporte vigente, los datos de la credencial vigente con fotografía expedida por alguna institución educativa oficial o el número de credencial con fotografía o identificación de alguna institución pública de seguridad social; 47) la carencia de alguno de los requisitos que obstaculice el procedimiento de verificación, será considerada como gasto no comprobado, independientemente de que, en su caso, se acumule para los topes de gastos de campaña; 48) las erogaciones realizadas por el Partido Político como

reconocimientos por su participación en actividades ordinarias a una sola persona física, que excedan los doscientos días de salario mínimo general diario vigente para el Distrito Federal en el transcurso de un mes, no podrán comprobarse mediante esta clase de recibos, no pudiéndose otorgar este tipo de reconocimientos a una sola persona por una cantidad mayor a mil días de salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal en el transcurso de un año; 49) los reconocimientos otorgados por el Partido Político a sus militantes o simpatizantes, por su participación temporal en las precampañas o campañas electorales, no deberán exceder el límite de veinte días de salario mínimo general diario vigente para el Distrito Federal por semana de servicio; 50) el Responsable del Partido Político o coalición, deberá autorizar la impresión por triplicado (original y 2 copias) de los recibos foliados que se expedirán para amparar los gastos originados por reconocimientos otorgados, ya sea a sus militantes o simpatizantes por su participación en las campañas electorales, precampañas o en actividades ordinarias y deberá llevarse un control de folios; de lo anterior, se informará a la UTEF dentro de los tres días previos a la recepción del tiraje, a efecto de que se comisione personal para verificar dicho acto; asimismo, los controles y los recibos se sujetarán a las reglas siguientes: a) el control de los recibos se llevará a cabo según el formato establecido para el efecto y con folios sucesivos. La numeración se hará conforme a los reconocimientos que otorgue el Órgano Directivo Central de cada Partido Político o coalición. Cada recibo foliado se imprimirá en original y dos copias; b) El control de folios de los recibos que imprima y expida el Órgano Directivo Central de cada Partido Político o coalición, deberá contener los requisitos siguientes: el número total de recibos impresos, el último folio del recibo utilizado en el año anterior, el número de los recibos cancelados, el número de los recibos utilizados con su importe total y los recibos pendientes de utilizar. Los controles de folios deberán remitirse a la UTEF, cuando lo solicite; c) Los recibos se deberán expedir en forma consecutiva. El original permanecerá anexo a la póliza contable correspondiente junto con la copia de la credencial para votar de la persona que prestó el servicio, la primera copia impresa deberá entregarse a la persona que se le efectuó el pago y la segunda al expediente consecutivo del

Partido Político o coalición; en el caso de los reconocimientos por su participación en campañas y en precampaña deberá especificarse la candidatura o precandidatura beneficiada; en el caso de que no se relacionen con una campaña específica, deberá seguirse el criterio de prorrateo establecido por el partido político o coalición; d) Lo establecido en el Reglamento no releva a los Partidos Políticos o coaliciones y a las personas que reciban pagos por parte de éstos, del cumplimiento de las obligaciones que les imponen las leyes fiscales, laborales o cualquier otra que resulte aplicable y e) Con los Informes Consolidados de los precandidatos triunfadores o perdedores, los de Campaña, y en su caso Anuales, el Partido Político o coalición deberán presentar los controles de folios y relaciones de las personas que recibieron reconocimientos por su participación en actividades políticas, así como el monto total que percibió cada una de ellas durante el periodo correspondiente. Los nombres de los beneficiarios deberán aparecer en el siguiente orden: apellido paterno, apellido materno y nombre (s), incluyendo un desglose de cada reconocimiento recibido por cada una de ellas, y deberá de remitirse en medios magnéticos a la UTEF; 51) El Partido Político no podrá destinar el financiamiento público por actividades específicas a fines distintos a los señalados en el CIPEDF y el Reglamento de Fiscalización para Partidos Políticos, las cuales estarán encaminadas a: Educación y Capacitación. Dentro de este rubro se entenderán aquellas actividades que tengan por objeto: a) inculcar en la población los valores democráticos e instruir a los ciudadanos en sus derechos y obligaciones; b) Promover la formación ideológica y política de sus afiliados, con el propósito de infundir en ellos el respeto al adversario, así como consolidar sus derechos en la participación política y c) Preparar la participación activa de sus militantes en los procesos electorales, fortaleciendo con ello el régimen de Partidos Políticos. Formación de Liderazgos Femeniles y Juveniles. Dentro de este apartado se pueden realizar las actividades de capacitación en las cuales se promueva la formación y desarrollo político de las mujeres y jóvenes, tales como: a) Capacitar al mayor número de mujeres y jóvenes desarrollando el liderazgo político para el acceso a dirigir sus órganos directivos; b) promover la formación y participación política de las mujeres y jóvenes para el acceso a los

cargos de representación popular; c) investigación socioeconómica, política y parlamentaria, las cuales deben orientarse a la realización de estudios, análisis, encuestas y diagnósticos relativos a los problemas en el Distrito Federal, que afectan la formación de liderazgos femeniles y juveniles, y d) realizar la edición de impresos, grabaciones, videos, medios ópticos o magnéticos y por internet, relativos a los trabajos realizados en los incisos anteriores. Investigación Socioeconómica, Política y Parlamentaria. Estas actividades deben orientarse a la realización de estudios, análisis, encuestas y diagnósticos relativos a los problemas en el Distrito Federal, que contribuyan, directa o indirectamente, en la elaboración de propuestas para su solución. Tales estudios deberán contener una metodología científica, que contemple diversas técnicas que permitan verificar las fuentes de la información y comprobar los resultados obtenidos. Tareas Editoriales. Dentro de este apartado deberán considerarse las actividades destinadas a: 1) La edición y producción de impresos, video grabaciones, medios ópticos y/o medios magnéticos y por internet, relativos a la ideología, tareas y propuestas del Partido Político; 2) la edición e impresión de las actividades mencionadas en las fracciones señaladas con anterioridad, 3) dentro de este rubro está contemplada la publicación mensual de divulgación que el partido político está obligado a realizar, en los términos del CIPEDF; 4) la UTEF verificará que los gastos en actividades específicas reportados por el partido político, correspondan a dichos conceptos, para lo cual deberán presentar los elementos de convicción necesarios para acreditar las erogaciones en estos rubros; 5) los gastos efectuados en actividades específicas realizadas por el Partido Político como entidad de interés público, se registrarán contablemente separándolos en sus distintos conceptos: educación y capacitación, formación de liderazgos femeniles y juveniles, investigación socioeconómica, política y parlamentaria, así como en tareas editoriales.

Se consideran como gastos por actividades específicas los siguientes:

Actividades de Educación y Capacitación: 1) Gastos por difusión de la convocatoria o realización del evento específico; 2) honorarios del personal encargado de la realización y organización del evento específico; 3) gastos por renta del local y mobiliario para la realización del evento específico; 4) gastos por renta de equipo técnico en general para la realización del evento específico; 5) gastos por adquisición de papelería para la realización del evento específico; 6) honorarios de expositores, capacitadores, conferencistas o equivalentes que participen en el evento específico; 7) viáticos de expositores, capacitadores, conferencistas o equivalentes que participen en el evento específico; 8) honorarios del personal encargado de auxiliar en las labores para la realización del evento específico; 9) gastos por alimentación y viáticos de los asistentes al evento específico, y 10) gastos por preparación de los resultados del evento específico para su posterior publicación.

Formación de Liderazgos Femeniles y Juveniles: Se considerarán todas las actividades similares a las establecidas en las fracciones I, III y IV del artículo 87 del Reglamento de Fiscalización para los partidos políticos, encaminadas a la formación de liderazgos femeniles y juveniles.

Actividades de Investigación Socioeconómica, Política y Parlamentaria: 1) Gastos por difusión de la convocatoria para la realización de la investigación específica; 2) honorarios de los investigadores por concepto de la realización de la investigación específica; 3) honorarios del personal auxiliar de la investigación específica; 4) gastos por realización de las actividades de investigación específica de campo o de gabinete; 5) gastos por adquisición de papelería para la realización de la investigación específica; 6) gastos por adquisición de material bibliográfico y hemerográfico referente al tema de la investigación específica; 7) honorarios del personal encargado de coordinar las tareas de la investigación específica; 8) gastos por la preparación de los productos de la investigación específica para su posterior publicación, y 9) gastos por renta de equipo técnico necesario para la realización de la investigación.

Tareas Editoriales: 1) Gastos por la producción; como son: la formación, diseño, fotografía y edición de la publicación específica; 2) gastos por impresión o reproducción de la actividad editorial; 3) gastos por distribución de la actividad editorial específica, y 4) gastos de diseño para la publicación en internet; 5) en el caso de los gastos en educación y capacitación, formación de liderazgos femeniles y juveniles y las tareas editoriales, el Partido Político deberá informar por escrito a la UTEF, cuando menos con tres días de anticipación, de la realización de cursos, eventos o recepción de tiraje, según sea el caso, para que ésta comisione personal de la misma a efecto de presenciar dichos eventos. En dicho escrito se precisará el lugar y la hora en que se llevará a cabo, así como el nombre de la persona con quien se atenderá dicha diligencia. De lo anterior, el personal que asista a verificar la recepción del tiraje o presenciar los cursos de capacitación, levantará un acta circunstanciada en original y copia, la cual deberá estar firmada tanto por el personal designado por la UTEF, así como por la persona que nombre el Partido Político, la original quedará en poder del área de fiscalización y la copia será entregada al Partido Político; 6) el Partido Político deberá destinar en el transcurso de cada año, al menos el 3% del financiamiento público para actividades ordinarias permanentes que reciban para la generación y fortalecimiento de liderazgos femeninos, así como al menos el 2% para liderazgos juveniles; 7) dentro de los diez días posteriores a que el Consejo General apruebe el financiamiento público para actividades ordinarias permanentes, la UTEF informará a los Partidos Políticos el monto mínimo de los recursos que deben destinar para tales actividades; 8) se considerarán como actividades encaminadas a la generación y fortalecimiento de liderazgos femeniles y juveniles, aquellas que lleve a cabo el partido político en el transcurso del año, similares a las señaladas en la fracción II del artículo 86 del Reglamento de Fiscalización para los Partidos Políticos, las cuales se registrarán contablemente en las cuentas específicas señaladas en el catálogo de cuentas; 9) durante el mes de enero de cada año, los Partidos Políticos remitirán a la UTEF copia autorizada del programa anual de actividades encaminadas a la formación de liderazgos femeniles y juveniles; 10) el

Partido Político podrá adquirir, con los recursos provenientes del financiamiento público para actividades específicas, mobiliario y equipo de oficina, didáctico y de cómputo para su centro de formación, los cuales no podrán destinarse a actividades distintas a la educación y capacitación; 11) el Partido Político llevará un inventario de los activos fijos cuya adquisición se reportó como gastos en actividades específicas; las adiciones a dicho inventario deberán ser reportadas a la UTEF dentro de los treinta días naturales posteriores a su adquisición. En el mes de diciembre de cada año, deberá levantarse un inventario físico actualizado y valuado, el cual será remitido a la UTEF junto con el Informe Anual; 12) en el rubro de bancos, el Partido Político que presente en sus conciliaciones bancarias al mes de diciembre del año que se reporte partidas con una antigüedad mayor a un año, deberá presentar a la UTEF una relación detallada del tipo de movimiento en conciliación, fecha, importe, en su caso nombre de la persona a la que fue expedido el cheque en tránsito o el detalle del depósito no identificado y exponer las razones por las cuales esas partidas siguen en conciliación. Asimismo, deberán presentar la documentación que justifique las gestiones efectuadas para su regularización; 13) el Partido Político establecerá lineamientos internos que regulen las erogaciones con cargo a la “Cuentas por Cobrar” o “Gastos por Comprobar”, y los mecanismos para su comprobación y/o recuperación, de conformidad con el artículo 94 del Reglamento de Fiscalización para Partidos Políticos; 14) los egresos registrados contablemente en los rubros de “Gastos por Comprobar” y “Cuentas por Cobrar” deberán registrarse contablemente y estar sustentados con la documentación comprobatoria que acrediten su fin, a quien se otorgó indicando el área al que pertenece, el plazo para su comprobación o recuperación; asimismo, se deberá autorizar por el Responsable del Partido Político o coalición; 15) los préstamos otorgados a sus trabajadores deberán estar debidamente documentados mediante el contrato correspondiente, en el que se establecerá la forma y periodicidad de los pagos. En ningún caso se establecerán plazos mayores a un año para su total recuperación; 16) si al cierre de un ejercicio, un Partido Político presenta saldos en los rubros “Gastos por Comprobar” y “Cuentas por Cobrar” con antigüedad mayor a un año y a más

tardar en la fecha que venza el plazo para atender la notificación de observaciones subsistentes, los mismos continúan sin haberse recuperado o comprobado con la documentación correspondiente, estos serán considerados como egresos no comprobados; 17) no serán considerados egresos no comprobados aquellos saldos que el Partido Político haya hecho del conocimiento de la UTEF, mediante escrito, de la existencia de alguna excepción legal y/o demuestre la imposibilidad material para su comprobación o recuperación. Además, el Partido Político deberá presentar los movimientos que conforman los saldos de las cuentas por cobrar con antigüedad mayor a un año. En dicha relación deberá de indicar la referencia contable y en el caso de las disminuciones de saldos deberá señalar si dichos movimientos corresponden a saldos con antigüedad mayor a un año; 18) una vez revisados dichos saldos y analizada la documentación proporcionada por el Partido Político con las que acredite la excepción legal o la imposibilidad material de su cobro o comprobación, la UTEF las hará del conocimiento de la Comisión de Fiscalización para su opinión y, en su caso, se proceda a su cancelación contable; 19) los saldos que sean sancionados como gastos no comprobados, podrán ser cancelados; 20) las cuentas por cobrar que al cierre de las campañas tenga la Coalición, serán registradas en la contabilidad del Partido Político que representó financieramente a la misma debiendo ajustarse a lo señalado en el procedimiento de comprobación afectando su recuperación, la Subcuenta de “Transferencias a la Coalición” de la cuenta de “Gastos de Campaña”, salvo en los casos en que los Partidos Políticos coaligados decidan distribuirse dichos saldos, de lo cual se informará a la UTEF al momento de la presentación de los informes respectivos; 21) si al final del ejercicio existiera un pasivo en la contabilidad del Partido Político, éste deberá integrarse detalladamente, con mención de montos, nombres, concepto y fechas de contratación de la obligación, calendario de amortización y de vencimiento, así como en su caso, las garantías otorgadas; estos pasivos deberán estar debidamente registrados y respaldados documentalmente y autorizados por los funcionarios facultados para ello en los manuales de organización y procedimientos del Partido Político y deberá anexarse al Informe Anual del ejercicio sujeto a revisión en hoja de cálculo, de forma impresa y en

medio magnético; asimismo deberá indicar la referencia contable y, en su caso deberá señalar si los movimientos corresponden a saldos con antigüedad mayor a un año; 22) cuando se trate de saldos pendientes de liquidar por obligaciones o deudas contraídas al término del ejercicio sujeto a revisión, la UTEF podrá solicitar la documentación de los pasivos pagados con posterioridad a dicha fecha, aun cuando ésta no corresponda al ejercicio sujeto a revisión; 23) si al final de las precampañas o campañas electorales existiera un pasivo en la contabilidad del Partido Político o coalición, éste deberá integrarse detalladamente en hoja de cálculo, de forma impresa y en algún medio magnético y remitirse a la UTEF junto con el informe respectivo, con mención de montos, nombres, conceptos y fechas. Dichos pasivos deberán de estar debidamente respaldados con la documentación comprobatoria respectiva, así como estar autorizados por los funcionarios facultados para ello; 24) las cuentas por pagar que al cierre de las campañas tenga la coalición, serán registradas en la contabilidad del Partido Político que representó financieramente a la misma, afectando la Subcuenta de “Transferencias a la coalición” de la cuenta de “Gastos de Campaña”, salvo en los casos en que los Partidos Políticos coaligados decidan distribuirse dichos saldos, de lo cual se informará a la UTEF al momento de la presentación de los informes respectivos; 25) cada Partido Político que forme parte de un Frente, se sujetará a las reglas siguientes, respecto del manejo de los recursos para alcanzar los objetivos establecidos conforme a lo dispuesto en el artículo 237 del CIPEDF: Los recursos destinados a la consecución de los fines de un Frente deberán registrarse en cuentas específicas en la contabilidad del partido para tal efecto, en las que se especifique su destino y deberán conservarse las pólizas de los cheques correspondientes junto con la documentación comprobatoria; 26) en las cuentas contables del Partido Político deberán identificarse y registrarse todos los gastos efectuados con los recursos destinados a la consecución de los fines del Frente, de conformidad con el Catálogo de Cuentas previsto; los comprobantes de los egresos deberán ser emitidos a nombre del Partido Político que los realizó; Desde un mes antes del inicio de las campañas electorales locales y hasta un mes posterior a la conclusión de éstas, en ningún caso y por ninguna circunstancia, los

Partidos Políticos podrán destinar recursos en efectivo o especie para financiar actividades relacionadas con la consecución de los fines del Frente, y Los Partidos Políticos integrantes del Frente no podrán al amparo de esta figura destinar recursos para actividades de apoyo electoral a cualquier aspirante a cargo de elección popular federal o local antes y durante los procesos de selección interna que los mismos celebren; así como durante los periodos de campaña electoral que señalen las leyes del ámbito territorial que corresponda; 26) en caso de que los Partidos Políticos incurran en conductas contrarias a lo mencionado, la UTEF las considerará, según sea el caso, para efectos de los informes de ingresos y gastos de los procesos de selección interna, de los periodos anuales o de campaña; así como para los topes de gastos de campaña y sanciones por faltas administrativas y/o de fiscalización. La UTEF podrá solicitar en cualquier tiempo a los Partidos Políticos integrantes de un Frente, información sobre el monto y el destino de los recursos que destinen para financiar las actividades del mismo.

El haber conocido las diversas fuentes de origen de los recursos con los que operan los partidos políticos, así como la serie de normas que se presentaron, para dar atención a su operación sustantiva, en el cuerpo mismo de los institutos políticos, en cuanto a su origen, destino y aplicación de los recursos de los que son objeto, referidas en el presente capítulo, son en esencia los elementos que invariablemente constituyen la materia prima de la fiscalización que realiza la UTEF, la cual aborda inicialmente mediante el análisis financiero de los informes presentados por los institutos políticos.

Ahora bien la parte angular donde se gesta la fiscalización a dichos partidos es la función de planeación de esa verificación pormenorizada y técnica, la que se incluye en el siguiente capítulo.

CAPÍTULO 4

LOS PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN ELECTORAL EN LA PLANEACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN A LOS PARTIDOS POLITÍCOS EN EL DISTRITO FEDERAL.

El artículo 118, fracción II del Estatuto de Gobierno, establece que para el desarrollo y bienestar social en la Ciudad, se deberán tomar en cuenta entre otras materias, la planeación del desarrollo.

La Ley de Planeación del Desarrollo del Distrito Federal, señala en su artículo 2 fracción I, que la planeación se llevará a cabo como un medio eficaz y permanente para impulsar el desarrollo integral del Distrito Federal y atenderá a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales y económicos contenidos en la Constitución Política y en el Estatuto de Gobierno, puntualizando la existencia de principios fundamentales de la planeación como el relativo al reconocimiento de la consolidación de la democracia como forma de gobierno y como sistema de vida, fundada en el constante mejoramiento económico, social y cultural de los habitantes del Distrito Federal.

Por su parte, el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018 propone una agenda para la ciudad y establece el rumbo de la acción de la administración pública, estableciendo para el efecto las reglas para la Planeación, Programación y Presupuestación en las instituciones del GDF.

Así encontramos en su eje 2. Gobernabilidad, Seguridad y Protección Ciudadana, que parte sustantiva de la visión integral del GDF está conformada por el tema de la gobernabilidad, que precisamente es la forma de dirigir la ciudad y estas acciones se constituyen como pilares para los gobiernos democráticamente electos y surgidos de la izquierda, aunadas a las prioridades y demandas de atención de la población del Distrito Federal.[87]

[87] Programa de Desarrollo del Distrito Federal 2010-2018, consultado en: http://www.consejeria.df.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/522fe67482e50.pdf

Con lo anterior, señala que las condiciones actuales “son idóneas para concretar el reconocimiento del Distrito Federal a la par del resto de las entidades; para lo cual se necesita contar con los mismos derechos y obligaciones que el resto de las entidades del país. Para ello, es imperativo que la capital cuente con una constitución local y que la (ALDF), las y los habitantes de la ciudad, la sociedad civil organizada, la academia y los expertos en el tema participen en las reformas constitucionales, a fin de que el Gobierno de la Ciudad de México cuente con las facultades suficientes para promover el crecimiento económico y el bienestar social de su población”.[88]

El Programa de Desarrollo del Distrito Federal, coloca como área de oportunidad en términos del eje 2, a la Reforma Política de la entidad federativa, señalando que pese a los esfuerzos para modificar el estatus jurídico, el Distrito Federal no ha podido convertirse en un estado soberano con autonomía en su régimen interior; su gobierno sigue estando a cargo de los poderes federales y de los órganos ejecutivo, legislativo y judicial del orden local. Por lo anterior, establece como objetivo el siguiente: Impulsar la reforma política para constitucionalizar la autonomía de la Ciudad de México en su régimen interior, consolidarla como una ciudad capital y establecer una constitución política propia.

Para lograr alcanzar el objetivo arriba señalado, establece dos metas y enmarca su actuar a través de diversas líneas de acción, tal y como lo muestra el cuadro siguiente:

[88] Ibídem.

Cuadro 22. Metas y Líneas de Acción del Programa de Desarrollo del D.F. 2013-2018	
META	**LÍNEAS DE ACCIÓN**
Meta 1. Concretar los estudios e informes pertinentes en materia constitucional y legal dirigidos a establecer ejes temáticos generales para la discusión de la reforma.	✓ Analizar los diversos proyectos de reforma política para la Ciudad de México presentados ante el H. Congreso de la Unión. ✓ Contribuir a referenciar los tópicos que serán el punto de partida para el intercambio en foros de debate, en los cuales participen paritariamente mujeres y hombres. ✓ Elaborar los diagnósticos que analicen los principales problemas del marco jurídico de la Ciudad. ✓ Proponer soluciones y alternativas que fortalezcan el marco jurídico-político de autonomía de la capital.
Meta 2. Fortalecer la identidad político-cultural de la población de la Ciudad de México para consolidar la reforma política como un asunto de todas y todos, llevando su discusión a los diversos ámbitos de vida de la ciudad: delegaciones, barrios, sindicatos, unidades habitacionales, instituciones de educación superior, colonias, etc.	✓ Organizar foros de discusión por eje temático para recoger e integrar las propuestas de la ciudadanía y de diversos actores políticos y sociales. ✓ Promover la instalación de una mesa nacional y otra local de negociación a fin de incluir a todas y todos los actores políticos y sociales interesados. ✓ Sistematizar las conclusiones de los foros en un documento que constituya un referente para las instancias políticas competentes en materia de reforma política y que refleje los intereses y necesidades de la ciudadanía. ✓ Generar los consensos sobre las principales orientaciones de la nueva constitución.

FUENTE: Elaboración propia a partir de la información del Programa de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018.

El IEDF como instancia responsable de la función estatal de organizar las elecciones locales y los procedimientos de participación ciudadana, de acuerdo a lo previsto en el artículo 20 del CIPEDF y la Ley de Participación Ciudadana, sus fines y acciones se orientan a:

I. Contribuir al desarrollo de la vida democrática;

II. Fortalecer el régimen de asociaciones políticas;

III. Asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones;

IV. Garantizar la celebración periódica, auténtica y pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes de la Asamblea Legislativa, al Jefe de Gobierno y a los Jefes Delegacionales;

V. Garantizar la realización de los procesos electivos de los órganos de representación ciudadana e instrumentos de participación ciudadana, conforme a la Ley de Participación;
VI. Preservar la autenticidad y efectividad del sufragio;
VII. Promover el voto y la participación ciudadana;
VIII. Difundir la cultura cívica democrática y de la participación ciudadana; y
IX. Contribuir al desarrollo y adecuado funcionamiento de la institucionalidad democrática, en su ámbito de atribuciones.

En virtud de que el IEDF es un organismo público autónomo de carácter permanente, independiente en sus decisiones, autónomo en su funcionamiento, con personalidad jurídica y patrimonio propios, está facultado, entre otros aspectos, para aprobar la normatividad interna, entre ella la relativa a su planeación, que le permita el correcto funcionamiento integrado en un Plan General, así como los proyectos de Programa Operativo Anual (POA) y Presupuesto.

Para el debido cumplimiento de sus funciones, el IEDF rige su actuar por un conjunto de principios, los cuales son complementados por las Políticas y Programas Generales establecidos, esto significa que no sólo regulan las acciones de los funcionarios del Instituto, sino que influyen en la toma de decisiones y son referentes determinantes en la planeación institucional.

4.1 Planeación de la Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos en el (IEDF).

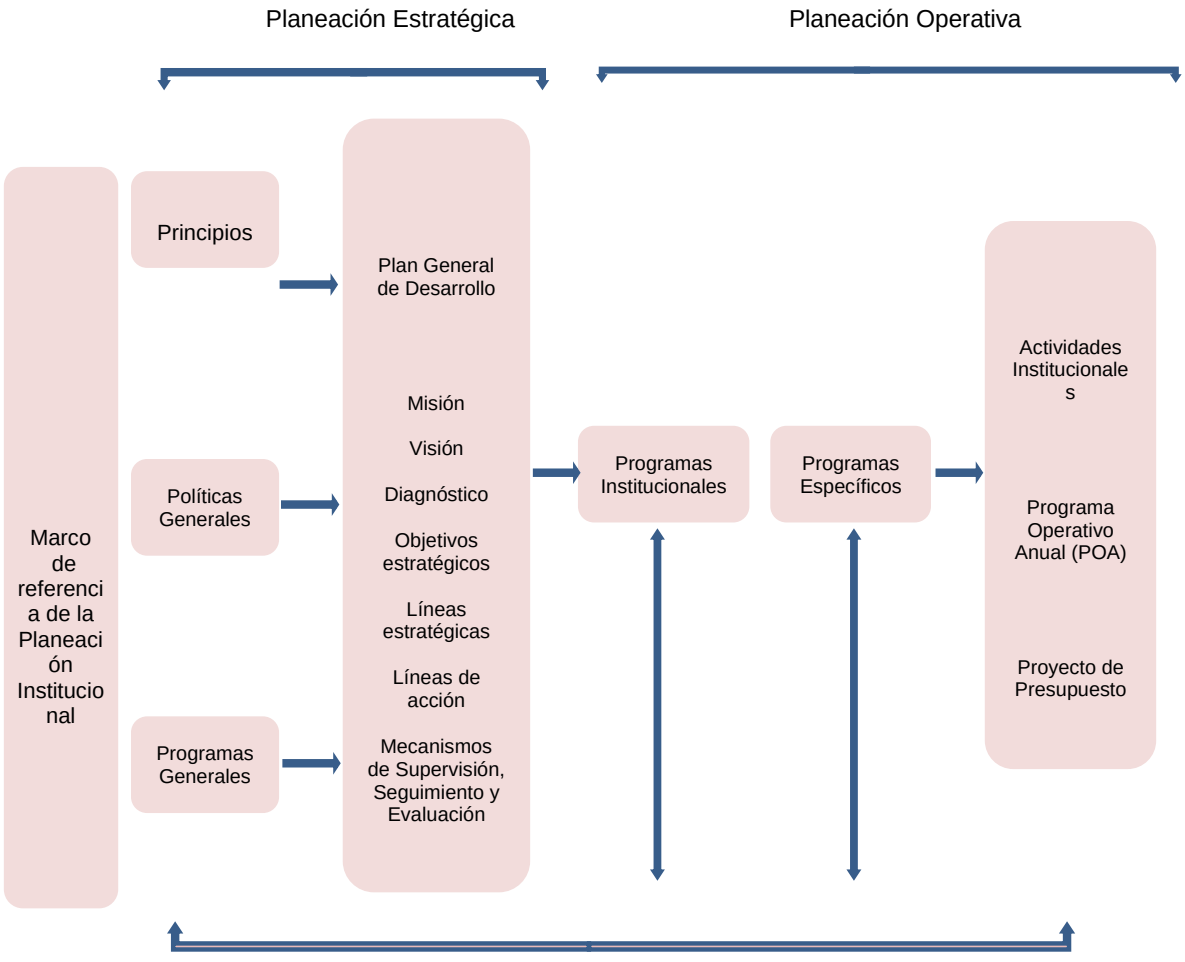
Las tareas de planeación, seguimiento y evaluación de los asuntos administrativos del IEDF están a cargo de la Secretaría Administrativa,[89] misma que presentará a la Junta Administrativa las propuestas de aplicación de mecanismos y procedimientos de planeación operativa institucional.[90]

[89] Véase artículo 68 del CIPEDF.
[90] Véase fracción XX inciso d) del Artículo 64 del CIPEDF.

“La planeación es concebida como el proceso sistemático y racional, mediante el cual se establecen los objetivos y resultados que regirán a futuro la acción institucional, en ésta se determina que se va a hacer, los medios para lograrlo, así como los responsables y el tiempo específico para su cumplimiento.”[91]

La planeación institucional considera dos niveles: el estratégico y el operativo; el Consejo General, a través de la Comisión Provisional y de la Secretaría Administrativa, será el órgano responsable de formular y aprobar la misma la planeación.

Figura 3. Planeación institucional del IEDF



FUENTE: Manual de Planeación IEDF; consúltese: www.iedf.org.mx

[91] Manual de Planeación del Instituto del Distrito Federal. Consultado en: http://www.iedf.org.mx/transparencia/art.14/14.f.01/manuales/18MPlaneacion.pdf

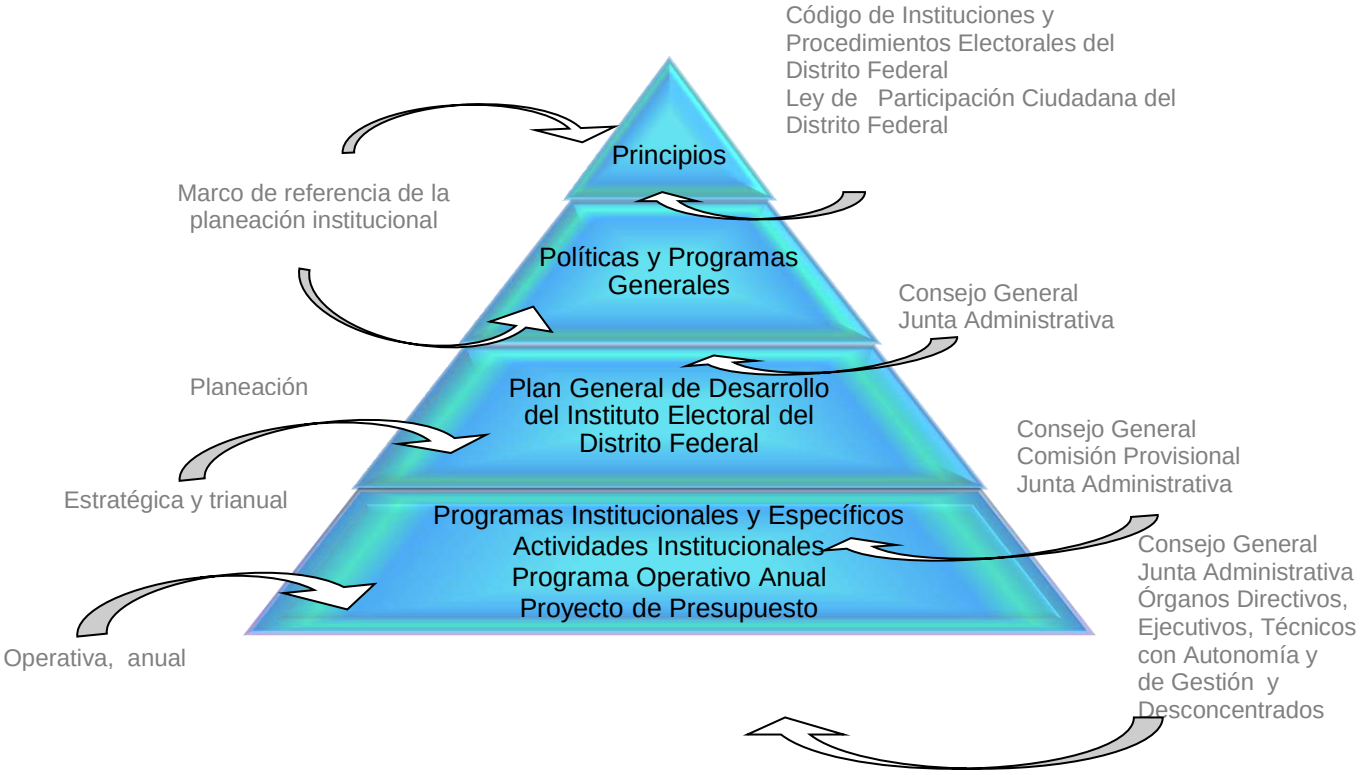
En el marco de la planeación estratégica, se formula el Plan General de Desarrollo del Instituto Electoral (Plan General) y es un proceso formal de mediano plazo que se realiza sobre la base del análisis de la institución y su entorno; establece objetivos, líneas estratégicas y de acción, así como los mecanismos necesarios para evaluar el cumplimiento de lo establecido. De igual manera es un proceso de comunicación en el que intervienen los tres niveles de la institución: directivo, ejecutivo y técnico.

Por otra parte, la planeación operativa posibilita la materialización gradual y paulatina de los objetivos estratégicos del Plan General. Es un proceso anual conformado por tres etapas: planeación, programación y presupuestación. Su desarrollo involucra un conjunto de actividades sucesivas y determinadas que ejecutan los órganos directivos, ejecutivos, técnicos y desconcentrados para elaborar las actividades institucionales que integrarán el (POA) del ejercicio fiscal correspondiente.

Los productos que se obtienen en la planeación operativa, son los institucionales y específicos, el POA y el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Instituto Electoral."[92]

[92] Manual de Planeación del Instituto Electoral del Distrito Federal. www.iedf.org.mx

Figura 4. Jerarquización de la planeación institucional en el IEDF



Fuente: Manual de Planeación IEDF; consúltese: www.iedf.org.mx

4.2 Políticas Generales del Instituto Electoral del Distrito Federal.

Las Políticas Generales del IEDF orientan la gestión para que sea, acorde con los valores, los principios y la naturaleza jurídica del Instituto, se apoye la toma de decisiones para el adecuado desempeño de sus atribuciones.

Por su naturaleza, las Políticas Generales, se instituyen como el marco de referencia del sistema de planeación institucional; al tiempo que destacan aspectos cruciales a ser considerados en el cumplimiento de la misión y el alcance de la visión institucional.

1. **Política de Calidad en la Gestión.** Encaminada a garantizar que el cumplimiento de los fines y las acciones que realiza el Instituto como organismo público, se lleven a cabo a través de la aplicación eficiente y racional de los recursos por personal profesional sujeto a procedimientos y lineamientos de

incorporación, capacitación, control y evaluación que fortalezca la cultura de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que caracteriza al quehacer institucional.

2. **Política de Fortalecimiento Institucional.** Tendente a consolidar al Instituto como autoridad electoral permanente y confiable, responsable, garante de los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y equidad, con los valores de la democracia, capaz de acrecentar el reconocimiento de la población en general, mediante el desarrollo eficiente y eficaz de la organización interna, del cumplimiento cabal de sus fines y del desempeño profesional de sus funcionarios; así como por la difusión de sus actividades y resultados; y de la vinculación y colaboración con organismos públicos, privados y sociales, que favorezcan el intercambio de experiencias e información en materia político-electoral.

3. **Política de Construcción de Ciudadanía.** Las acciones del IEDF que se impulsan entre los habitantes del Distrito Federal, la adopción de valores, habilidades, prácticas y actitudes democráticas que permiten fortalecer a la democracia como forma de gobierno y modo de vida, mediante los procesos de educación y formación que favorecen la participación consciente y responsable de los ciudadanos en las decisiones públicas.

4. **Política de Transparencia y Rendición de Cuentas.** La transparencia y la rendición de cuentas son valores esenciales en el desempeño del IEDF, que garantizan a la población el acceso a información respecto de las actividades realizadas, el ejercicio de los recursos públicos que tiene asignados y los resultados de su gestión. Los mecanismos e instrumentos de transparencia y rendición de cuentas que promueva el Instituto, están fundados en el derecho de acceso a la información pública, la obligación de informar, el principio de máxima publicidad, considerando para su definición el marco legal establecido en la materia y el creciente interés de la población por conocer la actuación de sus autoridades y el uso de los recursos públicos.

5. **Política de Derechos Humanos y Equidad de Género.** Orientada a fomentar entre su personal y los habitantes de la Ciudad de México en el ámbito de su competencia, una cultura de respeto y promoción de los derechos humanos y la equidad de género como contenidos imprescindibles del desarrollo de la vida democrática. Estas materias estarán consideradas de manera transversal en cada uno de los programas y actividades que desarrolle el Instituto y se constituirán en premisas básicas del funcionamiento institucional.

4.3 Programas Generales del Instituto Electoral del Distrito Federal.

Los Programas Generales constituyen las directrices del quehacer institucional, establecen los temas estratégicos en los que el Instituto concentra sus esfuerzos, y guían la formulación de los objetivos estratégicos, las líneas estratégicas y las líneas de acción del Plan General de Desarrollo del Instituto Electoral del Distrito Federal.

1. **Programa General de Asociaciones Políticas**, se encuentra orientado a fortalecer los partidos políticos con registro nacional y local, y a las agrupaciones políticas locales en el Distrito Federal a través del trato igualitario basado en los principios institucionales de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad, equidad y transparencia, y de la implementación de una mejora continua en los procesos de fiscalización y sustanciación de los procedimientos administrativos sancionadores.

2. **Programa General de Imagen y Colaboración Institucional,** apunta a fortalecer la imagen del Instituto a través de sus fines y actividades para acrecentar la confianza y credibilidad de la población tanto del propio Instituto como de los partidos políticos, además de favorecer el desarrollo, la consolidación, el mejoramiento y difusión de las actividades que realizan las áreas que integran el Instituto para el cumplimiento de los objetivos y fines institucionales, mediante convenios y acuerdos, en el marco de la autonomía del Instituto y apegados a la normatividad establecida.

3. **Programa General de Transparencia y Rendición de Cuentas,** está orientado a fomentar una cultura de acceso a la información y rendición de cuentas, mediante la difusión y publicación de los actos del Instituto sobre el uso de los recursos asignados y los logros obtenidos en la ejecución de sus programas, a través del fortalecimiento de los mecanismos institucionales dedicados a la organización y difusión de la información de carácter público para la atención y consulta de la población en general.

Los mencionados Programas Generales aprobados por el Consejo General mediante el acuerdo JA027-13 de marzo 2013, establecen los objetivos estratégicos en los que el Instituto Electoral concentra sus esfuerzos, buscando congruencia entre los instrumentos de corto plazo, necesarios para brindar certeza en cuanto al orden de prioridades y a la dirección de las actividades institucionales para el ejercicio del 2013, entre los cuales encontramos:

1. Implementar el programa de fiscalización para verificar el origen y destino de los recursos de los partidos políticos.

2. Revisar los informes sobre el origen, monto y destino de ingresos y egresos de los recursos de los partidos políticos.

3. Elaborar los dictámenes consolidados y los proyectos de resolución derivados de los informes.

4. Transparentar el origen, monto y destino de los recursos de los partidos políticos locales.

5. Revisar los informes de los partidos políticos que pierdan su registro.

6. Elaborar los dictámenes de cierre de liquidación del patrimonio los partidos políticos que pierdan su registro.

7. Revisar y, en su caso, perfeccionar la normativa relativa a los procedimientos de sustanciación de quejas que interponen los partidos políticos respecto al origen, monto y destino de sus recursos.

8. Proponer adecuaciones y reformas para mantener actualizada la normativa aplicable en materia de fiscalización.

9. Mejorar el modelo de fiscalización, a fin de garantizar la vigilancia objetiva del origen de los recursos de los partidos políticos y permitir una efectiva rendición de cuentas.

10. Incrementar la profesionalización de los funcionarios encargados del proceso de fiscalización.

Es de puntualizarse que los Programas Generales que se encuentran vinculados con el Programa específico de Fiscalización, son las Políticas Generales de Fortalecimiento Institucional, de Transparencia y Rendición de Cuentas, Derechos Humanos y Equidad de Género.

4.4 Plan General de Desarrollo del Instituto Electoral del Distrito Federal.

El 30 de enero de 2014, mediante el ACU-08-14, el Consejo General del Instituto aprobó el Plan General de Desarrollo del Instituto Electoral del Distrito Federal para el ejercicio 2014-2017.

El artículo 35, fracción VI del CIPEDF señala que el Consejo General tiene la atribución de aprobar cada tres años el Plan General de Desarrollo del Instituto Electoral, con base en la propuesta que presente la respectiva Comisión Provisional que para el efecto se integre.

En lo correspondiente al ejercicio 2014, el 31 de enero de 2013 el Consejo General del IEDF aprobó mediante Acuerdo identificado con la clave alfanumérica ACU-06-13, la creación de la Comisión Provisional encargada de elaborar el Plan General de Desarrollo para el periodo 2014-2017.

4.5 Programas Institucionales y Específicos.

Los programas institucionales con los que cuenta el IEDF son los siguientes: Modernización, Simplificación y Desconcentración Administrativa; uso y optimización de los recursos financieros, humanos y materiales; uso de instrumentos informáticos; reclutamiento y selección del Servicio Profesional Electoral; formación y desarrollo del personal del Servicio Profesional Electoral; selección e ingreso del personal administrativo: capacitación y actualización del personal administrativo; capacitación electoral; educación cívica; participación ciudadana; organización electoral; geografía electoral; vinculación y fortalecimiento de las asociaciones políticas; promoción y desarrollo de los principios rectores de la participación ciudadana; capacitación, educación, asesoría y comunicación sobre las atribuciones de los órganos de representación ciudadana, organizaciones ciudadanas y ciudadanía en general; evaluación del desempeño de los Comités Ciudadanos; y fiscalización de los recursos de los partidos políticos.

Por lo que hace a los programas específicos existen: el interno de auditoría; el de evaluación del rendimiento del Servicio Profesional Electoral, de desarrollo archivístico, editorial y los que se determinen de acuerdo con la normativa y las necesidades institucionales, y finalmente encontramos en este rubro el POA y proyecto de presupuesto, integrados por las actividades institucionales que elaboran los órganos directivos, ejecutivos, técnicos, desconcentrados y con autonomía de gestión.

4.6 Programa de fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos

De conformidad con lo establecido en el artículo 90, fracción I, del CIPEDF, la UTEF tiene, entre otras, la atribución de elaborar y remitir a la Junta Administrativa previa opinión de la Comisión de Fiscalización el proyecto de Programa de Fiscalización.

La UTEF consideró poner mayor énfasis a partir del 2013, en las actividades encaminadas a la asesoría, el apoyo en las gestiones administrativas, estrechar los lazos de comunicación con los partidos políticos, así como la difusión pretendiendo con ello el intercambio de ideas y propuestas que mejoren los procesos de fiscalización desde un punto de vista preventivo, que permita el pleno conocimiento y con ello el cumplimiento de sus obligaciones y derechos de equidad transparencia y rendición de cuentas, propiciando el fortalecimiento del régimen de partidos políticos, a través de la difusión a la sociedad de la forma en la que los institutos políticos cumplan con su obligación de informar y trasparentar los recursos públicos asignados que reciben y ejercen como entidades de interés público.

No obstante lo anterior, para el cumplimiento de lo programado para el ejercicio 2014, la UTEF ha determinado que los medios idóneos para lograr el objetivo de este programa son los siguientes:

Cuadro 23. Actividades Programadas por la UTEF	
FIN	**ACCIÓN**
01 Fiscalización de los informes anuales de los partidos políticos 2013. Dentro de esta actividad institucional, se dará cumplimiento a la obligación que tiene la UTEF de recibir y fiscalizar los informes anuales del año 2013 para los partidos políticos.	1. Proporcionar asesoría puntual y oportuna a los partidos políticos. 2. Recibir y revisar los informes anuales del año 2013 que presenten los partidos políticos. 3. Notificar los errores y omisiones, así como análisis de la respuesta. 4. Elaborar las actas de confronta y notificación de irregularidades subsistentes. 5. Analizar las respuestas a la notificación de irregularidades subsistentes. 6. Elaborar el dictamen consolidado y el proyecto de resolución. 7. Verificar en forma selectiva las actividades específicas que realizan los partidos políticos y por adquisición de propaganda utilitaria. 8. Atender los requerimientos de los Tribunales Electorales Federal y Local con motivo de los juicios que interpongan los partidos políticos. 9. Implementar mecanismos para el intercambio de información con la autoridad federal. 10. Celebrar reuniones de trabajo con la UTCFD, a efecto de diseñar un programa específico de capacitación del personal de la UTEF para el año 2014.
02 Fiscalización de los informes mensuales de las agrupaciones políticas locales. Se dará cumplimiento a la obligación que tiene la UTEF de fiscalizar los informes mensuales que presenten las agrupaciones políticas locales que hayan manifestado su intención de constituirse como partido político.	1. Recibir los informes mensuales de las agrupaciones políticas locales. 2. Revisar los informes mensuales de las agrupaciones políticas locales. 3. Notificar los errores u omisiones y un su caso de las consideración de hecho, derecho y técnicas. 4. Elaborar el dictamen consolidado y presentación al Consejo General previa opinión de la Comisión de Fiscalización. 5. Elaborar, en su caso, el proyecto de resolución.
03 Difusión de la normatividad aplicable y de los procedimientos de fiscalización, así como de las actividades de la UTEF mejorada. Para que a partir de un mayor conocimiento de estos instrumentos y procedimientos de auditoría aplicados en la revisión de los diversos rubros de la información financiera presentada por los partidos políticos, cambie la percepción limitada que se tienen de éstos.	1. Publicar en el micrositio de la UTEF en la página de Internet del Instituto, la actualización de las guías de fiscalización. 2. Continuar incorporando en los dictámenes consolidados los procedimientos y acciones realizadas por la UTEF, para corroborar la veracidad de las operaciones reportadas por las asociaciones políticas. 3. Actualizar y publicar en el micrositio de Internet, las reformas al reglamento para la fiscalización de los partidos políticos. 4. Coordinar con la UTCST y PDP se dará amplia difusión de las actividades y resultados de los procesos de fiscalización. 5. Actualizar el sitio de Internet Institucional en lo relativo a dictámenes, auditorías y resoluciones a los partidos políticos.
04 Integración del catálogo de proveedores de bienes, servicios y arrendamiento de los partidos políticos en el Distrito Federal mejorada Esta acción va encaminada a garantizar la transparencia, eficiencia, calidad y oportunidad en el gasto que realizan los partidos políticos, tanto para actividades ordinarias como las de precampaña y campaña, eficientando el ejercicio de los recursos públicos y privados que reciben.	1. Elaborar y publicar de la convocatoria para invitar a las personas físicas y morales interesadas en ser proveedores de los partidos políticos en el Distrito Federal. 2. Recibir y revisar solicitudes y documentación. 3. Notificar los errores y/o requerimientos de información a las personas físicas y morales. 4. Emitir las constancias de inscripción. 5. Integrar el catálogo de proveedores y remisión a la Comisión de Fiscalización para su aprobación. 6. Notificar a los partidos políticos el catálogo de proveedores. 7. Publicar en el micrositio de internet el catálogo de proveedores. 8. Actualizar el catálogo de proveedores.
05 Fiscalización de los informes trimestrales relativos a la generación y fortalecimiento de liderazgos femeninos y juveniles mejorada. Se dará cumplimiento a la obligación que tiene la UTEF de recibir y fiscalizar los informes trimestrales del año 2013.	1. Recibir los informes de actividades llevadas a cabo durante cada trimestre. 2. Revisar los informes trimestrales. 3. Notificar a los partidos políticos los errores y omisiones, así como, en su caso, las consideraciones de hecho, derecho y técnicas. 4. Informar a la Comisión de Fiscalización de los importes a que ascendieron los gastos que cada uno los partidos políticos realizaron en el Distrito Federal del trimestre del que se trate y que fueron debidamente comprobados.

FUENTE: Elaboración propia con base en el Programa Institucional de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos 2014.

Derivado del análisis del Programa de Fiscalización 2014, se identifica un deficiente proceso de planeación de fines, acciones y de establecimiento de indicadores de gestión, ya que como se ha mencionado, uno de los grandes temas por resolver es la desafección social a los sistemas democráticos, en consecuencia el actuar de las autoridades electorales, además del cumplimiento de sus atribuciones y obligaciones dispuestas por la norma, deben planear en el marco de los principios rectores de la función electoral, las acciones de trascendencia social medibles a través de indicadores de impacto y no de servicios y estratégicos[93] que permitan el cambio de la percepción ciudadana.

Se han presentado las facultades de la UTEF, en las que se puede aseverar que hay aspectos por mejorar de forma puntual, como serían las revisiones de forma transversal y revisiones de control preventivas, con la finalidad de evitar recurrencia de observaciones en las confrontas que se tienen con los partidos políticos, si bien es cierto hay en primer instancia un proceso que les brinda asesoría a los mismos, está debería implementarse con mayor frecuencia y sobre todo en aquellos errores o irregularidades más recurrentes, con la finalidad no solo de erradicarlas de raíz, sino de coadyuvar a generar una cultura de Rendición de Cuentas, lo que repercutirá definitivamente a la consolidación del Estado Democrático en el D,F., considerando en todo caso los Principios que rige esta Función Electoral, los que se desglosan en el último capítulo.

[93] Según el Manual de Planeación del IEDF los Indicadores de impacto miden los resultados que obtuvo la población después de haberse realizado todas las acciones de una AI; lo que permite verificar el cambio producido (efectos intermedios o finales) y determinar si los recursos utilizados fueron aprovechados de manera eficiente; los indicadores de servicio miden la calidad de los servicios internos y externos otorgados por el Instituto, así como la capacidad de respuesta del mismo a las necesidades de los usuarios-beneficiarios; y los indicadores estratégicos.-Miden la eficiencia en el logro de los objetivos estratégicos y los resultados obtenidos respecto a lo establecido en el Plan General. www.iedf.org.mx

CAPÍTULO 5

LOS PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN ELECTORAL EN LA FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN EL DISTRITO FEDERAL.

La corriente del derecho normativista, sostiene que todos los fenómenos jurídicos pueden reducirse a términos normativos; en este sentido, el concepto de norma resulta el central en derecho. La corriente normativista no es la única, los realistas relacionan el derecho con las conductas de los funcionarios y de los jueces. Los marxistas, identifican el derecho con ciertas relaciones sociales de dominación. Los *iusnaturalistas* tienden a vincular el derecho más que con la norma, con una idea de justicia. Los institucionalistas ponen el acento en el derecho como conjunto de instituciones".[94]

El Doctor García Máynez, señala que los principios fundamentales de la legislación positiva, no se encuentran escritos en ninguna Ley, pero son los presupuestos lógicos necesarios de las distintas lógicas legislativas, de las cuales en fuerza de la abstracción deben exclusivamente deducirse. Pueden ser de hecho principios racionales superiores, de ética social y también principios de derecho romano y universalmente admitidos por la doctrina; pero tienen valor no porque son puramente racionales, éticos o de derecho romano y científicos, sino porque han informado efectivamente el sistema positivo de nuestro derecho y han llegado a ser, principios de derecho positivo y vigente".[95]

Para Norberto Bobbio, son tres las cuestiones básicas en torno a este concepto: el de su naturaleza normativa dado que se encuentran implícitamente dentro de una legislación aun cuando no sea de manera expresa; el de la fuente, ya que se origina o deriva de generalizaciones sucesivas a partir de los preceptos del sistema en vigor; y el de la validez de tales principios, que encuentran dicha

[94] BOBBIO, NORBERTO, Teoría general del derecho, Madrid, Debate, 1992, pp. 15-31.
[95] GARCÍA MÁYNEZ, Eduardo, Introducción al estudio del Derecho, editorial Porrúa S. A., 50ª edición reimpresión, p. 370.

validez no por ser “verdades supremas”, sino por ser, de máxima generalidad y aceptación.[96]

El Maestro Ignacio Burgoa, menciona que son normas elaboradas por la mente investigadora, mediante el análisis inductivo del sistema jurídico mexicano y de los sistemas culturales afines, con vista a establecer, en los juicios lógicos en que deben traducirse tales principios, las notas uniformes que rijan a todas las instituciones integrantes de tales sistemas.[97]

En el ámbito del derecho electoral, se reconoce que esta rama del derecho está integrada no sólo por normas, sino también por principios, los cuales tienen una doble finalidad: sirven para interpretar el ordenamiento y tienen una proyección normativa derivada de la indeterminación que los principios tienen con respecto a las reglas, que hacen que en ellos, estén prefigurados ciertos contenidos normativos que informan todo el ordenamiento y que han sido desarrollados por la teoría y los órganos jurisdiccionales bajo ciertos parámetros.

Cuando se hace referencia a los principios del derecho aplicables a la materia electoral, se hace con el propósito de orientar correctamente el estudio, estableciendo razonamientos de carácter doctrinal, de tal forma que se logre un ordenado y correcto planteamiento del asunto en estudio.

En el derecho electoral mexicano, el tema de los principios ha cobrado especial relevancia, ya que tanto en el orden constitucional como en el local, se reconocen principios fundamentales que articulan y dan coherencia al derecho electoral; así por su parte el artículo 116 fracción IV inciso b) de la Constitución Política, se reconoce como principios rectores: los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad; en el Estatuto de Gobierno en su artículo 120, contiene un catálogo de principios; y por su parte el artículo 3 del CIPEDF, reconoce como

[96] GARCÍA MÁYNEZ, Eduardo, Editorial Filosofía del Derecho, Porrúa, sexta edición revisada, pp. 312-316.
[97] BURGOA ORIHUELA, Ignacio Diccionario de Derecho Constitucional, Garantías y Amparo, Editorial Porrúa, 5ª edición, primera reimpresión, p. 356.

principios de la función electoral; la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad, equidad, transparencia y la publicidad procesal.

El reconocimiento de la coexistencia de los principios de la función electoral y el derecho que se constituyen en el basamento del derecho electoral, lo podemos entender a partir de la definición que el doctor Luis Gustavo Arratíbel Salas, nos ofrece cuando define al derecho electoral de la siguiente manera:

Un sistema de normas, instituciones y principios filosófico-jurídicos que regulan las elecciones de los individuos a cargos de representación popular, el ejercicio de los derechos políticos, los tipos de sufragio, los partidos políticos, los sistemas electorales, la organización y administración de los comicios, la competencia y las reglas para la impartición de justicia en caso de controversia.[98]

Esta definición llama la atención, porque caracteriza al objeto del derecho electoral no como una "materia" o un "campo de estudio", sino como un "sistema". Desde este punto de vista, se abre de manera significativa el panorama para explorar la naturaleza del fenómeno electoral, a partir de su marco normativo y de una serie de principios que dan sistematicidad y vigencia al derecho electoral.

Aunado a lo mencionado, el propio TEPJF como fuente reconocida de derecho, ha identificado diversos principios fundamentales del derecho electoral mexicano: las elecciones deben ser libres, auténticas y periódicas; el sufragio debe ser universal, libre, secreto y directo; en el financiamiento público de los partidos políticos y sus campañas electorales debe prevalecer el principio de equidad; la organización de las elecciones debe realizarse a través de un organismo público y autónomo; la certeza, legalidad y objetividad como principios rectores del proceso electoral; en todo proceso electoral deben estar establecidas las condiciones de equidad para el acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación; y en los procesos electorales debe haber un sistema de medios de impugnación para el control de la constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales.

[98] ARRATÍBEL SALAS, Luis Gustavo, "Conceptualización del derecho electoral", en Serrano Migallón, Fernando (coord.), *Derecho electoral*, Porrúa-UNAM, Facultad de Derecho, 2006, p. 1.

Todos los principios mencionados aun cuando de forma específica son atribuibles a la autoridad electoral, estos mismos son aplicables a todos los actores que en el marco del Estado democrático se encuentran inmersos en el Derecho Electoral, ya deben ser aplicados como principios generales o complemento del balance de las razones, no constituyéndose en patrones extra-jurídicos, resultando vinculantes en los razonamientos que justifican las decisiones acerca de los derechos subjetivos y obligaciones.

En el ámbito del Derecho Electoral mexicano existen principios jurídicos que no sólo están previstos en la Constitución Política, el Estatuto de Gobierno y en el CIPEDF para las autoridades electorales como tales, además como lo han apuntado los órganos jurisdiccionales, junto a otros principios implícitos (identificados a través de generalizaciones sucesivas o inducciones a partir de las normas específicas del sistema vigente y por resultar congruentes con las reglas y con los principios explícitos del propio sistema), tienen un carácter fundamental y en consecuencia son de aplicación universal, ya que dan coherencia y sentido a la materia electoral, al constituirse en parámetros de actuación de las autoridades electorales y de las partes involucradas, sirviendo como criterios interpretativos y aplicativos del derecho electoral.

Ahora bien, no debe resultar intrascendente la complementariedad que debe existir entre la norma y su aplicación apegada a principios, es decir, su esencia radica en diferenciar entre lo normativo y lo fáctico (conductas), combinación que incide en el ámbito de lo moral en donde encontramos un doble plano,[99] a) el normativo constituido por las normas o reglas de acción e imperativos que enuncian algo que debe ser; b) el fáctico, o plano de los hechos morales, constituido por ciertos actos humanos que se dan efectivamente, es decir que son, independientemente de cómo estimemos que debieron ser.

[99] SÁNCHEZ VÁZQUEZ, Adolfo, Ensayo Actualidad Ética; Ed. Comercializadora y Maquiladora Tacef, S.A. de C.V., cuarta reimpresión, México, D.F., 2009. pp 55, 56 y 57.

Con base a lo anterior, debemos reconocer que una conducta moral efectiva comprende por tanto, no sólo el cumplimiento de las normas o reglas de acción establecidas, sino también -como conducta debida- que los actos que se desarrollen para su cumplimiento se ajusten a ellas, de tal forma que, para considerar su validez y reconocimiento social, debe atender tanto el conjunto de principios que los hombres en una comunidad dada consideran válidos, como los actos reales en que aquellos se plasman o encarnan.

En este sentido resulta importante mantener presente esta dualidad sistemática y funcional entre el plano puramente normativo o ideal y el fáctico, real o práctico, lo que nos lleva a la necesidad de proponer dos términos para diferenciar uno del otro: moral y moralidad. Lo moral designa el conjunto de principios de una época o de una sociedad dada, en tanto que la moralidad haría referencia a las relaciones efectivas o actos concretos que cobran un significado moral en una sociedad generando un ingrediente efectivo de las relaciones humanas concretas (entre individuos o entre individuo y comunidad).

En relación a lo mencionado, resulta trascendental el estudio respecto de los resultados obtenidos de la aplicación de los principios de la función electoral en la fiscalización de los recursos a los institutos políticos en el Distrito Federal, ya que no basta con la aplicación del marco normativo que nos ubica en el plano de lo moral, sino que resulta necesario que se realice en el ámbito de los principios electorales dispuestos para entrar al plano de la moralidad, elemento que genera una afección de naturaleza individual y colectiva, de tal forma que con este concurso y con base a los resultados obtenidos además, del cumplimiento al marco legal, se logre la confianza que se requiere por parte de la sociedad para continuar en la consolidación del Estado democrático en la ciudad.

De lo anterior, deriva la importancia del cumplimiento de la función de fiscalización, la cual permitirá el fortalecimiento del sistema de partidos y será necesario considerar como marco conceptual y operacional los elementos de la

teoría teleológica del utilitarismo de la obligación moral,[100] en donde se tiene presente el bien de los demás, ("haz aquello que beneficia, fundamentalmente, a los demás o al mayor número de hombres"), y que por tanto, en nuestro comportamiento debemos mirar, por encima de todo, a las consecuencias que nuestros actos pueden tener para los demás miembros de la comunidad.

Los principios de la función electoral además de encontrarse establecidos en las correspondientes normas jurídicas electorales (identificadas como tales según propiedades fácticas o descriptivas y determinados criterios empíricamente verificables) podrían eventualmente tener, incluso, un fundamento ético o de justicia (de acuerdo con la filosofía moral o política), sin que reconocer esto último implique asumir una posición reñida con una concepción positivista del derecho, en virtud de que en ningún momento se está condicionando que un ordenamiento específico, se adecue necesariamente a ciertos principios o valores morales y de justicia para que pueda ser calificado como "jurídico"; en todo caso, si dicho orden no se ajustara a esos principios o valores, ello podría afectar su justificación o legitimidad moral o política, pero no impediría que fuera considerado como jurídico.

En esta hipótesis el principio constituye una de las premisas del razonamiento para concluir en una norma específica elaborada y formulada por el intérprete, esta forma de argumentar es la que conforma el llamado razonamiento práctico, no silogístico, en donde los principios son utilizados para determinar o encontrar la premisa base del razonamiento. En otras palabras, es necesario justificar la elección de la premisa normativa y que esa premisa reúna a la vez las condiciones de validez suficientes para considerarla parte del sistema jurídico, de tal forma que, además de constituirse en una premisa de naturaleza legal, contenga en su razonamiento aspectos que garanticen de forma simultánea su legitimidad.

[100] SÁNCHEZ VÁZQUEZ, Adolfo; op. cit. pp. 163 y 164

El Estado, ya no es o no debe ser, exclusivamente un Estado de derecho, hoy es ante todo un Estado constitucional. La argumentación jurídica se transforma porque las normas constitucionales son fundamentalmente principios; la argumentación por principios, abandona la subsunción y la aplicación mecánica, exige la sustitución de la interpretación literal, el abandono del silogismo judicial formal, y se aproxima a los antiquísimos métodos de la interpretación retórica, basada en la ponderación y la razonabilidad. El derecho es algo más que la Ley, y su intérprete más que conocer las reglas debe aprehender el "*ethos"* del ordenamiento y del sistema jurídico y su relación con el contexto social, político y económico.

En este orden de ideas, resulta insuficiente que la autoridad electoral del Distrito Federal desarrolle la función de fiscalización a la que se encuentra obligada al amparo de la corriente normativista, ya que resulta evidente la necesidad de incidir en la percepción ciudadana, debiendo en consecuencia, realizar al amparo de los principios de la función electoral la actividad encomendada de forma sistémica, analizando todo el bloque de la normatividad, incluyendo los elementos morales, sociales o ideológicos que son parte de todo derecho, de forma que con el resultado obtenido se genere un cambio conceptual en la sociedad respecto al correcto uso, destino y aplicación de los recursos que son proporcionados a los partidos políticos, condición que al fundamentarse no sólo en la legalidad sino en la legitimidad, abonará a la consolidación del sistema de partidos políticos y del Estado democrático en el Distrito Federal.

5.1 El principio de certeza

La certeza es la plena posesión de la verdad correspondiente al conocimiento perfecto. La conciencia de ella, permite la afirmación sin sombra de duda, con confianza plena en que dicho conocimiento es verdadero y válido. Basada en la

evidencia (filosofía) supone un conocimiento comunicable y reconocible por cualquier otro entendimiento racional.[101]

El principio de certeza alude a la necesidad de que todas las acciones que desempeñen las autoridades electorales en el Distrito Federal, estén dotadas de veracidad, certidumbre y apego a los hechos, esto es, que los resultados de sus actividades sean completamente verificables, fidedignas y confiables.

Para el TEDF, la certeza radica en que la acción o acciones que efectúa este Órgano Jurisdiccional sean del todo veraces, reales y apegadas a los hechos. Esto es que el resultado de los procesos que se realizan en la institución sean completamente verificables, por tanto, fidedignos y confiables.

Al respecto, de igual forma resulta orientadora la tesis plenaria de jurisprudencia denominada **"Materia Electoral. Principios Rectores. En las Constituciones y Leyes de los Estados debe garantizarse, entre otros, el de certeza en el Desempeño de la Función Electoral."** Que a la letra dispone:

"Toda vez que de lo dispuesto por el artículo 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución Política se desprende el imperativo de que en las Constituciones y las leyes de los Estados en materia electoral garanticen en el ejercicio de la función electoral rijan los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia, resulta evidente que dentro del referido principio de certeza se encuentra el relativo al desempeño de la función electoral a cargo de las autoridades correspondientes, principio que consiste en dotar de facultades expresas a las autoridades locales, de modo que todos los participantes en el proceso electoral conozcan previamente con claridad y seguridad las reglas a que la actuación de las autoridades electorales está sujeta"

[101] Wikipedia. http://es.wikipedia.org/wiki/certeza

En materia de fiscalización sobre el origen, destino y aplicación de los recursos de los partidos políticos, este principio es atendido durante la función de instrumentación de las distintas etapas que forman parte del procedimiento de fiscalización.[102]

Lo anterior es así, ya que adjunto a la presentación de los informes o a petición expresa del área de fiscalización, se adjunta la documentación necesaria para comprobar la veracidad de los informes, la cual podrá ser verificada de forma selectiva con fundamento a lo estipulado en los artículos 135 y 137 del Reglamento de Fiscalización para los Partidos Políticos.

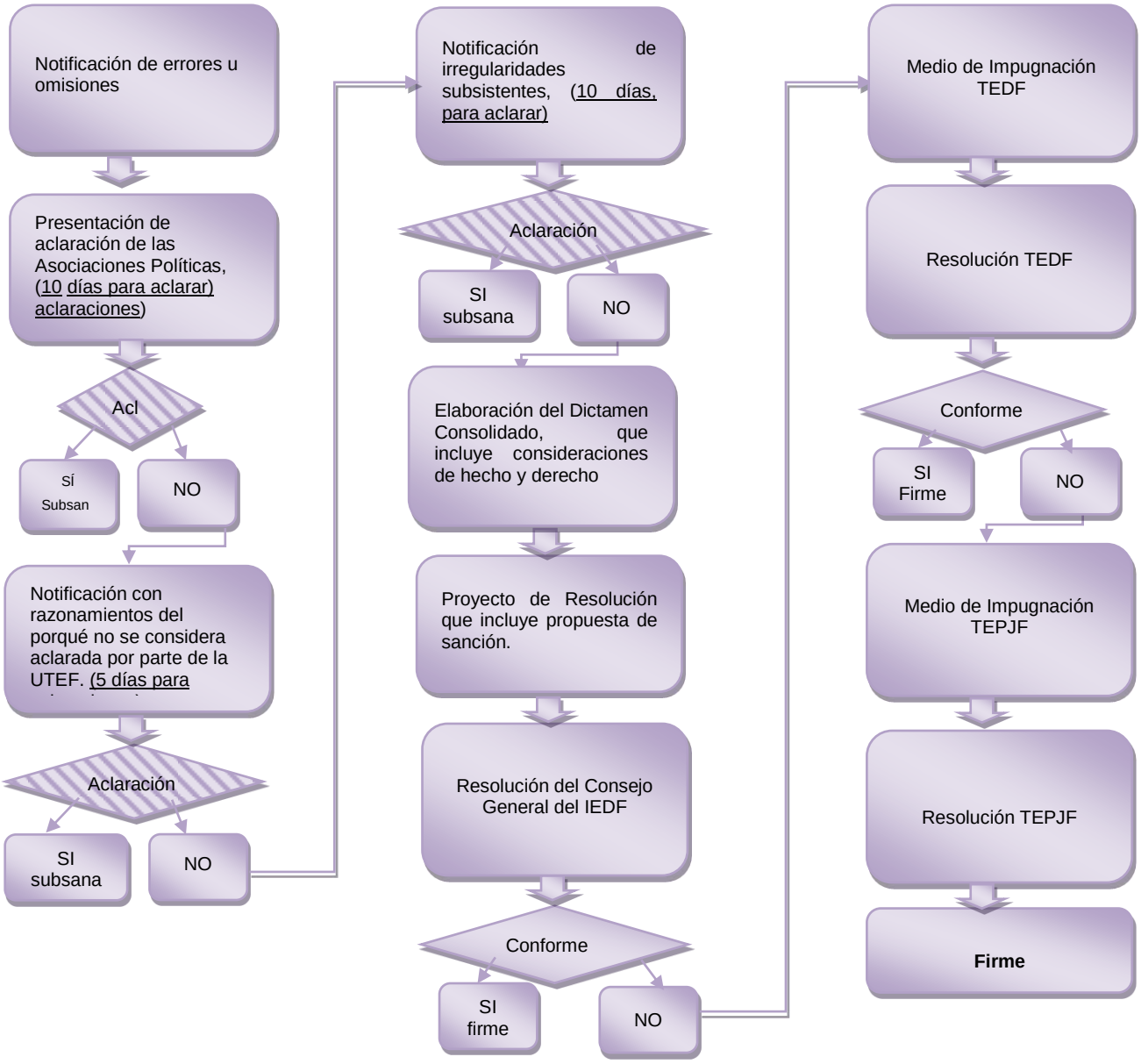
Durante la etapa de revisión y previo a la determinación de irregularidades subsistentes o emisión del dictamen correspondiente, el área de fiscalización notifica a los partidos políticos, los errores u omisiones identificados y que en caso de no solventarse, se consideran como irregularidades susceptibles de sancionarse por el Consejo General.

En este orden de ideas se señala que, por lo que hace a la revisión de los informes anuales que las asociaciones políticas presentan, la atención de este principio es permanente, ya que de conformidad al procedimiento dispuesto, se notifican a los partidos políticos en su caso, los errores u omisiones encontrados durante la fiscalización, otorgándoles en cumplimiento al procedimiento establecido, diversas oportunidades de aclararlas o rectificarlas, proporcionando para el efecto las probanzas y documentales que fundan su emisión, tal y como se especifica a continuación:

---

[102]Véase artículos 266, 268 fracciones II, III y IV del CIPEDF, 98, 99, 100, 135,137, 145 y 146 del Reglamento de Fiscalización para los Partidos Políticos.
N**ota:**" Acción de inconstitucionalidad 18/2001 y sus acumuladas 19/2001 y 20/2001. Partidos Políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y del Trabajo. 7 de abril de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: Pedro Alberto Nava Malagón y Martín Adolfo Santos Pérez. Novena Época Instancia: Pleno Fuente: *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta* Tomo: XIII, Abril de 2001, Tesis J /60/2001 p. 752

Figura 5. La Función de Revisión de Informes



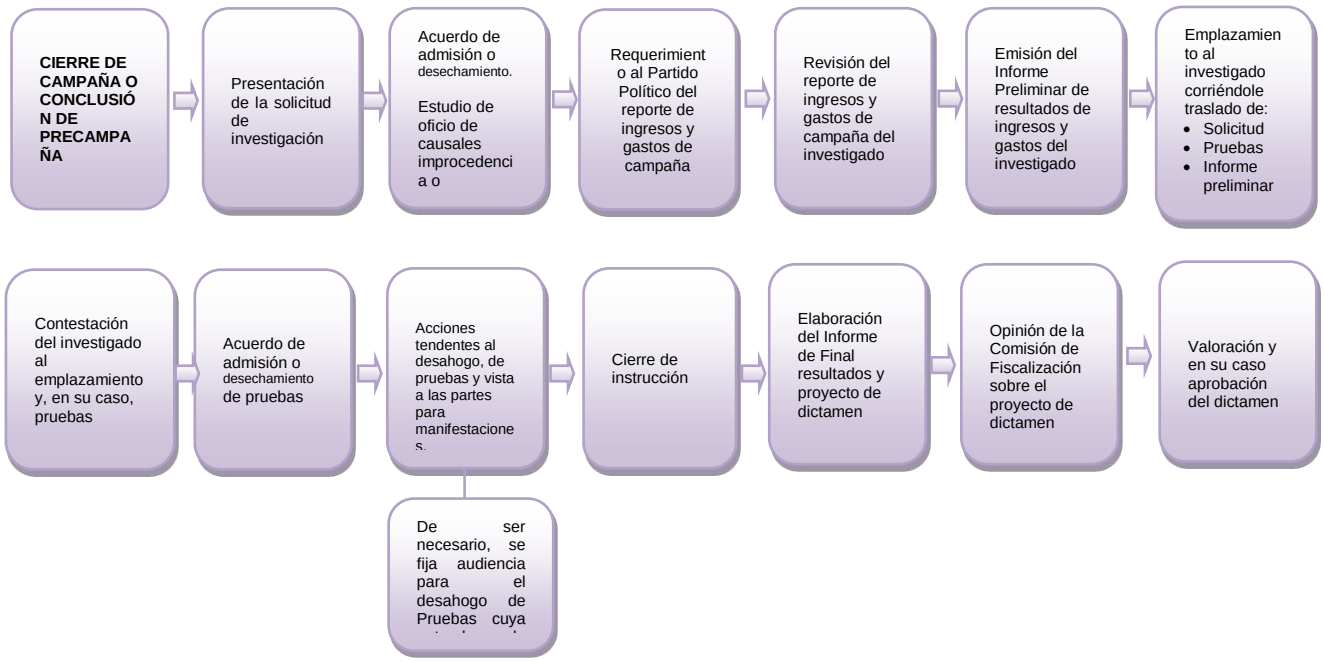
FUENTE: Elaboración propia, basado en la revisión de los informes anuales presentados por los partidos políticos.

Es importante resaltar que para el caso específico de los informes de precandidatos ganadores (constituye un instrumento necesario para su registro como candidatos), a partir de la notificación de errores u omisiones, los institutos políticos contarán con un plazo de tres días para presentar los argumentos y

documentales que a su derecho convengan.[103] Ahora bien, por lo que hace al procedimiento de investigación dispuesto en el artículo 271 del CIPEDF, la vigencia del principio de certeza igualmente se encuentra garantizado.

La UTEF al emplazar al investigado, le correrá traslado del escrito de solicitud de las pruebas aportadas y del informe preliminar elaborado por esta para que en un término de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga, disponiendo incluso, en caso de existir información adicional a la remitida, la misma se haga de su conocimiento para que en un plazo de veinticuatro horas, despliegue en extremo su derecho de contradicción respecto de los elementos que se le hacen de su conocimiento.[104] El procedimiento antes descrito podemos identificarlo de manera gráfica en el siguiente:

Figura 6. Procedimientos de Emplazamiento



FUENTE: Elaboración propia basada en la interpretación del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal.

[103] Véase artículo 148 fracción IV del Reglamento de Fiscalización para los Partidos Políticos.
[104] Véase último párrafo del artículo 36 y 38 del Reglamento para el Trámite, Sustanciación y Dictamen de los Procedimientos Administrativos de Investigación Relativos al Rebase a los Topes de Gastos de Precampaña y Campaña.

La vigencia del principio dedicado en este apartado, se ve fortalecida de manera puntual respecto de los partidos políticos y grupos parlamentarios con el derecho otorgado a estos, fundamentado con lo establecido en el artículo 61 fracción IV del CIPEDF, el cual señala que en los casos en que se sometan a aprobación del Consejo General del IEDF, proyectos de resolución o dictámenes en los que sea parte un partido político, se deberán poner a disposición de los mismos, junto con la convocatoria respectiva y copia íntegra del expediente de donde se derivan.

El cumplimiento de dichas disposiciones, implica que los representantes de los institutos políticos y grupos parlamentarios en el Consejo General cuando sean parte, podrán conocer de manera directa, cierta y eficaz, los soportes documentales de los asuntos a discutir, lo que les permitirá conocer y contar con los elementos necesarios para participar en el debate y en su momento, estar en posibilidades de impugnar en caso de inconformidad. [105]

Por lo que respecta a la vigencia del principio de certeza en las actividades desplegadas en materia de fiscalización, este se encuentra garantizado en el marco legal establecido en cuanto a la posibilidad que tiene el partido político, grupo parlamentario o representante en el Consejo General cuando sea parte, de conocer previamente a la emisión de un dictamen o resolución documentales, consideraciones de hecho y de derecho, que fundan y motivan las conclusiones y determinaciones tomadas tanto por la entidad fiscalizadora como el Consejo General.

Con lo anterior, se acredita que tanto en el proceso de la fiscalización, como previo a la emisión de los dictámenes o resoluciones del ente auditado, sus

[105] En el Juicio de revisión Constitucional electoral SUP-JRC-213/2011 promovido por el Partido Acción Nacional, el órgano jurisdiccional reitera que la obligación de proporcionar por parte de la autoridad electoral se circunscribe a la fracción IV del artículo 61 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, es decir de aquellos Dictámenes y resoluciones en donde el partido político o el Grupo Parlamentario sea parte en los mismos, así las cosas en materia de Fiscalización de los recursos y procedimientos de Investigación la UTEF, invariablemente se encuentra obligada a proporcionar el expediente que da cuenta del Dictamen o resolución correspondiente.

representantes o grupos parlamentarios, tienen pleno conocimiento de las irregularidades determinadas y/o de las conclusiones de los dictámenes, ya que éstos se determinan a partir de la propia información proporcionada por el partido político, o de la información obtenida por el área de fiscalización, las cuales con oportunidad, son puestas a la vista de los institutos políticos para que en el término establecido, proporcionen información adicional o manifiesten lo que a su derecho convenga, dando en consecuencia certeza respecto de los resultados de la fiscalización (los cuales son verificables, fidedignos y confiables) y la confianza plena, en que dicho conocimiento es verdadero y válido; lo anterior constituye los elementos de la vigencia del principio electoral de la certeza en los procesos de fiscalización desplegados por la autoridad electoral.

5.2 El principio de legalidad

El principio de legalidad o Primacía de la Ley, es un principio fundamental del Derecho público conforme al cual todo ejercicio del poder público debería estar sometido a la voluntad de la Ley, de su jurisdicción y no a la voluntad de las personas (ej. el Estado sometido a la constitución o al Imperio de la Ley). Por esta razón se dice que el principio de legalidad establece la seguridad jurídica.

Se podría decir que este principio, es la regla de oro del derecho público, y en tal carácter actúa como parámetro para decir que un Estado es de Derecho, pues en él, el poder tiene su fundamento y límite en las normas jurídicas.[106]

El fundamento jurídico de este principio, se basa en el artículo 14 párrafo tercero de la Constitución Política que establece lo siguiente: “En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una Ley exactamente aplicable al delito de que se trata”, lo que aunado con el principio de división de poderes dispuesto en su artículo 49 del mismo ordenamiento supremo, permite concluir que lo que salvaguarda este principio, es la rectitud de la autoridad administrativa

[106] Wikipedia. http://es.wikipedia.org/wiki/Legalidad

y jurisdiccional para no imponer sanción alguna que el legislador no haya previsto y definido con anterioridad al hecho imputado, es decir refiere a la aplicación irrestricta del principio *nullum crimen, nulla poena, sine lege.*

Este principio ideado en el ámbito del derecho penal es aplicable al derecho sancionador electoral, al constituirse en una especie del *ius punendi*, ya que el propio legislador local y el IEDF, han dispuesto y reglamentado los supuestos sancionables, dando lugar a que en todo momento y bajo cualquier circunstancia en el ejercicio de las atribuciones y el desempeño de las funciones encomendadas a las autoridades electorales del Distrito Federal, deba observar escrupulosamente el mandato constitucional y local que las regula.

La SCJN ha señalado que: "El principio de legalidad es la garantía formal para que los ciudadanos y las autoridades electorales actúen en estricto apego a las disposiciones consignadas en la Ley, de tal manera que no se emitan o desplieguen conductas caprichosas o arbitrarias al margen del texto normativo."[80]

El artículo 128 del CIPEDF dispone que el Servicio Profesional Electoral en el IEDF tiene por objeto, entre otros, el de contribuir a garantizar la constitucionalidad y legalidad de todos los actos y resoluciones del IEDF.

De manera puntual para el TEDF, la vigencia del principio de legalidad significa que las actividades de este, deberán apegarse en todo momento a la Constitución Política, al Estatuto de Gobierno y al Código Electoral, así como a las demás leyes aplicables en materia electoral o de la administración pública. Tal apego debe ser irrestricto y por encima de cualquier interés particular que se oponga a la Ley, por lo que la legalidad debe entenderse como la irrenunciable y cabal aplicación de la Ley, sin defraudar su espíritu.[107]

No pasa desapercibido que el propio artículo 147 del CIPEDF en su segundo párrafo dispone que los Magistrados Electorales y todos los servidores del TEDF,

[107] www.tedf.org.mx

deban conducirse con imparcialidad y velar por la aplicación irrestricta del principio de legalidad en todas las diligencias y actuaciones en que intervengan y actividades vinculadas al cumplimiento de su objeto y fines.

De igual forma y por su parte, la Ley Procesal señala en su artículo segundo que: “El sistema de medios de impugnación regulado por esa Ley tiene por objeto garantizar que los actos y resoluciones electorales se sujeten al principio de legalidad; la legalidad de los actos, acuerdos o resoluciones del Jefe de Gobierno, de la Asamblea Legislativa, del Instituto o de cualquier otra autoridad, para salvaguardar los resultados vinculatorios del plebiscito, del referéndum o el trámite de la iniciativa.

En materia de fiscalización sobre el origen destino y aplicación de los recursos de los partidos políticos en el Distrito Federal, el artículo 222 del CIPEDF establece las siguientes obligaciones: 1) Conducir sus actividades dentro de los cauces legales, así como de sus normas internas y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de las demás Asociaciones Políticas y los derechos de sus ciudadanos; 2) presentar los informes a que se encuentran obligados en materia de fiscalización, y permitir la práctica de auditorías y verificaciones que ordene la autoridad electoral, así como entregar la documentación que la UTEF les solicite respecto a sus ingresos y egresos; 3) utilizar las prerrogativas y aplicar el financiamiento público de acuerdo a las disposiciones del CIPEDF; 4) destinar al menos el 3% del financiamiento público para actividades ordinarias permanentes que se les asigne, para la generación y fortalecimiento de liderazgos femeninos, así como, al menos el 2% para liderazgos juveniles; 5) llevar un inventario detallado de sus bienes muebles e inmuebles, y 6) garantizar a las personas el acceso a la información que posean o generen en términos de la Ley de Transparencia, así como sin que medie petición, poner a disposición del público en sus oficinas, medios de difusión y en su sitio de internet, en forma tal que se facilite su uso y comprensión por las

personas y que permita asegurar su calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad.

Ahora bien, por lo que hace a las conductas sancionables previstas por el legislador local respecto al incumplimiento de las obligaciones a que se encuentran sujetos los partidos políticos en materia de fiscalización sobre el origen, destino y aplicación de los recursos mencionados en el artículo 377 del CIPEDF, se dispone lo siguiente:

"Los partidos políticos, independientemente de las responsabilidades en que incurran sus dirigentes, candidatos, miembros o simpatizantes, serán sancionados por las siguientes causas": a) Incumplir las disposiciones del CIPEDF; b) incumplir con las resoluciones o acuerdos del Consejo General; c) aceptar donativos o aportaciones económicas de las personas o entidades que no estén expresamente facultadas para ello o soliciten crédito a la banca de desarrollo para el financiamiento de sus actividades, en contravención a lo dispuesto por el CIPEDF; d) aceptar donativos o aportaciones económicas superiores a los límites señalados en el CIPEDF y el Consejo General; e) no presente los informes anuales en los términos y plazos previstos en el CIPEDF; f) tratándose de Partidos Políticos, Coaliciones o candidatos, no presentar los informes de gastos de sus procesos de selección interna o de campaña electoral y sobrepasar los topes fijados conforme al CIPEDF durante la misma; g) contratar por sí mismo o por interpósita persona espacios en radio y televisión; h) no aportar o dificultar el acceso o los elementos requeridos por la autoridad electoral para la fiscalización de los recursos; i) no anexar los estados financieros o cualquier otro elemento requerido por la autoridad para revisión de los informes anuales y j) por inobservar las disposiciones del CIPEDF y realizar conductas contrarias a la democracia o al propósito de las normas a que están sujetos.

Finalmente, el artículo 379, fracción I del CIPEDF, dispone las sanciones aplicables a los partidos políticos en caso de infracción, entre las que se

encuentran: a) Multa de 50 hasta 5 mil días de salario mínimo vigente para el Distrito Federal; b) multa de 10 mil hasta 50 mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal; c) reducción del 1% al 50% de las ministraciones mensuales del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; d) suspensión total de la entrega de las ministraciones mensuales del financiamiento que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; e) cancelación del registro como Partido Político como tal; f) cancelación del registro del candidato de que se trate y en su caso con la cancelación de la participación en la elección que corresponda del Partido Político que haya cometido la infracción y g) no registro de los candidatos involucrados para la elección de que se trate.

La vigencia del principio de legalidad de manera general en materia de fiscalización, constituye la garantía formal para que los ciudadanos, militantes, simpatizantes y órganos integrantes del partido político, actúen en estricto apego a las disposiciones consignadas en la Ley.

La mencionada formalidad se encuentra consignada en la Constitución Política; Estatuto de Gobierno; CEIPEDF; Reglamento de Fiscalización para los Partidos Políticos; Reglamento de Fiscalización para las Agrupaciones Políticas Locales Interesadas en Obtener el Registro Legal como Partido Político; Reglamento para el Trámite, Sustanciación y Dictamen de los Procedimientos Administrativos de Investigación relativos al Rebase a los Topes de Gastos de Precampaña y Campaña; y Reglamento para el Trámite, Sustanciación y Resolución de los Procedimientos Administrativos Sancionadores, además de la normativa que emane de la autoridad electoral, la cual garantiza que durante la fiscalización no se desplieguen conductas caprichosas o arbitrarias al margen del texto normativo.

En atención al principio de legalidad en materia de fiscalización de partidos políticos en el Distrito Federal, se encuentra en términos generales garantizada por la normatividad emitida previamente por el legislador y el órgano facultado de

reglamentación entre otras, un catálogo de obligaciones a cubrir tanto por las autoridades electorales como por las asociaciones políticas y los ciudadanos, un catálogo de derechos, obligaciones y atribuciones, así como las correspondientes sanciones en caso de su incumplimiento, y el marco regulatorio y procedimental jurisdiccional que garantiza la legalidad de las resoluciones y dictámenes emitidos por la autoridad electoral administrativa, lo que en esencia genera la seguridad jurídica, ya que el ejercicio del poder público atribuido a la autoridad electoral se encuentra sometido a la voluntad de la Ley, de su jurisdicción y no a la voluntad de éstas.

En este orden de ideas, es importante puntualizar dos aspectos que ponen en riesgo la vigencia del principio de legalidad en materia de fiscalización: 1. El primero se refiere a que dentro del catálogo de obligaciones de la autoridad electoral denominada IEDF, específicamente a las que tiene a su cargo el Consejo General y su Consejero Presidente, se localiza la dispuesta en los artículos 35 fracción X incisos a) y b) y 58 fracción V del CIPEDF, que refieren a las atribuciones para nombrar a los servidores públicos que cubren temporalmente las vacantes de los titulares de los órganos ejecutivos y técnicos, con carácter de encargados del despacho, para lo cual deben proponer y realizar una nueva propuesta de Titular, dentro de los cuarenta y cinco días posteriores a que se genere la vacante. En este sentido, es dable señalar que la afectación al principio de legalidad se genera con la omisión en tiempo y forma por parte de los miembros del Consejo General y su Consejero Presidente de la obligación que les impone la normatividad aludida, ya que al mes de diciembre de 2011 existían en el IEDF cinco vacantes[108] de titular con encargadurías hasta de dos años, entre las cuales, aun cuando es regulado de forma particular en el artículo 88 del CIPEDF, se encuentra vacante la del Titular de la UTEF. 2. La segunda se constriñe a la

[108] En la nota publicada en el periódico el Universal de fecha 11 de agosto de 2011 de Jonathan Villanueva se hace mención que en víspera del arranque formal de proceso electoral de 2012 el IEDF tiene acéfalas cinco áreas estratégicas, entre las cuales se encuentran dos directamente relacionadas con los actos anticipados de campaña y campañas, así como la fiscalización de los recursos públicos que se utilizaran en el periodo electoral. Para mayor información ver http://www.el universal.com.mx/ciudad/107469.html

inconsistencia jurídica existente en cuanto a las variantes reconocidas en la normativa electoral respecto a la constitución del financiamiento privado, la cual se identifica en los siguientes términos: los artículos 264 fracción III del CIPEDF y el 41 del Reglamento de Fiscalización para los partidos políticos, consideran financiamiento privado en especie, a los ingresos provenientes de rendimientos financieros que obtenga el partido político o coalición, mientras que el artículo 265 fracción I del CIPEDF, dispone que las aportaciones en especie sólo pueden ser en bienes muebles, inmuebles, consumibles o servicios que deben destinarse únicamente para el cumplimiento del objeto del partido político que haya sido beneficiado con la aportación. En relación a lo anterior, es evidente que es improcedente considerar los productos generados por rendimientos financieros de fondos y /o fideicomisos como financiamiento privado en especie, ya que invariablemente ninguna institución bancaria o comercial, realiza entrega de estos productos mediante bienes muebles, inmuebles, consumibles o servicios, aspecto que imposibilita que las asociaciones políticas actúen en estricto apego a las disposiciones consignadas en la Ley, pudiendo propiciar con esto, la emisión y/o despliegue de conductas caprichosas o arbitrarias al margen del texto normativo por parte de la autoridad fiscalizadora, lo que en esencia pone en riesgo la vigencia del principio de legalidad en este rubro.

5.3 El principio de independencia

El principio de Independencia se refiere a las garantías y atributos de que disponen los órganos y autoridades electorales del Distrito Federal para que en los procesos de deliberación y toma de decisiones, se den con absoluta libertad y respondan única y exclusivamente al imperio de la Ley, afirmándose su total independencia respecto de cualquier poder establecido. Por lo anterior, las autoridades electorales gozan entre otros atributos de autonomía en su funcionamiento y administración e independencia en la toma de decisiones.[109]

[109] Véase artículo 19 del CIPEDF.

Para el TEDF, la independencia entraña el gozo de cabal libertad para la toma de sus decisiones, es decir que sus determinaciones no se encuentran subordinadas de manera inmediata a ningún otro órgano del Estado.

Cabe destacar, que la transición democrática en México supuso como requisito indispensable la existencia de autoridades electorales independientes y sometidas únicamente al imperio de la Ley.

Ahora bien, el principio de independencia para su análisis puede entenderse en dos ámbitos: el primero que se refiere a su aspecto externo, el cual implica que los órganos electorales no se encuentran supeditados a los otros órganos del Estado; y el segundo, relativo al aspecto interno, el cual alude a que los Consejeros y Magistrados actúen autónomamente y que sus decisiones respondan única y exclusivamente al imperio de la Ley.

En lo que respecta a la vigencia del principio de independencia en los órganos responsables de la función electoral no sólo en el Distrito Federal, sino de todas las autoridades electorales, destaca uno de los aspectos más cuestionados que inciden negativamente en la percepción ciudadana, y se refiere a los mecanismos de designación de los Consejeros y Magistrados Electorales.

La designación de los Consejeros Electorales y de los Magistrados del TSJDF, en términos de lo dispuesto en el artículo 41 apartado C de nuestra Constitución corresponde al Instituto Nacional Electoral.

Como se podrá identificar, en ambos casos la designación es responsabilidad directa del Instituto Nacional Electoral, lo que necesariamente incide en los procesos de selección establecidos, y de la injerencia de grupos de presión externa en su designación lo que pone en permanente riesgo la vigencia del principio de independencia, y en consecuencia puedan producir la desafección social y desconfianza de la ciudadanía en el Estado democrático del Distrito

Federal y de sus autoridades electorales, por lo que evidentemente se tendrá que asumir en corto plazo la ciudadanización de dichos órganos más que a su partidización, lo que en esencia ha sucedido.

En cuanto al nombramiento del titular de la UTEF, se encuentra limitado a un procedimiento previamente establecido, el cual si bien es de naturaleza distinta al dispuesto para Consejeros y Magistrados electorales locales, no deja de tener sus incidencias en cuanto al principio de independencia. El titular de la UTEF es designado por el Consejo General con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes, de entre una terna de propuestas que envíe el Contador Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa.[110]

El procedimiento de cuenta fue impugnado en 2011 por el Partido Revolucionario Institucional ante la (SCJN),[111] al considerar que con dicho procedimiento violentaba la autonomía del IEDF, ya que a su decir el nombramiento depende de la presentación de una terna por parte de una instancia externa que no tiene injerencia alguna en el ámbito de competencia de la autoridad electoral local y que acota la posibilidad de elección por parte del Consejo General sólo a una terna, en la cual tiene injerencia la Comisión de Vigilancia de la ALDF.

Lo anterior limita sustancialmente al Consejo General en sus determinaciones en relación con su integración o conformación de sus estructuras administrativas, lo que afecta sustancialmente la vigencia del principio de la función electoral de independencia, ya por su propia naturaleza de órgano autónomo, se considera improcedente la existencia de vinculación o sugerencia con algún principio de subordinación, como lo evidencia el procedimiento de designación del titular de la UTEF, al ser una instancia externa a la autoridad electoral local la que cuenta con la atribución de hacer la propuesta de la terna para su designación.

[110] Véase artículo 88 del CIPEDF.
[111] La Acción de Inconstitucionalidad 2/2011promovida por el Partido Revolucionario Institucional, fue desestimada por los Ministros de la (SCJN) al no obtener la votación calificada para la declaración de invalidez del artículo 88 del CIPEDF, en sesión pública celebrada el 7 de junio de 2011.

Ahora bien desde la perspectiva interna la UTEF, en términos de lo dispuesto en los artículos 124 del Estatuto de Gobierno y 83 del CIPEDF, goza de autonomía técnica y de gestión. Dicha autonomía se conceptualiza como "la facultad que asiste a estos órganos para realizar sus actividades sin injerencia de algún servidor público del Instituto Electoral o representante de los partidos políticos o Grupos Parlamentarios y sin presión para resolver en un determinado sentido.[112]" Así bajo este principio, se reconoce que sus decisiones no tendrán más límite que lo establecido en el CIPEDF, en las leyes y reglamentos aplicables.

En este sentido y de una interpretación gramatical, estaríamos asumiendo que la autonomía técnica y de gestión, otorga a la UTEF las facultades para que de forma autónoma despliegue sus atribuciones y emita sus dictámenes y proyectos de resoluciones.

No obstante lo anterior, es dable señalar que de conformidad a lo dispuesto los artículos 124 del Estatuto de Gobierno y 25 del CIPEDF, el Consejo General es el órgano superior de dirección, el cual tiene como se ha mencionado entre otras, las facultades para aprobar los reglamentos de fiscalización de los recursos de las asociaciones políticas, procedimientos de investigación y de registro de partidos políticos locales y de organizaciones ciudadanas, así como el de aprobar o rechazar los dictámenes, proyectos de acuerdo o resolución que proponga entre otras áreas la UTEF, y en su caso ordenar el engrose correspondiente.

Asimismo el Consejo General en consideración del dictamen y proyecto de resolución que formule la UTEF, podrá proceder a imponer en su caso, las sanciones correspondientes, incluso si rechaza el proyecto de resolución y realice modificaciones que afecten el contenido y/o resultados del dictamen, será devuelto por única ocasión de forma fundada y motivada a la UTEF.[113]

[112] Véase artículo 83 de CIPEDF.
[113] Véase artículo 268, fracción VII del CIPEDF.

Al reconocerse esta dependencia jerárquica como órgano supremo del Consejo General respecto del área fiscalizadora, pudiendo aceptar o no los resultados en los dictámenes o los proyectos de resolución emitidos por esta, la autonomía técnica y de gestión de la UTEF no es plena, ya que ésta sólo prevalece durante el desarrollo de sus funciones, una vez que las emite conforme al procedimiento establecido y sus resultados finales pueden ser modificados por el órgano superior, lo que genera posibilidad de influencia de factores externos que ponen en riesgo la vigencia del principio de imparcialidad en la aprobación, modificación o engrose que se haga de las mismas.

La autonomía técnica que se le confiere a la UTEF refiere la capacidad de realizar la fiscalización mediante operaciones contables y jurídicas, ajenas al comportamiento de cualquier servidor público del IEDF o representantes de partidos políticos o Grupos Parlamentarios.[114]

Esto supone, esencialmente, que la autonomía técnica tiene una fuerte implicación con la "independencia" necesaria para que el órgano fiscalizador pueda cumplir eficazmente con su labor, así lo estipula la Organización Internacional de Entidades de Fiscalización Superior (*International Organization of Supreme Audit Institutions*, INTOSAI)[115] en la *Declaración de Lima*, que como ha señalado la Suprema Corte de Justicia, puede considerarse como la carta magna de la auditoría, y que por el contenido de la exposición de motivos de la reforma constitucional de 1999 en la materia fue en voz de la propia Corte, un documento inspirador de la misma.[116]

[114] Véase artículo 83 del CIPEDF.
[115] La International Organization of Supreme Audit Institutions tiene por propósito esencial defender la independencia de las auditorias respecto a la administración pública.
[116] Fiscalizadoras Superiores sólo pueden cumplir eficazmente sus funciones si son independientes de la institución controlada y se hallan protegidas contra influencias exteriores. Aunque una independencia absoluta respecto de los demás órganos estatales es imposible, por estar ella misma inserta en la totalidad estatal, las Entidades Fiscalizadoras Superiores deben gozar de la independencia funcional y organizativa necesaria para el cumplimiento de sus funciones. Las Entidades Fiscalizadoras Superiores y el grado de su independencia deben regularse en la Constitución; los aspectos concretos podrán ser regulados por medio de Leyes. Especialmente deben gozar de una protección legal suficiente, garantizada por un Tribunal Supremo, contra cualquier injerencia en su independencia y sus competencias de control. Así lo confirma la SCJN en la Controversia constitucional 36/2003.

Otro tópico que afecta la vigencia del principio electoral de la independencia, lo constituye el tema de los presupuestos asignados a las autoridades electorales locales, incluso cuando el artículo 17 del CIPEDF dispone que sin vulnerar su autonomía a las autoridades electorales les son aplicables las disposiciones relativas de la Ley de Presupuesto, en la práctica dicho supuesto no se materializa, lo cual no sólo limita a la funcionalidad instrumental ya que también está inmerso en una garantía de origen de todo órgano electoral, que es la autonomía e independencia.

Si las autoridades electorales se ven sometidas presupuestalmente por otros poderes del Estado o de actores políticos, se vulnera claramente su garantía institucional. Los Consejeros y Magistrados electorales no deben cabildear sus presupuestos anuales, pueden por supuesto, presentar un programa de gasto operativo y justificarlo, pero no someterse a condiciones que sobrepasen los cánones del respeto institucional. Mantener una sana distancia entre Consejeros y Magistrados Electorales y representantes políticos, parece ser que es una de las premisas que el sistema electoral demanda como exigencia, ya que resulta ineludible garantizar un principio hegemónico de la independencia, elemento que en las condiciones operacionales actuales se ve afectado de manera sustancial.

La autonomía de gestión de la UTEF supone un ámbito de libertad conferido para que pueda ejecutar su presupuesto con miras a cumplir debidamente con el objeto para el que fue creada y para que pueda ejercer sus facultades y alcanzar los objetivos y metas estipulados en las normas que la regulan. Esto significa conferir las suficientes atribuciones para que puedan elegir y realizar sus propios objetivos constitucionales, administrativos o económicos al margen de cuál haya sido la fuente de su presupuesto. Esta última característica se vincula con la autonomía presupuestaría[117] y el ejercicio del gasto en la medida en que confirma la plena

[117] En el Juicio de Revisión Constitucional Electoral SUP-JRC-17/2009 del Magistrado Ponente Flavio Galván Rivera, visible en la página 72 ,se menciona que resulta contrario a todo sistema legal que regula el sistema político del Estado Mexicano, - delegarle la facultad a un Partido Político la facultad de impugnar las decisiones del Poder legislativo o Ejecutivo, respecto al

capacidad de un área para disponer de sus recursos presupuestales, en base a criterios propios relacionados al cumplimiento de su objeto, de sus fines y funciones, condición que no se cumple en el ámbito de la UTEF, al encontrarse sujeta al mismo tratamiento presupuestal que se le da al resto de las unidades administrativas que integran el IEDF.

5.4. El principio de imparcialidad

El principio de imparcialidad significa que en el desarrollo de sus actividades, todas las autoridades electorales del Distrito Federal deben reconocer y velar permanentemente por el interés de la sociedad y por los valores fundamentales de la democracia, supeditando a éstos de manera irrestricta, cualquier interés personal o preferencia política.

Los Consejeros Electorales durante el periodo de su encargo, deberán acatar diversas prescripciones entre las que se encuentran las de desempeñar su función con autonomía, probidad e imparcialidad.[118]

De forma general y por lo que respecta a los trabajadores del IEDF el artículo 124 del CIPEDF, dispone que los mismos deberán desempeñar sus labores con el compromiso institucional por encima de cualquier interés particular.

Por su parte, de manera específica para el TEDF, la imparcialidad se traduce en que este órgano jurisdiccional en la realización de sus actividades debe reconocer y velar permanentemente por el interés de la sociedad y por los valores fundamentales de la democracia.

---

presupuesto del Consejo Estatal Electoral, ya que la misma constituye una violación a la autonomía e independencia de los órganos electorales y a los principios de legalidad e imparcialidad.

[118] Véase artículo 28 del CIPEDF.

El artículo 147 del CIPEDF dispone que los Magistrados Electorales y todos los servidores públicos del TEDF tienen la obligación de guardar absoluta reserva y discreción de los asuntos que se sometan a conocimiento y resolución, debiendo particularmente observar las previsiones y prohibiciones contempladas en la Ley de Transparencia y la Ley de Protección de Datos; asimismo, establece la obligatoriedad de conducirse con imparcialidad y velar por la aplicación irrestricta del principio de legalidad en todas las diligencias y actuaciones en que intervengan y actividades vinculadas al cumplimiento de su objeto y fines.

De igual forma el artículo 155 fracción I del CIPEDF señala que durante el periodo de su encargo, los Magistrados Electorales deben desempeñar su función con autonomía, probidad e imparcialidad.

Con base a lo mencionado, es importante destacar que el principio de imparcialidad al igual que el relativo a la independencia, se encuentra en riesgo por las siguientes razones: a) Mecanismos de designación de Consejeros, Magistrados y Titular de la UTEF, los cuales al verse necesariamente involucrados en votaciones o propuestas en donde participan los grupos parlamentarios de la ALDF, son sometidos a injerencias externas que ponen en riesgo la vigencia de los principios de imparcialidad e independencia propios de la función electoral y b) Falta de definición conceptual en cuanto al tratamiento dado en los asuntos relativos a la materia electoral, respecto a la aplicación de las resoluciones por parte de la autoridad competente en relación a la dualidad conceptual sobre el actuar institucional, ya sea privilegiando el interés de la sociedad y los valores fundamentales de la democracia o los intereses del particular y de los partidos políticos como entes de interés público.

Dicha definición resulta indispensable, toda vez que en la práctica esta puede ser la diferencia entre la emisión de resoluciones legales o legítimas respecto de los asuntos resueltos por la autoridad electoral y que necesariamente inciden en la percepción social respecto a la imparcialidad o parcialidad que rige su actuar.

En la práctica no sólo las autoridades electorales locales, sino las del máximo Tribunal Electoral en muchas ocasiones apegados a principios legaloides o letrados,[119] han emitido resoluciones en donde no necesariamente se ha privilegiado el interés de la sociedad y los valores fundamentales de la democracia, entendidos estos como los propios de la función electoral, los cuales no generan convencimiento en la ciudadanía respecto de la imparcialidad y en consecuencia de la legitimidad de los resultados de los procesos electorales o del correcto uso, destino o aplicación de los recursos ejercidos por los institutos políticos.

Es preciso señalar, que si este principio tiene por objetivo el reconocer y velar permanentemente por el interés de la sociedad y los valores fundamentales de la democracia, resulta fundamental privilegiar su existencia en el Estado democrático, en donde el interés de lo público está por encima de los intereses particulares y de los institutos políticos.

Es responsabilidad de la autoridad electoral como garante de los principios electorales de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y equidad, velar por su vigencia, en virtud de constituirse en valores fundamentales de la democracia y del interés de la sociedad, de tal forma que en un Estado democrático se pueda dar atención al conjunto de pretensiones de las necesidades colectivas de los habitantes de la Ciudad de México.

El propio legislador local reconoce esta obligación a cargo de la autoridad electoral, al disponer una naturaleza inquisitiva tanto a la fiscalización sobre el origen, destino y aplicación de los recursos de los partidos políticos como a la

. [119] Los Magistrados de la Sala Superior del TEPJF de fecha 13 de julio de 2011 emitieron la tesis XX/2011 “Procedimiento especial sancionador, la autoridad administrativa electoral debe recabar las pruebas necesarias para su resolución”; En las resoluciones emitidas Sala Regional del Distrito Federal del Poder Judicial de la Federación, de fecha 28 de septiembre de 2009 expedientes SDF-JRC-56/2009, SDF-JRC-65/2009, SDF-JRC-66/2009 y SDF-JDC-299/2009, relativos a declaración de la nulidad de la elección en las Delegaciones Miguel Hidalgo y Cuajimalpa de Morelos la autoridad jurisdiccional fundamentó sustancialmente sus Resoluciones en la naturaleza dispositiva de un procedimiento de investigación.

sustanciación de los procedimientos electorales especiales y/o de investigación, en términos de los artículos 90, 268, 271, 373 fracción II del CIPEDF; 135 del Reglamento de Fiscalización para los Partidos Políticos; y del artículo 5 del Reglamento para el Trámite, Sustanciación y Dictamen de los Procedimientos Administrativos de Investigación relativos al Rebase de Topes de Gastos de Precampaña y Campaña.

Lo anterior, obliga en consecuencia a que la autoridad electoral en sus resoluciones no sólo genere el convencimiento social respecto de la imparcialidad y legalidad de los actos, sino que conjuntamente a estos valores genere la convicción de su legitimidad, de tal forma que con dichos resultados se pueda abonar a la afección social que tanta falta hace al sistema democrático.

5. 5. El principio de objetividad

El principio de objetividad, implica un quehacer institucional y personal fundado en el reconocimiento global, coherente y razonado; la obligación de percibir e interpretar los hechos por encima de las visiones y opiniones parciales o unilaterales, máxime si estas pueden alterar la expresión o consecuencia del quehacer institucional.

Para el TEDF la objetividad implica que este Órgano Jurisdiccional en sus acciones debe reconocer la realidad tangible independientemente del punto de vista que se tenga de ella. Es en sí, el ejercicio inevitable de autenticidad permanente, que exige reducir al mínimo la posibilidad de error.

Con base en lo mencionado, la vigencia del principio se encuentra en riesgo en materia de fiscalización en los siguientes rubros:

a) Falta del establecimiento de los alcances de la revisión de los informes y omisión de entrega de la guías de auditoría a aplicar en la fiscalización.

En los informes anuales de selección interna de candidatos y de campaña al que se refiere el artículo 266 del CIPEDF, es dable señalar que tanto los formatos como el alcance de la información requerida para su revisión, se encuentra puntualmente señalada en los artículos 98, 100, 106, 107, 117, 126, 127, 131 y sus anexos del Reglamento de Fiscalización para los Partidos Políticos, lo que permite su reconocimiento global, coherente y razonado ya que corresponden a la realidad sobre la que se actúa, lo que en consecuencia evita la interpretación de los hechos con alcances distintos a los especificados en la norma.

No obstante lo anterior, es de observarse que de acuerdo al procedimiento establecido en el Reglamento de Fiscalización para los Partidos Políticos, la UTEF, en términos de su artículo 139, al inicio de la revisión de los informes sólo se encuentra obligada a notificar al ente auditado el nombre del personal técnico que se encargará de la verificación documental y contable, así como la fecha y hora en que se presentara en sus instalaciones o en el propio IEDF para hacer la recepción de la documentación que integra los informes.

En este sentido, dicha disposición normativa es omisa en considerar la obligatoriedad que debería tener la entidad fiscalizadora de establecer desde el inicio de su función los alcances de la revisión, además de proporcionar al ente fiscalizado la guía técnica de fiscalización[120] a aplicar en la revisión de la información proporcionada en los formatos establecidos para el efecto, lo que genera un alto grado de subjetividad en desempeño y alcance de la fiscalización a desplegar por parte de la autoridad electoral responsable de la función.

[120] La guía técnica de fiscalización fue proporcionada mediante solicitud 3300000036810 al portal de transparencia del IEDF y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 2 inciso c) fracción LXXII del Reglamento del IEDF para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos son los documentos en los que se establecen los procedimientos e instrucciones para la revisión de las operaciones realizadas por las asociaciones políticas.

Lo anterior tiene una especial relevancia si se toma en consideración que la UTEF se encuentra facultada a solicitar al responsable del partido político o coalición, la documentación que considere necesaria, lo que en esencia constituye la posibilidad de que el auditor en su actuar pueda tomar determinaciones basadas en percepciones o interpretaciones parciales o unilaterales, como podría ser, determinar un alcance subjetivo y diferenciado de la revisión de los informes, lo que incluso pudiese generar inequidad respecto del resto de los partidos políticos o que se solicite información no relacionada con los alcances de la revisión, lo que en consecuencia pone en riesgo permanente la vigencia del principio electoral durante la revisión de los informes.

b) Falta de reconocimiento global y una deficiente coordinación con las autoridades electorales federales respecto de los elementos, cifras y documentación que se incluyen en los informes proporcionados a la UTEF por parte de las asociaciones políticas.

Los alcances que tiene la fiscalización respecto al origen, uso, destino y aplicación de los recursos de los partidos políticos con presencia en el Distrito Federal, se despliega exclusivamente respecto al financiamiento público local otorgado a los partidos políticos y su financiamiento privado, quedando parcialmente revisado el financiamiento público proveniente de las transferencias realizadas en efectivo o en especie por parte de las Direcciones Nacionales de los partidos políticos del financiamiento público federal, ya que este al ser su fiscalización competencia del INE,[121] queda sujeta a su distintas temporalidades las cuales son realizadas en la mayoría de los casos, en forma paralela a las realizadas por la autoridad local, lo que en esencia dificulta el intercambio oportuno de información y/o su confirmación, especialmente en cuanto al origen de los recursos transferidos.

[121] Respecto de los informes anuales el artículo 83 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y el artículo 18 del Reglamento de Fiscalización a Recursos de los Partidos Políticos disponen la entrega de informes trimestrales de avance del ejercicio y anuales a más tardar dentro de los 60 días siguientes al último día de diciembre del año del ejercicio que se reporte. Por su parte el artículo 266 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal y 99 del Reglamento del Instituto Electoral del Distrito Federal para la Fiscalización a los Partidos Políticos disponen la presentación de los informes anuales dentro de los 60 días hábiles siguientes al último día de diciembre del año del ejercicio que se reporte.

Lo anterior había provocado que en la práctica, los resultados de la fiscalización que reporta la autoridad local y que se hacen del conocimiento a la ciudadanía, no se fundamenten en el reconocimiento global, coherente y razonado de la realidad sobre la que se actúa, ya que estos son generados de forma parcial, es decir, de manera tangible sólo respecto de los recursos públicos y privados proveniente de las prerrogativas otorgadas a nivel local y de las aportaciones de sus militantes y simpatizantes en el ámbito territorial, lo que de ninguna forma constituye una fiscalización objetiva de los recursos utilizados por el partido político para el cumplimiento de sus objetivos en el Distrito Federal.

Las recientes reformas político electorales disponen que la fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y de las campañas de los candidatos estará a cargo del Consejo General del Instituto Nacional Electora, sin embargo hasta esta fecha no se han emitido resoluciones que nos permitan afirmar que dichas reformas han incidido favorablemente en la integralidad que debe tener un proceso de fiscalización.

c) Limitantes técnicas en la fiscalización por falta de personal con un perfil profesional idóneo y capacitación y actualización otorgada de manera no priorizada en materias distintas a las funciones sustantivas del área.

Es importante mencionar que una condición ineludible para garantizar el reconocimiento coherente y razonado de la realidad sobre la que se actúa, lo constituye la necesidad de contar con personal con un perfil profesional idóneo y con una capacitación y actualización permanente, así el carácter técnico otorgado a la UTEF es uno de los elementos que conforman su autonomía procedimental, en virtud de que impone al órgano de fiscalización la obligación de desplegar las funciones asignadas basados invariablemente en elementos técnicos y especializados, de tal forma que se garantice con su actuar el desechamiento de cualquier argumento que ponga en peligro la objetividad en la fiscalización de los institutos políticos.

No obstante lo anterior, del estudio realizado a la plantilla del personal[122] que forma parte de la UTEF y de su programa de capacitación y actualización, se identifica lo siguiente: a) De una plantilla integrada en el 2010 por 44 elementos, 18 de ellos, es decir sólo el 40.9%, manifiesta estudios de licenciatura concluida, en contaduría (14) y en derecho (4), lo que representa que el 31.81% con estudios que cumplen el perfil para desarrollar las actividades encomendadas por la UTEF y b) el artículo 119 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y demás personal que labore en el IEDF, dispone que para que el personal administrativo cumpla con sus objetivos, el Instituto Electoral local deberá: proporcionar un desarrollo integral que incluya actividades de capacitación y actualización orientadas a fomentar la lealtad e identificación institucional y sus fines; fomentar la vocación por el desarrollo de la vida democrática; velar por que en el ejercicio de su función, se apegue los principios rectores de la función electoral, vinculando su cumplimiento a los fines institucionales y al desempeño de las responsabilidades del cargo.

Es de señalarse que los cursos de capacitación y actualización programados para la rama administrativa, incluida la UTEF, aprobados por la Junta Administrativa del IEDF mediante acuerdo JA103-13 para el período 2013[123] para fiscalizadores y personal administrativo, corresponden a los temas de redacción y ortografía I; redacción ortografía II; Microsoft Excel 2007 (nivel intermedio y avanzado); desarrollo de habilidades del pensamiento, gestión y planeación por competencias laborales; diseño e instrumentación de los cursos en línea, mecanismos de participación colectiva y desarrollo comunitario, taller de actualización sobre la Ley de Adquisiciones, arrendamientos y servicios del Sector Público, taller de actualización contable y fiscal, Data Warehouse y minería de datos, diseño web: especialidad, seguridad informática, albañilería y pintura. Por lo que hace al personal jurídico, el curso programado se refiere a Argumentación Jurídica y para el personal del servicio profesional de carrera adscrito a la UTEF, los temas

[122] Datos obtenidos de la contestación a la solicitud de información presentada a la Unidad de Transparencia del IEDF identificada con el número 3300000036810.
[123] Dados a conocer al personal de la Rama Administrativa mediante circular SA-038 de la Secretaría Administrativa del IEDF de fecha 25 de agosto de 2011.

programados se refieren a Procesos de Participación Ciudadana y Tecnologías implementadas en los procesos electorales.

Con base en lo mencionado, de ninguna forma se puede aseverar que en este ámbito se encuentra garantizada la vigencia del principio, ya que la mayoría del personal que desempeña la función de fiscalización en el IEDF, no cuenta con la formación técnica especializada y su actualización y capacitación no resulta idónea en relación a la función asignada y a la normatividad establecida.

Es evidente y preocupante, el grado del riesgo asumido en la falta de formación técnica y actualización en que se encuentra el personal de la UTEF, considerando principalmente porque en el año 2011 se publicaron el CIPEDF, los Reglamentos de Fiscalización para los Partidos Políticos; para la Fiscalización de las Agrupaciones Políticas Locales Interesadas en Obtener el Registro Legal como Partido Político Local; para la Liquidación del Patrimonio de las Asociaciones Políticas; para el Trámite, Sustanciación y Dictamen de los Procedimientos de Investigación, relativos al Rebase a los Topes de Gastos de Precampaña y Campaña; y para el Trámite, Sustanciación y Resolución de los Procedimientos Administrativos Sancionadores, temas que no se consideraron para la capacitación técnica del personal.

d) Emisión parcial de opiniones respecto de los resultados obtenidos en la fiscalización de los recursos destinados para el fortalecimiento de liderazgos femeniles y juveniles.

La ALDF V Legislatura, por conducto de la entonces Diputada Maricela Contreras, integrante de la Comisión de Equidad y Género, promovió durante el mes de enero de 2011, un Punto de Acuerdo del Órgano Legislativo, en donde se exhorta al Consejo General, establecer reglas claras en la fiscalización de los recursos para la promoción y consolidación de liderazgos, de tal forma que se garantice que los mismos estén siendo destinados a las actividades específicas mencionadas, garantizando para el efecto, que estos no sean canalizados a actividades distintas o simuladas, como en algunos casos ha acontecido.

En este orden de ideas, el Reglamento de Fiscalización para los Partidos Políticos, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 8 de junio de 2011 y conforme a la reforma aprobada mediante acuerdo número ACU-855-12 de fecha 11 de diciembre de 2012, dispuso en sus artículos 86 fracción II, 87 inciso II y 89, la obligatoriedad de los partidos políticos de informar sobre el destino y aplicación de dichos recursos, condición que si bien garantiza que se conozca de forma cuantitativa el cumplimiento de la aplicación del gasto en los porcentajes establecidos, de ninguna manera garantiza que de forma cualitativa se estén cumpliendo por parte de los partidos políticos con la formación y fortalecimiento de liderazgos femeniles y juveniles, aun cuando se les solicita que durante el mes de enero de cada año se presente a la UTEF, copia autorizada del programa anual de actividades de dichos liderazgos.

Desde el punto de vista de la fiscalización desplegada por la UTEF, aun cuando dichos aspectos se encuentran considerados dentro de los alcances de la revisión de los informes anuales a que se refiere el artículo 266 fracción I del CIPEDF, esta sólo limita su actuar en la verificación de la aplicación del gasto y no de los aspectos relativos a la evaluación de la eficacia en materia de la capacitación, promoción, desarrollo y liderazgo desplegado, tal y como lo ha mantenido el órgano jurisdiccional, que en la parte menciona: “La finalidad de tal obligación consiste en que los partidos destinen una determinada cantidad de recursos a la realización de actividades en virtud de las cuales de manera exclusiva, o por lo menos, principalmente se promocione, capacite o desarrolle el liderazgo de las mujeres, por lo que es claro que la intención del legislador es que esas actividades se apliquen al mayor número de personas posibles (universalidad) sin discriminación alguna (igualdad) y con programas dirigidos a cumplir con dichos objetivos (planeación previa) a efecto de que el partido cumpla con la misma de la manera más amplia posible *y* con la posibilidad de evaluar los correspondientes resultados.”[124]

[124] Para mayor información consultar en el SUP-RAP-175/2010.

En vista de lo anterior, resulta fundamental que como parte de las atribuciones de la Comisión de Asociaciones Políticas y de Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas del propio IEDF, en el marco de la facultad reglamentaria que el propio CIPEDF le confiere al Consejo General, se reglamenten facultades específicas a dichas instancias para revisar y en su caso autorizar el programa de fortalecimiento de liderazgos de mujeres y jóvenes a cargo de los partidos políticos, de tal forma que independientemente de la fiscalización cuantitativa de los recursos que se utilicen para su cumplimiento, se pueda verificar cualitativamente el cumplimiento de los objetivos para los cuales se están destinando, ya que de no hacerlo, nos estaríamos encontrando ante un procedimiento parcial que evidentemente puede ser sujeto a simulaciones.

e) Falta de reconocimiento global, coherente y razonado de la realidad sobre la que se actúa en la revisión de los informes presentados por los partidos políticos y, consecuentemente, la obligación de percibir e interpretar los hechos por encima de las visiones y opiniones parciales o unilaterales al ejecutar erróneamente la función de fiscalización sólo bajo el principio de auditoría financiera, cuando el concepto de fiscalizar abarca toda una pluralidad de opciones de auditoría que deben ser desplegadas para garantizar un resultado objetivo de la función asignada.

El concepto fiscalización no sólo se limita al ejercicio de auditoría financiera, ya que fiscalizar abarca toda una pluralidad de opciones de auditoría que deben ser desplegadas para garantizar un resultado objetivo de la función asignada y un ejercicio de los recursos acorde a la rendición de cuentas y su contribución a la democracia.

f) Omisión a la obligación de percibir e interpretar los hechos por encima de las visiones y opiniones parciales o unilaterales, sobre todo si estas pueden alterar la expresión o consecuencia del quehacer institucional, toda vez que la UTEF, no cuenta con personal calificado en las diversas disciplinas de naturaleza pericial distinta a la abogacía y la contaduría, necesarias para el cumplimiento de la función de fiscalización.

De conformidad a lo dispuesto en los artículos 27 y 75 del Reglamento de Fiscalización para los Partidos Políticos, la UTEF deberá en dos supuestos verificar o cuantificar el importe de bienes o servicios erogados.

La unidad fiscalizadora en su mayoría se encuentra integrada por personal con perfil académico de derecho y contaduría, careciendo en consecuencia de perfiles profesionales idóneos como actuaría, ingeniería, arquitectura, publicidad, sistemas, comunicación, etc… para la determinación de dichos importes, de tal manera que de una forma profesional y con base a elementos técnicos se pudiese estar en condiciones para el cumplimiento de la función asignada durante la fiscalización.

Dicha condición se encuentra agravada ya que de acuerdo al proyecto de presupuesto elaborado para el 2012, no se tenía presupuestado recurso alguno para la elaboración de estudios técnicos o de laboratorio que fundamenten las determinaciones de la UTEF, en caso de ser requeridos, condición que de no atenderse pone en evidente riesgo la vigencia del principio, ya que las determinaciones que emita la UTEF, evidentemente carecerán de fundamentación técnica suficiente, lo que puede dar lugar a la emisión de visiones y opiniones parciales o unilaterales que pueden alterar la expresión o consecuencia del quehacer institucional.

5. 6. El principio de equidad

El principio de equidad refiere al atributo de la justicia que cumple la función de corregir y enmendar el derecho escrito, restringiendo unas veces la generalidad de la Ley y otras extendiéndola para suplir sus deficiencias, con el objetivo de atenuar el rigor de la misma, esto significa que la autoridad electoral en el Distrito Federal será equitativa cuando las personas que se encuentran en las mismas condiciones, reciben el mismo trato, y las que se encuentran en diferentes condiciones son objeto de trato diferente.

El artículo 6 del CIPEDF, señala que los servidores públicos de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial de carácter local, de los órganos político–administrativos, de los organismos descentralizados y de los órganos autónomos del Distrito Federal, tienen en todo tiempo la prohibición de utilizar los recursos públicos que están bajo su responsabilidad para influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos, candidatos o precandidatos.

Por su parte el artículo 10 del CIPEDF, establece que las autoridades electorales, en sus respectivos ámbitos de competencia, vigilarán el cumplimiento de los fines de la democracia y la existencia de condiciones de equidad en la contienda electoral.

Para el TEDF, la equidad es de acuerdo con su etimología del latín *aequitas*, igualdad, por lo que implica la idea de relación y armonía entre una cosa de aquello que le es propio, y se adapta a su naturaleza íntima. Lo anterior se refleja en que este Órgano Jurisdiccional al interpretar la norma legal, debe ponderar lo que a cada quien corresponde.

En materia de fiscalización, el artículo 7 del Reglamento de Fiscalización para los partidos políticos, dispone que la selección de los responsables contables y jurídicos de la fiscalización, se realizará de forma transparente y equitativa.

Para tal efecto, dicha normatividad establece el procedimiento mediante el cual serán designados los responsables de la revisión de los informes que presentan los partidos políticos, instituyendo el mecanismo de insaculación, el cual garantiza que la asignación del personal responsable de la revisión de los informes, se realice en forma igualitaria y equitativa.

Ahora bien, por lo que se refiere a la obligación dada a los partidos políticos en términos de la presentación de informes, esta será de naturaleza general,[125] y se

[125] Véase artículo 222 fracción VII y 266 del CIPEDF.

podrá permitir la práctica de auditorías y verificaciones que ordene la autoridad electoral, disposición que no establece excepción alguna en la materia, con lo que se garantizan condiciones similares para todos y en consecuencia un mismo trato.

Es importante mencionar que el procedimiento de investigación al que se refiere el artículo 271 y que norma el Reglamento para el Trámite, Sustanciación y Dictamen Relativos al Rebase de Gastos de Precampaña y Campaña de conformidad a lo dispuesto en su artículo 19, sólo se inicia a petición de parte y para su promoción, es necesario acreditar el interés jurídico correspondiente.

En razón de lo anterior, es dable señalar que este interés, sólo lo tienen dentro de un proceso de selección interna los candidatos que contienden en una misma candidatura y en el caso de campañas electorales, los partidos políticos, coaliciones y candidatos registrados ante el IEDF que contiendan por el mismo cargo de elección popular dentro de una demarcación territorial (Delegación Política), Distrito Electoral, o bien por Jefe de Gobierno.

Mientras que la presentación y revisión de informes sobre el origen, destino y aplicación de recursos, la equidad en su instrumentación se garantiza mediante un proceso de asignación por insaculación de personal técnico y jurídico de forma transparente y equitativa y la aplicación de una norma general para la totalidad de los partidos políticos, esta equidad se encuentra garantizada en los procedimientos de investigación con límites de naturaleza de geografía electoral y en “pares”, es decir solamente respecto de precandidatos o candidatos participantes para una candidatura y circunscripción específica, condición máxima que acredita la vigencia del principio.

Es importante mencionar que, en su caso, las irregularidades vertidas en el dictamen que emite la UTEF, resultado de la revisión de los informes, sólo son sancionables en términos de lo establecido en el catálogo de sanciones del artículo 379 del CIPEDF, ya que la resolución que emite el Consejo General es

acordada con posterioridad a la fecha en que los candidatos ganadores han rendido protesta y/o asumido el cargo para el cual fueron electos, aun cuando en la especie se haya identificado un rebase en el tope de campaña.

La anterior situación evidencia un desfasamiento entre la fecha de presentación y la emisión del dictamen y proyecto de resolución, en relación a las fechas en que el candidato ganador toma posesión o rinde protesta del cargo para el que fue electo, sin que la revisión de los informes de campaña puedan considerarse como una garantía de principio de equidad, ya que sus resultados son emitidos de forma extemporánea por parte de la autoridad electoral.

Mención especial es el tema relacionado con la fiscalización y su correlación con las causas de nulidad de una elección, y ello tiene su base normativa en el artículo 88 de la Ley Procesal, el cual señala como causal de nulidad, el hecho de que el partido político o coalición, sin importar el número de votos obtenido, sobrepase los topes de gastos de campaña en la elección que corresponda y tal determinación se realice por la autoridad electoral, mediante el procedimiento de revisión preventiva de gastos sujetos a topes, en términos de lo previsto en el CIPEDF.

En este caso se dispone que el candidato o candidatos y el partido político o coalición responsable, no podrán participar en la elección extraordinaria respectiva, asimismo podrá ser declarada nula la elección en un distrito electoral o en todo el Distrito Federal, cuando las causas que se invoquen hayan sido plenamente acreditadas y sean determinantes para el resultado de la elección.

La anterior aseveración ha sido interpretada por los órganos jurisdiccionales como la necesidad formal de establecer, a partir de la dictaminación y resolución de un rebase de topes de gastos de campaña por parte de la autoridad administrativa electoral, el análisis correspondiente para acreditar que dicho rebase resultó

determinante en el resultado de la elección, condición que a todas luces resta equidad a la contienda electoral, violentando en consecuencia el principio.

5. 7. El principio de publicidad procesal

La publicidad procesal consiste en que todo proceso deberá ser público, con lo cual, los actos de la autoridad electoral deberán exponerse al conocimiento de la población en general para su control.

De esta manera, el Consejo General celebrará sesiones públicas de carácter ordinario o extraordinario y las determinaciones revestirán la forma de Acuerdo o Resolución, según sea el caso, publicándose en la GODF cuando así esté previsto en el Código u otros ordenamientos generales, disponiendo para tal efecto en extremo, la gratuidad de dichas publicaciones.

Por su parte, el órgano jurisdiccional electoral local realiza sus sesiones del Pleno de manera pública para la resolución de los asuntos, salvo cuando determine que la sesión sea privada, en términos de lo establecido en el propio Código y el Reglamento Interior del Tribunal Electoral.

Dicha disposición establece de forma puntual aquellas sesiones que serán públicas, identificando las siguientes: 1) Elección del Magistrado Presidente; 2) resolución de los medios de impugnación interpuestos en términos de la Ley Procesal; 3) resolución de los conflictos o diferencias entre el Instituto Electoral y sus servidores o entre el propio Tribunal Electoral y sus servidores salvo cuando, a juicio del Pleno, el tema amerite que la sesión sea privada o se cumpla con una sentencia de amparo; 4) presentación del informe que el Magistrado Presidente rinda anualmente al Pleno sobre el estado general que guarda el Tribunal Electoral y 5) en los demás casos en que, por la naturaleza del asunto, el Pleno así lo considere pertinente.

Asimismo se dispone que el Pleno celebrará reuniones privadas para la atención de los asuntos de su competencia, las cuales deberán verificarse por lo menos

una vez a la quincena, cuando no tenga lugar un proceso electoral o procedimiento de participación ciudadana.

Ahora bien, en materia de fiscalización cabe destacar que toda vez que las determinaciones de la UTEF son plasmadas en los instrumentos denominados dictamen y/o proyecto de resolución que se encuentran sujetos a su aprobación por parte del Consejo General, serán publicados una vez aprobados, tanto en la GODF como en la página de internet institucional, incluso en su caso con las resoluciones emitidas por el TEDF.

Es importante mencionar que, aun cuando la vigencia del principio de publicidad procesal se encuentra garantizado en la fiscalización de los recursos a las asociaciones políticas, la limitante se refleja en el lenguaje utilizado y el volumen documental de los dictámenes y/o resoluciones emitidas por parte de las autoridades electorales locales, lo cual dista de ser accesible a una sociedad demandante de información y conocimiento de los resultados de los procesos de fiscalización.

Aunado a lo anterior, existe una falta de consistencia en el seguimiento institucional que la autoridad electoral (IEDF) realiza del incumplimiento de las obligaciones de las asociaciones políticas en materia de transparencia, ya que si bien es cierto, esta actividad no tiene una relación directa con la vigencia del principio de publicidad procesal en términos jurisdiccionales, si incide en la publicidad procedimental a que se encuentran obligados los partidos políticos en términos de rendición de cuentas.

La Comisión de Asociaciones Políticas, tiene la atribución de auxiliar al Consejo General entre otras, en la supervisión del cumplimiento de las obligaciones de las Asociaciones Políticas, incluyendo las de transparencia; sin embargo dicha supervisión en la práctica se ha supeditado a la vista que el INFODF realiza de los incumplimientos que detecta o de la presentación de quejas por conducto de particulares, sin que en la parte competencial exista un seguimiento para la mejora

y perfeccionamiento del sistema de comunicación que privilegie a partir de la verificación del cumplimiento de las obligaciones de las asociaciones políticas, la publicidad que garantice un lazo de conexión entre estas y la sociedad.

Ahora bien, en el rubro de fiscalización, la UTEF no ha desplegado en la revisión de los informes presentados por los partidos políticos la facultad otorgada en el artículo 137 del Reglamento de Fiscalización para los Partidos Políticos, en donde se dispone que esa área podrá verificar que la información en materia de transparencia publicada en los sitios de internet del partido político o coalición, corresponda a la reportada a esa autoridad electoral en los informes correspondientes.

Asimismo de la lectura de los dictámenes consolidados emitidos por la UTEF en 2008 a la fecha, y de las propias Guías de Fiscalización utilizadas en la revisión de los informes presentados por los partidos políticos, no se desprende razonamiento alguno o actividad programada que dé cuenta del cumplimiento de dicha atribución.

De la respuesta a la solicitud de información No. 3300000036810, presentada en el portal de Transparencia del Instituto Electoral del Distrito Federal, mediante el cual se otorgó la guía de fiscalización que aplica la UTEF, en la revisión de los informes que presentan los institutos políticos, no se localiza actividad alguna que permita constatar que se realice la verificación de los datos proporcionados en los informes presentados por los Partidos Políticos con la información publicada en sus portales de internet.

Las asociaciones políticas al no tener la obligación en materia de transparencia de presentar a la autoridad electoral local informe alguno, ni formar parte de los tópicos programados a fiscalizar o revisar por parte de la UTEF, las obligaciones dispuestas se convierten en un catálogo de buenas intenciones que son sancionadas por la autoridad electoral, sólo a partir de la vista que en su caso el INFODF genere en el ámbito de su competencia o a partir de la presentación de queja o investigación que presente quien acredite el interés jurídico en el asunto,

lo que convierte a la autoridad electoral local, sólo en un instrumento de determinación y aplicación de sanciones, sin que en la especie se instrumenten acciones preventivas o correctivas de los hechos que las generan, y mucho menos que garantice la transparencia de los institutos políticos, cuando menos en términos de la publicidad a que se encuentran obligados.

CONCLUSIONES

La limitada aplicación de los principios de la función electoral por parte de las autoridades de la ciudad reflejada en la insuficiencia y en la carencia de resultados palpables, han acrecentado la percepción negativa de la sociedad respecto al uso, destino y aplicación de los recursos políticos, por lo que la consolidación democrática del Distrito Federal se ha visto afectada quedando en un proceso aún inconcluso.

La intención que entraña el legislador en los marcos jurídicos de cualquier naturaleza, no se reducen sólo a los procedimientos formales de su creación para proyectarlo como derecho vigente, sino además se encuentran encaminados a magnificar sus postulados cuando fácticamente se materializa su contenido; en ese contexto, en materia electoral debemos aspirar con plenitud, a aplicar los procedimientos que marca la normativa con un propósito determinado, de ahí entonces que la forma y camino para llegar a ellos, es el ejercicio responsable y debido de la función electoral en el marco de sus principios, partiendo del supuesto de que su análisis y mejora constante, permitirán lograr el adecuado y transparente manejo de los recursos públicos, situándolos no sólo para revisión, control y sanción en su caso, sino con miras a plasmar de manera cierta y eficaz a la vista pública de los ciudadanos, a efecto de legitimar el sistema de partidos y por ende el fortalecimiento del Estado democrático electoral.

La fiscalización de los recursos de los partidos políticos de forma responsable y comprometida, se ha convertido en una demanda de la sociedad que es

indispensable atender, por lo que el mejoramiento en la calidad del gasto público y la implementación de una fiscalización apegada a los principios de la función electoral de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y equidad, son condiciones básicas para favorecer el desarrollo de la ciudadanía en todos los ámbitos.

Es importante mencionar que, aun con las recientes reformas que incluyen la creación del Instituto Nacional Electoral y su función coordinadora de la fiscalización, esta no garantizará ninguna mejora real, si se pretenden instrumentar solo mecanismos de modernización en la forma de informar o con modificación de plazos en la entrega de la información, su incidencia tendrá que ser mayor a partir de transparentar la rendición de cuentas y garantizar un control puntual del origen de los recursos aplicados a las campañas políticas u a la operación de los mismos institutos electorales, generando mecanismos que permitan la identificación del origen y destino de los recursos de manera tangible de tal forma que se asegure la vigencia y aplicación real de los principios de la función electoral.

En consecuencia, podríamos afirmar contundentemente nuestra hipótesis inicial:

“La fiscalización de los recursos otorgados a los partidos políticos en el Distrito Federal no ha logrado constituirse como uno de los elementos fundamentales de la consolidación del Estado Democrático.”

Para el logro eficiente y eficaz de los objetivos planteados por los legisladores Federales y Locales en materia de fiscalización de recursos públicos otorgados a los partidos políticos, debemos inclinarnos a identificar las deficiencias u omisiones que actualmente presentan los marcos normativos que regulan la vida y actuación de los órganos que controlan y verifican el cumplimiento de las disposiciones legales que los rigen, proceder al análisis exhaustivo de sus características y modalidades, para entonces, proponer las mejoras adecuadas

que permitan crear un sistema electoral constante y renovado a la par de las necesidades que actualmente demanda el interés público para la fiscalización en el uso y destino de los recursos públicos otorgados a los partidos políticos, convirtiendo el cumplimiento adecuado de la norma en una expresión del Estado democrático.

Elementos como la disminución de la discrecionalidad, la eliminación de áreas de opacidad, el libre flujo de información respecto a la obtención y asignación de recursos, la implementación de medidas preventivas y correctivas, la adopción de estándares internacionales y prácticas de calidad, la participación activa y abierta de la sociedad y la oportunidad en la presentación de la información necesaria para comunicar oportunamente a la sociedad de sus resultados, son, entre otros, las consecuencias de fomentar un manejo transparente de los recursos de los partidos políticos.

Por lo tanto, la transparencia y rendición de cuentas, se debe convertir en eje rector y principio de la democracia y las instituciones encargadas de vigilarlas, sancionen de manera efectiva a los partidos políticos que incumplan en sus obligaciones, y se evite de manera imperante, que los organismos políticos la utilicen de forma estratégica para mantener sus triunfos políticos y electorales; a fin de contar con las condiciones para un real empoderamiento social que permita aumentar la certeza jurídica y la confianza institucional y de los partidos políticos, lo cual se refleje en una participación activa, a través de una ciudadanía más consciente con respecto a sus derechos y obligaciones.

Se debe avanzar en la consolidación del Estado democrático y actuar sobre las bases de los grandes principios vanguardistas en materia de fiscalización ya manifestados entre otros por ASOFIS; los artículos 5, 6 y 7 de la Declaración de Lima; los principios de la Declaración de México sobre la independencia de las Entidades de Fiscalización Superior, entre otros, con el objetivo de garantizar que la legislación salvaguarde la imparcial y eficaz función fiscalizadora.

Existe una clara intención no sólo a nivel local, también a nivel nacional para consolidar el Estado democrático; en los últimos años hemos sido testigos de diferentes reformas, la última y la más reciente es la de diciembre de 2013, misma que se caracteriza por la creación del Instituto Nacional de Elecciones (INE) como transformación del Instituto Federal Electoral (IFE), cuyo objetivo principal es el de centralizar la función electoral a fin de eficientarla y tener mayor control.

Entre las funciones que ahora centralizará el INE, se encuentra entre otras, la de fiscalización, la que ahora se amplía hasta el ámbito local, lo cual no significa que desaparezcan las estructuras estatales, simplemente estarán bajo el mando jerárquico del nuevo Instituto, por lo que serán regulados y controlados desde el centro.

La función de fiscalización de acuerdo con el contenido de la reforma, establece que "la fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y de las campañas de los candidatos estará a cargo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. La Ley desarrollará las atribuciones del Consejo para la realización de dicha función, así como la definición de los órganos técnicos dependientes del mismo, responsables de realizar las revisiones e instruir los procedimientos para la aplicación de las sanciones correspondientes. El Consejo General no estará limitado por los secretos bancario, fiduciario y fiscal, y contará con el apoyo de las autoridades federales y locales. La Ley definirá los mecanismos de coordinación entre los órganos del Ejecutivo Federal en materia de inteligencia financiera y el Instituto Nacional Electoral. La Ley que regule los partidos políticos nacionales y locales establecerá un sistema de fiscalización sobre el origen y destino de los recursos con los que cuenten los partidos políticos."[126]

[126] Véase en: http://ine.mx/archivos2/CDD/Reforma_Electoral2014/descargas/capacitacion/CursoReforma/naturaleza2.html#

Resulta muy prematuro definir si con esta modificación en el ámbito de la fiscalización, se obtendrán mejores resultados de los que ya contaban las entidades federativas y en específico el Distrito Federal y sobre todo influyan en la consolidación democrática. La reforma es muy reciente y los primeros cambios se han dado paulatinamente y no se ha logrado constatar los efectos de su implementación a nivel nacional. Sin embargo, se sugiere que dicha modificación, advierte mayores controles, alianzas con el sistema bancario, fiduciario, fiscal y con los medios de comunicación a fin de evitar abusos y mayor rendición de cuentas en los gastos de los partidos políticos, esperemos que estos controles y regulación sobre el origen y destino de los recursos se proyecten en una adecuada transparencia y rendición de cuentas hacia la sociedad, propiciando con ello mayor confianza y certeza sobre el actuar no sólo de los partidos político, sino de las instituciones públicas.

En tanto no sean contundentes los primeros efectos de la presente reforma a nivel nacional como a nivel del Distrito Federal, proponemos medidas que pueden efectuarse, a fin de solventarse algunas deficiencias que actualmente presenta la entidad federativa en relación a la fiscalización de los partidos políticos, a través de la implementación de procedimientos claros y transparentes de rendición de cuentas a la ciudadanía, lo cual aporta a la consolidación democrática y también fortalece la cultura política y democrática del país:

1) Ampliar los alcances de la fiscalización realizada por la UTEF a los partidos políticos y coaliciones, estableciendo y aplicando para tal efecto, además de auditorías financieras, las de naturaleza procedimental, jurídica, de seguimiento y desempeño de resultados.

2) Ante la inconsistencia y poca claridad normativa en cuanto al gasto y aplicación de los recursos en los procesos electorales, se debe privilegiar en la fiscalización de los recursos, la revisión de su origen, dando facultades a la autoridad local para realizar las indagatorias necesarias para conocer

oportunamente del mismo, evitando en consecuencia acciones de infiltración de recursos indebidos en dichos procesos.

3) Establecer en los procesos de planeación, la función de publicidad de resultados de la fiscalización, mediante mecanismos accesibles a la sociedad, de tal forma que se garantice una información permanente respecto el uso, destino y aplicación que se da a los recursos otorgados mediante prerrogativas para el cumplimiento de sus fines como entes de interés público.

4) Priorizar la cultura de la prevención más que la sanción, de tal forma que en términos formales mediante una debida y transparente rendición de cuentas por parte de los institutos políticos, se logre la consolidación del sistema de partidos políticos, piedra angular del sistema democrático de la Ciudad.

5) Elaborar los mecanismos, instrumentos y guías de fiscalización que otorguen a los entes fiscalizados la plena garantía de procesos de revisión debidamente fundados y motivados, que además de generar claridad y transparencia en el desarrollo de la función, sean del conocimiento con la debida antelación de los partidos políticos, a efecto de que en el ámbito de su competencia, tomen las previsiones necesarias previas a la presentación de los informes correspondientes.

6) Integrar como parte de los aspectos a fiscalizar, la atención y/o cumplimiento de los programas de acción registrados por los candidatos para el caso de aquellos que resultaron ganadores, e incluir la obligación de los partidos políticos de integrarlos a su página institucional.

7) Integración de criterio de los órganos administrativos y jurisdiccionales en materia electoral para consolidar el nuevo derecho electoral basado en la tesis funcionalista de los principios electorales y alejados de los principios puros del *ius punendi.*

8) Contratación del personal directivo y operativo autorizado a la estructura organizacional del IEDF en tiempo y forma y en apego a la normatividad establecida y técnicamente calificado.

9) Instrumentación de procedimientos de insaculación para Consejeros Electorales, magistrados del TEDF y designación directa del Titular de la UTEF por parte del Consejo General.

10) Cumplir con lo dispuesto en el rubro de publicación procesal por cuanto a materia electoral se refiere, sin embargo, no es garantía de su eficacia e infiltración social, hay que generar los mecanismos que permitan una real comunicación entre autoridades electorales locales y la ciudadanía, de tal forma que los resultados reportados sean accesibles a su conocimiento e información, que abone en la cultura democrática y se fortalezca con base en el conocimiento puntual de los resultados de la fiscalización de las asociaciones políticas y genere la afección social al sistema democrático de la Ciudad.

11) Se deben construir instrumentos electorales que incorporaren la tecnología como un insumo que coadyuve a desmantelar la desconfianza asentada en la manipulación de la información, brindando certeza respecto al correcto uso, destino y aplicación de los recursos administrados por los partidos políticos.

12) La ALDF debe tener plena soberanía para normar, a fin de cuidar plenamente de los intereses de los ciudadanos y dotar a las autoridades de elementos para un mejor gobierno. La ineludible autonomía de la Ciudad de México debe ser aceptada.

13) La reforma política del Distrito Federal representa el paso fundamental hacia la construcción de instituciones y procesos democráticos por el que muchos habitantes de la Ciudad lucharon desde finales del siglo XIX.

14) Nadie puede estar en contra de un sistema de partidos fuerte, pero ello no debe ser en demérito del derecho que tienen los ciudadanos de proponer reformas, de ser votados, de participar en un referéndum o dejar de padecer la parálisis legislativa por decisión de uno o varias fuerzas políticas.

15) Apostar a un sistema profundamente ciudadanizado.

16) Un factor de suma importancia para la vida democrática en nuestra Ciudad, es que el IEDF se consolide ante los actores políticos y en particular con la ciudadanía como referente de profesionalismo, transparencia e imparcialidad.

La naturaleza técnica de un ente tiene una notable proximidad con la vertiente organizativa y normativa en que se proyecta su autonomía, lo que significa que no pueda haber un comportamiento técnico del órgano fiscalizador si previamente no se le garantiza su independencia y capacidad para organizarse y regirse por sus propias normas.

La UTEF al estar dotada de esta autonomía técnica y de gestión, tiene en todo momento la obligación de realizar sus funciones sin más límite que el que la propia Ley y los procedimientos que en ella se establezcan, sin que estos constituyan impedimento alguno para que en el marco del pleno uso de sus facultades técnicas y de autonomía de gestión, pueda determinar en los propios Informes de Resultados de la Fiscalización, las sanciones que correspondan a las asociaciones políticas en el Distrito Federal, respecto de las irregularidades no solventadas en los procedimientos de fiscalización, las cuales deberán ser informadas al Consejo General para que este a su vez, instruya su aplicación correspondiente, ya que de no actuar en este sentido, se estaría vulnerando esa autonomía técnica y de gestión que implica no sólo la identificación de irregularidades, sino en su caso determinar la sanción que les corresponda, de tal forma que con su accionar, se concluya un proceso integral y se garantice la vigencia de los principios que regulan la función electoral.

En este orden de ideas es de hacerse notar que con objeto de garantizar la plena vigencia de los principios de la función electoral basada en la autonomía técnica y de gestión en materia de fiscalización, se deberá trabajar para garantizar:

1) Que la UTEF tenga un espacio institucional propio para que se estructure bajo cánones que garanticen su competencia técnica y profesional que junto con el direccionamiento del órgano federal permitan profesionalizar su actuar.

2) Que los titulares de la UTEF tengan garantizada su independencia y que las personas que conformen su personal estén altamente especializadas.

3) Que las normas que regulan las atribuciones y el funcionamiento de la UTEF contengan mandatos expresos suficientemente amplios para cumplir adecuadamente con sus funciones.

4) Que las normas que disciplinan los mecanismos de actuación sustantiva de la UTEF sean lo suficientemente prescriptivas para desempeñar con eficacia y alto rigor técnico su cometido institucional.

5) Que la conducción de la UTEF sea igualmente profesional, sin que exista posibilidad alguna de interferencia política y jerárquica en la determinación técnica de su trabajo.

6) Que se instrumenten los programas de capacitación y contratación del personal, así como la distribución del presupuesto asignado para el cumplimiento de sus objetivos, tomando en consideración la autonomía técnica y de gestión de la UTEF.

7) Que la autonomía de gestión sea plena y concordante con una independencia de actuación, ya que constituye una condición necesaria para que el órgano no se encuentre sometido a ninguna interferencia externa.

8) Que los resultados de los procesos de fiscalización y su sanción, no se ejerzan siguiendo criterios distintos a los de una investigación seria, profesional, basada en evidencia documental y en el marco legal establecido para el efecto.

9) Que la autoridad federal proporcione de manera expedita a la UTEF información bancaria y fiduciaria de tal forma que su análisis se pueda realizar de manera oportuna.

10) Que las acciones que lleve a cabo la UTEF, contribuyan a fortalecer la transparencia y legalidad del uso de los recursos que reciben de la ciudadanía los partidos políticos, así como los de origen privado; pues si bien es cierto a lo largo de los diez años de vida institucional, se han perfeccionado los procedimientos de fiscalización que se llevan a cabo, los cuales cada vez más, dan puntual cuenta de los recursos que reciben y ejercen como entidades de interés público, también lo es que poco sea hecho para acercar a la ciudadanía a estas actividades, mismas que dan cabal cuenta del esfuerzo que han realizado estos institutos políticos para transparentar y rendir cuentas claras a los ciudadanos en un estricto apego a la legalidad.

11) Que el Instituto Nacional Electoral junto con los órganos electorales locales constituyan criterios, tesis y/o disposiciones normativas que garanticen una mayor participación ciudadana dotando a esta de instrumentos suficientes de colaboración con la autoridades electorales en la verificación, seguimiento, evaluación, comunicación y conectividad que permitan que ellos sean el gran ejército de verificación y certificación del cumplimiento de los principios de la función electoral por parte de los órganos electorales.

12) Que en la función de fiscalización a los partidos políticos se dé prioridad a la revisión del origen de los recursos que son aportados por particulares e iniciativa privada y no a su gasto, debiendo generar la facultad de la autoridad electoral para que por medio de vistas a las autoridades fiscales se dé puntual informe de los recursos que sean aportados a los partidos políticos ya sea en efectivo o en especie los cuales además de tener un límite deban ser 100% auditables y publicables en las páginas oficiales de los institutos políticos el nombre, Registro Federal de Contribuyentes y monto de la aportación otorgada a los mismos.

ABREVIATURAS

ENTES PÚBLICOS

- Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF)
- Comisión de Participación Ciudadana (CPC)
- Gobierno del Distrito Federal (GDF)
- Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (INFODF)
- Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF)
- Instituto Nacional de Elecciones (INE)
- Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
- Tribunal Electoral del Distrito Federal (TEDF)
- Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)
- Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF)
- Unidad Técnica Especializada de Fiscalización (UTEF)

NORMATIVA

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución Política)
- Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal (CIPEDF)
- Código Electoral del Distrito Federal (Código Electoral)
- Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal (Consejo General)
- Estatuto de Gobierno del Distrito Federal (Estatuto de Gobierno)
- Ley de Archivos del Distrito Federal (Ley de Archivos)
- Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal (Ley de Participación Ciudadana)
- Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal (Ley de Presupuesto)

- Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal (Ley de Protección de Datos)
- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (Ley de Transparencia)
- Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal (Ley Orgánica)
- Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal
- Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal
- Ley Procesal Electoral para el Distrito Federal (Ley Procesal)
- Manual de Organización y Funcionamiento del Tribunal Electoral del Distrito Federal.
- Plan General de Desarrollo del Instituto Electoral (Plan General)
- Plan General de Desarrollo Institucional aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal
- Plan Nacional de Desarrollo (Plan Nacional)
- Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2014-2017
- Programa Operativo Anual (POA)
- Reglamento del Instituto Electoral del Distrito Federal para el Trámite, Sustanciación y Resolución de los Procedimientos Administrativos Sancionadores (Reglamento de Procedimientos Administrativos Sancionadores
- Reglamento del Instituto Electoral del Distrito Federal para el Trámite, Sustanciación y Dictamen de los Procedimientos Administrativos de Investigación Relativos al Rebase a los Topes de Gastos de Precampaña y Campaña (Reglamento para el Trámite, Sustanciación y Dictamen relativos al Rebase de Topes de Gastos de Precampaña y Campaña)
- Reglamento del Instituto Electoral del Distrito Federal para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos (Reglamento de Fiscalización para los Partidos Políticos).
- Reglamento del Instituto Electoral del Distrito Federal para la Fiscalización de los Recursos de las Agrupaciones Políticas Locales (Reglamento de

Fiscalización para las Agrupaciones Políticas Locales.

- Reglamento del Instituto Electoral del Distrito Federal para la Fiscalización de los Recursos de las Agrupaciones Políticas Locales Interesadas en Obtener el Registro Legal como Partido Político Local. (Reglamento de Fiscalización para las Agrupaciones Políticas Locales Interesadas en Obtener el Registro Legal como Partido Político.)
- Reglamento del Instituto Electoral del Distrito Federal para la Liquidación del Patrimonio de las Asociaciones Políticas (Reglamento para la Liquidación)
- Reglamento para el trámite, sustanciación y resolución de los procedimientos administrativos sancionadores del Instituto Electoral del Distrito Federal (Reglamento para el Trámite, Sustanciación y Resolución de los Procedimientos Administrativos Sancionadores)
- Reglamento para la Sustanciación de Quejas Administrativas del Instituto Electoral del Distrito Federal (Reglamento de Quejas)

ÍNDICE DE FIGURAS

No.	Nombre de la Figura	Pág.
Figura 1.	Financiamiento por su Origen	113
Figura 2.	Destino y Aplicación del Financiamiento	132
Figura 3.	Planeación institucional del IEDF	158
Figura 4.	Jerarquización de la planeación institucional en el IEDF	159
Figura 5.	La Función de Revisión de Informes	178
Figura 6.	Procedimientos de Emplazamiento	179

BIBLIOGRAFÍA

- ACOSTA ROMERO, Miguel. Teoría General del Derecho Administrativo, Editorial Porrúa S.A. de C.V., Primer Curso, México 2005.
- ANAYA CADENA, Vicente. (coord.), Diccionario Política, Gobierno y Administración Pública Municipal, Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública, A.C., México, 1997.
- ARRATÍBEL SALAS, Luis Gustavo. "Conceptualización del Derecho Electoral", en Serrano Migallón, Fernando (coord.), Derecho electoral, Porrúa-UNAM, Facultad de Derecho, 2006.
- BERLÍN VALENZUELA, Francisco. Diccionario Universal de Términos Parlamentarios Instituto de Investigaciones Legislativas, editorial Porrúa, México 1997.
- BOBBIO, NORBERTO, et.al., Diccionario de Política, México Siglo XXI, 2 Tomos, 6ª Edición, 1998.
- BURGOA ORIHUELA, Ignacio. Derecho Constitucional Mexicano, editorial Porrúa S.A. de C.V, 19ª edición, México 2007.
- BURGOA ORIHUELA, Ignacio. Diccionario de Derecho Constitucional, Garantías y Amparo, editorial Porrúa, 5ª edición, primera reimpresión.
- DAHL, Robert. La Democracia, una guía para los ciudadanos, editorial Taurus, México. (2005).
- DEL VALLE, Óscar. Periódico Reforma, 18 de noviembre del 2011 Sección Ciudad p. 2.
- ESPARZA MARTÍNEZ, Bernardino. Crisis Democrática de los Partido Políticos, editorial Cárdenas, 2da edición, México 2000.
- GALVÁN RIVERA, Flavio. Derecho Procesal Electoral Mexicano, editorial Porrúa, México, D.F.
- GARCÍA MÁYNEZ, Eduardo. “Introducción al estudio del Derecho”, editorial Porrúa S. A., 50ª edición reimpresión.
- GARCÍA MÁYNEZ, Eduardo. Filosofía del Derecho, editorial Porrúa, sexta edición revisada.

- Instituto Electoral del Distrito Federal, Democracia, participación ciudadana y justicia electoral. Reflexiones y retos derivados del proceso electoral 2008-2009, Octubre, 2010.
- MELLADO HERNÁNDEZ, Roberto. Para un estudio puntual del proceso histórico de la participación ciudadana.
- MELLADO HERNÁNDEZ, Roberto. Participación Ciudadana Institucionalizada y Gobernabilidad en la Ciudad de México, Plaza y Valdés Editores, 1ª. Edición, México 2001.
- MONTERO ZENDEJAS, Daniel. Derecho Político Mexicano, editorial Trillas, México 1991.
- NOHLEN, Dieter. Sistemas Electorales y Partidos Políticos, editorial Fondo de Cultura Económica-UNAM, México 1994.
- NOHLEN, Dieter. Sistemas Electorales y Partidos Políticos. Primera reimpresión, editorial Fondo de Cultura Económica, México, 1995.
- PATIÑO CAMARENA, Javier. Derecho Electoral Mexicano, Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM, Tercera edición 1996.
- SÁNCHEZ VÁZQUEZ, Adolfo, Ensayo-Actualidad Ética, editorial Comercializadora y Maquiladora Tacef, S.A. de C.V., cuarta reimpresión, México, D.F., 2009.
- SARTORI, Giovanni. (1997) ¿Qué es la democracia?, editorial México: Nueva Imagen.
- SARTORI, Giovanni. “Hay una Crisis de Representación”, en revista Este país, México, núm. 65, agosto 1996.
- SARTORI, Giovanni. Partido y Sistemas de Partidos, editorial Alianza Madrid, 1980.
- SERRA ROJAS, Andrés. Ciencia política. La proyección Actual de la Teoría General del Estado, editorial Porrúa, 15ª ed. México, 1997.
- VALDÉS, Leonardo. Sistemas Electorales y de Partidos, Cuadernos de Divulgación de la Cultura Democrática, (IFE), 5ª edición, 2007.
- WEBER, Max. Economía y Sociedad, editorial Fondo de Cultura Económica, México, 1992.

LEGISLACIÓN

- Circular SA-038 de la Secretaría Administrativa del IEDF de fecha 25 de agosto de 2011.
- Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal.
- Código Electoral del Distrito Federal.
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.
- Ley General de Partidos Políticos
- Ley de Planeación del Desarrollo del Distrito Federal.
- Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal.
- Ley Procesal Electoral para el Distrito Federal.
- Manual de Organización y Funcionamiento del Instituto Electoral del Distrito Federal.
- Manual de Planeación del Instituto Electoral del Distrito Federal.
- Manual de Organización y Funcionamiento del Tribunal Electoral del Distrito Federal.
- Normas de Información Financiera.
- Plan General de Desarrollo Institucional aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal.
- Plan Nacional de Desarrollo.
- Programa de Fiscalización 2014 de la UTEF aprobado por la Junta Administrativa del Instituto Electoral del Distrito Federal.
- Programa General de Desarrollo del Instituto Electoral del Distrito Federal.
- Programas de Trabajo y Guías para la Fiscalización de los Partidos Políticos de la Comisión de Fiscalización del Instituto Electoral del Distrito Federal.
- Reglamento del IEDF para la Liquidación del Patrimonio de las Asociaciones Políticas en el Distrito Federal.
- Reglamento del Instituto Electoral del Distrito Federal para la Fiscalización

de los Recursos de los Partidos Políticos.

- Reglamento del Instituto Electoral del Distrito Federal para la Fiscalización de los Recursos de las Agrupaciones Políticas Locales.
- Reglamento para la Sustanciación de Quejas Administrativas del Instituto Electoral del Distrito Federal.

MESOGRAFÍA

- http://bibliotecadigital.conevyt.org.mx/colecciones/ciudadania/partidos_politicos_y_dem. VALDÉS, Leonardo, Sistemas Electorales y de Partidos, IFE, Cuadernos de Divulgación de la Cultura Democrática 7.

- http://bibliotecadigital.conevyt.org.mx/colecciones/ciudadania/partidos_politicos_y_dem. CÁRDENAS GRACIA, Jaime, Partidos Políticos y Democracia, IFE, Cuadernos de Divulgación de la Cultura Democrática 8.

- http://.tupatrocinio.com/ongs.html?pag=258. Organizaciones No Gubernamentales registradas en el Distrito Federal

- http://www.consejeria.df.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/522fe67482e50.pdfPrograma de Desarrollo del Distrito Federal 2010-2018

- http://www.el universal.com.mx/ciudad/107469.html

- http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/47401.html, ABUNDIS, Francisco “Toda la Política es Local”, periódico El Universal, 16 de febrero de 2010.

- http://www.jurídicas.unam.mx/invest/directorio/investigador.htm?p=ackerman ACKERMAN, John M. Una Reconceptualización del Derecho Electoral a la Luz del Caso Sodi

- http://es.wikipedia.org/wiki/certeza (Wikipedia.)

- www.america.gov./st/democracy-spanish/2008/september. Partidos Políticos, grupos de interés, ONG.

- www.consulta.com.mx (Consulta Mitofsky)

- www.iedf.org.mx (IEDF)

- www.inap.org.mx/portal/images/REVISTA_A_P/rap122.pdf Revista de Administración Pública 122; Volumen XL No. 2 mayo-agosto 2010

- www.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/Censo General de Población y Vivienda 2010; Tabulados del Cuestionario Básico.
- www.infodf.org.mx
- www.latinobarómetro.org./INFORME_LATINOBARÓMETRO_2008.pdf (Latinobarómetro.)
- www.rae.es (Diccionario de la Real Lengua Española)
- www.tedf.org.mx (TEDF)
- www.transparenciamexicana.org.mx (Transparencia Mexicana)
- www.transparencia 2008.df.gob.mx Ventanilla Única de Transparencia del Gobierno del Distrito Federal.
- Partidos Políticos, grupos de interés, ONG www.america.gov./st/democracy-spanish/2008/september

OTRAS FUENTES

- Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal, mediante el cual se aprueban los indicadores de gestión que miden el cumplimiento de los proyectos institucionales que integran el Programa Operativo Anual 2010.
- Controversia constitucional 36/2003, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- GOODWIN-GILL, G. S. (2006). Elecciones Libres y Justas. Ginebra: Unión Interparlamentaria.
- Resoluciones de la Sala Regional del Distrito Federal del Poder Judicial de la Federación de fecha 28 de Septiembre del 2009 expedientes SDF-JRC-56/2009, SDF-JRC-65/2009, SDF-JRC-66/2009 y SDF-JDC-299/2009.
- Juicio de Revisión Constitucional Electoral SUP-JRC-17/2009 del Magistrado Ponente Flavio Galván Rivera.

- Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXV, mayo de 2007 (Jurisprudencias).
- Solicitud Número: 3300000036810 requisitada mediante el portal de transparencia del IEDF y su correspondiente respuesta.
- SOLORIO ALMAZÁN, Héctor. Ponencia: “Representación proporcional para el caso del Distrito Federal” dictada en el Congreso “Democracia, participación ciudadana y justicia electoral” convocado por el IEDF los días 17, 18 y 19 de noviembre de 2009.
- Tesis XX/2011 “Procedimiento especial sancionador, la autoridad administrativa electoral debe recabar las pruebas necesarias para su resolución”; en las resoluciones emitidas Sala Regional del Distrito Federal del Poder Judicial de la Federación, de fecha 28 de septiembre de 2009 expedientes SDF-JRC-56/2009, SDF-JRC-65/2009, SDF-JRC-66/2009 y SDF-JDC-299/2009, relativos a declaración de la nulidad de la elección en las Delegaciones Miguel Hidalgo y Cuajimalpa de Morelos, emitidas por los Magistrados de la Sala Superior del TEPJF de fecha 13 de julio de 2011.

ANEXO 1. AGRUPACIONES POLÍTICAS LOCALES

EN LOS CASOS SIGUIENTES, EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL APROBÓ SU REGISTRO COMO AGRUPACIONES POLÍTICAS LOCALES, EN SESIÓN PÚBLICA DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 1999.				
NÚM	**AGRUPACIÓN POLÍTICA LOCAL**	**NOMBRE Y CARGO**	**DOMICILIO**	**TELÉFONO/FAX/CORREO ELECTRÓNICO**
1	ALIANZA DE ORGANIZACIONES SOCIALES	C. Juan Manuel Hernández López Ex Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal	Orozco y Berra No 43-A, Colonia Buenavista, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06300	55-66-40-70 *aosapldf@hotmail.com.mx* (No ha informado al Instituto Electoral del Distrito Federal si cuenta con sitio en Internet)
2	CIUDADANOS UNIDOS POR MÉXICO	Lic. César Caudillo Herrera Ex Presidente del Comité Ejecutivo General	Cerrada de Eligio Villamar No. 17 esquina División del Norte y Héroes del 47, Colonia San Diego Churubusco, Delegación Coyoacán C.P. 04210	55-76-13-82 *aplcume@hotmail.com* (No ha informado al Instituto Electoral del Distrito Federal si cuenta con sitio en Internet)
3	COMITÉ DE DEFENSA POPULAR DEL VALLE DE MÉXICO	Ing. Juan de Jesús Hernández Ramírez Integrante del Comité Ejecutivo Provisional	Calle Paganini N° 17, Colonia Vallejo, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 07870	55-37-87-04 57-57-12-73 (No ha informado al Instituto Electoral del Distrito Federal si cuenta con sitio en Internet o correo electrónico)
4	COORDINADORA CIUDADANA DEL DISTRITO FEDERAL	C. León Prior Hernández Presidente del Comité Ejecutivo del Distrito Federal	Calle Hidalgo No. 95, Colonia Tepepan, Delegación Xochimilco, C.P. 16020	56-76-31-89 56-35-17-52 *www.coordinadoraciudadana.org* *cordinadoraciudadana_apl@yahoo.com.mx* *leonprio@prodigy.net.mx* *mariana_hills@hotmail.com*
5	FRENTE DEL PUEBLO	C. José Meza Rosas C. Gorgonio Álvarez Olvera Ex Integrantes de la Comisión Ejecutiva	Calle Doctor Carmona y Valle N° 32, Colonia Doctores, C.P. 06720, Delegación Cuauhtémoc.	57-04-10-89 57-57-98-87 (No ha informado al Instituto Electoral del Distrito Federal si cuenta con sitio en Internet o correo electrónico)
6	FUERZA DEMOCRÁTICA	C. Osvaldo Cruz Villalobos Presidente del Consejo Directivo	Calle Marmolería No. 229, Colonia 20 de noviembre, Delegación Venustiano Carranza, C.P. 15300, México DF.	57-04-26-55 (No ha informado al Instituto Electoral del Distrito Federal si cuenta con sitio en Internet) *egregio01@hotmail.com* *fuerzademo@hotmail.com*
7	MOVIMIENTO CIVIL 21	C. Humberto Morgan Colón Coordinador del Comité Ejecutivo Estatal	Calle Minas N° 80, Colonia El Pocito, C.P.01270, Delegación Álvaro Obregón.	58-45-96-92 (No ha informado al Instituto Electoral del Distrito Federal si cuenta con sitio en Internet) *sociedad21@hotmail.com*
8	MUJERES INSURGENTES	Lic. Beatriz Gallardo Macías Presidenta de la Comisión Ejecutiva	Calle Rafael Rebollar N° 25, Colonia San Miguel Chapultepec, C.P.11850, Delegación Miguel Hidalgo.	52-73-45-94 *mujeresinsurgentes@hotmail.com* (No ha informado al Instituto Electoral del Distrito Federal si cuenta con sitio en Internet)

EN EL CASO SIGUIENTE, EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL APROBÓ SU REGISTRO COMO AGRUPACIONES POLÍTICAS LOCALES, EN SESIÓN PÚBLICA DE FECHA 18 DE MARZO DE 2000.				
NÚM.	**AGRUPACIÓN POLÍTICA LOCAL**	**NOMBRE Y CARGO**	**DOMICILIO**	**TELÉFONO/FAX/CORREO ELECTRÓNICO**
13	MÉXICO JOVEN	C. Oscar Valencia Villa Ex Presidente del Comité Directivo	Calle Portal N° 24, Colonia Jardines del Sur, C.P. 16050, Delegación Xochimilco.	56-76-81-18 www.geocities.com/mexicojoven (No ha informado al Instituto Electoral del Distrito Federal si cuenta con correo electrónico)
EN LOS CASOS SIGUIENTES, EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL APROBÓ SU REGISTRO COMO AGRUPACIONES POLÍTICAS LOCALES, EN SESIÓN PÚBLICA DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2001.				
NÚM.	**AGRUPACIÓN POLÍTICA LOCAL**	**NOMBRE Y CARGO**	**DOMICILIO**	**TELÉFONO/FAX/CORREO ELECTRÓNICO**
14	ASOCIACIÓN MEXICANA DE LA FAMILIA, PRO DESARROLLO NACIONAL	Lic. Alicia Muñoz Fernández Ex Presidenta del Comité Ejecutivo	Calzada de los Tenorios N° 231, Colonia Rincón de las Hadas, C.P. 14390, Delegación Tlalpan.	56-73-26-47 (fax) 56-73-55-47 *asociacion_mexicana_familia@yahoo.com.mx* (No ha informado al Instituto Electoral del Distrito Federal si cuenta con sitio en Internet)
15	ASOCIACIÓN PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE MÉXICO	Lic. Roberto Villaseñor Aceves Ex Presidente del Comité Ejecutivo Estatal	Av. Morelos, No. 87, Esquina Cuauhtémoc, Barrio San Pedro Xochimilco, C.P. 16090, Distrito Federal y/o Fernando Montes de Oca, No. 126, Esquina Zamora, Col. Condesa, México D.F. C.P. 06140	55-95-03-39 *www.apim.org.mx* (No ha informado al Instituto Electoral del Distrito Federal si cuenta con correo electrónico)
16	AVANCE CIUDADANO	C. Luis S. Figueroa Solano Ex Presidente del Comité Ejecutivo Local	Calle República de Venezuela #46, Colonia Centro Histórico, Código Postal 06020, Delegación Cuauhtémoc.	57 02 92 85 044 55 13 17 27 68 *avanceciudadanoapl@yahoo.com.mx* (No ha informado al Instituto Electoral del Distrito Federal si cuenta con sitio en Internet)
17	COMISIÓN DE ORGANIZACIONES DEL TRANSPORTE Y AGRUPACIONES CIUDADANAS	C. Gonzalo López Abonza Ex Presidente del Comité Ejecutivo	Calle Reyna Xóchitl Manzana 21, Lote 5, 1er. Piso, Colonia El Paraíso, Delegación Iztapalapa, C.P. 09230	57-73-27-91 *cotacapl@prodigy.net.mx* (No ha informado al Instituto Electoral del Distrito Federal si cuenta con sitio en Internet)
18	MOVIMIENTO LIBERTAD, A.P.L.	C. Lucerito del Pilar Márquez Franco Presidenta del Comité General	Calle Libertad N° 145, Barrio San Lucas, C.P. 09000, Delegación Iztapalapa.	56-86-98-01 (No ha informado al Instituto Electoral del Distrito Federal si cuenta con sitio en Internet o correo electrónico)
19	POR LA TERCERA VÍA	C. Fernando Silva Triste Presidente del Consejo Directivo	Anaxágoras No. 508-4, Colonia Narvarte Poniente, Delegación Benito Juárez, C.P. 03020, México DF.	47-51-84-34 56-38-00-71 *sacari6@hotmail.com* (No ha informado al Instituto Electoral del Distrito Federal si cuenta con sitio en Internet)

EN LOS CASOS SIGUIENTES, EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL APROBÓ SU REGISTRO COMO AGRUPACIONES POLÍTICAS LOCALES, EN SESIÓN PÚBLICA DE FECHA 19 DE MARZO DE 2002.				
NÚM	**AGRUPACIÓN POLÍTICA LOCAL**	**NOMBRE Y CARGO**	**DOMICILIO**	**TELÉFONO/FAX/CORREO ELECTRÓNICO**
20	PROYECTO INTEGRAL DEMOCRÁTICO DE ENLACE (PIDE)	C. Vicenta Pérez Pérez Presidenta de la Mesa Directiva General	Oriente 168 N° 203, Colonia Moctezuma 2ª. Sección, C.P. 15530, Delegación Venustiano Carranza.	55-71-64-46 57-62-80-85 *proyectopide@esmas.com* *proyectopide@hotmail.com* (No ha informado al Instituto Electoral del Distrito Federal si cuenta con sitio en Internet)

EN LOS CASOS SIGUIENTES, EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL APROBÓ SU REGISTRO COMO AGRUPACIONES POLÍTICAS LOCALES, EN SESIÓN PÚBLICA DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 1999.				
NÚM	**AGRUPACIÓN POLÍTICA LOCAL**	**NOMBRE Y CARGO**	**DOMICILIO**	**TELÉFONO/FAX/CORREO ELECTRÓNICO**
21	TIEMPO DEMOCRÁTICO	C. José Luis Matabuena Ramírez Ex Presidente del Comité Directivo	Calle Monrovia N° 725, interior 102, Colonia Portales Sur, C.P. 03300, Delegación Benito Juárez.	56-09-12-77 56-74-80-90 *jlmr@lawyer.com* *tiempodemocratico@email.com* (No ha informado al Instituto Electoral del Distrito Federal si cuenta con sitio en Internet)

EN EL SIGUIENTE CASO EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL APROBÓ SU REGISTRO COMO AGRUPACIÓN POLÍTICA LOCAL, EN SESIÓN PÚBLICA DE FECHA 18 DE JULIO DE 2002.				
NÚM.	**AGRUPACIÓN POLÍTICA LOCAL**	**NOMBRE Y CARGO**	**DOMICILIO**	**TELÉFONO/FAX/CORREO ELECTRÓNICO**
22	CONCIENCIA CIUDADANA	C. Jorge Poblano Hernández Ex Presidente del Comité Directivo Local	Calle Tequisquiapan, N° 6, Barrio de la Concepción Tlacoapa, Delegación Xochimilco, C.P. 16000.	56-41-53-13 56-41-53-18 56-41-47-29 55-65-85-80 *conciencia_ciudadana@hotmail.com* (No ha informado al Instituto Electoral del Distrito Federal si cuenta con sitio en Internet)

EN LOS CASOS SIGUIENTES, EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL APROBÓ SU REGISTRO COMO AGRUPACIONES POLÍTICAS LOCALES, EN SESIÓN PÚBLICA DE FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2002.				
NUM.	**AGRUPACIÓN POLÍTICA LOCAL**	**NOMBRE Y CARGO**	**DOMICILIO**	**TELÉFONO/FAX/CORREO ELECTRÓNICO**
23	FUERZA NACIONALISTA MEXICANA	C. Manuel Germán Parra Prado Ex Presidente del Comité Ejecutivo General	Calle Pacífico No. 151, Colonia El Rosedal, C.P. 04330, Delegación Coyoacán	56-89-71-02 53-36-05-02 *patriciaalvarado@terra.com* *mparra@terra.com.mx* (No ha informado al Instituto Electoral del Distrito Federal si cuenta con sitio en Internet)
24	PATRIA NUEVA	Lic. Héctor Guzmán Velarde Presidente del Comité Ejecutivo Provisional	Calle 27 No. 74, Colonia Valentín Gómez Farías, C.P. 15010, Delegación Venustiano Carranza	55-71-52-36 57-84-72-11 26-43-24-80 *patrianuevaorg@hotmail.com* *http://patrianuevaorg.es.tripod.com*

EN LOS CASOS SIGUIENTES, EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL APROBÓ SU REGISTRO COMO AGRUPACIONES POLÍTICAS LOCALES, EN SESIÓN PÚBLICA DE FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2002.				
NUM.	**AGRUPACIÓN POLÍTICA LOCAL**	**NOMBRE Y CARGO**	**DOMICILIO**	**TELÉFONO/FAX/CORREO ELECTRÓNICO**
25	FUERZA POPULAR LÍNEA DE MASAS	C. Sergio Silva Ruiz Ex Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal	Malinche No. 27, Colonia La Malinche, C.P. 10310 Delegación Álvaro Obregón	56-81-25-98 56-68-03-67 *fplmdf@hotmail.com* (No ha informado al Instituto Electoral del Distrito Federal si cuenta con sitio en Internet)
26	AGRUPACIÓN CÍVICA DEMOCRÁTICA	C. Raymundo Pérez López Ex Presidente del Comité Ejecutivo Estatal	Calle Colombia No. 39, Colonia Centro, C.P. 06020, Delegación Cuauhtémoc	57-89-46-26 *fplmdf@hotmail.com* (No ha informado al Instituto Electoral del Distrito Federal si cuenta con sitio en Internet)
EN LOS CASOS SIGUIENTES, EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL APROBÓ SU REGISTRO COMO AGRUPACIONES POLÍTICAS LOCALES, EN SESIÓN PÚBLICA DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 1999.				
NÚM	**AGRUPACIÓN POLÍTICA LOCAL**	**NOMBRE Y CARGO**	**DOMICILIO**	**TELÉFONO/FAX/CORREO ELECTRÓNICO**
27	MOVIMIENTO SOCIAL DEMOCRÁTICO	C. Mariano Fernández de Jáuregui y Rivas Presidente del Comité Ejecutivo del Distrito Federal	Av. Buenavista No. 215, Colonia Lindavista, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 07300	55-17-43-64 *movimientosocialdemocratico@live.com* (No ha informado al Instituto Electoral del Distrito Federal si cuenta con sitio en Internet)
28	CORRIENTE SOLIDARIDAD	C. Jaime Javier López Ramírez Ex Secretario General del Consejo Directivo	Cerrada de Zoquipa No, 7-A, Colonia El Parque, Delegación Venustiano Carranza, C.P. 15960, México DF.	044-55-17-81-19-89 *corrientesolidaridad@yahoo.com.mx* (No ha informado al Instituto Electoral del Distrito Federal si cuenta con sitio en Internet)
EN EL CASO SIGUIENTE, EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL APROBÓ SU REGISTRO COMO AGRUPACIÓN POLÍTICA LOCAL, EN SESIÓN PÚBLICA DE FECHA 31 DE MAYO DE 2003				
NÚM	**AGRUPACIÓN POLÍTICA LOCAL**	**NOMBRE Y CARGO**	**DOMICILIO**	**TELÉFONO/FAX/CORREO ELECTRÓNICO**
29	MÉXICO AVANZA	C. Alfonso Pérez Morales Ex Presidente del Comité Ejecutivo Local	Avenida Insurgente Sur No. 393, Colonia Hipódromo, C.P. 06600, Delegación Cuauhtémoc, México D.F.	044-55-14-73-33-47 *mexicoavanza_apl@yahoo.com.mx* (No ha informado al Instituto Electoral del Distrito Federal si cuenta con sitio en Internet)
EN LOS CASOS SIGUIENTES, EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL APROBÓ SU REGISTRO COMO AGRUPACIÓN POLÍTICA LOCAL, EN SESIÓN PÚBLICA DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2004				
NÚM	**AGRUPACIÓN POLÍTICA LOCAL**	**NOMBRE Y CARGO**	**DOMICILIO**	**TELÉFONO/FAX/CORREO ELECTRÓNICO**
30	RED AUTOGESTIONARIA	C. Sergio Miguel Cedillo Fernández Presidente de la Mesa Directiva Estatal	Avenida del Regidor, Núm.62, Col. Residencial Villa Coapa, Delegación Tlalpan, D.F., C.P. 14390	044-55-14-78-36-57 (No ha informado al Instituto Electoral del Distrito Federal si cuenta con sitio en Internet o correo electrónico)

EN LOS CASOS SIGUIENTES, EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL APROBÓ SU REGISTRO COMO AGRUPACIÓN POLÍTICA LOCAL, EN SESIÓN PÚBLICA DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2004				
NÚM	**AGRUPACIÓN POLÍTICA LOCAL**	**NOMBRE Y CARGO**	**DOMICILIO**	**TELÉFONO/FAX/CORREO ELECTRÓNICO**
31	UNIDOS POR LA CIUDAD DE MÉXICO	C. Juan Hoffmann Calo Ex Presidente del Comité Ejecutivo General	Cerrada de Abadejos No 7, Colonia Lomas de las Águilas, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01730	56-35-30-32 56-35-29-61 51-32-56-00 ext. 1102 *ciudadanosactivos@hotmail.com* (No ha informado al Instituto Electoral del Distrito Federal si cuenta con sitio en Internet)
EN EL CASO SIGUIENTE, EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL APROBÓ SU REGISTRO COMO AGRUPACIÓN POLÍTICA LOCAL, EN SESIÓN PÚBLICA DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2005				
NÚM	**AGRUPACIÓN POLÍTICA LOCAL**	**NOMBRE Y CARGO**	**DOMICILIO**	**TELÉFONO/FAX/CORREO ELECTRÓNICO**
32	ORGANIZACIÓN JUVENIL PARTICIPACIÓN SOCIAL ACTIVA	C. Dante Armando Fernández Carvajal Presidente de Mesa Directiva Provisional	Calle San León Manzana 609, Lote 10, Colonia Pedregal de Santa Úrsula Coapa, C.P. 04600, Delegación Coyoacán	54-21-42-09 56-10-42-33 56-17-75-29 56-21-01-79 (No ha informado al Instituto Electoral del Distrito Federal si cuenta con sitio en Internet o correo electrónico)
EN LOS CASOS SIGUIENTES, EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL APROBÓ SU REGISTRO COMO AGRUPACIÓN POLÍTICA LOCAL, EN SESIÓN PÚBLICA DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2007				
NÚM	**AGRUPACIÓN POLÍTICA LOCAL**	**NOMBRE Y CARGO**	**DOMICILIO**	**TELÉFONO/FAX/CORREO ELECTRÓNICO**
33	CIUDADANOS ACTIVOS DEL DISTRITO FEDERAL	C. Raúl Horacio Pérez Barbosa Presidente del Comité General Ejecutivo	Tercera Cerrada de Prolongación Guadalupe Victoria No. 06, Colonia San Miguel Ajusco, Delegación Tlalpan, C.P. 14710	044-55-27-19-25-58 *ciudadanosactivos@hotmail.com* (No ha informado al Instituto Electoral del Distrito Federal si cuenta con sitio en Internet)
34	FUERZA DEL TEPEYAC (Mediante Resolución del Consejo General del IEDF de fecha 14-10-08, la APL Parnaso Distrito Federal, modificó sus estatutos y con ellos su denominación y emblema)	C. Armado Martínez Gómez Ex Presidente de la Comisaría General	Calle San Pablo No. 114, Colonia Olivar de los Padres, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01780.	044-55-28-89-13-43 *http://fuerzadeltepeyac.org.mx/* ***Información_fdt@yahoo.com.mx***
35	ESPERANZA CIUDADANA	C. Ricardo Marcel Ortiz Álvarez Presidente del Comité Directivo Provisional	Calle Jesús Lecuona Mza. 119 Lt. 877, No. 9, Colonia Ampliación Miguel Hidalgo, CP 14250, Delegación Tlalpan	56-31-98-78 54-85-84-98 (No ha informado al Instituto Electoral del Distrito Federal si cuenta con sitio en Internet o correo electrónico)

EN LOS CASOS SIGUIENTES, EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL APROBÓ SU REGISTRO COMO AGRUPACIÓN POLÍTICA LOCAL, EN SESIÓN PÚBLICA DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2008				
NÚM	**AGRUPACIÓN POLÍTICA LOCAL**	**NOMBRE Y CARGO**	**DOMICILIO**	**TELÉFONO/FAX/CORREO ELECTRÓNICO**
36	Organización Ciudadana en Beneficio del Distrito Federal	Lic. Omar Hernández Cruz Presidente de la Mesa Directiva Provisional	Calle Doctor Vertiz, No. 109, Despacho 305, Col. Doctores, Del. Cuauhtémoc.	21-56-22-09 (No ha informado al Instituto Electoral del Distrito Federal si cuenta con teléfono, correo electrónico o sitio en Internet)
EN LOS CASOS SIGUIENTES, EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL APROBÓ SU REGISTRO COMO AGRUPACIÓN POLÍTICA LOCAL, EN SESIÓN PÚBLICA DE FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2010				
NÚM	**AGRUPACIÓN POLÍTICA LOCAL**	**NOMBRE Y CARGO**	**DOMICILIO**	**TELÉFONO/FAX/CORREO ELECTRÓNICO**
37	Ciudadanía y Democracia	C. Adolfo Joel Ortega Cuevas Presidente de la Directiva Provisional	Calle Río Nazas número 159, esquina con Río Guadalquivir, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 Delegación Cuauhtémoc	55-33-85-16 55-33-85-17 *http://www.cyd.org.mx* *contacto@cyd.org.mx*
38	Justicia y Paz	C. Ana Lidia Bañuelos Díaz Presidenta de la Directiva Provisional	Calle Periférico No. 9073, entre las Calles Avenida Ermita Iztapalapa y Constitución de 1917, C.P. 09270, Delegación Iztapalapa	04455-14-74-41-84 04455-33-80-84-43 56-42-95-59 (No ha informado al Instituto Electoral del Distrito Federal si cuenta con teléfono, correo electrónico o sitio en Internet)

FUENTE: http://www.iedf.org.mx/index.php?cadena=de/deap/apl/index.php

ANEXO 2. ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES EN EL DISTRITO FEDERAL

NÚM.	DENOMINACIÓN	DATOS	OBJETIVO
1.	Compartiendo Saberes y Transformando Realidades A.C	Categoría: Discapacitados Antigua Vía la Venta No. 12. Col. Arturo Martínez Álvaro Obregón, DF Tel: 0155 16 64 19 48 www.cstac.org Contacto: Nadia Arroyo	Atender a personas, grupos y/o comunidades de escasos recursos en los ámbitos urbano y rural.
2.	Angelitos de Cristal, I.A.P.	Categoría: Discapacitados Tekal No. 297, Col. Jardines del Ajusco Municipio: Tlalpan Provincia: Distrito Federal País: México Teléfono: Contacto: Raúl Toriz Ramírez	Apoyo económico y en especie, atención psicológica, orientación a familiares.
3.	Alimento para Todos I.A.P.	Categoría: Asistencia a colectivos marginados Tamemes # 23, Colonia Paseos de Churubusco Iztapalapa Teléfono: 43360910 Web: www.alimentoparatodos.org.mx Contacto: Alejandro Martínez Arellano	Erradicar la pobreza alimentaria en personas de escasos recursos o pobreza extrema, procurando formándoles paquetes alimenticios.
4.	Eduquémonos con México	Categoría: Educación al desarrollo y sensibilización Tehuantepec 238 int. 7 Col. Roma Sur Cuauhtémoc, México D.F - C.P. 06760 Distrito Federal Teléfono: (52) 55 84 74 14 Fax: (52) 55 84 74 14 Web: eduardo.bojalil@eduquemonos.com Contacto: Eduardo Bojalil	Ofrecer aumento académico de alto nivel a nuestros usuarios, contribuyendo con su crecimiento personal y profesional
5.	Fraternidad de Grupos de Autoayuda y Ayuda Mutua, A.C.	Real de Los Reyes 77, Col. Los Reyes Coyoacán México, Distrito Federal Teléfono: +52 55 5689 6659 Web: http://www.ayudamutua.org Contacto: Rolando Montaño Fraire	Difundir ideas, recursos y estrategias ventajosas para el trabajo creativo y abierto en grupos de autoayuda.
6.	Fundación Espacio Memoria	Categoría: Defensa de Derechos Humanos Alberto Zamora #12 Col. Villa Coyoacán Coyoacán México, Distrito Federal Teléfono: 59086804 Web: http://www.fundacionespaciomemoria.org Contacto: Nayeli Moctezuma Moreno	Preservar la memoria de los sucesos históricos y sus consecuencias en la sociedad mexicana.
7.	Ayúdame que yo También soy Mexicano ATM.AC	Categoría: Otros Av. Monterrey No.248 Col. Roma Cuauhtémoc, DF Tel: 5566 5856 www.atm.org.mx Contacto: Laura Mendoza González	Jóvenes preocupados por la situación social del país.

NÚM.	DENOMINACIÓN	DATOS	OBJETIVO
8.	Fundación Pro Empleo Productivo	Categoría: Educación al desarrollo y sensibilización Herschel 131 Col. Anzures Miguel Hidalgo, Distrito Federal Tel: 5545 0845 Fax: 5545 1623 www.proempleo.org.mx Contacto: Alina Carmona	Mejores condiciones de vida para muchos mexicanos.
9.	ONG T'AI SUN DORI, A.C.	Categoría: Otros Nicolás San Juan 525 depto.9 Col. Del Valle Benito Juárez, Distrito Federal Tel: (52 55) 56017267 Contacto: Luisa Güido Williamson	Erradicar todo tipo de violencia ejercida contra las mujeres, niños y niñas.
10.	Anímate a Estudiar	Categoría: Educación al desarrollo y sensibilización Distrito Federal www.animateaestudiar.org Contacto: Lila Gasca	Impulsar la educación en los niños con menos recursos y oportunidades, de educación primaria.
11.	PACO IAP	Categoría: Apadrinamiento Lucio Blanco 32 Col. Revolución Venustiano Carranza, DF Tel: 57953177 Fax: 57953179 www.pacoiap.org	Atención de niños y jóvenes de muy bajos recursos y en situación de vulnerabilidad social, familiar, educativa y de salud.
12.	Comercio Justo México	Categoría: Comercio Justo Guanajuato 131 Int.301 Col. Roma Norte Distrito Federal Tel: 55747116 www.comerciojusto.com.mx Contacto: Paola Velasco	Impulsar un modelo basado en la justicia, la solidaridad y la sustentabilidad. El sello de garantía de (CJM), es un logotipo que encuentras en el empaque de los productos que cumplen con las indicaciones.
13.	Visión Mundial de México	Categoría: Infancia y juventud Bahía de Todos los Santos Miguel Hidalgo, DF Tel: 5255 15002218 Fax: 5255 15002201 www.visionmundial.org.mx Contacto: Yolanda Coxtinica Reyes	Impulsar el desarrollo de comunidades marginadas.
14.	Granja Didáctica Interactiva	Categoría: Educación al desarrollo y sensibilización Desierto de Gobi Mz1 Lote 6, Col. Sta. Lucia Álvaro Obregón Tel: 5556027484 Fax: 5554234186 www.granjamundofeliz.com Contacto: Roció Gurrola	Apoyar a las escuelas en objetivo de brindar una educación integral.
15.	Fundación del Dr. Simi	Categoría: Ayuda humanitaria Eje 6 Sur No 26 Col. Independencia Benito Juárez, Distrito Federal Tel: 55227005 http://www.fundaciondrsimi.org.mx Contacto: Fundación del Dr. Simi	Apoyar a los que menos tienen.
16.	Comunidad Laboral	Categoría: Familia Navarra Nº 18 Ciudad de México Tel: (55) 13839521 www.comunidad-laboral.com Contacto: Francisco Villarreal H.	Programas asistenciales.

NÚM.	DENOMINACIÓN	DATOS	OBJETIVO
17.	Fundación AdAr. AC	Categoría: Discapacitados Calle de Empresa No. 76 Benito Juárez ,Distrito Federal Tel: (0155) 30954303 www.fundacionadar.com Contacto: Marco Jiménez.	Apoyar a la población más vulnerable como son adultos mayores, personas con discapacidad y niños.
18.	Centro Mexicano de Rehabilitación de Primates	Categoría: Medio Ambiente 5 Mayo No. 37 Axotla Coyoacán, Distrito Federal Distrito Federal Tel: (+52) 55-5025-6570 http://www.centrodeprimatesmx.org/ Contacto: Rita Virginia Arenas Rosas	Protección y conservación de primates, especies exóticas y endémicas.
19.	Clínica de Atención e Investigación Integral en Salud Mental Oncológica (CLAIISMO)	Categoría: Salud Zempoala 138 Col Narvarte Benito Juárez, Distrito Federal Tel: 54404465 Contacto: CLAIISMO Emoción Escancer	Apoyó a grupos vulnerables afectados por el cáncer, atención psiquiátrica, psicológica y psicoterapéutica a costos accesibles.
20.	Visión Mundial de México	Categoría: Educación al desarrollo y sensibilización Bahía de Todos los Santos #162 Col. Verónica Anzures Distrito Federal Tel: 15002222 Fax: 15002232 www.visionmundial.org.mx Contacto: Israel Servín	Atención, mitigación y prevención de desastres, así como la promoción de Justicia en favor de comunidades y grupos marginados del país, con un énfasis especial en la niñez.
21.	TEDxDF	Categoría: Educación AP 6665, 06602 México, DF Cuauhtémoc Tel: 5522716605 http://www.tedxdf.org Contacto: John Rozzo Hoyes	Promover la innovación y divulgación de avances en las ciencias, cultura, artes, tecnología, medio ambiente y negocio.
22.	Observatorio Mexicano de la Crisis	Categoría: Investigación y docencia Paranagua Núm. 111 Col. San Pedro Zacatenco, Gustavo A. Madero, México, D.F. Tel: 51192550 Fax: 51192550 http://obmexcrisis.org/	Analiza, sistematiza y presenta la información que permita comprender el actual proceso de crisis económica.
23.	Milk México, AC	Categoría: Salud AP 6665, 06602 México, DF Provincia: Distrito Federal http://www.milk.org.mx Contacto: John Rozzo	Promover la sexualidad masculina a través de sus productos, servicios y programas que informan, motivan y apoyan al hombre en su calidad de vida.
24.	Autogestión Comunitaria para la Equidad Social. (ACES, A.C.)	Categoría: Educación al desarrollo y sensibilización San Lorenzo 750 Mz. 6 E-1 Col. San Nicolás Tolentino. Iztapalapa, Distrito Federal Tel: 55974479 Contacto: Eleazar Zapata López	Mejorar la calidad de vida de habitantes de las regiones rurales y urbanas en condiciones de extrema pobreza.
25.	Capacitación y Arte por la Educación.	Categoría: Asistencia a colectivos marginados Miguel Laurent 1114 Benito Juárez, Distrito Federal Tel: 5541484271 554973116 Contacto: Samuel Meza Haro	Capacitación laboral y educación a grupos marginados y vulnerables así como a personas con discapacidad auditiva y motriz.
26.	Sociedad de Integración Humana ONG	Categoría: Ayuda humanitaria José F. Gutiérrez 249, Col. Ángel Zimbrón Azcapotzalco, Distrito Federal Tel: 5561 2345 Contacto: Rodolfo Montoya Monsiváis	Proponer a la sociedad educativa y civil, iniciativas para crear mejores condiciones de Gobernabilidad, Observancia, Concordia, Principios, Probidad, Democracia y Rescate para las entidades de la Ciudad.

NÚM.	DENOMINACIÓN	DATOS	OBJETIVO
27.	Fundación Luna Negra Experimentación Cultural. LUNEC	Categoría: Cultura Puebla 204- 301 Col. Roma, Benito Juárez, DF Tel: 04455 17 82 22 28 Contacto: Karla Sofía Ontiveros Ruiz	Diseño de proyectos, actividades y eventos que estimulen el desarrollo social mediante la profesionalización de voluntarios y el intercambio cultural de jóvenes para contribuir con el desarrollo social de su entorno.
28.	Fuerza y Voluntad de 22 Campesinos, A.C.	Categoría: Tercera Edad Calle Carlos Espinoza de los Monteros, Mz. 33 Lote. 214, Col. Santa Cecilia, Tláhuac, D.F, Tel: 0155 21616147 Fax: 0155 58424047 www.fuvocam.mex.tl Contacto: Juan Carlos Medina Palacios	Mejorar las condiciones de vida de las ciudadanas y los ciudadanos de México, sin discriminación de raza, credo, sexo, nacionalidad, ideología, condición física y estatus económico.
29.	Ser Humano, A.C.	Categoría: Asistencia a enfermos de Sida Avenida Fray Servando Teresa de Mier No. 104 Col. Centro, C.P. 06740, Cuauhtémoc, Distrito Federal Tel: 5578 7423 y 5588 762 Fax: 5578 7423 y 5588 762 http://www.serhumano.org.mx/ Contacto: Anaid Nayell Morales Rodríguez	Programa de prevención, detección, asistencia médico-social relacionadas con las infecciones de transmisión sexual y por el virus de la inmunodeficiencia humana, causante del SIDA.
30.	Fundación Casa Alianza México, I.A.P.	Categoría: Infancia y juventud Paseo de la Reforma #111 Col. Guerrero Cuauhtémoc, Distrito Federal Tel: 3004-5130 Fax: 3004-5130 www.casa-alianzamexico.org Contacto: Fátima Berenice Amezcua.	Educación de adolescentes que dependen o han dependido de la calle para vivir.
31.	Asociación Mexicana para las Naciones Unidas A.C.	Categoría: Educación al desarrollo y sensibilización Blvd. Adolfo López Mateos 1661 Edif.A-12 Des.904 Lomas de Plateros Álvaro Obregón, DF Tel: 55 5664 4549 info@amnu.org.mx Contacto: A.C. Asociación Mexicana para las Naciones Unidas.	Apoyo a grupos vulnerables por edad, sexo y discapacidad, personas de escasos recursos o pertenecientes a una comunidad indígena.
32.	CODAIM	Categoría: Asuntos sociales Gustavo A. Madero, DF Tel: 55 23 95 64 79 www.codaim.org.mx Contacto: Noemí García	Desarrollo de capacidades de la sociedad rural e indígena para incorporar, adaptar los conocimientos y sus correspondientes tecnologías, a través del trabajo organizado e interdisciplinario de investigadores, científicos, tecnólogos, innovadores, empresarios.
33.	La Coalición por la Convención Iberoamericana por los Derechos de los Humanos "CCIDH"	Categoría: Ayuda humanitaria Liverpool Núm. 142 Cuauhtémoc, Distrito Federal Tel: 55 33 75 66 http://www.comisiondederechoshumanos.org Contacto: Nathaniel Radcliff Cesar.	Garantizar los trabajos en el mundo entero, tendientes a apaciguar el hambre y la pobreza, combatir el desabasto de medicamentos y unidades hospitalarias, contribuir de forma activa para impedir la violación a los derechos del ser Humano.
34.	Fundación Justicia y Amor I.A.P.	Categoría: Asistencia a colectivos marginados Indianápolis 67 Col Nápoles C.P: 03810 Delegación Benito Juárez, DF Tel: 55231746 Fax: 55365541 www.justiciayamor.org.mx Contacto: Omar Caracas Estrada.	Trabajar con familias marginadas con el fin de lograr su desarrollo integral, proporcionar asesoría integral especializada en materia de desarrollo social comunitario.

NÚM.	DENOMINACIÓN	DATOS	OBJETIVO
35.	Movimiento Cooperativista por la Esperanza	Categoría: Comercio Justo Isabela Católica, Distrito Federal Tel: 36282972 www.mne.org.mx Contacto: Román Bautista	Difundir los derechos fundamentales de las personas.
36.	Construyendo Comunidades Integrales	Categoría: Ayuda humanitaria Bosques de Alisos 21 Cuajimalpa País: México Tel: 4770 0728 www.construyendo.com.mx Persona de Contacto: Pablo Serrano Gómez	Construir hogares en un fin de semana, cuentan con la mejor tecnología renovable que ayuda con el medio ambiente, las paredes y techo, una letrina seca, un sistema de calentamiento de agua y una estufa ahorradora de leña.
37.	Fundación México	Categoría: Educación Privada Cuauhtémoc Tlalpan, Distrito Federal Tel: (55)54861300 Fax: (55) 54861300 pedir www.mexicojuega.org.mx Contacto: Mónica Juárez 258	Proporcionar recursos humanos, materiales y financieros a ludotecas en el territorio mexicano, especialmente para beneficiar a la población de bajos recursos, a grupos vulnerables.
38.	Banco de la Gratuidad	Categoría: Comercio Justo Vizcainoco 14 Álvaro obregón, Distrito Federal Tel: 55-56618203 Contacto: Leopoldo Zea	Participar en diversas actividades sin excluir a menores de edad, indígenas, extranjeros y/o mujeres, con capacidades y habilidades personales.
39.	Flores en Todos sus Centros México	Categoría: Otros Castilla 56-4 Azcapotzalco Distrito Federal Tel: 55954377 Fax: 55954377 www.floreslibres.org Contacto: Sarait Figueroa	Investigación planeación y desarrollo así como difusión de bienes y servicios educativos y culturales.
40.	Presencia Ciudadana Mexicana A.C.	Categoría: Medio Ambiente Reforma 300, 4to Piso Distrito Federal Tel: 52088088 Fax: 52088088 ext. 20 http://www.presenciaciudadana.org.mx Contacto: Ana Romero	Formación de una ciudadanía crítica, con una perspectiva propositiva capaz de intervenir eficientemente en la recreación de la vida pública del país, desde la sociedad civil.
41.	Frente Mexicano Pro Derechos Humanos del Distrito Federal AC	Categoría: Educación al desarrollo y sensibilización Benito Juárez 253, Col Tlalpan Del. Tlalpan, Distrito Federal Tel: 55 73 34 31 Contacto: Jorge Humberto Carreto Siller	Iniciar, promover, fomentar, patrocinar, administrar y conducir centros de enseñanza en materia derechos humanos.
42.	COSMOBIO-Desarrollo	Categoría: Cultura Malinqui No. 35, Col. Atacaxco Magdalena Contreras, Distrito Federal Tel: (04455)38495976 cosmobio.i8.com Contacto: Ma. Guadalupe Urquizo Pérez	Sesiones terapéuticas con técnicas alternativas para el bienestar, salud y mejoramiento de tu imagen integral.
43.	IMIFAP-"Yo quiero, yo puedo"	Categoría: Educación al desarrollo y sensibilización Málaga Norte No. 25 Col. Insurgentes Mixcoac, D.F., Tel: 525556115876 imifap.org.mx Contacto: Joanna Bernstein	Trabajos para reducir la pobreza y desarrollar habilidades para la vida.

NÚM.	DENOMINACIÓN	DATOS	OBJETIVO
44.	Cochitlehua	Categoría: Defensa de Derechos Humanos Avenida Emiliano Zapata 392 Benito Juárez, Distrito Federal Contacto: Cochitlehua Centro	Realizar actos tendientes a mejorar las condiciones de vida, de personas, sectores y regiones de escasos recursos.
45.	Red Nacional de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos	Categoría: Defensa de Derechos Humanos Patricio Sanz 449 Col. Del Valle 03100 México, DF Tel: 5523 9992 Fax: 55 23 99 92 www.redtdt.org.mx	Estrategias conjuntas para hacer más efectiva la defensa y promoción de todos los derechos humanos para todas las personas.
46.	Fundación para la Investigación y el Desarrollo de América Latina y Europa, Juan de la Cosa	Categoría: Asuntos sociales Atlixco 84-A Delegación Cuauhtémoc, Col. Condesa C.P.06140, México DF Tel: +5255 5584 99 09 www.fidale.org.mx Contacto: José Manuel Leal García	Interlocutor entre las instituciones donantes de Europa y América Latina y las instituciones receptoras de la cooperación internacional en América Latina, estas áreas son: Investigación, alianzas gubernamentales, academia, educación y actividades culturales.
47.	Redescubre, A.C.	Categoría: Asistencia a colectivos marginados Marco A. Lanz Galera 18, Xochimilco, D.F. Tel: 52(55)21611521 ttp://redescubre.org.sitiosprodigy.com.mx/ Contacto: Neftalí H. Gómez	Programas de desarrollo comunitario.
48.	Alcance y vida Integración Familiar A.C.	Categoría: Asistencia a colectivos marginados Col 3 Marías calle nuestra señora de orden ms 17 lote 6 Chalco Edo de Mex. Chalco Tel: 17343063 Fax: 17343063 www.alcanceyvida.org Contacto: Alcance y Vida A.C.	Programas en educación, salud, alimentación y recreación.
49.	Tierra Humana A.C.	Categoría: Defensa de Derechos Humanos Prol. División del Norte, 4168 Int. 1 Méx. D.F. Tel: +52 (5) 42.05.82.22 Fax: +52 (5) 56.78.58.46 www.tierrahumana.org Contacto: Sergio Ortiz Toriello	Desarrollar estudios e investigación enfocados a elevar la calidad de vida del ser humano.
50.	Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio	Categoría: Cooperación internacional AV Balderas 144, Piso4 Col. Centro México Distrito Federal Tel: 525557090262 Fax: 525557090262 www.aico.org Contacto: Abigail Rangel	Fortalecer el comercio intrarregional y los nexos de cooperación y amistad entre los pueblos de Iberoamérica.
51.	Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social, AC	Categoría: Asuntos sociales Jardín Centenario, 18-1 Col. Villa Coyoacán, Coyoacán, Distrito Federal Tel: (52+55) 56 59 51 20 Fax: (52+55) 56 59 62 09 www.ceidas.org Contacto: Saúl Arellano	Desarrollo de una cultura ciudadana que defiende por el pleno cumplimiento de los derechos humanos sociales en México.
52.	Fundación Teleganio AC	Categoría: Educación Morelos 140-3 Col. del Carmen, Coyoacán , DF Tel: 0052 01 5556593544 www.telegenio.org Contacto: Antonio Rada	Apoyar y fomenta el pleno desarrollo físico, emocional, intelectual y espiritual de niños y jóvenes con alto potencial, superdotados, con aptitudes sobresalientes o talentos especiales.

NÚM.	DENOMINACIÓN	DATOS	OBJETIVO
53.	Jóvenes de México, A.C,	Categoría: Educación al desarrollo y sensibilización Rincón de las lomas #15 Col. Bosque Residencial del Sur, México, D.F. Contacto: Reyes Merino	Prevención, educación y capacitación de jóvenes y adolescentes, prioridad a víctimas de la violencia, maltrato y/o desintegración familiar.
54.	Salud General.com	Categoría: Salud San Lorenzo, México DF Tel: 5556414518 Fax: 56414518 http://www.saludgeneral.com Contacto: Víctor Hugo Becerra	Acceso a sitios especializados como es la información sobre Salud en cualquier tópico.
55.	Amar, A.C.	Categoría: Medio Ambiente Calzada de las Águilas No. 1762 Col. Villa Verdun C.P. 01730 Distrito Federal Tel: 11637497 amar-ac.org Contacto: Rodrigo Domenzain	Trabajar principalmente en comunidades rurales apartadas y apoyan en situaciones de emergencia, además de colaborar activamente en muchos otros programas de derechos humanos.
56.	Fundación de Servicios Legales y Sociales para la Comunidad Indígena AC	Categoría: Defensa de Derechos Humanos Altillo 10 entrada C dpto. 306 Villa Coapa, DF Tel: 55942232 Fax: 26521033 Contacto: Edgar Sánchez	Ayudar en forma gratuita a indígenas y personas de origen rural que se encuentran detenidos en los Centros de Readaptación Social del Distrito Federal.
57.	Con Ganas de Vivir A.C.	Categoría: Salud Tajín 240 Col. Narvarte, Distrito Federal Tel: 52 55 91169726 Fax: 52 55 91169728 www.conganas.org.mx Contacto: Alfonso Benedetto Aguilar Mercado	Pretende cambiar la forma de ver al cáncer, de enfrentarlo y de vivirlo, por tanto, sus esfuerzos buscan abarcar todas las áreas que afecta el padecer cáncer, ya sea como paciente, como familiar, o como amigo.
58.	Metamorfosis Global, A.C.	Categoría: Discapacitados Periférico oriente #1, Col. Ciénega Grande (dentro del Parque Ecológico Xochimilco) C.P. 16070 Tel: 0155 2652 2923 Fax: 0155 2652 2923 www.metamorfosis.org.mx Contacto: Mónica Campos.	Atender a personas que son el resultado de haber vivido violencia intrafamiliar y pobreza extrema y que han sido rechazados, marginados y excluidos de nuestra sociedad, víctimas de maltrato, drogadicción.
59.	Fundación Nacional de Pacientes con Linfoma No Hodgkin, A. C.	Categoría: Salud Canarias 519-1 Col. Portales, México D. F. C. P. 03300 Tel: 22080463 Fax: 55391952 www.funalinh.org	Transmitir información sobre el LNH a pacientes, familiares y a la sociedad en general, creando conciencia sobre la importancia de saber más sobre este padecimiento y los derechos del paciente con LNH.
60.	Programa de Teatro Callejero IAP	Categoría: Cultura Av. Coyoacán 739-5 Col. del Valle, Del. Benito Juárez, CP 03100, DF Tel: 01526146558. Fax: 56116703	Promover un teatro reflexivo de contenido terapéutico, pedagógico y formativo, que estimule la participación colectiva de niños de la calle y jóvenes en colonias populares y barrios.
61.	ISUCITE	Categoría: Salud Dr. Martínez del Rio 198-203, D.F. Tel: 55782456 www.isucite.com Contacto: Enrique Zenil Robles	Desarrollo de once programas, para la salud, la educación y la organización.
62.	Red Nacional de Productoras y Empresarias Sociales A.C.	Categoría: Mujer Rio Nazas 171, Col Cuauhtémoc, DF Tel: (55) 52075653 Fax: (55) 52075653 renaces.com Contacto: Rosanna Teruggi	Mujeres que buscan apoyos con instituciones públicas y privadas, mujeres que han tenido que salir adelante sin el apoyo del marido.
63.	Instituto Superior de Ciencias Terapéuticas y Educacionales	Categoría: Salud Dr. Martínez del Rio 198-203 Distrito Federal Tel: 55782456 www.isucite.org Contacto: Enrique Zenil Robles	Promover, difundir, fomentar y aplicar, una cultura de salud integral a través de la terapia.

FUENTE: Elaboración propia